

LOS PUEBLOS AZUCAREROS FRENTE AL COLAPSO

Resistencias locales al cierre de ingenios
en Tucumán



MARÍA CELIA BRAVO
(COORDINADORA)

teseo 

I S E S
Instituto Superior de Estudios Sociales

CONICET-UNT

**LOS PUEBLOS AZUCAREROS
FRENTE AL COLAPSO**

LOS PUEBLOS AZUCAREROS FRENTE AL COLAPSO

Resistencias locales al cierre
de ingenios en Tucumán

María Celia Bravo
(coordinadora)



Los pueblos azucareros frente al colapso. Resistencias locales al cierre de ingenios en Tucumán / María Celia Bravo... [et al.]; coordinación general de María Celia Bravo. – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Teseo, 2022. 240 p.; 20 x 13 cm.
ISBN 978-987-723-336-0
1. Historia. 2. Tucumán. 3. Política. I. Bravo, María Celia, coord.
CDD 323.044

Esta publicación fue posible gracias a los fondos provenientes del subsidio Proyecto para Unidades Ejecutoras (PUE) N.º 0093 otorgado al Instituto Superior de Estudios Sociales (CONICET/UNT) y del proyecto PIUNT26/F-616/1, dirigido por María Celia Bravo y financiado por la Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica (SCAIT) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

© Editorial Teseo, 2022
Buenos Aires, Argentina
Editorial Teseo

Hecho el depósito que previene la ley 11.723

Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de esta obra, escribanos a: info@editorialteseo.com
www.editorialteseo.com

ISBN: 9789877233360

Imagen de tapa: Adrián Sosa, “Horas y espadas”. Machetas zafreras grabadas con el retrato de Hilda Guerrero de Molina (centro) y diferentes escenas de la zafra. Medidas variables. 2021.

Las opiniones y los contenidos incluidos en esta publicación son responsabilidad exclusiva del/los autor/es.

TeseoPress Design (www.teseopress.com)

teseopress.com

Índice

Siglas utilizadas	9
Introducción	11
<i>María Celia Bravo, Leandro Lichtmajer, Florencia Gutiérrez, Lucía Santos Lepera e Ignacio Sánchez</i>	
1. El declive del ingenio Santa Ana. Proyectos en disputa, divisiones sindicales y conflictividad local (1963-1966).....	41
<i>Ignacio Sánchez</i>	
2. Tradiciones en movimiento. Asociacionismo, política y formas de protesta en Bella Vista (1943-1968).....	89
<i>Leandro Lichtmajer</i>	
3. Curas y obreros frente a la patronal. La protesta de 1968 en San Pablo	137
<i>Florencia Gutiérrez y Lucía Santos Lepera</i>	
4. La perspectiva local. La Comisión Pro Defensa de Bella Vista y su lucha comunitaria en tiempos de dictadura (1968-1970).....	181
<i>María Celia Bravo</i>	
Bibliografía.....	227

Siglas utilizadas

- AIAT Asociación de Industriales Azucareros de Tucumán
ACPD BV Archivo de la Comisión Pro Defensa de Bella Vista
CAA Centro Azucarero Argentino
CAT Compañía Azucarera Tucumana
CFI Consejo Federal de Inversiones
CGT Confederación General del Trabajo
CGTA Confederación General del Trabajo de los Argentinos
CIFEN Comercial, Inmobiliaria y Financiera Empresa Nacionalizada
CONASA Compañía Nacional Azucarera S.A
CP Cooperativa de Producción
CPD Comisión Pro-Defensa
DNA Dirección Nacional de Azúcar
FEIA Federación de Empleados de la Industria Azucarera
FOSIAAT Federación de Obreros de Surco de la Industria Azucarera y Agropecuaria de Tucumán
FOTIA Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera
FRA Fondo Regulador Azucarero
JOC Juventud Obrera Católica
ISASA Ingenio Santa Ana Sociedad Anónima
MSTM Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo
PEN Poder Ejecutivo Nacional
SEPAC Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia de la Comunidad
UCIT Unión Cañeros Independientes de Tucumán
UCRI Unión Cívica Radical Intransigente
UCRP Unión Cívica Radical del Pueblo

Introducción

MARÍA CELIA BRAVO, LEANDRO LICHTMAJER, FLORENCIA GUTIÉRREZ,
LUCÍA SANTOS LEPERA E IGNACIO SÁNCHEZ

Los pueblos azucareros frente al colapso. Resistencias locales al cierre de ingenios en Tucumán revisita un punto de inflexión en la historia contemporánea de esa provincia. El libro pone en cuestión varios supuestos configurados en torno al colapso agroindustrial tucumano, al revisar nociones y conceptos sobre los actores específicos (movimiento obrero, productores agrarios, industriales, comisiones prodefensa, cooperativas, curas párrocos, dirigencias políticas y sindicales, comerciantes, mujeres, entre otros) que resistieron la profunda crisis azucarera de mediados del siglo XX y sus perniciosas consecuencias sociales y productivas.

La perspectiva local ilumina las particularidades de este proceso en cada pueblo azucarero y sus disímiles implicancias en el mediano plazo. Mientras que en algunas localidades se logró evitar la clausura del ingenio, en otras el cierre fue inexorable. Estas divergencias, en las que se advierten las marchas y contramarchas de las políticas azucareras desarrolladas por la nación y la provincia, revelan la necesidad de estudiar de manera focalizada cómo cada comunidad resistió o sucumbió a las políticas de racionalización y el rol que cumplieron los mediadores locales frente a estas. La perspectiva local nos permite, asimismo, construir temporalidades amplias a la hora de explicar este derrotero, lo cual implica no solo descentrar la mirada en torno al decreto ley 16.926 que la dictadura de Juan Carlos Onganía promulgó en agosto de 1966, sino también recuperar las estrategias previas que los gobiernos civiles y militares ensayaron frente al modelo agroindustrial tucumano.

Tomando en cuenta el carácter múltiple de este proceso, en esta oportunidad presentamos investigaciones sobre los avatares de tres ingenios: Santa Ana, que clausuró su horizonte productivo en 1966 al ser incluido en el decreto ley que ordenaba su cierre y desmantelamiento; San Pablo, cuyo funcionamiento no estuvo amenazado, pero su patronal avanzó en políticas de racionalización que desataron una intensa conflictividad laboral; Bella Vista, que logró revertir el cierre y afrontar las difíciles zafras de 1969-1970 debido a la movilización sostenida de su comunidad. Estas pesquisas no clausuran de ninguna manera el análisis del período. Por el contrario, contribuyen a visibilizar la riqueza de una perspectiva que, centrada en lo local, permite tomar distancia de enfoques generalizadores e ilumina las particulares relaciones que los actores sociales tejieron en los pueblos azucareros. Estas aristas cobran especial relevancia en una coyuntura marcada por el declive de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), jaqueada por las políticas antiobreras de la dictadura militar de 1966 y por profundas disidencias internas. En el marco de esa coyuntura crítica, surgieron nuevos actores (tales como las comisiones prodefensa de ingenios y las cooperativas) y florecieron múltiples repertorios de confrontación.

Así como este libro representa una invitación a repensar un episodio crucial de la historia provincial, regional y nacional, constituye también la cristalización de una línea de trabajo colectiva sobre el espacio azucarero tucumano en perspectiva local. Nutrida por trayectorias profesionales diversas, abarcó tópicos como la problemática agraria y las políticas estatales en torno a la agroindustria, las formas de organización territorial y las interacciones sociales en los pueblos azucareros, las identidades y prácticas políticas, el rol de las dirigencias partidarias y sindicales, el mundo del trabajo y las formas de mediación de los curas párrocos. En

la confluencia de estas trayectorias y campos de especialización, el interés por lo local reside en su estatus de estrategia metodológica fructífera para repensar los procesos desplegados y recuperar el juego de escalas como principio orientador (Revel, 2015). Retomamos, en ese sentido, las dinámicas espaciales como variables de análisis y, parafraseando la célebre definición de Eric Van Young, entendemos nuestros marcos de referencia como “hipótesis a demostrar” (1987: 257).

También nos une el interés por reponer las tramas de relaciones y las experiencias de los actores, así como la búsqueda de ensayar un ejercicio de contextualización atento a las redes de interacción desplegadas localmente, con implicancias en las diferentes esferas de lo social. El lugar –entendido como un terreno específico modelado no solo por las necesidades productivas, sino también por instituciones estatales y cívicas– es considerado un espacio de disputa, de identidades contrapuestas. En esa dirección cobran relieve las percepciones que los propios actores tienen de su espacio, lo que Angelo Torre define como la dimensión émica y que reconoce en las localidades una estructura de sentimientos emanada de la experiencia de los nativos (Torre, 2018). El lugar no funciona como un escenario ya establecido; por el contrario, se trata de un territorio dinámico, resultado de procesos sociales contingentes, donde se iluminan las relaciones sociales y sus reconfiguraciones según la lógica local, que guarda conexiones y se interrelaciona con las desplegadas en otras escalas (global, nacional, regional) (Massey, 1995). Nuestra perspectiva dialoga, en ese sentido, con los abordajes teóricos y metodológicos que la historiografía argentina planteó en torno a esta problemática.¹

¹ La producción es vasta. Véase, entre otros, Fernández y Dalla Corte (2001), Barrera (2005), Fernández (2007), Lobato (2007), Bandieri y

La línea de trabajo sobre el espacio azucarero tucumano en perspectiva local se enmarca en sucesivos proyectos de investigación que desarrollamos desde mediados de la década pasada.² Una breve reseña del recorrido historiográfico allí plasmado permite identificar un campo de reflexión centrado en los pueblos azucareros, del que se desprenden diferentes ejes problemáticos: la configuración espacial de los núcleos urbanos entre el último tercio del siglo XIX y comienzos del XX, las prácticas proselitistas, las redes partidarias y las trayectorias de las dirigencias políticas y sindicales; el recorrido del sindicalismo azucarero hostigado por el poder estatal desde el golpe del 1955; el rol mediador de los curas párrocos y sus intervenciones en la dinámica política y social entre las décadas 1930-1960; las formas locales de resistencia al cierre de ingenios durante los años sesenta; las propuestas de cooperativas de sectores del sindicalismo azucarero y de la Comisión Pro-Defensa (CPD) de Bella Vista para mantener en funcionamiento los ingenios endeudados.

Fernández (2017), Bohoslavsky (2018), Andújar y Lichtmajer (2019), Carbonari y Carini (2020) y Andújar y Lichtmajer (2021).

- ² Nos referimos al PICT (2015-2017) “Las formas locales de la política. Actores, redes partidarias y dinámicas asociativas en el pueblo azucarero de Bella Vista (Tucumán, 1934-1966)” –dirigido por Leandro Lichtmajer–; el PIP CONICET (2016-2018) “La construcción social de lo político: cañeros y trabajadores en los pueblos azucareros 1896-1966” y el PIUNT (2018-2021) “Actores y políticas públicas. Demandas, negociaciones y conflictos a escala nacional, provincial y local, Tucumán 1896-1976” –dirigidos por María Celia Bravo–; el PIUNT (2018-2021) “El mundo del trabajo: actores, condiciones socio-laborales y derechos. Tucumán, siglos XIX y XX” –dirigido por Florencia Gutiérrez–; y el PICT (2019-2021) “Mediadores, redes sociales y cambio político. Los pueblos azucareros de Tucumán durante el primer peronismo (1943-1955)” –dirigido por Lucía Santos Lepera–.



Ocupación del ingenio Bella Vista en el marco de las resistencias locales al cierre de la fábrica (enero de 1969). Fuente: Archivo del diario *La Gaceta* (Tucumán).

La historiografía azucarera ha contemplado la dimensión territorial para estudiar los cambios espaciales y sociales en su paisaje productivo. Los nuevos circuitos ferro-

viarios para la circulación de bienes e insumos y para el transporte de la fuerza de trabajo permitieron resolver el obstáculo de la distancia a través de las innovaciones en el sistema de transporte. La línea que tuvo mayor impacto en la construcción de la región azucarera fue la denominada “Noroeste Argentino”, propiedad del gobierno provincial, que conectaba la zona de los ingenios con la ciudad de San Miguel de Tucumán. Al mismo tiempo, de la red troncal se desprendió una enmarañada trama de ramales secundarios que unía las fábricas con el área de cañaverales. Tales transformaciones permitieron estabilizar el espacio y erigir a los ingenios en núcleos de la nueva configuración territorial.³

Una de las aristas de esta transformación fueron las urbanizaciones resultantes, denominadas por la historiografía como “pueblos azucareros”, que obedecieron a la necesidad de contar con una oferta estable de mano de obra para garantizar a la patronal el control sobre el proceso del trabajo. Se construyeron viviendas, se desarrollaron servicios de salud, de educación, religiosos y deportivos. Por lo general, este fenómeno ha sido estudiado de manera modélica al analizar las viviendas en función de un criterio de jerarquización espacial según las diferentes posiciones laborales y de la tentativa empresarial de controlar el tiempo libre y los hábitos de los trabajadores (Paterlini de Koch, 1989; Campi, 1999). Ese abordaje de los pueblos azucareros no contemplaba una mirada que, centrada en la perspectiva local, permitiera iluminar una dinámica espacial más compleja y reparara en los procesos previos a las transformaciones generadas por la agroindustria.

Un ejemplo ilustrativo de ello fue el ingenio Santa Ana, donde funcionaba un centro cívico erigido por la demanda de los vecinos en interacción con el Estado provincial.

³ Este concepto, tomado de David Harvey, considera el sistema de transporte y las fuertes inversiones en infraestructura como las condiciones necesarias para la estabilización espacial de un territorio determinado (Harvey, 2007: 348).

Esta urbanización embrionaria dio origen a la instalación de funcionarios e instituciones estatales (escuelas, comisarías, juzgados de paz) que delimitaron el incipiente espacio público donde se ubicó el comercio, distante del control del ingenio (Sánchez, 2019, 2020). Una dinámica similar se observó en la localidad de Bella Vista, donde se instaló el establecimiento homónimo. Se trataba de un área de antiguo poblamiento que cobró impulso con la estación ferroviaria emplazada en 1876. En ese lugar se formó la villa cívica, donde se desarrollaron instituciones locales (Registro Civil, Comisaría, Juzgado de Paz, Comisión de Higiene y Fomento, Oficina de Correos y Telégrafos y escuelas), la parroquia de San José Obrero y establecimientos comerciales activados por la presencia de los inmigrantes, mayoritariamente españoles y árabes. El otro eje dinamizador del territorio fue el ingenio Bella Vista (fundado en 1882), que creció hasta transformarse en un poderoso complejo agroindustrial (Gutiérrez y Santos Lepera, 2019; Bravo y Lichtmajer, 2019).⁴

En ambos casos podemos advertir una dinámica local que no está definida exclusivamente por la fábrica. La villa cívica no se confunde con el espacio del ingenio, incluso puede entrar en tensión con las decisiones de la fábrica o entablar instancias de colaboración con la empresa. Esta perspectiva nos permite considerar lo local como un proceso específico generador de articulaciones sociales e interinstitucionales (Torre, 2008). En esa dirección, buscamos superar las explicaciones generalizadoras para focalizarnos en un recorte espacial acotado que requiere un conocimiento más refinado sobre el papel desarrollado por los distintos actores azucareros, que incluya las iniciativas estatales concretadas al influjo de las demandas de comerciantes y vecinos, en las distintas instancias atravesadas por la agroindustria. Asimismo, nos permite reconsiderar una

⁴ Sobre la trayectoria formativa de Bella Vista, puede consultarse también Salazar y Valeros (2012) y Vidal Sanz (2017).

visión arraigada en la historiografía sobre pueblos de fábrica, inspirada en el trabajo de Sergio Leite Lopes, quien estudia un ingenio de la zona azucarera de Pernambuco (Brasil) y concibe al espacio fabril como un territorio cerrado, despojado de señales estatales y carente de formas de sociabilidad, sometido a la autoridad exclusiva de la patronal.⁵

En virtud de esta perspectiva, cabe preguntarse lo siguiente: ¿a qué se denomina “pueblo azucarero”?; ¿es el espacio de pertenencia de la empresa, entendido además como lugar de habitación de propietarios, empleados y obreros, o también comprende el territorio no controlado por la empresa, donde se ubican las instituciones cívicas, las casas comerciales, las viviendas de vecinos o profesionales? La respuesta a estas preguntas exige investigar las fronteras difusas entre el perímetro del ingenio y la fisonomía específica de la planta urbana surgida al influjo del Estado. Por lo general, la historiografía identificó los pueblos azucareros con la fábrica, los espacios de vivienda (de los propietarios, el personal jerárquico, los empleados y los obreros) y otros ámbitos (escuelas, hospitales y clubes) provistos por la patronal, sin contemplar la existencia de villas cívicas y la capacidad de agencia de los vecinos. Esta mirada, centrada en la urbanización realizada por la fábrica, desdibujó la preocupación por la villa cívica que creció al influjo de la producción azucarera, no necesariamente controlada por las administraciones de los ingenios. Avanzar en estas consideraciones nos ayuda a reconstruir la complejidad de los distintos pueblos azucareros de Tucumán, examinar las relaciones sociales y los espacios de sociabilidad forjados en la localidad y la incidencia de la política local en la ampliación de la autonomía de los pueblos azucareros durante mediados del siglo XX.

⁵ Daniel Dicósimo utiliza el concepto de “sistema de fábrica con villa obrera” (SFVO) para analizar la disciplina laboral en Villa Cacique (Loma Negra) donde pondera el aislamiento geográfico de las villas de las principales ciudades de la zona, que reforzaban el control de la patronal (Dicósimo, 2020; Leite Lopes, 1976).

El estudio de las prácticas proselitistas, las redes partidarias y las trayectorias de las dirigencias políticas y sindicales permitió dotar de agencia política a los pueblos azucareros (Lichtmajer, 2014, 2020b; Lichtmajer y Gutiérrez, 2017; Gutiérrez, Lichtmajer y Santos Lepera, 2016). En ese contexto, el estudio de lo local iluminó la construcción de liderazgos políticos en estrecha interrelación con las redes territoriales que incluían al universo asociativo y al rol de los diferentes actores interpelados por la actividad proselitista (patronal, empleados, trabajadores, comerciantes, etc.). Los resultados obtenidos ofrecen una interpretación diferente del ascenso del radicalismo y permiten matizar las conclusiones aportadas por los estudios sobre ámbitos urbanos y otros territorios (Rock, 1972; Vidal, 1995; Horowitz, 2015).

Durante el peronismo, la perspectiva local nos permitió rediscutir la frontera entre dirigencias políticas y sindicales planteadas por interpretaciones sobre su etapa formativa.⁶ En el terreno propiamente sindical, la investigación reveló el peso de los oficios y las trayectorias laborales en la configuración de las organizaciones sindicales, en las protestas, en la articulación de demandas y en la relación con la patronal y el Estado. En ese marco recuperamos las trayectorias y los perfiles de los dirigentes sindicales y políticos, los entramados de relaciones y ámbitos de sociabilidad y las marcas territoriales que modelaron la disputa por el liderazgo de las filas peronistas. La reconfiguración de las redes partidarias locales, fenómeno expresado en los resultados electorales, reveló la fuerte impronta sindical de dicho movimiento, en contraste con la gravitación que el radicalismo y el conservadurismo tuvieron en otros espacios. Asimismo, las tensiones asociadas a la construcción de nuevos liderazgos generados por el naciente gremialismo, expresadas en las disputas por el control partidario, se reflejaron con nitidez

⁶ Un trabajo paradigmático de esta línea de interpretación fue el de Mackinnon (2002).

desde la perspectiva local, cuyos pueblos obtuvieron mayor autonomía debido al recambio del funcionariado estatal y al reconocimiento de derechos que horadaron las prerrogativas empresariales.

En esa dirección, se recuperó el rol mediador de los curas párrocos y sus intervenciones en la dinámica política y social de las localidades azucareras. Asimismo, incorporamos como variables de análisis la mediación de los sacerdotes y los vínculos construidos con las autoridades eclesíásticas, políticas y sindicales frente a las nuevas demandas locales, atizadas por el proceso de politización en clave peronista. El rol mediador históricamente construido por los sacerdotes con las feligresías nos permitió reinterpretar un tópico central en materia historiográfica, como es el de la relación entre la Iglesia y el peronismo. En su labor cotidiana, los párrocos fueron interpelados por los cambios políticos y sociales e interactuaron con los nuevos factores de poder local tales como los sindicatos obreros y las unidades básicas masculinas y femeninas (Santos Lepera, 2015, 2021).

Las líneas de análisis ya presentadas exigieron reconsiderar el concepto de “lugar” y sus sentidos. Nos referimos a un espacio modelado por las relaciones laborales de la empresa, pero también por las funciones institucionales del Estado, las prácticas religiosas, educativas, asociativas y deportivas gestadas en su zona de influencia, pero no necesariamente controladas por la empresa. En ese contexto, viejos y nuevos actores populares (dirigencia sindical, curas párrocos, vecinos arraigados y respetados de la zona) expresaron las tensiones catalizadas en los pueblos por la destrucción del orden azucarero hacia mediados de la década de 1960. La aplicación de una política azucarera suprimió su arista distributiva y reguladora y dejó como saldo el incremento de la explotación laboral y el crecimiento de la desocupación a niveles sin precedentes. Las viejas formas de poder local (empresariado, delegados comunales) se reformularon al influjo de nuevas formas de

resistencia popular/local no necesariamente institucionalizadas (comisiones prodefensa, cooperativismo) que condensaron y ordenaron el conflicto social (Withers, 2009). Esta perspectiva se aleja de las unidades de análisis homogéneas y definidas de antemano para reconstruir una territorialidad plural y concreta que permite incorporar nuevos actores: las asociaciones vecinales (club social, bibliotecas, instituciones culturales y deportivas), los sindicatos de base, liderazgos políticos y curas párrocos. Como veremos a lo largo de esta obra, el dinamismo e involucramiento de estos actores al influjo del colapso provincial (1965-1970) nos permitió revisar la noción de “pueblo azucarero” y avanzar en una propuesta que desborda el recorte ajustado estrictamente al perímetro delimitado por el terreno de la fábrica.

Las tensiones y formas de resistencia local no giraban en el vacío, sino que se conectaban con un proceso nacional, regional y global que excede a los efectos cíclicos derivados de las crisis de sobreproducción azucarera. Las políticas implementadas desde 1955 y las aplicadas por la dictadura militar generaron un colapso económico provincial que es necesario examinar en detalle. En esa dirección, el presente libro postula que la destrucción del parque industrial azucarero tucumano no fue generada por una crisis de sobreproducción cíclica –cuyos efectos no desconocemos–, sino por una política estatal destinada a otorgar una mayor cuota en el mercado doméstico a la agroindustria saltojujeña, al tiempo que se destruía el modo de producción azucarero tucumano de impronta reguladora y distributiva. Una mirada a largo plazo permite definir con mayor precisión las sucesivas crisis de sobreproducción azucareras, así como identificar los aspectos específicos de la acaecida en la segunda mitad del siglo XX.

¿Una crisis de sobreproducción azucarera más o el colapso de un modo de producción?

En este volumen se sostiene que las crisis de sobreproducción de 1958-1959 y 1965-1970 constituyeron el escenario donde se desató un colapso productivo que destruyó un modo de producción azucarero cifrado en la presencia de 27 unidades fabriles medianas y pequeñas en 1963, extendidas a lo largo del territorio de la provincia. No se trató de una de las tantas crisis de sobreproducción que constituían una característica cíclica de la actividad azucarera argentina. Desde sus orígenes, este rasgo fue un fenómeno recurrente, que revelaba la estrecha conexión entre mercados, producción azucarera y Estado. A diferencia de otras expresiones de la actividad azucarera en Sudamérica, la agroindustria argentina estuvo orientada a un mercado interno, protegido por barreras arancelarias. Esta característica se fundaba en que el mercado internacional estuvo vedado para la producción nacional por sus mayores costos, condición que impedía la exportación de los excedentes domésticos para descomprimir el mercado interno.

La primera crisis de sobreproducción acaeció en 1895 y se extendió hasta 1906; en 1926 se produjo nuevamente una situación de sobreoferta del mercado interno que gravitó durante toda la década de 1930; en 1958 se produjo una nueva crisis de similares características, que se repitió en 1965. La novedad de la crisis de 1958 fue la nueva posición asumida por el Estado nacional, que, a partir de 1955, venía implementando políticas azucareras tendientes a desfinanciar el complejo azucarero tucumano en el marco de una fuerte ofensiva de la industria salto-jujeña por una mayor participación en el mercado interno. En 1966, en un contexto de dictadura cívico-militar, se impuso una solución que se pretendía “definitiva” al ordenar por decreto el cierre de siete ingenios, aunque finalmente fueron 11 las fábricas cerradas (el 40 % del parque industrial), lo que ocasionó

un daño irreparable al modelo productivo azucarero de la provincia de Tucumán.

Historizar la recurrencia de este fenómeno implica realizar un análisis multidimensional de las crisis y nos invita a revisar viejos tópicos de la teoría clásica que entiende al mercado como un espacio libre y organizador de los intercambios. Desde fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX, el mercado internacional del azúcar estuvo saturado por los azúcares de la industria remolachera europea, que apeló a las primas para crear una corriente artificial de exportaciones cuyo único objetivo era descongestionar su propio mercado doméstico. Así, el denominado mercado mundial azucarero era el resultado del proteccionismo de los países productores, se trató de un espacio inelástico, de funcionamiento irregular y de características residuales (Moreno Fragnals, 1978).

En función de estas condiciones internacionales, la actividad azucarera argentina surgió como un ejemplo decimonónico de sustitución de importaciones. No obstante, la imposibilidad de exportar para resolver la sobreoferta de azúcar en el ámbito doméstico exigió la adopción de diferentes soluciones nacionales que requirieron invariablemente de la intervención del Estado provincial y nacional. El fracaso de la ley de primas de 1897 propiciada por los industriales, nucleados en el Centro Azucarero Argentino (CAA), demandó otras soluciones legislativas para resolver la incidencia negativa de los crecientes *stocks*.⁷ Estas fueron adoptadas de manera solitaria por la provincia de Tucumán, en el marco de un clima nacional de ideas favorable al librecambio, al aprobar dos leyes de regulación de la producción en 1902 y 1903. Esta legislación, conocida

⁷ La ley establecía que los azúcares argentinos e importados pagarían un impuesto de 6 centavos por kg; a cambio del impuesto, el PEN entregaría un certificado (*drawback*) que habilitaba al exportador a exportar el 35 % del azúcar y recibía 12 centavos por kg de azúcar exportado. Si el precio de venta excedía los 4 pesos los 10 kg, el PEN suspendía la entrega de certificados que daba derecho a la exportación de azúcar.

como “leyes machete”, estableció un límite a la producción de azúcar de la provincia para tonificar el precio del azúcar. La reducción comprendía a las fábricas y a las explotaciones agrarias de los productores de azúcar (cañeros), a los que se acordó una indemnización por la reducción de sus cañaverales. En 1903 la ley fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente por su carácter intervencionista y regulador.⁸ No obstante, la breve vigencia de esta legislación evitó la quiebra de ingenios y estableció un antecedente de regulación de la producción azucarera tucumana, fundado en un esquema distributivo, que implicaba prorratear de manera equitativa los costos de la crisis, a la vez que incluía por primera vez al sector cañero, al que se le acordó una indemnización por la destrucción de los plantíos.⁹

La prolongada crisis de sobreproducción de 1926, cuyos efectos se hicieron sentir hasta 1941, desató la primera huelga cañera por los precios de la materia prima (1927). El conflicto intersectorial se resolvió a través de un laudo cuyo árbitro fue el presidente de la nación, Marcelo T. de Alvear. El denominado “Laudo Alvear” de 1928 se sustentó en un minucioso estudio de costos productivos y concluyó que los costos fabriles promedio eran equivalentes al costo cultural de la producción de una tonelada de materia prima. Por lo tanto, resolvía que el valor de la tonelada de caña debía computarse en el 50 % del precio promedio del azúcar. Este principio distributivo y otras normas contribuyeron a normalizar las relaciones comerciales fabril-cañeras (Bravo, 2008: 305-312). En 1928, 1932 y 1937, se aplicaron

⁸ Entre otras consideraciones, el fallo de la Corte Suprema ratificó el principio de la subsidiariedad estatal al afirmar lo siguiente: “Los gobiernos se considerarían facultados para fijar al viñatero la cantidad de uva que le es lícito producir [...] hasta caer en el comunismo de Estado en que los gobiernos serían regentes de la industria y el comercio, y los árbitros del capital y la propiedad privada” (Schleh, 1939: 60).

⁹ Sobre las denominadas “leyes machete” y las leyes reguladoras de la producción azucarera dictadas por la legislatura provincial en 1928, 1932 y 1937, cuyas normas rigieron hasta 1941, ver Bravo (2017).

en la provincia leyes reguladoras de la producción azucarera cuyas normas rigieron hasta 1941.¹⁰ Estas estaban orientadas a evitar el cierre de ingenios y mantener el criterio distributivo para asistir a los pequeños fundos (0-5 hectáreas) que fueron eximidos de la restricción productiva. Esta tradición reguladora provincial de impronta distributiva se apartaba del criterio darwiniano que postulaba dejar actuar al mercado, no asistir los ingenios con problemas de financiamiento y avanzar en la concentración productiva.

El peronismo introdujo modificaciones sustanciales en el funcionamiento de la actividad azucarera argentina. El Estado nacional se convirtió en el actor decisivo en la definición de la política para la agroindustria. En 1950 se creó la Dirección de Azúcar (DA), primer organismo técnico de carácter nacional con potestad para decidir el régimen azucarero de cada zafra y para diseñar políticas a largo y mediano plazo.¹¹ La institución estipulaba la fecha de iniciación de la zafra, el precio del azúcar y la materia prima, los volúmenes de producción y las cuotas de comercialización volcadas en el mercado interno. Creó, además, otra institución clave, el Fondo Regulador Azucarero (FRA), alimentado por el impuesto que aportaron los ingenios y comercializadores, con la finalidad de equilibrar las disparidades de los costos productivos de las distintas regiones azucareras (Tucumán; Salta y Jujuy; Santa Fe y Chaco) y garantizar su funcionamiento. Destinado a atenuar las asimetrías regionales, su formación encendió una disputa de alcance regional por el control del mercado doméstico. Tucumán se alineó en defensa del FRA, mientras que la

¹⁰ En 1932 la ley reguladora de la producción avanzó sobre el control de las ventas de azúcar en el mercado interno, medida impugnada por el ingenio Concepción en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que prohibió a la provincia limitar el derecho a la comercialización, al considerarla potestad privativa del Congreso nacional.

¹¹ La ausencia de una ley azucarera nacional que regía en otras economías regionales como la vitivinícola aumentó el margen de discrecionalidad que tenía el organismo estatal.

industria salto-jujeña atacó el procedimiento regulador y se convirtió en una abanderada de la libre empresa (Bravo y Bustelo, 2018).

Al mismo tiempo, el mundo del trabajo consolidó su presencia en la mesa distributiva de la agroindustria con la formación de FOTIA en 1944 y de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) en 1945. En paralelo, modernizó las condiciones laborales, extendió la mensualización, impuso el salario familiar, las vacaciones, el aguinaldo y el escalafón para los obreros permanentes de fábrica, medidas que no alcanzaron al personal de surco, ni al temporario, reclutados para trabajar en el ciclo de la cosecha (Gutiérrez, 2014, 2020; Bravo y Gutiérrez, 2015). De este modo, durante el peronismo se desterró el principio liberal de subsidiariedad estatal, vigente en círculos empresariales concentrados y en medios periodísticos, al aplicar medidas reguladoras con el objetivo de estabilizar la producción nacional azucarera en función de las necesidades del mercado doméstico. Al mismo tiempo, se profundizó la impronta redistributiva en el plano regional a través del FRA, mientras que se intensificaron los incrementos salariales y la conquista de derechos en el mundo del trabajo, al incorporarse los asalariados en la discusión de la legislación laboral y los convenios colectivos de trabajo.

El derrocamiento del peronismo en 1955 marcó el comienzo del desmantelamiento de este sistema regulador y distributivo, lo que implicó la implementación de políticas desreguladoras y propatronales desde el Estado nacional. En el sector agrario, se impuso la libre contratación de la caña, decisión política que liberaba a las fábricas de la obligación de moler la totalidad del cañaveral, en perjuicio de los cañeros. Así, se dislocó la relación fabril-cañera a través del decreto 8.747/59, implementado por el ministro de Economía Álvaro Alsogaray. La normativa anuló la vigencia del Laudo Alvear y libró el precio de la materia al arbitrio del acuerdo entre las partes. La resolución dejó sin precio la tonelada de caña durante las zafas de 1959,

1960 y 1961. La medida, implementada durante la presidencia de Arturo Frondizi, fue continuada por Arturo Illia y afectó negativamente la situación económica de los cañeros. En lo que refiere al estadio laboral, durante la autodenominada “Revolución Libertadora”, se suspendieron por tres años las convenciones colectivas de trabajo, las que fueron convocadas en 1959. Sin embargo, los aumentos salariales conseguidos luego de una gran huelga obrera de ese año se diluyeron por la crisis de sobreproducción y por el sesgo adoptado por la política azucarera.

La crisis afectó especialmente a los ingenios de la provincia de Tucumán debido a la inacción del FRA, ente desfinanciado por la rebelión fiscal de los ingenios de Salta y Jujuy que dejaron de aportar. La anulación de hecho de este organismo los favoreció debido a sus menores costos y a su estructura concentrada, en cuanto pocas empresas de gran porte reunían el estadio agrario y fabril. En consecuencia, se produjo una transferencia del ingreso azucarero nacional a estos ingenios, proceso que profundizó los conflictos interregionales en la industria azucarera. Las medidas estatales, como la asignación de cupos de producción regional, completaron el impulso otorgado a la industria salto-jujeña al permitirle incrementar su capacidad productiva y aumentar su participación en el mercado doméstico.

En esta fase, el Estado nacional combinó medidas desreguladoras tendientes a desestructurar la relación entre los factores integrantes del modelo productivo azucarero tucumano (industriales, cañeros y obreros) con políticas intervencionistas (la distribución de cupos de producción regional) que desfinanciaron la industria tucumana. En efecto, el Estado nacional intervino fijando cupos de producción regional, cuyos volúmenes no se correspondían con la capacidad productiva de las distintas zonas azucareras. Se trató de una política contradictoria en sus fundamentos: se apelaba al principio de la “libre empresa”, pero el Estado nacional intervenía con el supuesto objetivo de “sanear” la actividad azucarera tucumana, calificada como atrasada e

improductiva, aunque el resultado perseguido era el endeudamiento de las empresas.

Los efectos nocivos fueron provocados por el abandono de la política estatal equitativa de redistribución regional y social. Esta orientación se intensificó en 1965, cuando sobrevino una nueva crisis de sobreproducción que, ante la inacción estatal (retiro del crédito y distribución inequitativa del cupo de producción regional), colocó a la agroindustria azucarera tucumana en una situación de colapso económico y social.¹²

En ese escenario provincial profundamente dislocado, accedió al poder la dictadura cívico-militar, el 28 de junio de 1966. Como medida preliminar, se limitó la producción azucarera de Tucumán en un 30 %, mientras que Salta y Jujuy la reducían solo un 17 %.¹³ La resolución profundizó la crítica situación de la agroindustria tucumana al reducirle mayor participación productiva, en cuanto otorgaba una limitación menor a las restantes regiones azucareras. Al poco tiempo, el decreto nacional 16.926, de agosto de 1966, determinó la intervención de siete ingenios (Bella Vista, Esperanza, La Florida, Lastenia, La Trinidad, Nueva Baviera y Santa Ana) con el propósito de desmantelarlos. Se trató de una muestra desmesurada de intervencionismo estatal. Al año siguiente, el decreto 17.163 expulsó compulsivamente de la actividad a alrededor de 10.000 productores minifundistas tucumanos, a los que se les anuló su cupo de producción sin contemplar nuevas alternativas productivas.

El principal argumento de semejante ofensiva estatal se fundaba en la “estructura colonialista” de la provincia de Tucumán, sustentada en el monocultivo y la

¹² En agosto de 1965, el Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART) anunció a través de un comunicado la imposibilidad de realizar la zafra por falta de financiamiento y deudas millonarias (Bravo, 2017: 196-202).

¹³ *La Gaceta*, 1966. Tucumán. 20 de julio.

subvención estatal, con ingenios en quiebra, atrasados tecnológicamente, que incumplían sus obligaciones salariales, pagos a los cañeros, a proveedores y al Estado nacional y provincial. Según el ministro de Economía de la nación, Jorge Salimei, tal situación convertía al territorio azucarero tucumano en una “isla de presente explosivo y porvenir incierto”.¹⁴ Sus palabras vaticinaban el caos económico y social que sumió a la provincia en los años siguientes, cuyos números grafican de manera elocuente el colapso de una economía regional fundada en la producción azucarera. Así lo evidenciaron el cierre forzado de 11 ingenios, la caída del 30 % de la producción azucarera tucumana, la expulsión de millares de cañeros por la confiscación de los cupos de producción, el desempleo obrero, y el cierre de actividades industriales y casas comerciales conexas con la industria azucarera. La caída de la población de la provincia reflejó la emigración de alrededor de 200.000 tucumanos/as y la desolación de los pueblos azucareros, situados a la vera de los ingenios. La información estadística recabada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) reveló el estropicio social y económico cuyos aspectos continúan insuficientemente estudiados (Canitrot y Sommer, 1972; Consejo Federal de Inversiones, 1973; Mora y Araujo y Orlansky, 1976).

En efecto, todavía resta conocer en profundidad la complejidad del colapso económico y social promovido por la política azucarera de la dictadura militar, sus costos sociales y las medidas “atenuantes” cifradas en el “Operativo Tucumán”, destinado a impulsar la diversificación productiva, así como la creación de la Compañía Nacional Azucarera (CONASA), empresa azucarera estatal formada en 1970. En el libro se abordan algunas de estas cuestiones, que requieren de investigaciones

¹⁴ *La Industria Azucarera*, 1966. Buenos Aires, n.º 872, p. 226.

específicas con el propósito de dialogar con las producciones historiográficas existentes.

Diálogo historiográfico y aportes de los capítulos del presente libro

Algunos aspectos sociales del colapso económico aludido han comenzado a estudiarse en las primeras décadas del siglo XXI. En consecuencia, se trata de un campo de investigación de reciente formación, que requiere de nuevas pesquisas y enfoques con el fin de incorporar las múltiples dimensiones de la crisis.¹⁵

En el año 2007, Roberto Pucci publicó *Historia de la destrucción de una provincia. Tucumán, 1966*, que propuso claves explicativas para analizar la crisis tucumana durante el Onganiato. El núcleo narrativo del libro se centra en la conflictiva relación histórica entre la provincia y el Estado nacional, en el marco de un clima ideológico adverso a la industria azucarera tucumana, denominado por el autor como “sacarofobia”. Siguiendo a Pucci, este concepto revelaba una visión distorsionada y prejuiciosa del modelo productivo tucumano, calificado sin mayores fundamentos como prebendario e ineficiente. El texto sindicó a los

¹⁵ En 2016 se realizó un taller de historia oral que tuvo como objetivo recabar los testimonios de los antiguos trabajadores y vecinos de Ranchillos y sus recuerdos sobre el cierre del ingenio San Antonio en 1965. Fue una experiencia muy fuerte para alumnos y docentes exhumar recuerdos dolorosos y heridas todavía no cerradas, que precipitaban el llanto y el desconcierto de los entrevistados ante las preguntas por la causa del cierre. Una de las respuestas fue “No sé, quizás tiramos demasiado de la cuerda”. Esta frase trasunta un sentimiento de fracaso y sufrimiento social compartido que anida en las localidades con ingenios cerrados. Proyecto de Extensión “Historia abierta, ingenio cerrado. Proyecto de recuperación de la historia, memoria y patrimonio de la comuna de Ranchillos y San Miguel” (2016), organizado por la cátedra de Historia de la Argentina (curso especial), en colaboración con la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras (UNT y la Comuna Rural de Ranchillos y San Miguel).

ingenios del norte (industria azucarera salto-jujeña), fundamentalmente al ingenio Ledesma y a su propietario Hermínio Arrieta, como los principales artífices de esta leyenda, cuya traducción en políticas concretas generó la transferencia de parte de la producción tucumana a esa región productiva. El análisis se construye en torno al examen de dos unidades, la provincia y la nación, perspectiva que simplifica la complejidad de una crisis multidimensional y eclipsa la participación de los distintos actores sociales. En el marco de este esquema, se desprende una línea de análisis secundaria que reconstruye el itinerario de la Compañía Azucarera Tucumana (CAT), consorcio empresarial cuyos dueños fueron denunciados penalmente y sus fábricas, intervenidas en 1970. Se trata de un ensayo sugerente que señala un problema clave a considerar, el rol del empresariado azucarero, pero no profundiza en el estudio de las estrategias del sector y su papel en el cierre de los ingenios (Pucci, 2007).

En 2016 se publicó el libro *Tucumán en llamas: El cierre de los ingenios y la lucha obrera contra la dictadura (1966-1973)*, de Silvia Nassif. La lógica del libro gira en torno a las marchas y contramarchas del movimiento sindical azucarero e indaga en las coyunturas de combatividad de FOTIA, construyendo un relato de resistencia y confrontación obrera que culmina con el estallido de los Tucumanazos (1970 y 1972). Estas rebeliones populares tuvieron lugar en San Miguel de Tucumán y fueron protagonizadas especialmente por los estudiantes universitarios y secundarios, quienes expresaron un intenso movimiento antidictatorial. La perspectiva adoptada considera a la provincia como unidad de análisis, y el objeto de estudio se centra en los avatares de FOTIA, cuya dirección comenzó a elegirse por el voto directo de los afiliados en 1965.

La noción de “combatividad de la clase obrera” está en el centro del análisis de Nassif. El accionar de los secretarios generales de FOTIA durante la década de 1960 se examina en función de sus posiciones negociadoras o combativas ante los funcionarios de la “Revolución Argentina”, en el

marco de una política represiva y antiobrera que se expresó en el retiro de la personería gremial a la Federación. En ese marco, Atilio Santillán, quien realizó una actuación circunscrita a la esfera sindical, es presentado como un dirigente que buscaba la negociación, sin considerar la tremenda ofensiva patronal y gubernamental que alentó la división y la secesión del sindicalismo azucarero.¹⁶ En las consideraciones sobre el rol de Santillán, no debe soslayarse la histórica delimitación de funciones y tareas que modelaron las trayectorias de las dirigencias sindicales azucareras. En efecto, el peronismo delimitó e institucionalizó el rol de los sindicatos a través de la Ley de Asociaciones Profesionales y estipuló las formas que debían adoptar las demandas obreras a través de las convenciones colectivas de trabajo. Estas limitaron el derecho patronal de contratar, despedir y promover el personal.¹⁷ El cumplimiento de lo acordado en los convenios residía en la labor de las comisiones internas que enlazaban la dirigencia sindical con las bases. En consecuencia, la acción sindical involucraba un abanico de cuestiones que trascendía la escala salarial, al comprender la salubridad laboral, las vacaciones, los feriados legales, la licencia por maternidad, las indemnizaciones, el acceso a la salud y el derecho al esparcimiento, entre otros aspectos. El sindicalismo azucarero de la década de 1960 había forjado su accionar a la luz de la experiencia peronista y, además de expresar al peronismo proscripto, debía desarrollar una práctica sindical que incluía la confrontación y negociación, en el marco de una política antiobrera que avanzaba implacable en la destrucción de las fuentes laborales.

¹⁶ Atilio Santillán fue electo secretario general del sindicato del ingenio Bella Vista en 1963 y secretario general de FOTIA en 1965 y 1973, y fue asesinado en las vísperas del cruento golpe militar de 1976 en las oficinas de la Federación en Capital Federal.

¹⁷ Las convenciones colectivas de trabajo constituyeron un corpus legal separado en términos de legislación social que no han sido suficientemente estudiadas (véase Doyon, 2006; Schiavi, 2013; Nieto, 2016).

El estudio de Nassif, centrado en la indagación de la combatividad de clase, constituye un valioso precedente que permitió reconstruir las recurrentes huelgas organizadas por FOTIA y las consiguientes respuestas represivas de la dictadura. No obstante, esta óptica amerita incorporar nuevas perspectivas de análisis, por ejemplo, las múltiples formas descentralizadas de resistencia popular que incluyeron la confrontación, demanda y negociación, así como las novedosas modalidades de protesta (huelga de hambre, amenaza de destruir las libretas de enrolamiento, negativa popular de participar en el censo, amenaza de padres de no enviar a los niños a las escuelas, misas de campaña, peregrinaciones, etc.) motorizadas por las comisiones prodefensa. Estas formaciones no siguieron el mismo derrotero, en cuanto sus éxitos y fracasos dependieron de la fortaleza local alcanzada por la unidad de los sectores sociales afectados. En ese sentido, el estudio de las comisiones en plural permite recuperar la especificidad de lo local, incorporando variables como el peso de las experiencias asociativas previas, la capacidad de los distintos sectores para construir lazos y la participación de nuevos agentes erigidos en referentes sociales. En estas instancias se puede observar la eficacia de estas instituciones para canalizar y unificar el descontento social, resignificando las demandas sectoriales en función de un objetivo común, la defensa del ingenio, reclamo con el que los trabajadores, cañeros y vecinos podían identificarse.

Como señalamos previamente, se ha avanzado en esa línea de trabajo con resultados promisorios (Bravo y Lichtmajer, 2019; Santos Lepera y Sánchez, 2019). En este libro presentamos nuevas investigaciones que adoptan la perspectiva local. Los resultados revelan la riqueza de este enfoque centrado en las posiciones adoptadas por los trabajadores de los ingenios y por los diferentes sectores sociales que habitaban en los pueblos, amenazados por la política de la patronal y la debacle económica de las fábricas. Los diferentes capítulos revelan que la política azucarera generó

acciones colectivas diversas en los pueblos azucareros, en función de su morfología social y económica y de la situación financiera de los ingenios.

El capítulo de Ignacio Sánchez que abre este volumen, titulado “El declive del ingenio Santa Ana. Proyectos en disputa, divisiones sindicales y conflictividad local (1963-1966)”, reconstruye la historia de un imponente complejo agroindustrial gestionado desde 1930 por el Banco Nación, y transferido a la provincia en 1957, que tuvo una primera clausura en 1963 y fue definitivamente cerrado por Onganía en 1966. El pueblo de Santa Ana buscó por todos los medios salvar su ingenio, jaqueado económicamente por la crisis de sobreproducción de 1958-1959 y por las deficiencias en su funcionamiento. Sin embargo, no pudo adoptar una posición unificada ante la prolongada confrontación sindical entre Carlos Balbino Martínez, referente gremial de Santa Ana, y la conducción de FOTIA representada por Benito Romano, quien lo desplazó en 1959 de la dirección. La amplificación de las diferencias sindicales en la localidad permitió a la intervención provincial de Gordillo Gómez liquidar la empresa a cargo del ingenio y avanzar con los decretos que estipulaban el parcelamiento de sus tierras y la creación de una sociedad anónima de formato cooperativo para la gestión de la fábrica, proyecto que incluyó como accionistas a los factores productivos (obrerros, empleados y cañeros), pero daba empleo únicamente a un cuarto del personal anteriormente ocupado.

La solución fue resistida por FOTIA, que procuró revertir la medida del gobernador con la movilización de sus filiales y sus vinculaciones gremiales. Para ampliar la base de apoyo local a sectores no agremiados, formó una Comisión Pro Ocupación Plena, organización similar y paralela a la Comisión Pro Recuperación del Ingenio Santa Ana que prestó ferviente adhesión al proyecto decretado por el interventor. Esas entidades, con formato semejante a las comisiones vecinales creadas para la promoción de instituciones e infraestructura, cimentaron la división

y generaron un agudo enfrentamiento entre sectores de la localidad. Incluso el rol del cura párroco, reconocido por los trabajadores en protestas previas como representante de los intereses comunitarios, cayó en el descrédito por participar en las iniciativas de una de las partes, y fue incapaz de mitigar las violencias desatadas en el contexto de una comunidad sometida a un intenso proceso de confrontación. En este caso, las diferencias sindicales se proyectaron al espacio local, situación que impidió una acción unificada para revertir el cierre y desmantelamiento definido por el decreto de Onganía.

En el segundo capítulo, denominado “Tradiciones en movimiento. Asociacionismo, política y formas de protesta en Bella Vista (1943-1968)”, Leandro Lichtmajer propone una genealogía de las tramas asociativas y examina las formas de articulación social gestadas en la comunidad bellavistense durante un lapso de dos décadas. Esta perspectiva le permite situar a las comisiones prodefensa en un entramado mayor, signado por la acumulación y sedimentación de experiencias. El análisis reconoce la centralidad de diferentes actores –tales como las organizaciones sindicales de obreros y empleados, el asociacionismo católico, las entidades comerciales, educativas y agrarias y las dirigencias partidarias– de fuerte relevancia a finales de los sesenta, así como el poder motivacional de las tradiciones asociativas locales modeladas a lo largo de décadas.

Con ese fin, el texto se remonta al proceso de construcción de este pueblo azucarero, analizando en contrapunto el barrio obrero (dentro del perímetro de la fábrica) y la urbanización de la villa cívica. Si el pueblo de Santa Ana experimentó divisiones en el colectivo obrero, que impidieron la formación de un colectivo unificado para impedir el cierre del ingenio, el pueblo de Bella Vista organizó una defensa comunitaria, asentada en una densa y activa sociabilidad que delineó tempranamente y atravesó notables transformaciones que el texto reconstruye. Otro rasgo característico de la localidad fue la politización local expresada en

un importante plantel de dirigentes que se proyectaron a la arena provincial y nacional. En su etapa inicial, la dirección del peronismo provincial se referenció en la figura de Fernando Riera, quien venció en la interna a las dirigencias sindicales opositoras. La consolidación de su liderazgo a nivel local y sus proyecciones en escala provincial y nacional operaron como un vector ordenador de la política bellavisteña durante el primer peronismo, etapa en que se afianzaron las articulaciones asociativas. Por su parte, el texto reconstruye la trayectoria de un joven Atilio Santillán, quien, previo a su encumbramiento en las filas de FOTIA, tuvo una activa militancia comunitaria. Su conducción del sindicato de base recibió el apoyo de obreros de fábrica y surco, liderazgo que creció por su estrecha relación con las dirigencias partidarias del peronismo, que lo erigieron en un actor ineludible de las tramas sindicales y políticas locales.

La cohesión de la comunidad local le permitió resistir de manera unificada la inminente clausura del ingenio, incluido en el decreto 16.926. En 1966 se formó una primera Comisión Pro Ingenio integrada por referentes locales sin la participación de la dirigencia sindical, que respaldó a la empresa para la restitución del ingenio y, una vez conseguido este objetivo, se disolvió. Paralelamente, la dirigencia sindical creó una comisión intersindical, integrada por FOTIA y FEIA, para enfrentar la política de racionalización de la patronal. El funcionamiento irregular de la fábrica (su endeudamiento y la falta de pago de los sueldos) determinó la formación de una segunda CPD en 1968, presidida por el cura párroco e integrada por un amplio abanico de dirigentes (partidarios, gremiales, católicos, etc.). A diferencia de Santa Ana, la experiencia resistente del pueblo de Bella Vista reveló la fuerza de una comunidad unida y movilizada en pos de la salvación de la fábrica, identificada con el futuro del pueblo. Las protestas condensaron, de ese modo, una larga tradición de movilización y activismo nutrida de experiencias desplegadas en la escala local, que impactaron por su vigor en el marco provincial y nacional.

Florencia Gutiérrez y Lucía Santos Lepera, autoras del capítulo “Curas y obreros frente a la crisis azucarera de los años sesenta. La protesta de 1968 en San Pablo”, analizan la trayectoria de un colectivo obrero cuyo ingenio no estuvo amenazado por la clausura. El trabajo se organiza en torno a tres ejes: el perfil empresarial de la familia propietaria, el papel desarrollado por el sindicato de base y la transformación del rol de los curas párrocos, expresado en la trayectoria de Pedro Wurschmidt, principal referente del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM). Abordan un campo de investigación prácticamente inexplorado, las estrategias empresariales de la familia Nougés y su realineamiento en el campo asociativo empresarial. En los tempranos años sesenta, la firma invirtió en renovación tecnológica, se benefició con las políticas de racionalización que propiciaron la reducción drástica de personal y la precarización laboral. Hasta 1968 fue uno de los ingenios favorecidos por la distribución del cupo fabril, mientras que, a comienzos de 1970, experimentó un declive productivo. Tal reducción obligó al ingenio a funcionar a pérdida, por debajo de su capacidad productiva. Probablemente, la distribución de cupos fabriles explique su alejamiento del Centro Azucarero Argentino (CAA) liderado por el ingenio Ledesma y su enrolamiento en una nueva entidad, la Asociación de Industriales Azucareros de Tucumán (AIAT), que cuestionó la política azucarera oficial y tuvo un fugaz acercamiento con FOTIA.

El establecimiento fabril estuvo signado por una intensa conflictividad laboral expresada en despidos masivos y políticas de precarización laboral. La resistencia obrera fue asumida por el secretario del sindicato de base, Miguel Lazarte, dirigente que construyó su liderazgo en función de su actuación deportiva y militancia católica. La difícil situación obrera interpeló el rol de los curas párrocos. La nueva posición pastoral de Wurschmidt estuvo influenciada por los cambios conciliares y por su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores. Este cambio

en la misión pastoral fue cuestionado por sectores afines a la dictadura al calificar a los sacerdotes como agitadores sociales y promotores de prácticas colectivas violentas. La intervención de los sacerdotes en la conflictividad social resignificó la crítica a la dictadura desde una perspectiva cristiana. Su posición favoreció el acercamiento con FOTIA y la Confederación General del Trabajo de los Argentinos (CGTA), liderada por Ongaro, que a partir de 1969 propició la creación de una comisión prodefensa en el ingenio, inspirada en la exitosa experiencia de Bella Vista.

El cuarto capítulo, que cierra el volumen, es el de María Celia Bravo, denominado “Luchas comunitarias en tiempos de dictadura. La CPD y la Cooperativa de Trabajo de Bella Vista (1968-1971)”. El texto reconstruye la historia de la CPD creada en 1968 que asumió la representación del pueblo como colectivo, analiza el carácter confrontador de su discurso y las formas de protesta comunitarias ante el cierre del ingenio. El desprestigio de la firma propietaria Gettas-Fiad, acusada de entregar coimas al gobernador Aliaga García para lograr la restitución de la fábrica (delito que no se comprobó) y de evasión impositiva, legitimó el papel de la CPD para defender el activo más valioso de la comunidad, el ingenio. La comisión obtuvo su primera victoria cuando el gobierno la aceptó como interlocutora. Su carácter apolítico en términos partidarios, su discurso y accionar anclado en el problema local favorecieron la consideración de núcleos católicos del Onganiato que controlaban la Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia de la Comunidad (SEPAC), dependiente del Ministerio de Bienestar Social. Estos grupos postulaban un ideal comunitarista expresado en el diálogo con asociaciones de carácter local (comisiones vecinales, cooperativas, etc.).

El multitudinario acto realizado el 15 de enero de 1969 reveló la fortaleza de las redes locales y su capacidad para suscitar el respaldo de asociaciones provinciales de carácter empresarial, profesional, cultural, católico, además de reunir un amplio espectro de organizaciones sindicales.

El impacto de la protesta llegó a las esferas nacionales, contexto favorable para la CPD, cuyos integrantes viajaron a la Ciudad de Buenos Aires para entrevistarse con funcionarios nacionales. Sus gestiones lograron que la firma Gettas-Fiad cediera en caución sus acciones a la Comercial, Inmobiliaria y Financiera Empresa Nacionalizada (CIFEN). Asimismo el gobierno nacional se hizo de los salarios adeudados y se aprobó una cooperativa de trabajo para avrontrar la zafra.

En 1969 se formó la Cooperativa de Producción, que incluyó como socios a todos los obreros y los empleados de fábrica. La entidad suscribió un contrato de locación y servicios con la Caja Popular de Ahorros para alistar el ingenio y prepararlo para la zafra de 1969. El funcionamiento del ingenio se hizo realidad cuando la CPD consiguió el otorgamiento de un modesto cupo de producción. Ninguna comisión había llegado tan lejos. La solución era precaria (solo se aseguraba la zafra por un año), pero fue percibida por los pobladores como el triunfo de la comunidad de Bella Vista. La Cooperativa de Producción (CP) se encargó del funcionamiento de la fábrica, en gran medida su gestión expresaba la defensa del lugar, entendida como la custodia del ingenio y la protección de su pueblo. La cooperativa cumplió con sus obligaciones salariales, se ocupó de la asistencia médica de sus socios, incluso saldó las deudas de la anterior administración pagando los haberes de los trabajadores del surco que no formaban parte de la cooperativa. Fue el primer ingenio dependiente de la Caja Popular de Ahorros que consiguió utilidades sin apelar a prácticas de precarización laboral.

¿Cómo se consiguió esta proeza en términos empresariales? Los trabajadores en calidad de socios donaron el pago de horas extras para formar un fondo de reserva destinado a la eventual compra de acciones de una nueva sociedad. Este propósito común fue abandonado en 1970 cuando se formó la Compañía Nacional Azucarera S.A (CONASA), empresa estatal azucarera integrada por tres

ingenios expropiados a la Compañía Azucarera Tucumana (CAT). Su presencia marcó un punto de inflexión en la política azucarera en cuanto representaba la ampliación del cupo azucarero de la provincia y la formación de un *holding* empresarial de base estatal capaz de normalizar el mercado. Su presencia expresaba un horizonte productivo sólido para el ingenio de Bella Vista. En esa dirección, la CPD reclamó formalmente la incorporación de la fábrica a CONASA, demanda que se concretó en diciembre de 1970, cuando se anunció que la empresa estatal arrendaba los ingenios Bella Vista y San Juan para garantizar su funcionamiento. La incorporación del ingenio a la compañía cerraba la actuación de la CPD y del CP, que habían logrado salvar el ingenio Bella Vista apelando a la unidad y la lucha comunitaria.

En síntesis, las investigaciones aquí reunidas ponen de relieve la complejidad de los efectos sociales, económicos y políticos generados por el colapso del modo de producción azucarero de Tucumán. En ese escenario, el cierre de ingenios constituye uno de sus aspectos más dramáticos. Se trata de pesquisas necesarias para comprender un punto de inflexión de la historia tucumana, cuyas profundas heridas se mantienen abiertas.

1

El declive del ingenio Santa Ana

*Proyectos en disputa, divisiones sindicales
y conflictividad local (1963-1966)*

IGNACIO SÁNCHEZ¹

Introducción

En los últimos meses de la dictadura del general Aramburu, se definió por decreto la transferencia de uno de los mayores establecimientos azucareros de Tucumán al gobierno provincial. Desde 1930 el complejo del ingenio Santa Ana, conformado por extensas propiedades, estuvo administrado por el Banco Nación, que no consiguió realizar una explotación redituable a pesar de intentar diversas modalidades de gestión y planes de mejoramiento. Al asumir la gobernación en mayo de 1958, el representante de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) Celestino Gelsi se comprometió a dar continuidad a su funcionamiento y formó para ello una empresa provincial. No obstante, las recurrentes dificultades financieras profundizadas por el contexto de sobreproducción decidieron al gobernador a promover su venta a privados. A comienzos de 1963, el interventor provincial Alberto Gordillo Gómez, evaluando

¹ Instituto Superior de Estudios Sociales (CONICET/UNT).

que los gastos demandados por el ingenio recargaban excesivamente el presupuesto provincial, decretó su cierre.

En contra de la clausura de la fábrica, los trabajadores decidieron tomar las instalaciones. Sin acceder al reclamo de dar continuidad a la molienda ese año, el interventor impuso como solución un programa de reformas que contemplaban su nueva puesta en actividad. En primera instancia, parceló las tierras productivas del ingenio para su adjudicación y, días antes de finalizar su gestión, conformó una sociedad anónima para explotar la fábrica cuyos accionistas fueron sus trabajadores, empleados y cañeros, reservándose el Estado provincial el predominio en la firma como socio mayoritario. Tanto en lo relativo a la asignación de parcelas, como a la formación de la nueva sociedad mixta, se convocó a un sector limitado de los trabajadores, decisión que profundizó las disputas entre dirigentes sindicales locales. Quienes eran afines a la conducción de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) reclamaron por la ocupación del total de extrabajadores, así como la derogación del parcelamiento. Mientras que la oposición defendió los decretos de Gordillo Gómez. Los enfrentamientos en la localidad impidieron arribar a un consenso necesario para el buen desempeño del ingenio, que finalmente fue intervenido y clausurado en agosto de 1966 por el gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía.

El trabajo postula que las divisiones sindicales fueron azuzadas por los proyectos decretados por la intervención, al punto de generar la confrontación entre sectores de la localidad e imposibilitaron la formulación de acuerdos contra la debacle del ingenio. La perspectiva local adoptada permite reconocer las posiciones de los dirigentes sindicales que cumplieron el rol de mediadores, con capacidad de influir en el ámbito provincial.² Se reconstruye

² Respecto a la pertinencia de considerar en los estudios locales actores que cumplen funciones de mediadores y nexos entre la sociedad y el Estado (Taylor, 2003: 67-70).

la trayectoria de estos agentes, las tramas tejidas con las entidades gremiales locales, provinciales y nacionales y los vínculos entablados con el gobierno provincial y nacional.

Abordar el estudio del ingenio Santa Ana desde un enfoque local permite analizar las divisiones al interior del sindicalismo azucarero invisibilizadas desde una mirada totalizadora, ya que las disputas convirtieron a la localidad en un campo de batalla entre las distintas facciones sindicales.³ Se trata de indagar un período insuficientemente explorado, crucial para comprender la crisis azucarera tucumana de la década de 1960, la gestión provincial de los ingenios y los proyectos frente a la crítica situación social generada por la amenaza del cierre de unidades fabriles.

La administración provincial del ingenio Santa Ana en crisis y las resoluciones del interventor: cese de la molienda y parcelamiento de tierras

Al momento de hacerse cargo de la gestión del ingenio Santa Ana, el gobierno de Tucumán contaba con otros tres establecimientos azucareros bajo su órbita, pero la escala de este último era muy superior y la perspectiva de realizar una explotación rentable era incierta.⁴ Con el objetivo

³ Desde una perspectiva generalizante de la historia de los trabajadores, se concibió a los sucesos de Santa Ana durante 1963 como ejemplo de convergencia entre los conflictos de la clase obrera y la radicalización política de la primera mitad de la década del 60 (Jemio, 2012). La interpretación desconsidera la relevancia de las disputas locales en el desenlace de los acontecimientos.

⁴ La venta se concretó a fines de 1957, el 25 de noviembre un decreto nacional autorizó la transferencia del ingenio perteneciente al Banco Nación al gobierno de Tucumán con amplias facilidades de pago (decreto ley 15.461). Desde 1949 el ingenio Esperanza incautado por la provincia estuvo administrado por el Organismo Financiador de Empresas Mixtas Privado Estatal (OFEMPE). Los ingenios Marapa y Nuñorco, intervenidos por incumplimiento de sus estatutos sociales, se sumaron posteriormente a los ingenios oficiales regulados por la misma entidad.

de regularizar su funcionamiento el gobierno de Celestino Gelsi creó la razón social Ingenio Santa Ana E.P.T (Empresa Provincial de Tucumán).⁵ Frente a los cuestionamientos legislativos por la recurrencia de créditos solicitados por la firma y su situación deficitaria, se creó una comisión de la Cámara de Diputados que relevó las instalaciones y la población afectada por su funcionamiento.⁶ El estudio determinó que el área de influencia del ingenio Santa Ana incluía a quienes se radicaban en torno de la fábrica y en las 17 colonias, y se extendía a núcleos de población próximos, como Villa Clodomiro Hileret, Villa Vieja y Los Lunas, área de comerciantes, y de pequeños y medianos productores.⁷ En total fueron censados 12.123 habitantes, la mayoría de los cuales habitaban en viviendas precarias.⁸

La evaluación técnica señaló como principal problema el abastecimiento energético, que imposibilitaba la correcta utilización de los trapiches y afectaba la productividad del complejo. A pesar del diagnóstico, la mayor dificultad no radicó en sus bajos rendimientos fabriles, sino en la imposibilidad de comercializar el azúcar elaborado en el contexto de la sobreproducción de 1958 y 1959, situación que definió la descapitalización de la empresa y su necesidad

5 Fundada bajo la ley n.º 2.815, que dictaminó sobre la creación de empresas de la provincia.

6 La comisión se conformó en junio de 1958 con el mandato de estudiar la planificación del ingenio, al respecto de lo cual debía expedirse en 90 días, pero vencido el plazo presentó sucesivas prórrogas y modificaciones al proyecto inicial. El informe se presentó finalmente en septiembre de 1959 junto al requerido para los ingenios oficiales vinculados a OFEMPE y la Caja Popular de Ahorro.

7 Esa apreciación corrobora la caracterización de las localidades azucareras de Tucumán como espacios que excedían las propiedades del ingenio, abarcando ámbitos cívicos en los que intervenían factores independientes de la fábrica (Sánchez, 2019).

8 Provincia de Tucumán, *Diario de Sesiones. Cámara de Diputados. Período 1959-1960*. Tomo I, Suplemento. *Informe de la comisión investigadora de OFEMPE y Caja Popular de Ahorros de la Provincia*. Anexo A: relevamiento censal del ingenio Santa Ana. Anexo B: Informe técnico, resumen, pp. 923-951.

de asistencia financiera por parte del gobierno provincial.⁹ Ante las dificultades de funcionamiento, la legislatura aprobó a finales de 1961 la propuesta de enajenación del establecimiento presentada por el gobernador, pero la venta no se concretó por falta de interesados en las licitaciones.¹⁰ A comienzos de 1962, los conflictos arreciaban en el establecimiento, tanto con los proveedores de materia prima que reclamaban lo adeudado, como con los trabajadores que ocuparon las instalaciones para exigir el pago de salarios.¹¹ La situación se descomprimió con fondos nacionales que permitieron regularizar las deudas e iniciar la molienda.¹²

Al finalizar la zafra de 1962, se reactualizaron los problemas económicos. El interventor de la provincia Alberto Gordillo Gómez, designado por el presidente provisional José María Guido, removió al consejo de la administración del ingenio en razón de la “desorganización imperante” en su dirección y designó nuevas autoridades.¹³ En diciembre los trabajadores comenzaron una huelga de “brazos caídos” por el atraso de jornales.¹⁴ En ese removido contexto, el gobierno decretó como prioridad adoptar una solución definitiva para Santa Ana y se dio a conocer de modo extraoficial la intención de cerrar la fábrica y parcelar sus tierras.¹⁵

⁹ En 1958 el Santa Ana produjo 30.455 toneladas de azúcar con rendimiento del 7,7 % (por debajo del promedio provincial de 8,2 %), en 1959 elaboró 21.500 toneladas con 7,5 % (siendo la media provincial 8,3 %). Los resultados no eran del todo satisfactorios, pero fue la imposibilidad de colocar el *stock* lo que justificó el préstamo provincial de 10 millones de pesos para asegurar la zafra de 1960. Proyecto del Ejecutivo, ley n.º 2.933 sancionada el 29 de enero de 1960.

¹⁰ Ley n.º 3.110 promulgada el 10 de diciembre de 1961. Faculta al Ejecutivo a licitar los bienes del ingenio. La licitación internacional se declaró desierta por la falta de oferentes (*La Gaceta*, 1962. 2 de marzo).

¹¹ *La Gaceta*, 1962. 19 y 23 de enero.

¹² *La Gaceta*, 1962. 28 de enero.

¹³ *La Gaceta*, 1962. 30 y 31 de octubre.

¹⁴ *La Gaceta*, 1962. 1 de diciembre.

¹⁵ El decreto acuerdo n.º 37/1 del 2 de diciembre de 1962 fijó un plazo de 30 días para la elaboración de un informe y una diagramación de un plan para la explotación del ingenio Santa Ana.

A comienzos de 1963, el interventor presentó el informe gubernamental sobre la situación del ingenio, en función del cual denunció que el último ejercicio de Santa Ana E.P.T. databa de abril de 1961 y que, a partir de esa fecha, el desorden contable había imposibilitado la presentación de balances.¹⁶ No obstante, para dar fundamento a su decisión de clausurar la fábrica, enunció estimaciones de las deudas. La Federación Económica de Tucumán (FET), que nucleaba a los empresarios, respaldó el informe y la decisión, en tanto la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) cuestionó la difusión de “cifras antojadizas con el fin de confundir a la opinión pública”.¹⁷ Argumentó que los datos estaban incompletos, por no mencionar la producción obtenida en los ejercicios, ni las formas de comercialización. Las principales críticas las emitió FOTIA y su seccional de Santa Ana, que cuestionaron la parcialidad de los datos y, aunque reconocían los déficits abultados, defendieron la necesidad de una nueva zafra.¹⁸ Para fortalecer esa demanda, los representantes del sindicato local propusieron realizar una marcha de trabajadores azucareros hacia la ciudad, tema a ser definido en el plenario de FOTIA.¹⁹ En ese marco de movilización, Gordillo Gómez decretó el 15 de febrero la disolución y liquidación del ingenio Santa Ana E.P.T.

En paralelo al cierre del ingenio, el interventor propuso el fraccionamiento de sus tierras para la adjudicación de parcelas, otorgando prioridad al personal obrero. Advirtió que esta medida se definiría en los meses siguientes con el asesoramiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI)

¹⁶ *La Gaceta*, 1963. 6 de febrero.

¹⁷ *La Gaceta*, 23 de enero y 10 de febrero de 1963. FET conoció antes que otras entidades el informe y sugería el cierre de la fábrica o su venta a privados, fraccionando sus tierras en unidades económicas para su explotación. FOTIA cuestionó esa declaración, recordando que, durante varios años, la gestión de la empresa estuvo a cargo de dos expresidentes y un secretario de la Federación de Empresarios.

¹⁸ *La Gaceta*, 1963. 13 de febrero.

¹⁹ *La Gaceta*, 1963. 17 y 18 de febrero.

encargado de estudiar los aspectos económicos, organizativos y sociales para la transformación del complejo agroindustrial. Por pedido del CFI, los directores del instituto José Enrique Miguens y asociados iniciaron la investigación a principios de 1963. Sus informes de avances constituyen una fuente clave para conocer el heterogéneo universo laboral afectado por la clausura del establecimiento, tema debatido intensamente en años posteriores.²⁰ De acuerdo a la cantidad de recibos de sueldo o jornal, los trabajadores eran 1.653 y ascendían a 2.274 en épocas de zafra. Entre estos, 767 se empleaban en las instalaciones de la fábrica (número que incluía tanto a obreros jornalizados y mensualizados, como a empleados administrativos de carácter permanente), los cuales alcanzaban a ser 1.088 trabajadores durante la zafra. Mientras que en las colonias los peones u obristas registrados eran 886 y otros 300 trabajadores temporarios que vivían fuera de los límites del ingenio. En consecuencia, los trabajadores de fábrica (incluidos los incorporados en zafra) representaban el 48 % y el personal de surco el 52 %, la relación porcentual contrasta al común de los ingenios con cañaverales propios en que los trabajadores agrarios solían duplicar a los fabriles.

El estudio incorporó apreciaciones peyorativas de la población enmarcadas en conceptos modernizadores al afirmar: “solo hay rudimentos embrionarios de vida en sociedad, dado que toda la tierra es propiedad del ingenio”, o al considerar que había únicamente “instituciones desproporcionadamente grandes constituidas por el mismo ingenio con carácter paternalista”.²¹ El análisis de los

²⁰ Enrique Miguens fue fundador y director del Departamento de Sociología de la Universidad Católica Argentina. "Informe preliminar sobre la situación sociofinanciera", Carpeta n.º 1, enero de 1963. Existente en la biblioteca del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

²¹ CFI, Informe preliminar sobre la situación sociofinanciera, Carpeta n.º 1, f.4. enero de 1963. Las apreciaciones se reiteran en los diferentes informes presentados. Por ejemplo, “Estudio sobre el establecimiento Santa Ana”, Carpeta n.º 4, parte II, diciembre de 1963.

comportamientos sociales locales estaba imbuido de una perspectiva que caracterizaba a los trabajadores como elemento pasivo, funcional al concepto de “paternalismo” en auge en las ciencias sociales. Dichas interpretaciones se contradicen con el agitado movimiento social desatado por el intento de clausurar la fábrica. Aun cuando estos no consiguieron articular una posición unificada y estuvieron signados por la división en el interior del sindicato local. Fractura que se gestó en torno a la figura de Carlos Balbino Martínez, quien adquirió relevancia como dirigente sindical luego del golpe militar de 1955.

Conflictividad sindical en la filial Santa Ana. La disidencia de Carlos Balbino Martínez previa a la clausura de la fábrica (1957-1963)

La normalización de FOTIA en julio de 1957 elevó a la dirección a Carlos Balbino Martínez, perteneciente al sindicato del ingenio Santa Ana.²² Su elección se definió con representación de 37 de los 56 sindicatos de fábrica y surco reunidos en el Congreso de Delegados. La regularización de las comisiones directivas estuvo tutelada por el interventor saliente, situación que permitió el retorno de dirigentes sindicales expulsados de los gremios por su participación en la huelga azucarera de 1949, entre los que se contaba el propio Martínez. Su ascenso al poder sin una oposición relevante fue posible por la persecución y el aislamiento de sindicalistas asociados a la resistencia peronista.²³ Como secretario general, logró firmar en las dilatadas negociaciones

²² *La Gaceta*, del 11 al 13 de julio de 1957. Carlos Balbino Martínez nació en 1923, el padrón electoral de 1944 lo inscribe como peón residente en el ingenio. Esa categoría ocupacional reúne a los trabajos de menor calificación en momentos en que el escalafón solo discriminaba los oficios considerados especializados.

²³ En el congreso de delegados, se presentaron cinco candidatos para presidir la federación. La mayor disputa fue con José Simón Campos del ingenio

paritarias de 1958 un convenio que unificó el porcentaje de aumento salarial para obreros de fábrica y trabajadores agrarios.²⁴ En los años posteriores, la dirigencia de FOTIA debió batallar para que los gremios cañeros reconocieran los aumentos acordados en paritarias, pero sus éxitos fueron parciales, y esa limitación abonó las persistentes disidencias entre trabajadores de fábrica y surco (Bravo, 2015).

En contraste con las precedentes, las elecciones sindicales de 1959 fueron disputadas por dirigentes peronistas y contaron con una masiva concurrencia. Las listas azules que representaban la continuidad de la conducción de Balbino Martínez se vieron desafiadas por las listas blancas que promovían a Benito Romano como candidato a secretario general de la federación. Romano había sido removido por la intervención sindical de 1955 y debió exiliarse por tomar parte en la resistencia contra el gobierno de facto de Aramburu. Su retorno encarnaba una vertiente del sindicalismo peronista con aspiración de representar las bases azucareras y dispuesta a confrontar con el gobierno radical, desarrollando una línea de trabajo afín al peronismo proscrito. Su trayectoria era opuesta al perfil dialoguista de Martínez vinculado a sectores que apoyaron el gobierno de Gelsi (en particular a Carlos Américo Cabrera, trabajador del Santa Ana elegido diputado del departamento Río Chico por el partido Unión Popular) (Lichtmajer, 2020a).

En el Sindicato de Obreros de Fábrica y Surco del Ingenio Santa Ana, la lista azul fue encabezada por Martínez, quien ponderaba como discurso de campaña la defensa de los intereses de los trabajadores del surco, mensaje especialmente receptivo en las 17 colonias del estableci-

Santa Rosa (también desplazado del sindicalismo por su participación en la huelga de 1949), quien, tras la derrota, fue elegido vicepresidente.

²⁴ Esa extensión del porcentaje salarial a ambos sectores de trabajo fue particularmente resistida por el gremio de los productores cañeros (*La Industria Azucarera*, n.º 776, junio de 1958, p. 268).

miento.²⁵ Previo a los comicios, la lista azul denunció que la ubicación de urnas únicamente en la fábrica y en el sindicato obstaculizaban la participación de los obreros de surco que cumplían su jornada laboral en lugares distantes.²⁶ El reclamo no prosperó, y Martínez fue derrotado por la lista blanca, presidida por Juan A. Núñez, que expresaba la preeminencia de los trabajadores de fábrica.²⁷ Ese resultado estuvo en consonancia con la mayoría de los sindicatos de base, lo que habilitó el recambio en la conducción de FOTIA.

La nueva comisión directiva, presidida por Benito Romano, realizó una prolongada huelga a fines de julio y agosto de 1959 que extendió su alcance a todas las regiones azucareras del país y consiguió cerrar las negociaciones paritarias con un significativo aumento salarial del 70 % (Gutiérrez y Parolo, 2017: 163-164). Su gestión debió revertir el estado deficitario en que se encontraban las cajas gremiales, lo que determinó la decisión de aumentar la cuota sindical y establecer aportes extraordinarios. Esas resoluciones, impopulares entre los afiliados, se justificaron dando a conocer las irregularidades financieras de la gestión precedente. Con tales argumentos, se sancionó al exsecretario general Carlos B. Martínez.²⁸ Como respuesta, el imputado llevó adelante una campaña de difamación del nuevo secretariado, al que denunció por fraude electoral, e inició gestiones para conformar una central azucarera paralela, sin que la iniciativa prosperara.

La representatividad de Martínez entre los trabajadores de Santa Ana se evidenció en las siguientes elecciones sindicales de abril de 1961. En principio, la Junta

²⁵ Además del acuerdo paritario en las condiciones aludidas, bajo su gestión se alcanzó la extensión del salario familiar para trabajadores agrarios permanentes (*La Industria Azucarera*, n.º 773, marzo de 1958, p. 143).

²⁶ *La Gaceta*, 1959. 24 de abril.

²⁷ La lista blanca obtuvo 991 votos, la azul, 593, y la verde, 275 (*La Gaceta*, 1959. 8 de mayo).

²⁸ *La Gaceta*, 1959. 29 de agosto y 1 de septiembre.

electoral impugnó la lista azul del sindicato local por llevar como representante al Congreso de Delegados y candidato a secretario general de FOTIA al sancionado Carlos B. Martínez.²⁹ Su pedido de amnistía respaldado con la firma de los trabajadores no obtuvo respuesta favorable.³⁰ En la campaña, la lista blanca que propiciaba la reelección de Núñez en la filial remarcó los beneficios obtenidos durante su gestión y responsabilizó a Martínez por la situación crítica de la fábrica.³¹ Los comicios estuvieron particularmente disputados, lo que justificó la novedad de disponer urnas en las colonias. Se presentaron en la contienda cuatro listas, incluida la finalmente aceptada lista azul que triunfó en ese escenario electoral fragmentado, con el apoyo mayoritario de los trabajadores de surco.³² De los 1.040 electores que sufragaron en las colonias el 47 % eligió la lista azul y entre los 422 que lo hicieron en el cuadro del ingenio (fábrica, talleres y sindicato) lo apoyó el 49 %, representado en su mayoría por personal de los talleres.

La nueva comisión directiva del sindicato de Santa Ana, presidida por Martín Coronel, confrontó durante el primer año de su gestión con el secretariado de FOTIA, ya que en esa instancia se logró imponer la continuidad de

²⁹ *La Gaceta*, 1961. 19 de abril.

³⁰ Quienes presentaron la nota a FOTIA denunciaban a la prensa que se estaba coartando la libertad, sancionando a los afiliados con cargos que nunca se habían demostrado. Por su parte, el exdiputado de la localidad Carlos Américo Cabrera cuestionaba la acción sindical de la conducción y la exclusión de opositores (*La Gaceta*, 1961. 20 de abril).

³¹ Se reseñaron como conquistas de la comisión el paso a la condición de permanente de dos trabajadores temporarios por colonia, ascensos en distintas secciones de la fábrica, el mejoramiento de asistencia sanitaria, el reconocimiento del total de los medicamentos adquiridos por los obreros, la provisión de salud pública, la calificación y mensualización de los tractoristas, y el nombramiento de maestras entre hijas de obreros. Se advertía además que los hombres que trataban de volver al sindicato eran “los mismos que impulsaron en 1949 una huelga de 45 días para después abandonarlos” (*La Gaceta*, 1961. 27 de abril).

³² La lista azul obtuvo el triunfo con 578 votos, en segundo lugar, la lista amarilla con 332, luego la blanca con 325 y la roja con 227, hubo 12 votos en blanco y 11 nulos (*La Gaceta*, 1961. 2 de mayo).

la lista blanca, presidida por Juan Pasayo del ingenio Los Ralos. Su elección fue impugnada por las listas disidentes en el congreso de delegados, especialmente por los sindicatos del surco, referenciados en Manuel Faciano del sindicato Los Molles, pero también por los delegados de los ingenios Santa Ana, Aguilares, San Ramón, Cruz Alta y San Juan. En la filial de Santa Ana, las disidencias gremiales se enervorizaron al renunciar el delegado electo para dejar en su lugar a Martínez. Ante el hecho, las listas opositoras solicitaron a FOTIA la intervención del sindicato. Para impedir la medida, la dirigencia local anunció que Martínez no había aceptado el cargo y se mantendría como asesor, aunque al mismo tiempo aclaró que se le habían levantado las sanciones, reafirmando con esa declaración su perfil opositor.³³

La disidencia del sindicato de Santa Ana a la dirigencia fotiana se proyectó en la filial con la expulsión de sindicalistas y la exacerbación de la división entre trabajadores de fábrica y surco, tal como se manifestó a comienzos de 1962 ante el atraso del pago de salarios. La protesta por la regularización del cobro fue encabezada por los trabajadores de fábrica, quienes, en una asamblea sin representatividad gremial, decidieron la ocupación del establecimiento.³⁴ La medida fue levantada por la presión de los trabajadores de las colonias, que aceptaron luego de dos días las promesas del gobierno. No obstante, para dar continuidad al reclamo, una delegación de trabajadores de fábrica, con el mandato de las seccionales, pero sin apoyo de la dirección sindical, presentó sus demandas en la casa de gobierno al mandatario Celestino Gelsi.³⁵ Además, la delegación obrera denunció en la central de FOTIA la expulsión arbitraria de afiliados de la seccional efectuada sin respetar el estatuto y con cargos calumniosos. En réplica, la comisión directiva del sindicato de Santa Ana también se trasladó a la Capital

³³ *La Gaceta*, 1961. 15 de mayo.

³⁴ *La Gaceta*, 1962. 23 de enero.

³⁵ *La Gaceta*, 1962. 1 de marzo.

junto a un numeroso grupo de afiliados para entrevistarse con el gobernador, quien les declaró su voluntad de resolver a la brevedad los salarios impagos.³⁶ Luego se dirigieron al local de FOTIA, declararon contra la actividad disidentes, pero con ánimo de sobreponerse a los conflictos previos, los dirigentes se mostraron dispuestos a acercar posiciones con la conducción de la federación para actuar de manera conjunta frente a las pésimas condiciones económicas del ingenio y su presunta enajenación.

La situación financiera se distendió momentáneamente con los créditos extraordinarios que permitieron a la empresa regularizar el pago de salarios y acondicionar la fábrica para iniciar la zafra de 1962.³⁷ Pero las previsiones para la próxima zafra no eran alentadoras, en vista de lo cual el secretariado de FOTIA decidió involucrarse en la problemática y designó a dos de sus directivos, Mario A. Leito y Bernardo S. Villalba, para intervenir en el territorio. Estos coordinaron con los directivos del sindicato local (a pesar de la disidencia) e intentaron conciliar criterios y generar acuerdos entre trabajadores de fábrica y surco. Con ese fin, se conformó una comisión con representantes de las seccionales de fábrica, de las colonias, dirigentes del sindicato local y miembros de la federación encargada de realizar las gestiones referentes al ingenio.³⁸ De ese modo, la dirección de FOTIA se introducía en un espacio en que no contaba con un apoyo mayoritario, pretendiendo unificar posiciones para impedir el colapso del establecimiento.

La comisión se entrevistó con la administración del ingenio y solicitó un informe financiero. En la reunión recibió el anuncio de que la empresa se encontraba imposibilitada de abonar los próximos haberes.³⁹ Ante esa novedad y la presunta intención de clausurar la fábrica, la federación

³⁶ *La Gaceta*, 1962. 4 de marzo.

³⁷ *La Gaceta*, 1962. 17 de marzo.

³⁸ *La Gaceta*, 1962. 2 y 4 de octubre.

³⁹ *La Gaceta*, 1962. 23 de octubre.

definió la adopción de una línea de acción confrontativa con el gobierno, posición que reabrió las disidencias en el sindicato local en el corto plazo y no recibió el respaldo suficiente entre los trabajadores de la filial.

Resistencia al cierre del ingenio y continuidad de las divisiones sindicales

El anuncio de liquidación de Santa Ana E.P.T. en febrero de 1963 fue cuestionado y rechazado por FOTIA.⁴⁰ Sus autoridades encabezaron una numerosa asamblea en el local del sindicato de Santa Ana, en la cual tomaron la palabra dirigentes de otros ingenios que brindaron su solidaridad para enfrentar la disposición gubernamental.⁴¹ Al día siguiente el ingenio fue ocupado por sus trabajadores, que organizaron una comisión intersectorial (obreros y empleados) para dirigir la toma.⁴² Se cerraron los accesos a la tesorería y se entregó la llave en carácter de depositario al cura Fernando Fernández. El párroco ofreció una misa por la pronta revisión de la medida, y las entidades católicas del pueblo cursaron un mensaje al arzobispo para pedir su intercesión. La ocupación de la fábrica expresaba la opción de confrontación directa con las autoridades provinciales, pero se adoptaron resguardos para revestirla de la mayor legitimidad posible. El respaldo brindado por el sacerdote perseguía dicho propósito, al asociar la demanda con el interés común de Santa Ana, más allá de los distintos posicionamientos

⁴⁰ *La Gaceta*, 1963. 20 de febrero.

⁴¹ Participó el titular del sindicato Enrique Veliz, y usaron luego la palabra Mario Leito por FOTIA, Benito Romano del ingenio Esperanza, Norberto Almirón y Juan Garay del San Ramón, Roque Albarracín de Providencia, José Campos de Santa Rosa y Rafael de Santis de Mercedes.

⁴² Formada por Francisco Ruiz, Darío R. Méndez y Ramón C. Aráoz en representación de los empleados, y por Julio T. Juárez, Enrique Veliz y Mario A. Leito en representación obrera (*La Gaceta*, 1963. 21 de febrero).

políticos o sindicales. Además, su solidaridad podía desalentar la amenaza represiva.

Desde el día del anuncio del cierre, la comisaría reforzó su dotación policial y, en el momento de la toma, se presentaron el subjefe de policía y el director de seguridad con una formación de infantería para disuadir a los trabajadores de la medida de fuerza. El juez de instrucción los emplazó al desalojo y, ante la mediación de FOTIA, se extendió el plazo por 24 horas. Los apoyos sumados por el sindicato fueron fundamentales para disipar la acción represiva y fortalecer el reclamo. El plenario de la federación declaró la movilización general de los gremios y el paro de una hora en los ingenios en solidaridad a la toma. El secretario general de la CGT, José Alonso, expresó su aval al reclamo de los trabajadores de Santa Ana, y Mario A. Leito, que integraba la conducción de la central obrera, participó en la ocupación del ingenio, también respaldada por estudiantes y asociaciones diversas.⁴³

El 24 de febrero de 1963, la policía sitió el casco fabril para aislar las viviendas del ingenio, y las familias se la debieron ingeniar para hacer llegar la comida a los trabajadores que sostenían la toma. Se sumaron también otras modalidades de protesta en la población que procuraba por medios pacíficos dar cuenta de la urgencia del reclamo. En el hospital algunos trabajadores realizaron una huelga de hambre que contó con la asistencia de un médico.⁴⁴ A pesar de la masividad de la protesta y las significativas adhesiones conseguidas, los trabajadores acordaron entregar las instalaciones compelidos por la orden judicial de desalojo y el amenazante bloqueo policial. También se justificó el cese de la toma en el compromiso de diálogo del cura párroco con el juez de instrucción. Sin embargo, el interventor aclaró

⁴³ *La Gaceta*, 1963. 23 de febrero.

⁴⁴ Se menciona en la prensa a Francisco Roque Cardozo, Julio T. Juárez, Julio Barrientos, Ángel Orellana, Raúl A. Cancinos, Ángel A Ruiz, Roque Coronel, Oscar Zárate, Julio A. Cejas, Juan Galleguillo y Mateo Carrizo (*La Gaceta*, 1963. 24 de febrero).

que los puntos acordados habían sido a título personal, en cuanto no participó ningún representante del gobierno.⁴⁵ Se aclaró que el ministro de gobierno recibió al cura en su carácter de sacerdote, quien, por su parte, informó sobre los motivos de su mediación:

...cumplía con el dictado de mi sacerdocio, de mantener la paz y evitar toda violencia que hubiera importado graves consecuencia para el sector de los trabajadores y sus familias [...] las conversaciones con empleados y obreros del establecimiento hacen a la misión que invisto y es la esencia y obligación de todo sacerdote.⁴⁶

Las ideas de renovación conciliar comenzaban a circular en los ámbitos eclesiásticos, y Fernando Fernández no sería ajeno a ellas (Santos Lepera y Sánchez, 2019). Sin embargo, como él mismo explicó, en esa ocasión fueron los trabajadores quienes lo colocaron como interlocutor en la negociación, en razón de tradicionales mandatos asignados a los párrocos por la Iglesia católica.

Además de la CGT, los sindicatos azucareros se opusieron al decreto de liquidación. FEIA cuestionó la facultad de la provincia para vender el ingenio, argumentando que la compra se había realizado con el compromiso de formar una cooperativa mixta para su explotación.⁴⁷ El consejo directivo de Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT) rechazó la resolución gubernamental y reiteró su exigencia de que todos los ingenios debían funcionar.⁴⁸ Responsabilizó al Estado por el desorden administrativo de la empresa y exigió prioridad para saldar la deuda con los cañeros acreedores.

Sin tener en cuenta las críticas generalizadas, el interventor anunció el plan de colonización de las tierras del

⁴⁵ *La Gaceta*, 1963. 26 de febrero.

⁴⁶ *La Gaceta*, 1963. 27 de febrero.

⁴⁷ *La Gaceta*, 1963. 28 de marzo.

⁴⁸ *La Gaceta*, 1963. 1 de marzo.

ingenio próximo a ejecutarse. Su programa de parcelamiento implicaba la licitación de 226 lotes que abarcaban una superficie de 7.000 ha de terrenos ubicados en las colonias. Se abrió un concurso público de antecedentes para la adjudicación de parcelas; la prioridad se asignaba en este orden: primero a los obreros y empleados del ingenio; luego a los arrendatarios y aparceros; los técnicos de la universidad o de escuelas con especialidad agropecuaria; los hijos de trabajadores de la empresa; por último, se contemplaba la inscripción de agricultores de la provincia.⁴⁹ En lo concerniente al estadio fabril, Gordillo Gómez se declaró a favor de la conformación de una sociedad mixta con la participación de obreros, empleados y cañeros como accionistas.

La filial de empleados de Santa Ana apoyó ambos proyectos gubernamentales y declaró que 76 de los trabajadores se encontraban dispuestos a adquirir parcelas. En tanto FOTIA cuestionó el plan de colonización al considerar que la fragmentación de la tierra desmembraba el complejo agroindustrial. Propuso la formación de cooperativas integrada por obreros y empleados para la explotación de tierras, solución considerada insuficiente al involucrar solo un cuarto del personal de las colonias. En oposición a la sociedad mixta, reivindicó el derecho de los trabajadores a la posesión de la planta industrial dada la finalidad social de la empresa. En la misma sintonía, la filial de Santa Ana se pronunció contra el decreto de colonización publicado el 17 de abril de 1963.

Las declaraciones se emitían en un clima de tensión en la localidad ante el anuncio de nuevas cesantías y el refuerzo de efectivos policiales en la comisaría de la villa. La relación de colaboración de los sindicalistas locales con FOTIA se rompió cuando Carlos Balbino Martínez inició de manera individual negociaciones con el gobierno nacional. Para dar

⁴⁹ El adjudicatario debería abonar el 5 % del total para tomar posesión del lote, el saldo restante del precio sería abonado en 8 años (*La Gaceta*, 1963. 16 de marzo).

sustento a su iniciativa que quebraba la orgánica práctica sindical, recurrió a los avales y consiguió reunir 938 firmas entre trabajadores de fábrica y surco. La maniobra encendió nuevamente el larvado conflicto. Una asamblea de obreros de fábrica decidió la expulsión de los miembros de la dirección que fueron sorprendidos en esa campaña de firmas.⁵⁰ En respuesta, los sindicalistas removidos por la asamblea denunciaron que un reducido grupo de delegados de seccionales de fábrica actuaba junto a los directivos de FOTIA para obstaculizar la ejecución de programas oficiales que pondrían en funcionamiento el ingenio.⁵¹ La posición de Martínez logró adjudicarse un triunfo al ser recibido por el presidente provisional José María Guido.⁵² El encuentro revelaba la red de relaciones tejidas por el sindicalista cuando se desempeñó como secretario general de FOTIA, al mismo tiempo que demostraba el respaldo del gobierno nacional a un dirigente sindical con perfil negociador. La reunión no alcanzó una definición concreta, pero puso en conocimiento del Ejecutivo la necesidad de regularizar el pago de jornales atrasados.

La reapertura de las disputas internas y la falta de perspectiva sobre el ingenio decidieron al entonces secretario general del sindicato de Santa Ana, Enrique Veliz, a presentar su renuncia. En su lugar asumió Emilio Ramón Cabrera, y en el mismo acto fueron cubiertos los cargos vacantes debido a la expulsión de los dirigentes que juntaron firmas a favor de Martínez.⁵³ La nueva conducción del sindicato alineó a la filial con el secretariado de FOTIA. En esa nueva correlación entre las partes en disputa, los

⁵⁰ *La Gaceta*, 1963. 14 de marzo.

⁵¹ Declaraban “hemos guardado silencio en actitud gremialista, pero terminada la paciencia estamos dispuestos a defender nuestro derecho y los de quienes confiaron en nosotros con su voto en elecciones limpias” (*La Gaceta*, 1963. 15 de marzo).

⁵² *La Gaceta*, 1963. 17 de marzo.

⁵³ Se presentaron en remplazo Lucas Sánchez, Tomás Toro y René Artazar (*La Gaceta*, 1963. 25 de marzo).

disidentes comenzaron a manifestarse por fuera del gremio. Una asamblea de trabajadores de surco y fábrica, estimada en 300 personas, intimó al sindicato a dejar sin efecto la expulsión de Martínez, al considerar que este había sido autorizado (por los avales) para realizar las gestiones ante los poderes públicos.⁵⁴ Seguidamente, una nueva asamblea, con amplia representatividad, que reunió a obreros de fábrica, temporarios y del surco reafirmó los cuestionamientos a los dirigentes sancionados.⁵⁵ Por su parte, Martínez renunció a disputar en el plano sindical, pero utilizó su ascendencia como referente local y su acercamiento al poder político para continuar actuando en la localidad en confrontación con la dirigencia de FOTIA.

La fractura local. Entre el apoyo y la confrontación a la reapertura limitada de la fábrica decretada por Gordillo Gómez

Los planes de la intervención provincial para la conversión del complejo azucarero fueron apoyados sistemáticamente por Martínez y los sindicalistas afines. También recibió el apoyo de la disidencia del sindicato de empleados. La oposición a la liquidación de la empresa provincial había permitido la confluencia de FOTIA y FEIA, pero esta unión resultó efímera cuando los empleados se acogieron a percibir las

⁵⁴ Refrendaron el acta Antonio Moreta, Juan Solorzano, Antonio Bustamante, José Carrizo, Pedro L. Flores, Pedro Ledesma, Antonio Silva, Mario Díaz, José Romero, Juan Vanno y otros. En el acta de la reunión, se consignó la exigencia de la regularización del pago de haberes, entendiendo que, con la venta del azúcar en *stock*, sería suficiente; también se declaró la necesidad de que se realizase la molienda ese año (*La Gaceta*, 1963, 14 de abril).

⁵⁵ Firman Manuel Medina, Benito Balverdi, Alejandro Funes, Juan Rodríguez, Roque Coronel, Raúl Cabrera, Ricardo Juárez, Tomás Toro y otros (1963. *La Gaceta*, 18 de abril).

indemnizaciones, rechazadas por los obreros por considerar que no se ajustaba a los términos de la ley.⁵⁶

En ese contexto, signado por los decretos de parcelamiento, el avance de las cesantías y la mayor presencia policial, el sindicato de obreros persistió en actitud de movilización y decidió retener los vagones de azúcar destinados a ser comercializados. Organizó una marcha por el pueblo que contó con numerosa participación de obreros, mujeres y niños, y culminó con un acto en la sede del sindicato donde pronunciaron discursos dirigentes locales y los directivos de FOTIA.⁵⁷ Simultáneamente, el nuevo secretario general del sindicato obrero local, Emilio Cabrera, junto a representantes de la CGT, consiguió reunirse con el ministro del Interior para tratar la problemática de la fábrica, sin alcanzar compromisos concretos.⁵⁸ En ese marco de indefiniciones, algunos trabajadores optaron por percibir las indemnizaciones y migrar.⁵⁹ Las cesantías generaron problemas de infraestructura. La población se quedó sin agua potable cuando el motor distribuidor dejó de tener personal para hacerlo funcionar.⁶⁰ El vaciamiento laboral de la empresa se reflejó en la reducida participación de trabajadores en las elecciones sindicales siguientes,

⁵⁶ *La Gaceta*, 1963. 23 de abril.

⁵⁷ Por los trabajadores habló el exdirigente Juan Núñez, y por las mujeres de Santa Ana habló Transito Lobo de Pacheco (*La Gaceta*, 1963. 24 de abril).

⁵⁸ *La Gaceta*, 1963. 26 de abril.

⁵⁹ A comienzos de mayo, la totalidad de empleados cesantes había cobrado las indemnizaciones, mientras que aproximadamente 500 obreros hicieron lo propio (*La Gaceta*, 1963. 2 de mayo). El informe elaborado por el CFI a fines de 1963 estimó sobre la base de encuestas un total de 997 emigrantes en el transcurso del año, de los cuales un 50,4 % eran mujeres y 49,6 %, varones. La cantidad fue sensiblemente mayor en las colonias en que los 685 migrantes superaban los dos tercios del total, frente a los 312 que se contabilizaron en el cuadro del ingenio. Se destacaban en el total de los migrantes las edades más “productivas”, siendo el mayor porcentaje (26 %) quienes tenían entre 20 y 25 años, seguido por el 21 % de la franja etaria de entre 15 y 19 años. Consejo Federal de Inversiones, *Estudio sobre el establecimiento Santa Ana, parte II*, diciembre de 1963, cap. 4 “El problema de las emigraciones”, s.n.

⁶⁰ *La Gaceta*, 1963. 26 de abril.

en las que triunfó la lista blanca, encabezada por Osvaldo Argentino Lobo.⁶¹

El nuevo dirigente de la filial obrera se pronunció por la unidad gremial intentando apaciguar las divisiones internas. En tal sentido, solicitó la apertura de una oficina para la inscripción a los lotes y mostró disposición para atender a quienes quisieran acceder al plan de colonización cuestionado por FOTIA. El cierre del plazo evidenció la escasa adhesión de los trabajadores de Santa Ana: de los 554 inscriptos, solo 162 pertenecían al territorio del ingenio, mientras que la mayoría eran personas ajenas a la localidad.⁶² La filial de obreros solicitó la prórroga de inscripción conjuntamente con el nuevo secretariado de FOTIA presidido por Arnoldo Aparicio. La reapertura del listado incrementó el número de trabajadores inscriptos, pero no cambió significativamente su correlación con los postulantes provenientes de otras áreas. Incluso fue superior el número de empleados que el de obreros. Probablemente, la postura de FEIA que ponderó positivamente la parcelación de tierras por considerarla una verdadera “reforma agraria” influyó en ese resultado.⁶³ La procedencia de los inscriptos revela que el programa de colonización resultó un fracaso en términos de respuesta a la crisis social causada por la desocupación. A largo plazo, generó un reducido sector de medianos propietarios que accedieron a lotes de más de 25 ha de las tierras del ingenio (los cañeros chicos poseían menos de 5 ha).

61 Se contabilizaron 405 votos a favor de la lista blanca, contra los 222 de la lista azul, en total menos de la mitad de sufragantes que las elecciones precedentes (*La Gaceta*, 1963. 7 de mayo).

62 Los exarrendatarios eran 31, 30 técnicos agrícolas, 126 agricultores e hijos, 205 personas de actividades diversas (*La Gaceta*, 1963. 14 de mayo).

63 *La Gaceta*, 1963. 21 de mayo. Las acepciones de “reforma agraria” vinculadas a la “modernización” o “racionalización” de la producción agraria fueron extendidas por programas internacionales para la región, y estuvieron alentadas en Tucumán por las entidades técnicas de la agricultura, así como por el gobierno radical de Lázaro Barbieri (Sánchez, 2021).

El gobierno conformó una comisión con representantes obreros, empleados y cañeros para constituir la sociedad anónima que asumiría la fábrica. Los representantes de FOTIA insistieron en la necesidad de buscar un esquema laboral que diera ocupación al mayor número de obreros. Con una postura diferente en relación con el empleo, UCIT aconsejaba formar cooperativas para las secciones vinculadas a los talleres y mantener el personal estrictamente necesario para el funcionamiento de la fábrica. Esa concepción se asemejaba a la defendida por FEIA, que presentó un modelo de estatuto similar a los del ingenio Nuñorco y Marapa, con la relevante diferencia de incorporar a sus trabajadores como accionistas.

Sin respaldo de FEIA y UCIT, la dirección de FOTIA profundizó sus cuestionamientos a los proyectos del interventor y reclamó su revisión. Argentino Lobo, del sindicato local, especificó que la nueva empresa mixta incorporaba solo a 240 trabajadores.⁶⁴ No obstante esta denuncia, una comisión que se adjudicó la representación de 400 obreros y empleados de Santa Ana apoyó la conformación de la sociedad anónima y criticó a los dirigentes gremiales por la lentitud de sus gestiones.⁶⁵ La formación se denominó Comisión Pro Recuperación del Ingenio Santa Ana, y entre sus referentes se destacaban dirigentes cercanos a Martínez, junto a otros opositores a la lista blanca. Como primera acción, presentaron un memorial al interventor en que declararon el apoyo al programa oficial de reformas, enumeraron los perjuicios generados por el cierre del ingenio y enfatizaron la necesidad de ponerlo en funcionamiento, aun con un plantel reducido.

⁶⁴ *La Gaceta*, 1963. 24 de mayo.

⁶⁵ Se encontraban entre estos exdirigentes de la lista azul y empleados. La delegación estaba formada por Ramón E. Fuenzalida, Ramón E. Carrizo, Juan J. Salles, Emilio Carrizo, Daniel Rodríguez, Alfredo Constantini, Tomás A. González. Pedro Gómez, Pastor Vera, Rodolfo Mena, Horacio del Pero, Ernesto Núñez, Salomón Diez y Elpidio Herrera (*La Gaceta*, 1963. 22 de junio).

En claro desafío a FOTIA, el gobierno convocó a los representantes de la Comisión Pro Recuperación a integrar las reuniones de los sectores involucrados en la formación de la sociedad, decisión que desplazaba al sindicato como representante natural de los trabajadores. FEIA apoyó esta determinación y brindó su aval para que la organización tuviera representación en el futuro consejo de la administración del ingenio, declaración que le otorgó mayor legitimidad a la comisión. Frente a ese avasallamiento, la federación endureció su posición y amenazó con la huelga azucarera para forzar la revisión total de las medidas adoptadas para Santa Ana. La reivindicación fue incorporada entre las condiciones que los sindicatos azucareros exigieron en la huelga para el inicio de la zafra, junto al aumento salarial y la extensión del convenio al personal de cañeros.⁶⁶

Sin atender los reclamos, el gobierno de Alberto Gordillo Gómez avanzó dando cumplimiento a lo decretado. En julio de 1963, se concretaron las primeras entregas de lotes de Santa Ana con resonantes actos en casa de gobierno, a los que asistieron las familias adjudicatarias y, entre estas, la del propio Carlos Balbino Martínez.⁶⁷ La Comisión Pro Recuperación participó en la entrega de boletos de compraventa. El acceso a la tierra en extensiones superiores a 20 ha afianzó a los parceleros como acérrimos defensores de Martínez y del gobierno para proteger sus posesiones. Por su parte, FOTIA y la CGT regional instaron al interventor a no innovar en Santa Ana y propusieron que el gobierno constitucional próximo a asumir dirimiera el asunto. Esa posición fue repudiada por la Comisión Pro Recuperación y la filial de FEIA, que cuestionaron la legitimidad de la dirigencia de FOTIA para incidir en el problema de Santa

⁶⁶ Los puntos mínimos fueron ratificados en el plenario de FOTIA (*La Gaceta*, 1963. 1 de junio). La huelga azucarera se inició el 4 de julio con tales reclamos y se levantó el 16 del mismo mes con el acuerdo de un 35 % de aumento, muy inferior al 70 % exigido y sin compromisos en las otras demandas (*La Gaceta*, 1963. 24 y 28 de mayo).

⁶⁷ *La Gaceta*, 1963. 19 de julio.

Ana.⁶⁸ Las acusaciones de FEIA se focalizaron en el asesor económico de la federación, Lisandro Caballero, a quien señalaban como agente de ideario castrista.⁶⁹

Al mes siguiente, el interventor anunció la constitución de la nueva sociedad anónima en la localidad, ante la presencia de funcionarios, representantes de las entidades involucradas, una concurrenada participación de vecinos y el cura párroco, quien dio la bienvenida a las autoridades.⁷⁰ En la jornada también participaron los nuevos adjudicatarios de parcelas, quienes comenzaban a organizarse para formar una asociación cooperativa. A pesar de la amplia convocatoria y del carácter de celebración comunitaria que se pretendió reflejar, la población se encontraba marcadamente dividida. Tal cual se explicitó cuando los trabajadores que participaban de la iniciativa oficial manifestaron su disconformidad con el aporte sindical de 100 pesos que se les descontaba de su salario.⁷¹

El gobierno saliente consiguió implantar una base de apoyo local para publicitar la adjudicación de parcelas y presentarlas como un plan modelo de transformación agraria. Con ese objetivo, se exhibió un cortometraje sobre el parcelamiento en el cine de la capital tucumana, con la participación de las entidades que se habían pronunciado favorablemente.⁷² Por su parte, la filial del sindicato denunciaba el desabastecimiento del hospital y la falta de personal por el atraso en

⁶⁸ Inculpaban a Benito Romano, Mario Leito y Lisandro Caballero de utilizar el problema de Santa Ana como plataforma electoral, haciendo asambleas con todos los sectores de Tucumán, estudiantes, gremialistas, políticos y profesionales, menos los afectados. Además se les imputaba haber perjudicado a los obreros en la adjudicación de parcelas, aconsejando en sus asambleas a rechazar el parcelamiento, para finalmente decirles que aceptasen las parcelas porque no tenían más remedio (*La Gaceta*, 1963. 14 de agosto).

⁶⁹ *La Gaceta*, 1963. 16 de agosto.

⁷⁰ *La Gaceta*, 1963. 19 de agosto.

⁷¹ *La Gaceta*, 1963. 20 de agosto.

⁷² *La Gaceta*, 1963. 17 de septiembre.

los sueldos.⁷³ Para resolver esa situación que contrariaba la imagen difundida, Gordillo Gómez autorizó a la administración de E.P.T. Santa Ana en liquidación a transferir el hospital al Ministerio de Salud Pública de la provincia.

El modelo de estatuto adoptado para formar la nueva empresa fue presentado por el asesor de la comisión Pro Recuperación de Santa Ana, Eduardo Sabaté Prebisch, con aportes del contador Alberto Cohen en representación de UCIT.⁷⁴ El esquema era similar al de los ingenios mixtos de la provincia, que tenían a sus proveedores cañeros como accionistas, pero innovó al asignar un porcentaje de acciones al personal y su correlativa representación en el directorio. A fines de septiembre, asumieron las autoridades de la fábrica, encabezada por Miguel Gutiérrez Cuadrado, en un nuevo acto oficial en la localidad.⁷⁵ Alberto Gordillo Gómez expuso la formación de la nueva sociedad como la conclusión de sus logros en la gestión. Sin embargo, dejaba una formación precaria y atravesada por conflictos locales.

⁷³ Los gastos del hospital eran elevados para la empresa en liquidación dado que contaba con personal técnico profesional y administrativos de diversa índole; estos eran: un médico director (sueldo de \$ 10.400); un jefe de sala (médico, \$ 8.000); un oficial superior (médico interno, \$ 10.000); oficial 6.º (administrador), religiosa \$7.600; un oficial 10 (subadministrador); religiosa (\$ 7.000); auxiliar mayor (3 parteras, \$ 6.860); un auxiliar administrativo (\$ 6.780); 12 auxiliar n.º 2 (9 enfermeros/as, 3 religiosas, 2 auxiliares de farmacia, religiosas y un chofer, \$ 6.720); personal de servicio: ayudante 1.º (10 en total, \$ 6450); compensación por residencia de médicos en zonas desfavorables de la campaña (3 en total, \$ 7.000) (*La Gaceta*, 12 de septiembre de 1963).

⁷⁴ *La Gaceta*, 1963. 19 de septiembre.

⁷⁵ *La Gaceta*, 1963. 29 de septiembre y 2 de octubre.

La formación de ISASA a cargo del ingenio y el embate de FOTIA en la esfera legislativa para derogar los decretos del interventor

La empresa a cargo de la explotación de la fábrica se denominó Ingenio Santa Ana Sociedad Anónima (ISASA). Bajo esta razón social, el principal accionista era el Estado provincial, y se incorporaba con una participación menor a obreros, empleados, adjudicatarios de las parcelas, cañeros de zonas aledañas y eventuales inversores. El capital social de \$ 370.000.000 estaba representado por 1000 acciones de \$ 370.000 cada una, distribuidas de la siguiente manera: 300.000 correspondían al Estado provincial, 30.000 a obreros y empleados permanentes de la empresa, 30.000 representaban a cañeros y parceleros, y los 10.000 restantes serían otorgadas a inversionistas. Cualquier modificación de la estructura debía ser autorizada por la asamblea extraordinaria de socios y no se permitía transferir las acciones en ningún caso.

Todo obrero o empleado de la empresa debía suscribir un mínimo de 15 acciones, lo que equivalía al 10 % de sus remuneraciones. Su potencial participación en los beneficios estaba sujeta a un sistema de puntajes que establecía la eficiencia del trabajador. Las acciones de cañeros quedaban habilitadas para los adjudicatarios de parcelas, y propietario o arrendatarios de fundos de la zona de influencia del ingenio, admitidos en función de la calidad de sus cultivos y la capacidad de molienda de la fábrica. La reglamentación determinaba imposiciones del gobierno a los factores destinadas a promover la productividad, al ligar los beneficios a la eficiencia laboral y la admisión de agricultores a sus rendimientos. Probablemente, la introducción de esta normativa obedecía a la controversia sobre la productividad agraria y fabril sindicada como la principal causa del declive de la industria azucarera tucumana.

El directorio estaba compuesto por 8 miembros titulares y 5 suplentes. Al Estado provincial le correspondía

designar 4 titulares, con su correspondiente suplente; los accionistas obreros y empleados debían designar dos titulares, y dos suplentes; igual cantidad se adjudicaba a los cañeros. El presidente y el vicepresidente serían elegidos entre los miembros del directorio pertenecientes a la representación estatal. El decreto transfirió como aporte de capital del Estado provincial las instalaciones de la fábrica y parte del territorio aledaño que comprendía un total de 274 ha. No se incorporaban las 20.000 ha restantes que quedaban en propiedad de la provincia, a excepción de las 7.000 ha adjudicadas. En la órbita del Estado, quedaron la escuela, el hospital y los clubes, en tanto las construcciones correspondientes al aserradero debían arrendarse a una sociedad de extrabajadores del ingenio a conformar.

Contra esa formación de ISASA que incorporaba escasos trabajadores, el sindicato local formó la Comisión Pro Ocupación Plena, designación que aludía al personal cesante del ingenio no convocado por la nueva empresa e incluía a sectores no sindicalizados, mujeres, agrupaciones juveniles, trabajadores agrarios y pequeños comerciantes afectados por la medida. Exigió nuevas fuentes de trabajo para los desocupados y denunció que los obreros temporarios no habían percibido las indemnizaciones de E.P.T Santa Ana. Asimismo, señaló que entre los marginados del proyecto había personal de más de 15 años de servicios que residían en el ingenio.⁷⁶

La asunción de Lázaro Barbieri, representante de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), como gobernador constitucional en octubre de 1963 abrió expectativas para los reclamos sindicales, ya que en la campaña electoral se había pronunciado contra las reformas realizadas por la intervención.⁷⁷ Dirigentes de FOTIA y el sindicato de Santa

⁷⁶ *La Gaceta*, 1963. 10 de octubre.

⁷⁷ Su acceso a la gobernación se dio sin mayoría de votos, por una controvertida decisión del Colegio Electoral. El mayor porcentaje lo obtuvo el voto en blanco, manifestación del peronismo proscripto. El segundo lugar lo ocupó UCRI, que presentó como candidato a Celestino Gelsi. Pero la cantidad de

Ana solicitaron la derogación del decreto de colonización de tierras y exigieron la constitución de la nueva sociedad anónima. El nuevo escenario volvió a convulsionar el ámbito local y las declaraciones de FOTIA generaron el repudio de los parceleros y los trabajadores accionistas. Estos últimos esperaban el inicio de los trabajos de reparación de la fábrica y la puesta en funcionamiento de una planta de papel de bagazo, según lo acordado.⁷⁸ Por su parte, la Comisión Pro Plena Ocupación denunció las amenazas de desalojo por la fuerza pública a trabajadores con largos años de servicio.⁷⁹ Exhortó a la población a no dejarse engañar y a esperar el resultado de las gestiones de FOTIA y la CGT.

Una vez en ejercicio, el gobernador Lázaro Barbieri explicó que la derogación o revisión de los decretos no era facultad del Poder Ejecutivo, sino del Legislativo, por lo que estaba inhibido a intervenir directamente en el tema.⁸⁰ Como compensación, anunció la elaboración de un nuevo plan de colonización en las 20.000 ha que disponía el gobierno en la zona (en mayoría área de bosques). FOTIA replicó que el gobernador, en condición de colegislador, tenía potestad para determinar sobre el asunto. No obstante, cifró sus expectativas en las cámaras legislativas. A fines de diciembre de 1963, el sindicato organizó un masivo acto en Santa Ana, donde tomaron la palabra el presidente del Senado y legisladores, representantes de la Comisión Pro Ocupación Plena, dirigentes de otros sindicatos azucareros, el titular de FOTIA y de la CGT regional.⁸¹

Para licuar las consecuencias de estas manifestaciones, los directivos de ISASA intentaban exhibir los efectos

votos y apoyos extrapartidarios no le alcanzaron para conformar una mayoría en el Colegio Electoral, y los electores acabaron por seleccionar al candidato de la UCRP como gobernador. Lázaro Barbieri había obtenido apenas un 10 % de los votos en la provincia, lo que marcó la falta de apoyo de su gobierno (Lichtmajer, 2017: 180).

⁷⁸ *La Gaceta*, 1963. 4 de noviembre.

⁷⁹ *La Gaceta*, 1963. 13 de noviembre.

⁸⁰ *La Gaceta*, 1963. 18 de diciembre.

⁸¹ *La Gaceta*, 1963. 24 de diciembre.

benéficos de la creación de la nueva empresa para los habitantes de la localidad. Impulsaron las actividades deportivas en los clubes que habían cesado con el cierre del ingenio, para lo cual contaron con la activa participación del cura párroco. Se pretendía mostrar un supuesto renacer de las instituciones sociales y recuperar un sentido armónico de la vida comunitaria, imagen distante de las tensiones existentes en la localidad. A pesar de los escasos fondos disponibles, la empresa se propuso dar señales de actividad e inició las reparaciones de la fábrica con un plantel reducido de 127 operarios.

Simultáneamente a las mencionadas jornadas comunitarias y el inicio de las labores fabriles, se agudizó el enfrentamiento entre los distintos segmentos de trabajadores. El personal de la sociedad anónima constituyó a comienzos de 1964 un nuevo sindicato por fuera de la federación, para defender sus intereses y manejar su propia caja previsional. En su dirección se encontraban dirigentes de la Comisión Pro Recuperación y sindicalistas opositores a lista blanca.⁸² La nueva entidad gremial anunció que el directorio de ISA-SA la reconocería como única autorizada para representar al personal y que su principal programa de acción se fundaba en el afianzamiento de la sociedad mixta y la molienda de 1964. Asimismo, adelantaron su propósito de formar una nueva federación azucarera.

La filial de FOTIA repudió la formación de este sindicato. Acusó de “traición” a quienes defendían la sociedad que había mejorado la situación de solo 147 trabajadores del ingenio, mientras que el verdadero sindicato continuaba luchando por los 1.635 obreros desocupados. La Comisión Pro Recuperación del ingenio relativizaba la desocupación en Santa Ana denunciada por FOTIA, poniéndola

⁸² La comisión directiva estaba formada por Ángel Carrizo (presidente), Tomás A. González, Juan J. Salles (H), José F. Carrizo, Carlos M. Juárez, José Luque, René Gutiérrez, Domingo Soria, Alfredo Constantini, Fortunato de J. Lorca, Cesar Olea, Bernabé Arce y otros, siendo Roberto Ferreyra y Pastor Vera sus fiscalizadores (*La Gaceta*, 1964. 4 de enero).

en relación con los despidos efectuados en otros ingenios, y sostenía que el pago de indemnizaciones había distendido la urgencia del problema. Por su parte, el sindicato no federado de Santa Ana solicitó la personería gremial al Ministerio de Trabajo con el argumento de que la filial de FOTIA en la localidad carecía de representatividad.⁸³

Los directivos de FOTIA, junto a la regional de la CGT, se reunieron con los presidentes de ambas cámaras legislativas y el gobernador para sellar un compromiso orientado a revisar los decretos de la intervención. Pero el acuerdo se dilató por la indefinición del gobernador, mientras que la situación social y económica de los desocupados tensionaba el ámbito local. El dirigente del sindicato de Santa Ana, Lucas Sánchez, describió a la prensa la precariedad de la población desempleada y auguraba reacciones impredecibles.⁸⁴ El gobierno reforzó la comisaría local con la presencia de 60 policías para prevenir protestas. En contraposición, el sindicato no federado anunció la reincorporación de 77 obreros debida a sus negociaciones con los directivos de ISASA.⁸⁵ A su vez, los parceleros entregaron un memorial a Barbieri en el que le informaban sobre el desarrollo de sus cultivos y las contrataciones de trabajadores. En función de lo actuado, solicitaron mantener el parcelamiento.

En el marco de esas disputas, Barbieri formó una comisión integrada por las partes interesadas para revisar las medidas adoptadas en el ingenio Santa Ana.⁸⁶ Asimismo, anunció un plan integral para las 20.000 ha en poder de la provincia que serían explotadas por cooperativas, formadas con el financiamiento del gobierno nacional. La novedad fue recibida con entusiasmo con FOTIA, mientras que los directivos de ISASA denunciaron que la solución de cooperativa evocaba a formaciones de tipo marxista de estructura

⁸³ *La Gaceta*, 1964. 8 de enero.

⁸⁴ *La Gaceta*, 1964. 14 de enero.

⁸⁵ *La Gaceta*, 1964. 15 de enero.

⁸⁶ *La Gaceta*, 1964. 16 de enero.

totalitaria.⁸⁷ FEIA declaró que no iba a participar en la comisión por no acordar en la necesidad de revisión, aun siendo público el reclamo de ex empleados del ingenio para ser incorporados en la sociedad.⁸⁸ También FET recomendó no alterar lo dispuesto. Las posturas de estos actores dejaban en soledad a FOTIA, que debía lidiar con la situación de los desocupados. En ese contexto, la federación resolvió en una reunión plenaria romper relaciones con FEIA y cuestionó ampliamente al directorio de ISASA.

El plan para Santa Ana fue publicitado por el gobernador el 20 de enero de 1964. Contemplaba la cooperativización de la fábrica, la destilería y los talleres. En el estadio agrario, se formarían tantas cooperativas como colonias existentes. Las demás actividades contarían con sociedades específicas: aserradero y carpintería; taller metalúrgico y mecánico; transporte; construcción; y granja. Esta compleja formación que desmembraba el complejo agroindustrial en distintas sociedades cooperativas requería tiempo para ser implementada, de modo que, en función de asegurar la molienda de 1964, el gobierno provincial dispuso que ISASA gestionaría la próxima zafra. Los dirigentes fotianos se mostraron sorprendidos por la contradicción de los anuncios. Por una parte, se pronunciaba a favor de la organización de las respectivas cooperativas por sector de trabajo, pero en los hechos mantenía la continuidad de ISASA. No obstante, la dirigencia sindical redobló sus gestiones en la Legislatura para impulsar la caducidad de la sociedad mixta en el ingenio Santa Ana.

Los adjudicatarios de parcelas erigieron como representante a Carlos Balbino Martínez, quien fue recibido por el presidente Arturo Illia.⁸⁹ En el encuentro le entregó un memorial que reseñaba su versión sobre el conflicto del ingenio Santa Ana. Nuevamente, Martínez hacía uso de sus

⁸⁷ *La Gaceta*, 1964. 17 de enero.

⁸⁸ *La Gaceta*, 1964. 18 de enero.

⁸⁹ *La Gaceta*, 1964. 25 de enero.

influencias con relativo éxito, pero esta vez sin aspirar a una representatividad sindical. Su estrategia de oposición a FOTIA había cambiado. Como referente local, solicitaba el acceso a créditos para la cooperativa de parceleros y la apertura de nuevas fuentes de trabajo. Por su parte, ISASA, en un nuevo intento de legitimar su posición frente a la población, transfirió el aserradero a una cooperativa de exoperarios.⁹⁰ La entrega se realizó a través de un acto celebratorio, que incluía un asado criollo para directivos, parceleros y miembros del sindicato no federado. En esa jornada se buscó nuevamente recrear una ficción comunitaria quizás apelando a una memoria vecinal, pero en momentos en que la localidad se encontraba profundamente castigada por la desocupación.

Ante la dilación de la vía legislativa, FOTIA impulsó la ocupación de la fábrica por parte de los desempleados.⁹¹ En respuesta, ISASA presentó la denuncia al juez de instrucción, en tanto los parceleros y miembros del sindicato no federado exigieron la concreción del desalojo.⁹² La toma de las instalaciones exacerbó la conflictividad entre los intereses gestados en torno a la fábrica. Desde afuera se cortaron los servicios eléctricos. Un grupo denominado como “verdaderos trabajadores” denunció que los exobreros quemaban sus ropas de trabajo. Estos últimos, representados por Lucas Sánchez, reiteraron su reclamo de una solución integral para Santa Ana. Afirmaban que los ocupantes de la fábrica soportaban sin contestar diferentes provocaciones: pedradas continuas y, lo más intolerable, castigos a los niños que intentaban acercar comida al establecimiento. Exigían, además, la suspensión de los carnavales organizados por ISASA, por tratarse de una “fiesta de privilegio” frente a las carencias que atravesaba la mayor parte de la población.

⁹⁰ *La Gaceta*, 1964. 3 de febrero.

⁹¹ *La Gaceta*, 1964. 7 de febrero.

⁹² *La Gaceta*, 1964. 8 de febrero.

FOTIA y la CGT prestaron total apoyo a la medida de fuerza e intentaron mediar en diferentes instancias para arribar a soluciones. Los dirigentes azucareros Arnoldo Aparicio y Rodolfo Zelarayán ingresaron en el establecimiento acompañados del secretario del gobernador para dialogar con los ocupantes. Desde la CGT nacional, Mario Leito se entrevistó con el secretario de Previsión Social para transmitirle la urgencia de una resolución. En favor de la toma, se constituyó en el local de FOTIA de la capital provincial una comisión de defensa de Santa Ana, con delegados de CGT, la Federación Universitaria del Norte y otros sindicatos. Los respaldos también fueron amplios en el marco de organizaciones políticas nacionales, como el semanario *Compañero*, que prestó una amplia cobertura al problema de Santa Ana.⁹³

La toma fue breve, pero tuvo momentos de elevada tensión y violencia entre las partes. Luego de cuatro días, se entregó las instalaciones al jefe de la policía, justo antes de que se comunicara la resolución jurídica a favor del recurso de amparo interpuesto por ISASA.⁹⁴ Los directivos de FOTIA, regresados de las negociaciones en Buenos Aires, anunciaron el compromiso del gobierno nacional de financiar una solución integral al problema de empleo con una suma de \$ 100.000.000. En tanto, los parceleros, afiliados del sindicato libre y la filial de FEIA realizaron una asamblea que resolvió defender la estructura vigente. El sindicato libre repudió la presencia de comunistas en la localidad, y algunos de sus referentes constituyeron un “frente

⁹³ El semanario *Compañero* comenzó a publicarse en junio de 1963, con una tirada de 30.000 ejemplares que se distribuía en todo el país. Su director Mario Valotta fue afín a la izquierda revolucionaria y adhirió al peronismo en su lucha por el retorno del líder exiliado. En las páginas de la prensa, se daban a conocer los lineamientos políticos del Movimiento Revolucionario Peronista (MRP). Valotta viajó a Tucumán para cubrir la noticia y participó en las asambleas de trabajadores de Santa Ana (*Compañero*, n.º 35-37, febrero-marzo de 1964).

⁹⁴ *La Gaceta*, 1963. 11 de febrero.

anticomunista” en defensa de la concepción “occidentalista y cristiana”.⁹⁵

En el ámbito legislativo, el presidente de la Cámara de Diputados solicitó al gobernador la pronta remisión del anteproyecto. Por su parte, los diputados de la UCRI presentaron un proyecto que ratificaba lo actuado por el gobierno interventor y habilitaba una nueva área para la colonización.⁹⁶ En contraposición, el gobernador hizo pública su propuesta legislativa que dejaría sin efecto los decretos.⁹⁷ En su presentación a la prensa, reconoció que las opiniones de la población se encontraban divididas, pero los artículos del proyecto de ley se inclinaban a respaldar el pedido de FOTIA, en tanto anunciaba la expropiación de los terrenos parcelados y la totalidad de las acciones de ISASA. En consecuencia, el foco del conflicto se concentró en la Legislatura.

La delegación de parceleros y los trabajadores de ISASA se reunieron con los diputados provinciales y con el subsecretario de Hacienda de la Nación para rechazar la propuesta del gobernador. En FOTIA se decidió en plenario la movilización en apoyo al proyecto de Barbieri y se formó una comisión encargada de definir las medidas a adoptar.⁹⁸ El asunto se debía tratar en la Cámara de Diputados el 28 de febrero de 1964. Ese día los parceleros se reunieron frente a la Legislatura. FOTIA convocó a una gran marcha de solidaridad con los trabajadores de Santa Ana que debía culminar en la plaza Independencia, principal paseo de la ciudad. En el acto participaron como oradores el secretario general de la CGT José Alonso, el delegado de la CGT Regional Andrés Addur, y Atilio Santillán en representación de la comisión de movilización de FOTIA.⁹⁹ La concurrencia, esti-

⁹⁵ Presidieron la entidad Valentín Lahorca y su vice Federico Villafaña, el secretario Raúl Arnaldo Medina y los vocales Eduardo Rodríguez, Alfredo Rodríguez y Juan Núñez (*La Gaceta*, 1964. 11 de febrero).

⁹⁶ *La Gaceta*, 1964. 15 de febrero.

⁹⁷ *La Gaceta*, 1964. 18 de febrero.

⁹⁸ La comisión quedó presidida por Atilio Santillán del ingenio Bella Vista y Rafael de Santis del ingenio Mercedes (*La Gaceta*, 1964. 20 de febrero).

⁹⁹ El respaldo de la CGT nacional a los reclamos de Santa Ana se dio a partir de que la central sindical consolidó su conducción peronista y comenzó un ciclo de protes-

mada en 1.500 personas, se movilizó en 15 camiones, 4 ómnibus y otros vehículos que recorrieron las zonas céntricas de las ciudades del interior antes de llegar a la capital.¹⁰⁰ El problema de Santa Ana alcanzó una amplia repercusión en la prensa, pero en la Legislatura se adujo el “clima de agitación” para suspender la sesión. La prórroga fue aprovechada por los parceleros, obreros y empleados de ISASA para presentar un memorial al presidente Illia y para ocupar la fábrica exigiendo la continuidad de la empresa. Finalmente, en sesión extraordinaria los diputados discutieron el proyecto de ley y ratificaron por mayoría los decretos de la intervención.



Asamblea en el sindicato del ingenio Santa Ana durante la ocupación de la fábrica, febrero de 1964. Fuente: semanario *Compañero*, n°35, 25 de febrero 1964.

tas contra las políticas económicas del gobierno de Guido. Estas medidas se alinearon con los pedidos del Fondo Monetario Internacional, que tendieron a restringir la producción industrial y reducir el mercado interno, con el consecuente incremento del desempleo, y el espiral inflacionario. La primera respuesta sindical fue un plan de lucha que concluyó en mayo de 1963 con una semana de protestas y una huelga general de 24 horas. Frente al gobierno de Illia, en nuevo intento de avanzar con las reivindicaciones obreras, se realizó una segunda etapa del plan de lucha que consistió en la ocupación de fábricas entre junio y julio de 1964 (James, 2005: 222-224).

¹⁰⁰ *La Gaceta*, 1964. 28 de febrero.

Resuelta esa instancia legislativa, los desocupados del ingenio comenzaron a manifestarse con violencia. El párroco de Santa Ana, quien se mostraba públicamente cercano al personal y a los directivos de ISASA, fue duramente golpeado por uno de los trabajadores despedidos.¹⁰¹ La nota de desagravio al sacerdote fue firmada por numerosos y renombrados vecinos que ensalzaron la unidad local en torno a la fe católica.¹⁰² Sin embargo, el enfrentamiento entre ocupados y desocupados se manifestaba abiertamente: el local del sindicato filial de FOTIA fue atacado por los obreros de ISASA, mientras los desocupados realizaban una manifestación en la localidad en la que atacaron a piedrazos las viviendas de los dirigentes no federados.¹⁰³

En ese contexto, las expectativas de FOTIA se concentraron en el Senado. En una reunión plenaria, se declaró el estado de beligerancia contra toda organización que impidiera una solución integral para Santa Ana. El debate legislativo se realizó con la presencia en las inmediaciones de trabajadores desocupados, de FOTIA y la CGT, y también de representantes de los parceleros. El proyecto suscrito por Agustín M. Dip (Democracia Cristiana), Ramón A. Nazar (ex-UCRI) y Felipe A. Ochoa (Justicia Social), que alcanzó la mayoría, derogaba la legislación de Gordillo Gómez e introducía reformas sustanciales al sancionado en Diputados.¹⁰⁴ Finalmente, el 18 de junio de 1964, se aprobó la transferencia de parte de las acciones del Estado a nuevos accionistas y se declararon de utilidad pública (plausible de expropiación) las tierras del parcelamiento.¹⁰⁵ Como resarcimiento, se les permitiría la tenencia precaria a los parceleros hasta la siguiente cosecha, luego de la cual

¹⁰¹ *La Gaceta*, 1964. 8 de marzo.

¹⁰² Carta dirigida al obispo Juan Carlos Ferro, enviada el 12 de marzo de 1964. Archivo del Obispado de la Santísima Concepción. Carpeta de notas y comunicaciones 1953-1979, n.º 102/64.

¹⁰³ *La Gaceta*, 1964. 16 de abril.

¹⁰⁴ *La Gaceta*, 1964. 3 de abril.

¹⁰⁵ Ley n.º 3158. Sancionada el 25 de junio de 1964.

las propiedades serían transferidas a cooperativas agrícolas. Estas debían ser coordinadas por el Consejo Agrario de Santa Ana, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Esa institución, encargada de implementar las modificaciones impuestas por la ley, estaría integrada por delegados de las cooperativas, en tanto su presidente sería designado por el Ejecutivo. Durante los primeros dos años, las resoluciones del Consejo serían obligatorias para los cooperados, y el incumplimiento de las directivas se castigaría con la nulidad de la adjudicación de las tierras.

La nueva legislación se implementó con demoras y solo parcialmente, por lo que en los hechos la fábrica continuó trabajando bajo la gestión de ISASA. Se realizaron mejoras en las instalaciones eléctricas de la localidad para aumentar la potencia de la planta y se firmaron nuevos contratos para el abastecimiento de materia prima.¹⁰⁶ El gobernador solicitó créditos al gobierno nacional para garantizar el funcionamiento de los ingenios oficiales y financiar programas de colonización agraria. En la primera quincena de julio de 1964, el ingenio volvió a moler y anunció un calendario de pago a los cañeros.¹⁰⁷

Los parceleros resistieron la ley que facultaba la expropiación de sus tierras y realizaron gestiones ante ministros y legisladores nacionales.¹⁰⁸ En septiembre el sector referenciado en Carlos Balbino Martínez se reunió con el gobernador para advertirle que no permitirían ningún sistema colectivista en Santa Ana y defenderían a ultranza el parcelamiento. Para tranquilizarlos, Barbieri les confirmó que no se contemplaba la realización de desalojos. Por su parte, el sector de trabajadores ligado a FOTIA consiguió el compromiso del gobierno para modificar la modalidad de explotación del ingenio con el objetivo de absorber la

¹⁰⁶ Se instaló una nueva línea eléctrica y dos transformadores en la sala de máquinas (*La Gaceta*, 1964. 28 de junio).

¹⁰⁷ El ingenio contaba con doce cargaderos en localidades cercanas, además de recibir la caña en canchón (*La Gaceta*, 1964. 27 de julio).

¹⁰⁸ *La Gaceta*, 1964. 28 de junio y 13 de septiembre.

mayor cantidad de mano de obra posible. Aun así, las promesas siguieron siendo tan ambiguas como las definiciones. Otro gran desafío fue conseguir un desempeño económico aceptable del ingenio que permitiera el desarrollo de la nueva sociedad anónima.

El desempeño de ISASA. Continuidad de la molienda y persistencia de las disposiciones fundacionales hasta la clausura definitiva del ingenio

Concluida la zafra de 1964, el ingenio Santa Ana había conseguido realizar una modesta molienda en la que procesó 127.325 toneladas de caña proveniente en su totalidad de productores independientes (85.463 t de parceleros y 41.946 t de cañeros de la zona), con un rendimiento fabril de 6,8 %, expresado en 8.671 toneladas de azúcar.¹⁰⁹ El desempeño anual no fue insatisfactorio teniendo en cuenta las condiciones en que se llevó adelante, pero finalizada la cosecha emergieron nuevamente las dificultades para financiar el reacondicionamiento de la fábrica. Según la memoria anual y el balance de ISASA, las complicaciones financieras provenían principalmente de la escasa producción comercializada, ya que la mayor parte se encontraba retenida en espera de la declaración de un precio oficial acorde a los costos de producción.¹¹⁰ El balance cerrado en abril de 1965 registró apenas un 5,64 % de azúcares colocados y un 37,96 % de alcoholes. El *stock* alcanzaba

¹⁰⁹ En otra escala de producción, ingenios de gran porte como el Concepción (54.224 t), Bella Vista (20.512 t) o San Pablo (35.829 t) obtuvieron ese año rendimientos fabriles de 6,7 %, 6,9 % y 8,9 %, respectivamente (*La Industria Azucarera*, 1965. Enero).

¹¹⁰ *Memoria y balance general de ISASA*, correspondiente al ejercicio n.º 2, terminado el 30 de abril de 1965. Presentado en asamblea general ordinaria el 28 de agosto de 1965.

las 117.085 bolsas, habiendo vendido solamente 7.042.¹¹¹ En tal situación, el crédito que posibilitó iniciar las labores en 1965 fue otorgado por el gobernador. Se trataba de 45 millones derivados de las partidas nacionales obtenidas para ingenios oficiales.¹¹²



Protesta obrera en reclamo de financiamiento para la zafra de 1965.
Fuente: Archivo del diario *La Gaceta* (Tucumán).

¹¹¹ Además del contexto desfavorable de sobreproducción que obstaculizó la comercialización, los ingenios tucumanos esperaban que la Secretaría de Comercio dictase el precio oficial del azúcar para entregar el producto, anuncio anual que se realizó cada vez más tardíamente durante la década. El hecho fue consignado por los directivos de ISASA en la memoria: “Esta política de respetar el precio oficial sin participar en la distorsión del precio existente en el mercado, nos ha obligado a mantener un alto porcentaje del stock sin vender [...]” (*Memoria y Balance...*, 1965: 5). Como agravante, en agosto de 1964, las condiciones del mercado se vieron alteradas porque el ingenio Ledesma (Jujuy) declaró la venta de la totalidad de su producción a un precio inferior al que se esperaba como oficial, situación que afectó directamente a los industriales y productores agrarios tucumanos (Bravo, 2017: 194).

¹¹² *La Gaceta*, 1965. 15 de enero.

Los obstáculos financieros para dar regularidad al funcionamiento del ingenio impulsaron al directorio a peticionar el pase de las acciones del Estado a la Caja Popular de Ahorro de la Provincia, considerando que de ese modo se facilitarían el acceso a los créditos. El traspaso solicitado fue aprobado por el gobernador a fines de enero de 1965. Esta disposición conllevó, entre otras medidas, un nuevo cambio de directorio. El sindicato libre felicitó la resolución oficial, pero la representación obrera del directorio, a cargo de José Antonio Juárez, criticó la falta de estabilidad en la administración al mencionar los cinco presidentes que estuvieron a cargo desde su creación.¹¹³

El apoyo del gobernador fue decisivo para dar continuidad a la molienda de la fábrica. También, debido a su impulso, se iniciaron las tareas de desmonte en un área de 100 ha que ocupó a 220 trabajadores agrupados en 22 cuadrillas.¹¹⁴ En vísperas de las elecciones legislativas, Lázaro Barbieri publicitó su actuación en Santa Ana como una conquista de su gestión.¹¹⁵ Pretendía revertir en esa instancia electoral la debilidad de su gobierno incrementando su sustento legislativo; en parte, fue su inestabilidad política lo que impedía adoptar una posición contraria a los gremios o avanzar de manera decisiva implementando las reformas ya establecidas por la ley.¹¹⁶ Por lo que sus intervenciones

¹¹³ *La Gaceta*, 1965. 5 de marzo.

¹¹⁴ *La Gaceta*, 1965. 22 de febrero.

¹¹⁵ La campaña a favor de la UCRP proclamaba en la prensa: “Santa Ana. Barbieri aseguró la molienda 1964 y también lo hará en 1965. Aseguró la paz social, consolide las conquistas. ¡Dele cámara a Barbieri!” (*La Gaceta*, 1965. 2 de marzo).

¹¹⁶ Los resultados electorales dieron el primer lugar a Acción Provinciana, lista encabezada por el exgobernador peronista Fernando Riera y el dirigente fotiano Benito Romano como candidatos al Congreso nacional, que permitió el acceso de dirigentes azucareros en las cámaras provinciales. En segundo lugar, pero diez puntos más abajo, se situó la UCRP (Lichtmajer, 2017). Por lo que el gobernador incrementó el número de legisladores de su partido, pero continuó con minoría parlamentaria, ejerciendo su mandato con gran inestabilidad en momentos de suma tensión social y sin poder evitar que avanzaran los intentos de juicio político presentados en la legislatura

persistieron en la intención de conciliar las partes. Respecto de las parcelas ofrecidas, declaró que la situación se respetaría si los fundos otorgados no excedían una superficie de 25 ha.¹¹⁷ Bajo esas coordenadas, Balbino Martínez aceptó firmar la desposesión con el compromiso de no ser desalojados y permanecer como tenedores exclusivos por tiempo indeterminado. En sus asambleas, los parceleros organizados como cooperativa agropecuaria buscaban impedir cualquier intento de expropiación.¹¹⁸ Por su parte, el dirigente del sindicato local, Emilio Cabrera, aclaraba que el problema de desocupación se había solucionado solo a medias, que la demora en el reparcelamiento causaba intranquilidad entre los obreros, y denunció que no se habían concretado las reformas del estatuto de la sociedad para adecuarlo a la ley e incorporar nuevos accionistas obreros.¹¹⁹

Según la legislación, el Consejo Agrario de Santa Ana debía coordinar la cosecha y la entrega de caña de los parceleros a ISASA. Conseguir los acuerdos y fondos necesarios para realizar la cosecha suscitó nuevas dificultades. No obstante, la zafra se inició oficialmente el 17 de junio con una ceremonia en el ingenio presidido por el gobernador. El Consejo Agrario firmó posteriormente un convenio con los parceleros para levantar la caña, bajo el cual el Estado provincial se convertía en empleador de los trabajadores de las parcelas, cuyo personal sería designado en un 80 % por el Consejo Agrario y en un 20 % por los parceleros. Estos últimos recibirían un pago como locatarios de obra con responsabilidad en la “dirección, control y vigilancia” de los trabajos. Sin embargo, el inicio de estos trabajos se demoró.

La falta de empleo entre los residentes de las colonias por el retraso de la cosecha en las parcelas fue el detonante de reclamos y nuevas divisiones en el sindicato local.

(Provincia de Tucumán, *Diario de Sesiones Cámara de Diputados, período legislativo 1965-1966*, pp. 676, 720, 783, 1368 y 1376).

¹¹⁷ *La Gaceta*, 1965. 4 de marzo.

¹¹⁸ *La Gaceta*, 1965. 25 y 29 de abril.

¹¹⁹ *La Gaceta*, 1965. 17 y 18 de mayo.

Esta vez la oposición estuvo encabezada por el exdiputado Carlos Américo Cabrera, reincorporado como obrero de fábrica. Con el aval de trabajadores de algunas colonias, solicitó a FOTIA la intervención de la filial y la renuncia a las autoridades del sindicato “por inoperancia y falta de información”, pedido que les costó la expulsión del sindicato.¹²⁰ A su vez, los atrasos en el pago de salarios sumaron tensiones al interior de la empresa. Sin que se modificara el estatuto, las elecciones realizadas por sector en la asamblea de accionistas marcaron el ascenso al Consejo Directivo de ISASA de referentes enfrentados a FOTIA; entre estos, la figura más saliente fue Carlos Balbino Martínez, quien asumió en representación de los parceleros.¹²¹ El recambio otorgó mayor legitimidad al reclamo de ese sector, que continuó resistiéndose a la desposesión de sus parcelas.

Los conflictos se manifestaron también en el Consejo Agrario de Santa Ana, encargado de remitir los planes para reordenar el parcelamiento. A fines de octubre, Lázaro Barbieri cuestionó la inactividad de ese órgano y asumió personalmente su conducción. El Consejo Agrario normalizó la representación de los sectores con los delegados correspondientes y estableció el plazo de una semana para que estos se pronunciaran sobre los decretos de parcelamiento. Pero la presión no consiguió forzar un acuerdo; por el contrario, en una de las reuniones del Consejo, fue agredido el representante obrero.¹²² El consenso expresado en un acta firmada entre FOTIA y los parceleros autorizó al arrendamiento transitorio, el reparcelamiento de superficies superiores a 25 ha y el amojonamiento de la nueva estructura de colonización, con la realización de una mensura a cargo

¹²⁰ *La Gaceta*, 1965. 10 de junio.

¹²¹ Por los obreros se erigió a Ramón Angel Carrizo, quien presidía el sindicato no federado; por los empleados, a Luis Delfín Arnedo; síndico titular por el sector obrero Reinaldo Ayusa; síndico parte de empleados Raúl A. Medina; director por el sector cañero a Antonio Poblador (*La Gaceta*, 1965. 16 de agosto).

¹²² *La Gaceta*, 1965. 9 de noviembre.

de Catastro.¹²³ A su vez, Barbieri anunció un nuevo crédito para ISASA y la renovación de los créditos provinciales para parceleros.

Los últimos meses de 1965 fueron caóticos en Tucumán. Al *stock* azucarero de la zafra anterior que había complicado las finanzas de los ingenios, se sumaba un nuevo año de sobreproducción. Los rendimientos productivos fueron particularmente altos y volvieron a abarrotar el mercado, lo que imposibilitó que algunas empresas cumplieran sus obligaciones financieras. El ingenio Santa Ana obtuvo un rendimiento anual de 7,6 %, mientras que el promedio provincial era de 8,6 %, y su producción de azúcares alcanzó las 20 mil toneladas, superando ampliamente las 8 mil de la zafra anterior.

El problema, al igual que en la mayoría de los ingenios, residió nuevamente en la colocación del producto. El Directorio de ISASA realizó gestiones con el Banco de la Provincia para la obtención de un crédito con prenda a fin de abonar los jornales y la materia prima adeudada. La entidad adelantó fondos para el pago de obreros transitorios, pero aclaró que los créditos restantes quedaban sujetos a la negociación con el Banco Central.¹²⁴ La expectativa de resolver la situación se diluyó cuando la entidad se negó a adjudicar el crédito por no contar ISASA con la escritura traslativa de dominio de los bienes aportados por la provincia, que debían quedar como refuerzo de hipoteca.¹²⁵

En marzo de 1966, el ingenio fue nuevamente ocupado por atrasos salariales.¹²⁶ FOTIA y la filial local apoyaron la medida impulsada especialmente por los trabajadores agrarios y los adjudicatarios de parcelas a los que se adeudaba parte de la caña entregada. El sindicato demandaba la reforma del estatuto de la sociedad para que se aumentara el

¹²³ *La Gaceta*, 1965. 16 de noviembre.

¹²⁴ *La Gaceta*, 1965. 21 de diciembre.

¹²⁵ *La Gaceta*, 1965. 26 de diciembre.

¹²⁶ *La Gaceta*, 1966. 3 de marzo.

número de trabajadores ocupados. Por su parte, los directivos de ISASA exigieron el pronto desalojo. Luego de 11 días de ocupación, se acordó con el gobierno provincial el pago de los haberes y la materia prima adeudada y se devolvió a ISASA el control de la fábrica.

Una nueva complicación surgió en abril de 1966 cuando el gobierno de Arturo Illia dispuso la limitación de la producción en un 70 % como respuesta a la sobreproducción y a la imposibilidad de exportar los saldos dados los bajos precios internacionales. Se determinaron cupos de producción por ingenio teniendo en cuenta el promedio de lo elaborado en el quinquenio precedente. Bajo este parámetro, se contabilizaba para Santa Ana el año que no molió y la escasa producción de 1964. Con base en ese cálculo, la fábrica quedaba autorizada para elaborar solo 9 mil toneladas, volumen que tornaba inviable su funcionamiento. El directorio reclamó ante los poderes públicos nacionales sin encontrar una respuesta favorable.

En junio de 1966, el golpe de Estado de Onganía y sus primeras declaraciones de priorizar los problemas tucumanos derivados de la agroindustria azucarera alentaron alguna expectativa en ISASA. El directorio decidió iniciar la zafra a comienzos de agosto luego de ser recibidos por el secretario de Comercio de la Nación, quien se comprometió a tomar cartas para resolver el asunto.¹²⁷

En la madrugada del 22 de ese mismo mes, la policía federal intervino el ingenio junto a otras seis fábricas azucareras de la provincia, en cumplimiento del decreto nacional que determinaba el desmantelamiento de las unidades fabriles.¹²⁸ Al frente del establecimiento, se designó un gendarme interventor y se mantuvo la presencia policial para suprimir la protesta. Cinco días después de la clausura, el gobernador de facto Aliaga García se presentó en Santa Ana para anunciar su conversión productiva

¹²⁷ *La Gaceta*, 1966. 17 de julio.

¹²⁸ *Diario Noticias*, 1966. 22 de agosto.

y la próxima entrega de títulos de propiedad a los adjudicatarios de parcelas. Sin embargo, la autoritaria medida gubernamental generó uno de los índices de migración más elevados en la provincia, movimiento que revelaba el extendido desánimo social en la localidad, aunque sus dirigentes continuaron reclamando en los años siguientes nuevas fuentes de trabajo.¹²⁹

Conclusiones

Los últimos años del ingenio Santa Ana a cargo del gobierno de Tucumán constituyeron los primeros ensayos de respuestas frente a la amenaza de cierre de fábricas que la crisis azucarera provincial mantuvo latente hasta finales de la década del 1960. Plantear soluciones fue un desafío para los gobiernos de turno, tanto como para los sindicatos azucareros y la población local. A partir de 1958, el gobierno de Celestino Gelsi sostuvo su administración en un contexto de sobreproducción e intentó infructuosamente su venta a privados para evitar los costos políticos de su clausura. De manera intransigente, el interventor Alberto Gordillo Gómez avanzó con el cierre del ingenio en 1963 y fraccionó sus tierras productivas. Ante las presiones, propuso fundar una sociedad mixta que habilitara la fábrica con un plantel reducido; el proyecto encontró apoyo entre los trabajadores de la localidad disidentes a la conducción de federación obrera, quienes formaron la Comisión Pro Recuperación de Santa Ana. De esa convergencia, surgió ISASA, cuya capacidad limitada de inclusión cimentó la conflictividad local y la oposición de FOTIA. El gobernador sucesor, Lázaro Barbieri, se pronunció a favor del reclamo de la federación de derogar los decretos del interventor, pero la decisión quedó

¹²⁹ El Censo Nacional de 1960 registró en Santa Ana 11.771 habitantes. El siguiente censo, el de 1970, consignó solo 2.414 habitantes.

sujeta a la Legislatura, en que el oficialismo no contaba con mayoría. Los sindicatos azucareros se movilizaron para presionar a los legisladores a revertir las medidas adoptadas en Santa Ana, hasta conseguir revocar las normativas. Esta demorada victoria no logró cambiar la correlación de fuerzas en ISASA, en que la oposición a FOTIA representada por los parceleros y el personal de la fábrica afianzó su posición. Reiniciar la molienda en 1964 implicó conservar la modalidad de gestión establecida por la intervención.

La perspectiva local adoptada en el estudio permite reconocer las persistentes divisiones en el sindicalismo azucarero y su incidencia en el devenir del conflicto. La gestión de la federación obrera por parte de Carlos Balbino Martínez, alcanzada a partir de la normalización sindical de 1957 bajo la tutela de la dictadura, consolidó su referencia como dirigente sindical con un perfil dialoguista. En contraste, las elecciones sindicales de 1959 habilitaron el retorno a la conducción de los dirigentes peronistas proscritos, encabezados por Benito Romano. Martínez replegó su actividad al ingenio Santa Ana, siendo derrotado en el sindicato local y sancionado por malversación de fondos. Sin embargo, en los siguientes comicios, consiguió triunfar en Santa Ana por medio de una lista que lo reconoció como asesor. La decisión del interventor de clausurar la fábrica permitió a la conducción de FOTIA acordar con la filial en oposición para resistir el embate de la clausura. No obstante, la confluencia fue efímera. Martínez, junto a los gremialistas afines, emprendieron negociaciones con las autoridades gubernamentales por fuera del sindicato y posteriormente crearon una nueva organización escindida de FOTIA. El apoyo a las medidas adoptadas por el interventor le permitió consolidar su posesión sobre las parcelas y un mayor ascendiente en la conformación ISASA. Junto a FEIA y UCIT, los parceleros respaldaron las reformas del gobierno y confrontaron con la postura de FOTIA. Ponderaban en su discurso la solución pragmática de dar continuidad al funcionamiento de la fábrica en una escala muy

reducida, mientras que FOTIA exigió el empleo del total de desocupados. Estas posturas contrapuestas acabaron por enfrentar violentamente a la población.

El gobernador Lázaro Barbieri suministró los recursos para dar continuidad al funcionamiento del ingenio en 1964 y 1965, pero no consiguió conciliar los intereses en pugna, ni implementar las transformaciones dispuestas por la ley y exigidas por FOTIA. La nueva crisis de sobreproducción en 1965 impidió la comercialización del producto y selló la imposibilidad de funcionamiento del ingenio. La resolución del Estado nacional de limitar la producción de 1966 para no incrementar el *stock* perjudicó de manera inequitativa a ISASA, que, a pesar del reclamo, no consiguió modificar la disposición. La dictadura de Juan Carlos Onganía incorporó a ISASA en el listado de los ingenios a ser clausurados y desmantelados. Dada la destrucción de vínculos comunitarios en el violento enfrentamiento local, la migración fue la respuesta mayoritaria de la población, ya que no pudo estructurar modalidades de resistencia al nuevo cierre como lo consiguieron en otros ingenios de la provincia. No obstante, quienes se mantuvieron en la localidad continuaron reclamando fuentes de trabajo junto a los demás trabajadores azucareros desocupados de la provincia.

2

Tradiciones en movimiento¹

Asociacionismo, política y formas de protesta en Bella Vista (1943-1968)

LEANDRO LICHTMAJER²

En un libro publicado con motivo de los cincuenta años del Cordobazo, Mónica Gordillo invitó a repensar la “excepcionalidad” del evento que conmovió a la sociedad argentina a finales de la década de 1960. Propuso, en efecto, considerar

[...] un mayo que no se circunscribe a Córdoba, que no empieza ni termina en Córdoba, a pesar de que el 29 y 30 de mayo dejaron perplejos a la mayor parte de los participantes y observadores, dándole el carácter de un acontecimiento excepcional.

Entre las estrategias metodológicas fecundas para revisar el carácter “episódico” de dichas protestas, Gordillo, imbuida por la literatura sobre acción colectiva desde la perspectiva de la sociología histórica, planteó la posibilidad de “extender y flexibilizar las temporalidades y los

¹ Agradezco las observaciones vertidas en el seminario interno del PIP-CONICET “La construcción social de lo político: cañeros y trabajadores en los pueblos azucareros, Tucumán, 1896-1966”, de las que este texto fue beneficiario.

² Instituto Superior de Estudios Sociales (CONICET/UNT). Facultad de Filosofía y Letras (UNT).

paradigmas explicativos, en la medida en que ello permita una mejor comprensión de los condicionantes que llevaron a distintos sujetos a implicarse en la acción y convertirse en agentes de cambio”. Esta propuesta no solo resulta estimulante para revisar el ciclo de insurrecciones urbanas desarrolladas en la Argentina a finales de los sesenta, sino que marca un rumbo posible para repensar la compleja relación entre “excepcionalidad” y “regularidad” de episodios de movilización y protesta en otros espacios y coyunturas (Gordillo, 2019: 14-19).

En Tucumán, la segunda mitad de la década del sesenta se caracterizó por una sostenida efervescencia social forjada al calor de la debacle de la agroindustria azucarera. El punto cúlmine del proceso de deterioro de la principal actividad económica provincial fue la intervención y clausura de once establecimientos llevada a cabo por el Onganiato entre 1966 y 1968. Los efectos sociales de dichas medidas se plasmaron en la desocupación, pauperización y migración masiva de miles de tucumanos y tucumanas. Ante ese escenario, en los pueblos azucareros se fraguaron diversas formas de confrontación y articulación social, entre las que se destacaron las comisiones prodefensa formadas en 14 localidades (Bravo y Lichtmajer, 2019; Santos Lepera y Sánchez, 2019). Estas experiencias antecedieron las protestas desarrolladas en San Miguel de Tucumán entre 1969 y 1972 (los “Tucumanazos”), cuyo carácter urbano y capitalino, así como su masividad y la centralidad del componente obrero-estudiantil, les otorgaron mayor visibilidad en las investigaciones sobre este período (Sigal, 1973; Pucci, 2007; Kotler, 2007; Ramírez, 2008; Crenzel, 2014; Nassif, 2016).

En Bella Vista, sede del segundo establecimiento azucarero más importante de Tucumán, el “comisionismo defensivo” tuvo un hito clave a finales de 1968, cuando la Comisión Pro-Defensa (CPD) movilizó a amplios sectores de la comunidad y tendió lazos con un caleidoscopio de actores a escala provincial y nacional. La gravitación de dicha entidad se extendió hasta 1970 y, a contramano del resto

de las CPD, logró salvar el ingenio. En un abordaje previo, analizamos la trayectoria de la entidad bellavisteña, delimitando sus liderazgos, sus repertorios de protesta y sus alianzas. En las consideraciones sobre las “condiciones locales” que signaron la trayectoria de la CPD, el estudio aludió –de manera tangencial– a la relevancia del denso entramado institucional, asociativo y político del colectivo bellavisteño, que modeló una “particular trama comunitaria que cobró relieve ante la coyuntura crítica de mediados de los sesenta” (Bravo y Lichtmajer, 2019: 69).

Este texto recupera y profundiza esa idea. En efecto, propone una genealogía de las tramas asociativas locales y examina las formas de articulación que se observaron en la comunidad bellavisteña en el mediano plazo. Esto supone reconocer la centralidad de diferentes actores –tales como las organizaciones sindicales de obreros y empleados, el asociacionismo católico, las entidades comerciales, educativas y agrarias y las dirigencias partidarias– de fuerte relevancia a finales de los sesenta. El texto argumenta que la CPD fue tributaria de una tradición de articulaciones locales de largo aliento, cuyas implicancias en la movilización de los actores comunitarios, la construcción de liderazgos y el despliegue de una gimnasia organizativa forjada durante décadas se visibilizaron en la crisis del ingenio.

La perspectiva local de análisis busca entrecruzar las reflexiones sobre la vida asociativa, las configuraciones espaciales y las trayectorias de organizaciones y dirigentes comunitarios en interrelación con tramas más amplias. No propone, en efecto, “domesticar la especificidad” ni postular la “unicidad” de lo local, pensándolo tanto en su propia lógica como en su interrelación con experiencias construidas allende sus fronteras, “en una escala que va desde lo global hasta lo regional o nacional”.³ En un sentido

³ Las nociones de “domesticación de la especificidad” y “unicidad de lo local” fueron tomadas, respectivamente, de las reflexiones de Simona Cerutti sobre la relación el microanálisis y los estudios comparados y de Doreen

complementario, nuestra perspectiva busca dialogar con la mirada de Doreen Massey sobre las percepciones del “lugar” y sus implicancias en las luchas políticas desarrolladas en una localidad determinada. Massey cuestionó las interpretaciones que postularon el carácter esencialista de la noción de “lugar”, recuperando su matriz dinámica y su apoyatura en un conjunto de relaciones sociales, que no son solo internas a los locales, sino que los conectan con lo global. Frente a quienes postularon que el “poder motivacional de la tradición” es sinónimo de reacción contra el cambio –desde un punto de vista conservador– Massey sostuvo que la tradición supone, ante todo, el reconocimiento del carácter histórico de un lugar, en un sentido dinámico y conflictivo, que busca establecer conexiones entre prácticas presentes y pretéritas.⁴ Como veremos, estas nociones pueden ponerse en juego a la hora de reflexionar sobre la trayectoria de la comunidad bellavistaña.

La construcción de tramas asociativas y sus transformaciones durante el primer peronismo

Las investigaciones sobre los pueblos azucareros tucumanos subrayaron su “configuración dicotómica” definida por la presencia de dos ejes articuladores: la “villa” y el “ingenio” (Sánchez, 2019; Gutiérrez y Santos Lepera, 2019). El proceso formativo de Bella Vista se amoldó a esa caracterización, en cuanto la localidad nació “dividida” por las vías del ferrocarril, que “separaban el pueblo en dos mitades con características diferentes, la del ingenio y la de la villa, dicotomía que ayudaba a la consolidación de identidades”

Massey sobre la construcción del “lugar” en las miradas localizadas (Massey, 1995: 182-192; Cerutti, 2020).

⁴ Este planteo recupera, desde un espacio local, la noción de “invención de la tradición” propuesta en el clásico trabajo de Eric Hobsbawm y Terence Ranger (2002) sobre la construcción de las naciones.

(Salazar y Valeros, 2012: 430). La estación creada en 1876 constituyó un vector formador del espacio urbano de la villa cívica, mientras que el otro eje dinamizador del territorio bellavisteño –el ingenio– fue fundado en 1882 por los inmigrantes españoles José y Manuel García Fernández. El establecimiento se posicionó a comienzos del siglo XX como el segundo más importante de la provincia por su capacidad de fabricación de azúcar, sitio que mantuvo hasta la década de 1960. Bajo la conducción de Manuel (h), tras la muerte de su progenitor en 1923, se modeló un poderoso complejo agroindustrial caracterizado por alcanzar la mayor integración vertical posible en la provincia, al concentrar fabricación y cultivo en una sola firma.⁵

La expansión fabril y el desarrollo de la villa cívica se retroalimentaron, erigiendo al poblado de Bella Vista en un núcleo central del complejo agroindustrial tucumano en razón de su capacidad productiva, su volumen poblacional y su denso entramado político-asociativo. De acuerdo al censo de 1895, residían en Bella Vista 947 habitantes, cifra que, *boom* azucarero mediante, se incrementó a 6.223 en 1914. Este salto convirtió a la localidad en el segundo centro urbano de la provincia.⁶ Por entonces, el establecimiento fabril empleaba a un total aproximado de 400 obreros permanentes y 1.200 trabajadores temporarios. El crecimiento del personal obrero y la expansión demográfica local siguieron un curso sostenido durante las décadas siguientes. En 1945 el ingenio empleaba alrededor de 2.200 obreros permanentes (1.700 de surco y 500 de fábrica) y 2.000 obreros temporarios, mientras que la localidad contaba con 8.352

⁵ En 1955 el ingenio molía el 67 % de caña propia, proporción que superaba al resto de los establecimientos azucareros tucumanos (*La Industria Azucarera*, 1955: 237).

⁶ *Tercer Censo Nacional de la República Argentina*, 1916. Buenos Aires: Talleres Gráficos Rosso, tomo 4, p. 470. Aparte del incremento poblacional, la variabilidad en las cifras puede haber sido fruto de un cambio en la metodología censal, que contabilizó entre la población del centro urbano de Bella Vista a un sector de las colonias circundantes.

habitantes.⁷ Esta cifra la ubicaba en el cuarto lugar a nivel provincial, por detrás de la Capital, Tafi Viejo y Concepción. Bella Vista era, por otra parte, el pueblo azucarero más populoso de la provincia, seguido por Santa Ana, sede del establecimiento homónimo (7.286).

El ingenio y la villa mantuvieron una diferenciación espacial que se expresó en la fisonomía social y laboral y en las prácticas de sociabilidad. En ese marco, los conflictos y las disputas no estuvieron ausentes. Mientras que el territorio del ingenio –que abarcaba el establecimiento fabril y el distante entorno rural de las colonias agrícolas– dependía directamente del ritmo de la actividad azucarera, su incidencia en la villa confluía con otros movimientos pautados por el funcionamiento institucional, educativo y comercial de la comunidad bellavistaña.

La etapa fundacional de la villa se caracterizó por una febril expansión comercial –protagonizada por una floreciente comunidad de inmigrantes, con predominio árabe–, la ampliación del aparato estatal (Registro Civil, Comisaría, Juzgado de Paz, Comisión de Higiene y Fomento, Oficina de Correos y Telégrafos), la creación de instituciones educativas y culturales (escuelas, biblioteca popular) y la fundación de un templo católico. Paralelamente, al influjo de la patronal, se visibilizó la ampliación de servicios y prestaciones mediante la construcción de viviendas destinadas al personal permanente y temporario, la creación de un hospital, un cementerio y la fundación de escuelas en el predio del ingenio y las colonias. En consonancia con un fenómeno que abarcó al conjunto de los pueblos azucareros, entre las décadas de 1910-1930 se produjo una expansión del casco urbano, alentado por la creación de un conjunto de barrios obreros –en razón de los cambios en la legislación laboral y el establecimiento de un tercer turno de trabajo–. En ese

⁷ *La Nación*, 1945. 28 de enero; *Cuarto Censo General de la Nación Argentina*, 1947. Buenos Aires: Dirección Nacional del Servicio Estadístico, tomo 1, p. 440.

marco se conformaron ámbitos de sociabilidad e instituciones de fuerte relevancia en la vida comunitaria, tales como el Club Sportivo Bella Vista y el Club Social para empleados y obreros, ambas iniciativas solventadas por el establecimiento. Por su parte, la creación de una plaza pública, en terrenos cedidos por la empresa en 1932, desplazó a la estación del ferrocarril como centro neurálgico de la sociabilidad bellavisteña (Gutiérrez y Santos Lepera, 2019).

Aunque la expansión urbana tendió a desdibujar la frontera física entre el ingenio y la villa, en razón de una localidad crecientemente integrada, en el imaginario local pervivió la diferenciación simbólica entre ambos espacios. En ese sentido, la política expresó las dinámicas autónomas, aunque mutuamente relacionadas, entre la villa y el ingenio. Desde la década de 1920 hasta el peronismo, la política bellavisteña estuvo pautada por la actuación de García Fernández (h), quien ocupó sucesivamente los cargos de diputado provincial, senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Tucumán. Como un profeta en su tierra, García Fernández recibió un respaldo contundente del circuito electoral de Bella Vista, y las redes locales tejidas en torno a su figura involucraron a los actores locales (empleados, trabajadores, funcionarios) en diferentes formas e instancias de la política. El conservadurismo, principal competidor del radicalismo, fue liderado por un grupo de comerciantes acomodados y productores cañeros con arraigo en la villa. Esta condición les permitió desplegar una acción política en paralelo a las redes de interacción lideradas por García Fernández (Lichtmajer y Gutiérrez, 2017). La localidad tuvo, asimismo, una presencia de los partidos socialista y agrario, lo cual reveló un grado de competencia interpartidaria mayor al observado en otros circuitos de ingenios azucareros durante el período de entreguerras (Lichtmajer, 2020a).

La irrupción del peronismo reformuló las tramas locales merced al proceso de sindicalización de obreros y empleados y a la transformación de la escena político-

partidaria. Al calor del impulso organizativo promovido desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, en marzo de 1944 se creó el Sindicato Obrero del Ingenio Bella Vista, entidad que tuvo un rol vertebral en la fundación de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), fundada en junio de 1944. El renovado empoderamiento obrero abrevó en las experiencias de reciprocidad y solidaridad del colectivo trabajador bellavisteño, cuyos intentos de constituir una organización gremial se habían topado históricamente con las resistencias de la patronal (Gutiérrez, Lichtmajer y Santos Lepera, 2016).

La dinámica de la organización comenzó en las fábricas y se irradió hacia los surcos. Una vez constituido, el Sindicato Obrero eligió un delegado general para las colonias e incentivó la elección de un representante en cada una de ellas. Así se intensificaron las acciones destinadas a sumar ese importante contingente agrícola, el más numeroso y postergado del mundo azucarero. La nutrida presencia de este segmento laboral fue un capital disputado por la dirigencia, en cuanto su apoyo fue decisivo en las contiendas electorales y en la consolidación de liderazgos sindicales. La expansión territorial del gremio bellavisteño sintetiza la configuración de este campo de fuerzas. En la elección de la Comisión Directiva de mayo de 1945, participaron 313 socios, mientras que la llevada a cabo dos meses más tarde reportó 1.691 votantes, sobre un total estimado en 3.000 afiliados, incremento sustentado en la incorporación de los trabajadores agrícolas.⁸ La representación de ambos segmentos laborales, con estatus y demandas diferenciados, permeó en las trayectorias de los sindicatos de ingenio y enfrentó a sus dirigencias a la compleja tarea de contener al heterogéneo colectivo obrero bajo una única institución representativa (Gutiérrez, 2013).

⁸ Archivo Privado de Manuel Valeros, Libro de Actas del Sindicato de Obros del Ingenio Bella Vista (1944-1947), Acta n.º 20, 13 de mayo de 1945, y Acta n.º 22, 29 de julio de 1945.

El movimiento de agremiación bajo aliento estatal también incluyó a los empleados, que crearon en 1945 la filial local de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA), entidad provincial fundada ese mismo año. El proceso de organización diferenciado ratificó el disímil posicionamiento de empleados y obreros en la estructura laboral azucarera, lo cual tenía implicancias no solo en la conflictiva relación entre ambos actores, sino también en sus formas de interacción con la patronal y en el lugar que ocupaban en la escala social local. Al influjo del naciente movimiento peronista, también se organizaron los cañeros, plantadores independientes que tenían una larga presencia en la zona y protagonizaron, desde comienzos de siglo, luchas sociales para defender intereses sectoriales. Estas prácticas denotaban una larga tradición asociativa que se reformuló en 1945 con la formación de la Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), representante de los pequeños y medianos propietarios (Gutiérrez, 2013).

Las transformaciones introducidas durante el primer peronismo abarcaron también al ámbito cultural y estudiantil –actor relegado en una localidad que carecía de instituciones de enseñanza media y superior–, al fundarse el Ateneo Estudiantil de Bella Vista (1952) y el Centro Cultural José Manuel Estrada (1953). En el campo de la sociabilidad católica, la creación de la parroquia de San José Obrero, en 1945, con la consecuente radicación del cura párroco, dinamizó las tramas asociativas de la feligresía de Bella Vista y zonas aledañas. Finalmente, el estatus administrativo de la comunidad bellavisteña y la forma de gobierno local se modificaron al reemplazarse la histórica figura de la Comisión de Higiene y Fomento por la de Comuna Rural, en el marco de una reorganización administrativa emprendida en 1950 (Salazar y Valeros, 2012; Vidal Sanz, 2017).



Desfile conmemorativo de la independencia argentina realizado en Bella Vista el 9 de julio de 1946. La imagen permite apreciar un sector de la villa cívica (de fondo). Fuente: Revista *La Fundación*, N° 1.

En el terreno político, el peronismo reformuló las lealtades locales al cuestionar la urdimbre tejida por la patronal y dar cauce a formas renovadas de representación a través de las sucesivas organizaciones partidarias creadas desde finales de 1945. El repliegue público del propietario del ingenio y su alejamiento de las filas radicales fue sintomático de un nuevo clima de época, en el que las prácticas políticas locales ganaron en autonomía frente a la patronal. Su expresión más nítida fueron los resultados electorales, terreno en el que el peronismo arrasó, confinando al radicalismo a un lugar marginal. Bajo el amplio paraguas del peronismo, convergieron los liderazgos sindicales con figuras emanadas del funcionariado cívico y el influyente sector comercial local. Aunque el notable peso cuantitativo y simbólico otorgaba a las dirigencias obreras credenciales suficientes para reclamar la conducción del emergente movimiento político, a tono con una tendencia cara al gremialismo azucarero tucumano, esta pretensión no fue avallada por las autoridades provinciales y nacionales del peronismo, que encapsularon la influencia sindical (Rubinstein,

2006). Sobre ese telón de fondo, la construcción del peronismo bellavistense se fraguó bajo un grado inusitado de conflictividad si se lo compara con el período de entreguerras, signado por la hegemonía radical y la preeminencia de las redes de interacción lideradas por García Fernández.

Las fronteras entre el ingenio y la villa permearon el proceso de conformación del peronismo en la localidad. La puja por la conducción del movimiento fue protagonizada por Felipe B. Sosa –secretario general del sindicato obrero– y Fernando Riera –joven representante del funcionariado local, ungido durante el gobierno de facto–.⁹ La popularidad de Sosa entre los trabajadores, sobre todo el contingente de obreros de surco, no tuvo un correlato en las organizaciones partidarias del peronismo en la localidad, dominadas por Riera. Este, a su vez, tendió lazos con un sector de los trabajadores opositores al liderazgo de Sosa.¹⁰ Las elecciones de 1946 generaron una encarnizada disputa por ocupar las listas legislativas departamentales del Partido Laborista. Riera, apoyado por las autoridades del Partido Laborista en la provincia, obtuvo el primer lugar y fue ungido diputado provincial, mientras que Sosa se candidateó por una fracción disidente, sin alcanzar representación.

⁹ Riera nació en Bella Vista en 1915. Era miembro de la tercera generación de una influyente familia de comerciantes locales, de origen catalán, instalada en la localidad durante el *boom* azucarero. Cursó sus estudios primarios en la Escuela Manuel García Fernández (Bella Vista) y los secundarios en el Colegio Nacional de Aguilares (Tucumán). Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán y participó del movimiento estudiantil, tras lo cual abandonó la carrera en 1944 para dedicarse a la actividad política. Durante la intervención federal de Alberto Baldrich (1943-1944), con quien Riera compartía la mutua identificación con el nacionalismo católico, ocupó los cargos de juez de paz y comisionado de Higiene y Fomento de Bella Vista (Lichtmajer, 2021: 102-104).

¹⁰ La reconstrucción localizada de las redes partidarias del peronismo en Bella Vista revela las mixturas entre las dirigencias provenientes de los ámbitos gremial y político. Esto permite matizar la dicotomía entre “políticos” y “sindicalistas” planteada en el pionero trabajo de Moira Mackinnon sobre la formación del Partido Peronista a lo largo del país (Mackinnon, 2002; Lichtmajer y Gutiérrez, 2017).

Lejos de clausurarse en ese episodio, las disputas por el control de las filas locales del peronismo se reeditaron a lo largo del bienio 1946-1947. Durante una medida de fuerza decretada en abril de 1947, los afiliados del sindicato “coaccionaron en forma amenazante a los comerciantes de la villa para que cerraran sus negocios” en adhesión al paro, incidentes que cesaron con la intervención de la fuerza pública.¹¹ Las tensiones se agudizaron al rechazar Riera un proyecto de creación de una cooperativa de consumo para obreros impulsado por el sindicato, lo cual llevó a Sosa a acusar al diputado de “proteger a los comerciantes turcos de la localidad” en razón de que su padre era “dueño de un negocio en la villa”. Para moderar la virulencia de la acusación, cuyas connotaciones étnicas lindaban con un tono xenófobo, Sosa aclaró que “no era enemigo de los comerciantes extranjeros de la villa”, pero sí de “las actitudes inescrupulosas” que estos cometían.¹² A pesar de este matiz, desde la perspectiva del secretario del sindicato, la representación territorial del ingenio se solapaba con la representación del colectivo obrero, atribuyendo a Riera la defensa de intereses particulares de su familia y del sector comercial con arraigo en la villa. En efecto, la acusación del secretario era sintomática de las tensiones constitutivas del peronismo en la localidad y se nutría de la histórica frontera simbólica entre la villa y el ingenio.¹³ En su defensa, Riera desmintió las acusaciones y atribuyó a Sosa la voluntad de engañar “a las gentes sencillas de las colonias”, en referencia a los trabajadores de surco, que en las manifestaciones insultaron a los vecinos y apedrearon comercios “sembrando el terror entre los tranquilos habitantes de la villa”.¹⁴

¹¹ *La Gaceta*, 1947. 8 de abril.

¹² *La Gaceta*, 1947. 11 de mayo.

¹³ La frontera entre las dirigencias del ingenio y la villa también permeó al proceso de reformulación interna que atravesó el radicalismo luego de la irrupción peronista (Lichtmajer, 2014).

¹⁴ *La Gaceta*, 1947. 11 de mayo.

En alianza con las dirigencias sindicales opositoras a Sosa, Riera socavó su liderazgo a través de diferentes mecanismos que incluyeron desde denuncias de malversación de fondos hasta la creación de un sindicato paralelo. Tras denunciar un boicot de Riera, Sosa renunció a la presidencia del sindicato en agosto de 1947.¹⁵ En ese contexto conflictivo, las elecciones internas del Partido Peronista (septiembre de 1947), ofrecieron al expresidente del gremio una nueva oportunidad para disputar el liderazgo de Riera. Apuntalado desde la conducción partidaria a nivel provincial y nacional, el diputado triunfó ampliamente en la contienda, confinando a Sosa a un lugar marginal de las filas del movimiento a nivel local. Por entonces, la figura de Riera estaba en franco crecimiento, proceso que reconoció un hito clave en su unción como gobernador (1950-1952) y su proyección a las esferas nacionales del movimiento (Lichtmajer, 2017).

La centralidad del sindicato obrero en las tramas locales, en el marco de las transformaciones acaecidas durante la década peronista, alternó episodios de conflictividad con instancias de articulación y construcción de solidaridades. Las relaciones entre los sindicatos de obreros y empleados del ingenio son reveladoras de este juego de tensiones y alianzas. La lógica de agremiación diferenciada y el disímil posicionamiento de ambos actores en la estructura laboral desalentaron las acciones conjuntas, que se observaron excepcionalmente, en coyunturas donde las demandas superaban la singularidad de sus planteos sectoriales. Observados de manera aislada y esporádica, estos episodios reconocieron en la gran huelga azucarera de octubre-noviembre de 1949 un grado de articulación inédito.

En el marco de la gran huelga azucarera, la designación de una Comisión Intergremial con representación de empleados y trabajadores tuvo un carácter disruptivo al poner en escena, por primera vez desde su creación, una

¹⁵ *Trópico*, 1947. 7 de agosto.

confluencia de las organizaciones representativas de ambos sectores laborales.¹⁶ A nivel provincial, los cargos de presidente y vicepresidente de la comisión quedaron en manos de dirigentes bellavisteños: en el primero fue designado Felipe Sosa, en representación de la Comisión Directiva de FOTIA, y en el segundo, Máximo Vergara, presidente de FEIA y empleado del ingenio Bella Vista.¹⁷ Con el fin de apuntalar las medidas de fuerza y coordinar las acciones en cada establecimiento, se constituyeron filiales de la Comisión Intergremial por ingenio, respetando las cuotas de representación de empleados y trabajadores fijada por la entidad central.¹⁸ Durante los sesenta días que duró la medida de fuerza, las protestas localizadas arreciaron en Bella Vista, erigido en uno de los principales núcleos de activismo y adhesión a la huelga.¹⁹

El desgaste de la medida de fuerza, sin embargo, socavó las solidaridades al interior del colectivo de empleados y obreros. En Bella Vista, los primeros retornaron al trabajo a fines de noviembre, en desobediencia al mandato de la conducción provincial de FEIA. La huelga fue levantada luego de decretarse un importante aumento salarial y la intervención y el retiro de la personería jurídica de FOTIA y FEIA, medidas que fueron acompañadas por las

¹⁶ En marzo de ese año, FOTIA y FEIA dictaron una medida de fuerza en conjunto para reclamar por los despidos en los ingenios, medida que fue acatada por las filiales de Bella Vista (Gutiérrez, 2013).

¹⁷ Archivo del Partido Comunista Argentino (Buenos Aires), Documentación sobre la huelga de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (1949), Acta de la Asamblea del 16 de octubre de 1949, folio s/n. Agradecemos esta información a Florencia Gutiérrez.

¹⁸ La filial local de la comisión fue formada por Carmen Córdoba (presidente), Pascual Strazza (secretario). Los vocales fueron Francisco Muro, Cecilio Heredia, José Vinardell, Pablo Ojeda (titulares). Los miembros suplentes fueron Héctor Castro (presidente), Manuel Ramos (secretario), Joaquín Pérez, Francisco Bellomo, Belarmino Díaz (vocales). Archivo del Partido Comunista Argentino (Buenos Aires), Documentación sobre la huelga de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (1949), Nota del Sindicato de Obreros del Ingenio Bella Vista al secretario general de FOTIA, 20/10/1949, folio s/n.

¹⁹ *La Gaceta*, 1949. 6 de noviembre.

acusaciones de Perón contra un conjunto de dirigentes de los trabajadores y empleados, señalados con nombre y apellido en un discurso radial emitido en todo el país.²⁰ Los grupos de obreros leales al sindicato mantuvieron en Bella Vista un estado de movilización y protesta que se plasmó en acciones de resistencia contra la decisión del gobierno nacional. Tras conocerse la intervención a FOTIA y a sus filiales, se organizó una manifestación de 1.500 obreros de surco procedentes de las colonias agrícolas, a los que se sumaron algunos trabajadores y trabajadoras de la fábrica. Dicho contingente intentó dirigirse hacia San Miguel de Tucumán, lo cual fue sofocado por la acción policial.²¹ Más allá de su abrupto final, la huelga de 1949 tuvo la singularidad de expresar un grado de articulación inédito y la acción conjunta de las entidades de trabajadores y empleados.

En un contexto signado por la expansión de las tramas asociativas, la huelga no concitó el apoyo de otros actores (comerciantes, sociabilidad católica, cañeros). Las autoridades locales del partido, identificadas con el liderazgo de Riera y afines a la línea del gobierno provincial, tampoco se pronunciaron públicamente, lo cual podría interpretarse como una falta de compromiso con la trascendental medida de fuerza. En ese marco, el desenlace de la huelga favoreció a las dirigencias identificadas con el Poder Ejecutivo. Los dirigentes sindicales designados por la intervención minimizaron la matriz contestataria que se observó durante los

²⁰ Las denuncias de Perón apuntaron en tres direcciones: contra dirigentes de FOTIA, a quienes atribuyó la búsqueda de construir carreras políticas en desmedro de los intereses gremiales; contra la conducción de FEIA, a la que acusó de buscar el entendimiento con FOTIA con el fin de perjudicar al gobierno peronista; y contra la “acción comunista” de un grupo de afiliados al Partido Peronista, dirigentes sindicales y miembros del Partido Comunista provincial. Numerosos bellavistenses fueron mencionados: entre los primeros, se apuntó contra Felipe B. Sosa y Felipe Perdiguero; entre los segundos, fue apuntado Máximo Vergara; y, entre los terceros, se mencionó a Rolando González, Héctor Vaquero, Hilario Serrano, Carlos Ruiz Ibarra, Daniel Dubrenill, Juan Ituarte (de 15 años de edad), Martín Eduardo Jerez, y Carlos Luis Ibarra (*La Gaceta*, 1949. 3 de diciembre).

²¹ *Trópico*, 1949. 28 de noviembre.

años previos y, de ese modo, partido y sindicato tendieron a actuar en conjunto, desdibujándose la conflictividad que caracterizó a la etapa inicial del peronismo en el poder.²²

Sin desmedro de los ciclos de conflicto que jalonaron la trayectoria del peronismo en Bella Vista, la década 1945-1955 puede interpretarse globalmente como una etapa de revitalización de las dinámicas locales en la que los pobladores de la villa y del ingenio, identificados mayoritariamente con el oficialismo, participaron en la vida comunitaria a través de distintas entidades políticas, gremiales, culturales, agrarias y juveniles.

En tal sentido, las transformaciones en las tramas asociativas bellavisteñas se enmarcaron en la conceptualización de Omar Acha, quien atribuyó al movimiento fundado en 1945 la conformación de una “sociedad política” compuesta por un amplio abanico de individuos y organizaciones que mediaron entre la sociedad civil y las instituciones estatales, sobre la cual descansó la capacidad de movilización peronista (Acha, 2004). La hipótesis que atribuyó al peronismo un rol aglutinante en la comunidad bellavisteña forma parte del imaginario local. En palabras de Manuel Valeros, abogado y dirigente comunitario de larga trayectoria en la localidad, el peronismo “sirvió para cohesionar a la población, fortaleciendo su espíritu comunitario”.²³ En relación con la patronal, “salvo algunos episodios aislados”, referencia que probablemente aluda a la huelga de 1949 o los conflictos internos del peronismo, dicho actor contribuyó a una “convivencia pacífica” que no afectó esencialmente

22 Moisés Bustos, delegado comunal entre 1950 y 1955, fue también presidente de Unidad Básica local (1953). Por su parte, en 1955 se designó como delegado comunal a Francisco Trimarco, candidato propuesto por la Delegación Regional de la CGT. Agradezco esta información a Nicolás Díaz Cisneros.

23 Desde la década de 1950 hasta la fecha, Manuel Valeros se desempeñó en la arena educativa, fue intendente municipal y diputado provincial por el departamento Famaillá. Actualmente, preside la Fundación Bella Vista, entidad abocada a la recuperación de la historia y la promoción cultural en la localidad.

el “espíritu comunitario de la población” (Salazar y Valeros, 2012: 154). En efecto, aunque el peronismo desafió algunas de las formas de deferencia social promovidas por la patronal, incluso durante los picos de tensión (expresados en las huelgas y en otro tipo de medidas) no se quebró la relación con la familia propietaria y se mantuvieron los lazos comunitarios fraguados durante esos años, legado que tuvo fuertes implicancias en la trayectoria posterior.²⁴ En la localidad bellavisteña la “sociedad política” peronista reconoció en las dirigencias sindicales y partidarias dos engranajes clave de una dinámica más amplia que incorporó a múltiples actores identificados con el movimiento político que irrumpió en escena a mediados de los cuarenta.

Recambio generacional, nuevos liderazgos y formas de articulación (1955-1964)

La etapa abierta con el golpe de Estado de 1955 tuvo implicancias múltiples en el espacio bellavisteño. En el terreno gremial, la intervención a las filiales de FOTIA (comienzos de 1956) condujo a la designación del trabajador calificado Salvador Oviedo al mando del Sindicato Obrero de Bella Vista. Aunque formó parte del grupo fundador del gremio en 1944, diferentes testimonios coinciden en señalar a Oviedo como un dirigente ajeno al peronismo e identificado con la UCR, organización a la que no perteneció formalmente (su hijo, Dante Oviedo, fue un importante dirigente radical de la localidad en las décadas de 1950-1960). Asimismo, se atribuye a Oviedo una actitud contemporizadora con el gremialismo peronista desplazado por la “Revolución Libertadora”, al no expresarse en Bella Vista los episodios de violencia, hostigamiento y persecución que se observaron

²⁴ A modo de ejemplo, en 1954 los propietarios del ingenio donaron el terreno para la construcción del Hospital Centro de Salud proyectado en el plan quinquenal de 1953 (Salazar y Valeros, 2012: 375).

en otros espacios.²⁵ Se trata, en ambos casos, de datos relevantes para dimensionar las consecuencias del cambio de régimen en el espacio bellavisteño. La conducción de un dirigente ajeno al peronismo iba a contrapelo de un rasgo constitutivo del gremio local. Aunque moderada por la actitud contemporizadora de Oviedo, la percepción de que el golpe de Estado implicó un retroceso y una derrota para la dirigencia peronista surcó a la dirigencia local durante la intervención del sindicato.²⁶

En una dirección semejante, puede interpretarse el derrotero de Fernando Riera, líder del Partido Peronista de Bella Vista. El exgobernador fue detenido en diciembre de 1955 a instancias de la Comisión Provincial de Investigaciones y trasladado al penal de Caseros, donde permaneció hasta 1957. La pérdida del control del sindicato y el encarcelamiento del principal exponente del peronismo “político” en Bella Vista fueron sintomáticos del cambio de rumbo que supuso la “Revolución Libertadora” en la escena local.

Con el transcurso de los meses, sin embargo, la situación comenzó a revertirse y el peronismo recuperó parte del terreno perdido. En julio de 1957, el proceso de normalización de FOTIA por parte de las autoridades de facto, que habilitaron el llamado a elección de autoridades mediante el voto de los afiliados, permitió al peronismo recuperar el control del sindicato bellavisteño. La lista triunfante, que se enfrentó a la impulsada por Oviedo, fue encabezada por dos dirigentes gremiales desplazados por la intervención de 1949: el secretario general, Francisco Perdiguero, y el delegado ante FOTIA, Rolando González.²⁷ Esto abona a las hipótesis que interpretaron la prohibición de las dirigencias peronistas, en el marco de la “Revolución Libertadora”, como punto de partida para el retorno de los núcleos

25 Entrevista a Rolando González realizada por Atilio Santillán (h), Bella Vista, 30 de octubre de 1999. Entrevista a Manuel Valeros realizada por Leandro Lichtmajer, Tucumán, 3 de junio de 2013.

26 Entrevista a Rolando González, cit.

27 *La Gaceta*, 1957. 3 de febrero.

expulsados luego de la gran huelga azucarera de 1949 (Centurión, 2003; Díaz Cisneros, 2018).

Reelegido en dos oportunidades por el voto de los afiliados, Perdiguero se mantuvo al frente del sindicato hasta 1963. A tono con su trayectoria personal, su liderazgo del sindicato recuperó algunos rasgos del derrotero sindical previo a la intervención de 1949. Al igual que Sosa, Perdiguero tuvo su principal apoyatura entre los trabajadores de surco, colectivo cuyas demandas fueron priorizadas, y expresó su adhesión a la conducción en diferentes oportunidades.²⁸ La entidad ensayó, asimismo, sucesivas instancias de articulación con los empleados del ingenio. En las medidas de fuerza adoptadas bajo la conducción de Perdiguero, se sintetizaron conflictos localizados y acciones a nivel provincial, en el marco del sostenido deterioro de la actividad agroindustrial que se observó desde mediados de la década de 1950. Entre 1958 y 1959, las organizaciones gremiales de trabajadores y empleados reclamaron conjuntamente a la patronal por los servicios médicos prestados por el ingenio, insuficientes para satisfacer las crecientes demandas del colectivo laboral.²⁹ Estos acercamientos fructificaron en la gran huelga que trabajadores y empleados de toda la provincia llevaron a cabo contra la política azucarera del gobierno frondizista entre julio-agosto de 1959 (Romano, 2009).

La medida de fuerza, inédita en su capacidad articuladora, alineó a FOTIA y FEIA en un frente común a nivel provincial, posición replicada por los sindicatos bellavistenses. En ese sentido, si la alianza entre ambas organizaciones

²⁸ En enero de 1962, los trabajadores de surco fueron movilizados por el sindicato en apoyo al reclamo del pago del aguinaldo adeudado por la empresa. Las divergencias entre el gremio y la patronal, denunciadas públicamente por Perdiguero, derivaron en una violenta manifestación de descontento por parte de los trabajadores de surco, que atacaron el edificio de la administración y fueron reprimidos por la policía (*La Gaceta*, 1962. 10 de enero). Sobre la gestión sindical en torno a las demandas de los trabajadores de surco, véase también *La Gaceta* (1960. 5 de enero) y *La Gaceta* (1961. 19 de julio).

²⁹ *La Gaceta*, 1959. 19 de febrero.

gremiales reeditaba uno de los rasgos dominantes de la protesta concretada diez años antes, los apoyos de una multiplicidad de actores locales otorgaron a esta medida de fuerza un componente distintivo, al involucrar a la comunidad en su conjunto y revelar un grado novedoso de articulación. De acuerdo a las crónicas locales de la huelga, las actividades comerciales y bancarias se “paralizaron por completo” en adhesión “a las reclamaciones de los obreros azucareros”, se cancelaron los servicios de transporte de pasajeros que conectaban a la localidad con San Miguel de Tucumán y se suspendió la atención en las oficinas de la administración pública (Comuna Rural, Juzgado de Paz). La huelga abarcó también a las escuelas de jurisdicción provincial y nacional, que suspendieron sus actividades.³⁰

Paralelamente a las acciones de protesta y expresión de demandas sectoriales, las organizaciones de trabajadores y empleados confluyeron en esta etapa con un conjunto de actores locales movilizados en torno a demandas comunitarias de largo aliento, tales como la creación de un colegio secundario, la fundación de un hospital público bajo control estatal y la elevación de Bella Vista al rango municipal.³¹ En ese marco cobró relieve el asociacionismo católico liderado por el cura Francisco Albornoz, al mando de la parroquia de Bella Vista desde 1958. A la par que promovió nuevas vías de participación de la feligresía bellavistense, plasmadas en la inauguración de una filial de la Juventud Obrera Católica (JOC), Albornoz desplegó un sólido activismo en el terreno cultural y educativo.³² El cura encabezó las gestiones para

³⁰ *La Gaceta*, 1959. 8 de agosto.

³¹ *La Gaceta*, 1960. 16 de octubre. Entre los empleados, se destacó la figura de José Vito Mercado, que combinó el liderazgo de la filial de FEIA en los años sesenta con una dilatada militancia en el Club Deportivo de Bella Vista y en la Acción Católica. Tras participar, como veremos, en el “comisionismo defensivo” de finales de esa década, fue miembro de la Cooperativa de Producción que administró el ingenio en 1969. Sobre este tema remitimos al texto de María Celia Bravo incluido en esta obra.

³² La sección Bella Vista de la JOC fue oficializada a finales de los cincuenta, al influjo de Albornoz. Su primera Comisión Directiva fue integrada por José

la inauguración del primer establecimiento de enseñanza secundaria de Bella Vista, creado bajo administración parroquial en 1961. Esta iniciativa contó con el apoyo de un amplio conjunto de “instituciones sociales, culturales, deportivas, religiosas y vecinos”, incluido el sindicato de empleados del ingenio, que formaron una Comisión Pro Colegio Parroquial con el fin de gestionar la apertura del establecimiento.³³ Cabe señalar, no obstante, que el sindicato obrero no formó parte de la comisión ni expresó públicamente su adhesión a la iniciativa. La presencia del diputado de la Unión Cívica Intransigente (UCRI) Manuel Valeros en la Comisión Pro Colegio ofreció un canal de intermediación clave con los poderes provinciales, en cuanto la iniciativa requería del apoyo estatal a través de subsidios y habilitaciones. La interlocución con los poderes públicos, liderada por Valeros y otros referentes de los partidos con asiento en la localidad, también permitió la concreción del hospital público (1961) y, sobre todo, la ley de municipalización (1966), corolario de gestiones desarrolladas desde finales de los años cincuenta (presentación de proyectos de ley, reuniones con representantes del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), campañas locales de concientización). A diferencia de las gestiones en torno al colegio, la creación del hospital y la municipalización fueron apoyadas por el sindicato obrero.³⁴

El protagonismo de las dirigencias partidarias locales, encabezadas por Valeros, constituyó otra faceta clave del dinamismo político de esta etapa. El diputado ucrista era uno de los principales emergentes de una escena política

Abraham (presidente) y Aldo Chabán (secretario) (*La Fundación. Órgano informativo de la Fundación Bella Vista*, 2015, n.º 2, p. 42).

³³ Los miembros de la Comisión fueron Manuel Roberto Valeros, Felipe B. Salto, Tomasa Varela de Graneros, Joaquín Chaya, María del Carmen Ledesma, María Leonor Vergara, José Vito Mercado, Elías Abraham, Manuela Salazar y José Alfredo Saire. Se trataba de dirigentes locales del ámbito cultural, educativo y comercial local de activa participación en la vida comunitaria.

³⁴ *La Gaceta*, 1960. 3 de octubre.

reformulada tras el golpe de Estado de 1955, en razón de la proscripción peronista, la división del radicalismo y una mayor competencia interpartidaria. En el seno de la UCR, los núcleos intransigentes fueron liderados por una camada de dirigentes jóvenes que desplazaron a los referentes forjados durante la etapa de García Fernández. Tras las elecciones de convencionales constituyentes de julio de 1957, que ratificaron la hegemonía peronista a través del voto en blanco, la UCRI bellavisteña promovió una audaz estrategia de incorporación de sectores del movimiento derrocado, enmarcada en el ensayo “integracionista” del radicalismo a nivel provincial y nacional. Las incorporaciones más resonantes de la UCRI local fueron el exsecretario general del sindicato, Felipe B. Sosa, y el exministro de gobierno durante la gestión Riera, Ramón Bustos, junto a otros dirigentes peronistas de la villa y el ingenio (Lichtmajer, 2014).

Ante un mapa electoral fragmentado, la UCRI bellavisteña sacó ventaja en las elecciones de 1958 y capitalizó el ascenso del líder del partido a nivel provincial, Celestino Gelsi, a la gobernación. En los comicios de 1960, en consonancia con el debilitamiento de la estrategia integracionista y el retroceso de la UCRI a nivel provincial, el partido cedió terreno en Bella Vista. Se ubicó en el tercer lugar, por detrás del voto en blanco y los apoyos cosechados por el partido Defensa Provincial Bandera Blanca.³⁵ Esta organización se sustentaba electoralmente en la villa cívica y era liderada por un prestigioso miembro de la comunidad árabe local, Eduardo Yubrin.³⁶ La UCRI se recuperó durante el bienio final de Gelsi en el poder (1960-1962), lo cual permitió a sus dirigencias sobrevivir a la debacle frondizista y mantener un lugar influyente en la escena partidaria local, por detrás del peronismo.

³⁵ Fundado en 1927 por dirigentes del Partido Liberal (conservador), dicho partido fue un actor relevante de la vida política tucumana desde entonces hasta la década de 1980 (Parra, 2005; Lichtmajer, 2017).

³⁶ *La Gaceta*, 1962. 16 de marzo.

Principal animador de la escena local, el movimiento derrocado en 1955 atravesó los ciclos de proscripción y participación limitada que pautaron la vida política hasta 1966 (Lichtmajer, 2020b). El control del sindicato otorgó al peronismo bellavistense una apoyatura clave en razón del lugar estratégico del gremio en la vida política local y de su creciente influencia dentro del movimiento derrocado, a tono con el proceso observado en escala provincial y nacional. La centralidad del sindicalismo contrastaba con la intermitencia de las filas partidarias, cuyo accidentado derrotero se movió al ritmo de los ciclos de apertura y clausura definidos por los gobiernos civiles y militares desarrollados entre 1955 y 1966. A pesar de las dificultades de la dirigencia partidaria por sostener una participación constante y de la creciente influencia del sindicalismo dentro del movimiento, la construcción de liderazgos locales precisó combinar los apoyos de ambas ramas del movimiento, en sintonía con lo observado entre 1945-1955.

La primera organización partidaria “oficial” del peronismo tras el golpe, el Partido Justicialista (1958-1959), fue liderado en Bella Vista por un exdirigente sindical de filiación rierista, que había ocupado el cargo de delegado comunal hasta 1955.³⁷ Tras el *impasse* de 1960, signado por el voto en blanco, en las trascendentales elecciones de marzo de 1962 el peronismo se dividió en los partidos Blanco y Laborista. En sintonía con los liderazgos sindicales bellavistenses previos a 1949, Perdiguero se opuso a las dirigencias “oficiales” referenciadas en Riera. El exgobernador era por entonces una figura de alcance nacional y uno de los principales interlocutores con Perón en el exilio.

A pesar de no ocupar cargos formales en las organizaciones políticas del peronismo durante el frondismo, Riera mantuvo un lugar influyente en las esferas de decisión a nivel provincial y expresó las posiciones mayoritarias del movimiento en Tucumán. En 1960 promovió el voto

³⁷ Nos referimos a Francisco Trimarco (*La Gaceta*, 1959. 23 de febrero).

el blanco, a tono con la directiva de Perón desde el exilio. Dos años más tarde, su candidatura a gobernador fue apoyada por el expresidente, por los organismos de conducción del peronismo a nivel nacional (Consejo Coordinador y Supervisor, 62 Organizaciones) y por las organizaciones sindicales provinciales. En ese marco obtuvo los electores necesarios para ser reelecto gobernador, aunque la anulación de los comicios decretada por el PEN clausuró esa posibilidad. La popularidad del exgobernador en Bella Vista se visibilizó tanto en el “caluroso recibimiento” del que fue objeto, al visitar la localidad durante la campaña electoral, como en las fuertes adhesiones cosechadas por el Partido Laborista en los comicios.³⁸ En las antípodas de Riera, la *performance* electoral del Partido Blanco debilitó la posición de Perdiguero en las filas peronistas locales.³⁹ La derrota de Perdiguero marcaba, al igual que lo sucedido con sus antecesores entre 1946-1949, los límites con los que se topó el gremialismo bellavisteño a la hora de rubricar un pasaje de la arena sindical hacia el terreno político y las dificultades para construir liderazgos disidentes de las conducciones partidarias locales.

Sobre ese telón de fondo, las elecciones del sindicato (mayo de 1963) enfrentaron al secretario general Perdiguero con Atilio Santillán, figura ascendente en el mapa político-sindical de Bella Vista. Se trataba de un joven trabajador del ingenio que se inició tempranamente en la militancia vecinal, a través de las organizaciones del ámbito deportivo, estudiantil y cultural.⁴⁰ Esta faceta, desplegada

³⁸ *La Gaceta*, 1962. 19 de marzo.

³⁹ *La Gaceta*, 1962. 23 de febrero.

⁴⁰ Santillán nació en Bella Vista en 1935. Su padre era trabajador del ingenio. Cursó sus estudios primarios en la localidad para formarse luego en la Escuela Técnica Número 2 de San Miguel de Tucumán, donde se incorporó a la Juventud Obrera Católica. Su participación en el asociacionismo comunitario tuvo temprana expresión: participó del núcleo fundador del Ateneo Estudiantil Sarmiento (1953) y del Centro Cultural José Manuel Estrada en 1960, a la par que ejerció como secretario general del Club Sportivo Bella Vista en dos períodos. Entró a trabajar al ingenio en 1957, en el cargo de fre-

desde mediados de los años cincuenta, se combinó con una activa participación en las 62 Organizaciones y las filas partidarias del peronismo. En las elecciones sindicales de abril de 1961, con 25 años de edad, Santillán presentó una lista opositora a la conducción de Perdiguero, que finalmente obtuvo el segundo lugar.⁴¹ A contrapelo del secretario general del sindicato, Santillán construyó una relación fluida con el rierismo y las organizaciones partidarias del peronismo bellavisteño. En las elecciones de marzo de 1962, Santillán fue electo convencional constituyente del Partido Laborista por el departamento Famaillá, aunque la anulación de los comicios le privó el acceso a dicho cargo. A fines de ese año, Santillán fue ungido secretario general de la filial bellavisteña del Partido Justicialista, reorganizado tras la proscripción frondizista.⁴² El flamante líder partidario expresó su lealtad a los “mandos naturales” del peronismo, encarnados en Tucumán por el bellavisteño Amado Juri, cuñado de Riera y perteneciente a su círculo político. Ratióficó, de ese modo, su capacidad de recrear un modelo de dirigente que, sin perder el eje de actuación en el mundo gremial, construyó una relación armónica con las conducciones político-partidarias del peronismo local, a contrapele de Perdiguero, histórico contendiente del rierismo.⁴³

Santillán condensó, asimismo, una sólida formación político-sindical con un carisma y una oratoria elaborada y punzante que lo destacaron entre sus pares y contrastaron con el secretario saliente. De acuerdo a Rolando González, lugarteniente de Perdiguero, este era un dirigente

sador (Siviero, 1989; Salazar y Valeros, 2012; Nassif, 2016). Véase también *Revista Protagonistas*, 2009, n.º 2, p. 12.

⁴¹ *La Gaceta*, 1961. 28 de abril.

⁴² Secundó en el cargo a Carlos Corbalán (*La Gaceta*, 1962. 26 de noviembre).

⁴³ *La Gaceta*, 1963. 25 de enero. Paralelamente a las funciones partidarias, Santillán ocupó el cargo de delegado por el ingenio Bella Vista en la Agrupación Política Azucarera, organización liderada a nivel provincial por Benito Romano y referenciada en la figura de Andrés Framini.

campechano [...] de línea recta, que ha peleado bien en defensa de los trabajadores, y que no aflojaba cuando era necesario no aflojar [...] muy querido, muy respetado en el gremio [...] pero [...] no ha sido un hombre de muchas luces.⁴⁴

Apuntalado sobre esas bases múltiples, Santillán venció en mayo de 1963 al secretario en funciones.⁴⁵ En el crecimiento de las adhesiones, que pasaron de 387 a 893 en un lapso de dos años, influyeron los apoyos que obtuvo entre los trabajadores de surco, cuyo notable peso cuantitativo lo erigía en un actor clave en la dinámica electoral. La mudanza de lealtades hacia Santillán en los surcos fue trascendental para la derrota de Perdiguero, como lo reconocía años más tarde el propio González.⁴⁶ El control de la poderosa filial bellavisteña permitió a Santillán ocupar un rol protagónico en FOTIA. En un contexto de fuertes disputas intestinas, a tono con las divergencias que surcaban al sindicalismo peronista a lo largo del país, se alineó con las posiciones más confrontativas dentro de la Federación. Fue un activo promotor de las medidas de fuerza adoptadas por FOTIA en julio de 1963, en el contexto de los comicios nacionales y provinciales en los que se proscribió al peronismo, así como de las huelgas enmarcadas en el plan de lucha de la Confederación General del Trabajo (CGT) (1963-1964). En las elecciones sindicales de noviembre de 1964, Santillán fue reelecto al mando del sindicato bellavisteño, lo que revalidó su liderazgo entre los trabajadores de fábrica y surco.⁴⁷

⁴⁴ Entrevista a Rolando González realizada por Atilio Santillán (h), Bella Vista, 30 de octubre de 1999.

⁴⁵ *La Gaceta*, 1963. 9 de mayo.

⁴⁶ En la campaña para las elecciones sindicales de 1963, González y Perdiguero se dirigían a la colonia Pondal: "...cuando íbamos en la camioneta, hubo un trabajador [del ingenio], de apellido González [...] nos dice se van a gastar, ya le vamos a ganar con Santillán, se va a acabar la hora de Perdiguero" (entrevista a Rolando González, cit).

⁴⁷ *La Gaceta*, 1964. 12 de noviembre.

La diversidad de esferas de acción y pertenencias sintetizadas en la trayectoria de Santillán son fecundas para recuperar la mirada de Simona Cerutti sobre el carácter relacional, contextual y móvil del proceso de construcción de categorías de análisis sociales. La perspectiva de Cerutti rehúye las definiciones rígidas (por tipos representativos de “órdenes sociales” –en las sociedades de antiguo régimen– o por categorías socioprofesionales). En su lugar, propone una mirada contextual y dinámica, que pondera su carácter múltiple en función de las diferentes coyunturas y esferas de acción desplegadas, sucesiva y alternativamente, en el territorio (Cerutti, 1995).⁴⁸ Esta perspectiva puede iluminar la trayectoria de Santillán, donde confluyen adscripciones múltiples (vecino, trabajador del ingenio, dirigente estudiantil, deportivo, cultural, sindical y partidario, etc.). Discernible con cierta claridad en su caso, en razón de una trayectoria de renombre y una proyección a escala provincial y nacional, esta lógica no fue ajena a los demás individuos aquí recuperados (Riera, Sosa, Valeros, Albornoz, Mercado, entre otros), cuyos derroteros se construyeron sobre la base de pertenencias móviles y dinámicas en razón de las coyunturas y las tramas en las que se referenciaron.

La Comisión Intersindical frente a la crisis del ingenio. Acciones defensivas locales, tensiones provinciales (1965)

La profunda crisis de la industria azucarera tucumana desarrollada entre 1964-1965 afectó severamente al ingenio Bella Vista (Bravo, 2017). El establecimiento enfrentaba un proceso de descapitalización que le impidió afrontar la zafra y cumplir las obligaciones con los actores productivos: debía dos meses de salario, aguinaldo y vacaciones a obreros

⁴⁸ Agradezco esta referencia a Ignacio Sánchez.

y empleados, además de mantener importantes deudas con los cañeros. Como respuesta a esta situación, en enero de 1965, una asamblea de empleados y trabajadores definió la toma de la fábrica y el desalojo de los propietarios en reclamo por el pago de haberes. En un contexto de fuertes confrontaciones entre el colectivo obrero y la patronal, las articulaciones entre ambos segmentos laborales se reflataron al formalizarse, al igual que en 1949 y 1961, una Comisión Intersindical liderada por las autoridades de los gremios de empleados y trabajadores. A diferencia de las experiencias anteriores, sin embargo, la Intersindical de 1965 tuvo un carácter sostenido en el tiempo y se extendió hasta 1968, cuando fue reemplazada por la Comisión Pro-Defensa.

La grave situación del ingenio alentó las articulaciones de la Intersindical con los actores comunitarios que adhirieron a la protesta. Los comerciantes amplificaron la práctica instaurada en 1959, al combinar el cese de actividades con la donación de mercadería a los ocupantes de la fábrica, contribuyendo al sostenimiento de la protesta.⁴⁹ Las dirigencias locales de la UCRI y la Juventud Peronista también adhirieron a la toma.⁵⁰ En el nivel provincial, las solidaridades con la protesta abarcaron a las representaciones legislativas de la UCRI y el Partido Demócrata Cristiano, opositoras a la gestión, que elevaron los reclamos de pronta resolución al gobernador Lázaro Barbieri (UCR del Pueblo) y al presidente Arturo Illia. Los apoyos del ámbito sindical, por su parte, emanaron de la conducción provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado y de FOTIA, que propuso la incautación del ingenio y la formación de un directorio constituido por obreros, empleados y cañeros con participación del Estado.⁵¹

El compromiso del asociacionismo católico con la protesta se manifestó a través de diferentes acciones. La filial

⁴⁹ *La Gaceta*. 1965. 29 de enero.

⁵⁰ *La Gaceta*. 1965. 2 de febrero.

⁵¹ *La Gaceta*. 1965. 30 de enero.

local de la JOC señaló que la adopción de “medios que no son precisamente apropiados”, en referencia a la toma del ingenio, se justificaba en razón de la insensibilidad empresaria y el “derecho natural” de los trabajadores a reclamar “lo necesario para la vida propia y la de su familia”, posición inspirada en los mensajes del papa Pío XII y la encíclica *Mater et Magistra* de Juan XXIII.⁵² En el marco de la toma del ingenio, el cura Albornoz ofició una misa en la que rogó por la pronta solución del problema salarial. Del oficio “participó casi la totalidad de la población” y culminó con una procesión presidida por la imagen de San José, santo patrono de Bella Vista.⁵³

Apuntalada por el multitudinario apoyo a la medida de fuerza, la Comisión anunció la “segunda etapa del plan de lucha”, que consistía en una “gran movilización de las fuerzas vivas”. De esa forma, procuraba ensanchar las bases de apoyo a la protesta y plasmarla en nuevas acciones masivas. En tren de expresar su descontento, la Intersindical recibió en custodia las libretas de enrolamiento de los trabajadores, los empleados y sus familias para que determinaran si iban a ser “quemadas en plaza pública como señal de protesta”, acción que suponía una abierta impugnación al sistema de representación política.⁵⁴

La amplia construcción de solidaridades no implicó, sin embargo, la ausencia de tensiones y conflictos con otros actores afectados por la crisis. A poco de iniciarse la toma, la Intersindical repelió a un grupo de productores cañeros que, patrocinados por UCIT, intentaron ingresar al establecimiento para reclamar por el pago de materia prima, aunque no objetó que los productores realizaran la protesta en los portones del ingenio.⁵⁵ Al definir los contornos

⁵² *La Gaceta*. 1965. 30 de enero.

⁵³ *La Gaceta*. 1965. 31 de enero.

⁵⁴ *La Gaceta*. 1965. 1 de febrero.

⁵⁵ Los dirigentes debieron realizar un acto en los portones del ingenio. La protesta fue liderada por los dirigentes de UCIT Víctor Mure y Luis García (*La Gaceta*, 1965. 31 de enero).

de la medida de fuerza, excluyendo a las reivindicaciones cañeras, la Intersindical buscaba priorizar el reclamo salarial y diferenciarse de un actor cuyo rol en la estructura productiva había generado históricas tensiones con los trabajadores, en particular con los obreros de las fincas cañeras (Bravo, 2017). En el terreno partidario, la adhesión a la medida manifestada por la Juventud Comunista provincial también fue objeto del rechazo de la Intersindical.⁵⁶ Asimismo, la entidad “repudió enérgicamente” las comunicaciones de solidaridad de la Delegación Regional de la CGT y de la conducción de FEIA por considerarlas tardías (se emitieron a las tres semanas del conflicto). En estas tensiones pesaban menos la puja de intereses sectoriales (cañeros) o las diferencias político-ideológicas (Juventud Comunista) que las disputas al interior de los órganos de representación de empleados y trabajadores. En el primer caso, la filial bellavisteña era opositora a la conducción de la Federación, conflicto que derivó en su desafiliación de la organización provincial.⁵⁷ La Delegación Regional de la CGT, por su parte, era conducida por el dirigente panadero Andrés Addur, de filiación vandorista, y mantenía un público enfrentamiento con FOTIA. Esta disputa incidió en el ambiguo respaldo a la medida de fuerza de los trabajadores bellavisteños, situación que fue denunciada por el sindicato local y contribuyó a las presiones de FOTIA para desplazar a Addur, en febrero de 1965, y su reemplazo por un representante de la Federación.⁵⁸

Como lo revelaba la amplia trama de solidaridades articuladas en torno a la protesta, el problema del ingenio trascendía la órbita laboral para proyectarse a la comunidad en su conjunto e involucrar a diversos actores del medio provincial. La medida de fuerza se mantuvo hasta fines de

⁵⁶ *La Gaceta*, 1965. 1 de febrero.

⁵⁷ *La Gaceta*, 1965. 21 de junio.

⁵⁸ En la Delegación Regional de la CGT, asumió Rafael di Santis, del ingenio Mercedes (*La Gaceta*, 1965. 20 de febrero).

febrero, al anunciarse el pago parcial de las deudas salariales y el comienzo de la zafra, a través de un préstamo del Banco Nación que el gobernador Barbieri gestionó ante el PEN. Días antes del anuncio, FOTIA había amenazado con la “ocupación de las fábricas de la provincia” si no se atendían las reivindicaciones de la Intersindical.⁵⁹

Los posicionamientos de los actores políticos, sindicales y gubernamentales frente a la protesta bellavisteña se enmarcaban, asimismo, en un contexto provincial signado por los comicios legislativos (provinciales y nacionales) y las elecciones de autoridades de FOTIA, programados para marzo de 1965. En la contienda legislativa, se impuso Acción Provinciana, partido que reunió a los sectores dominantes del peronismo provincial, incluida una importante representación de FOTIA y las dirigencias políticas referenciadas en Riera y Juri (candidato a diputado nacional en primer término y presidente del partido, respectivamente).⁶⁰ En Bella Vista se reeditó la correlación de fuerzas favorable al peronismo y la UCRI ocupó el segundo lugar.⁶¹ El aceptable desempeño electoral del radicalismo, en contraste con su repliegue a nivel provincial, ratificó la centralidad de las dirigencias locales de la UCRI y habilitó la reelección de Valeros.⁶² Conjuntamente a los casos mencionados, la presencia de la dirigencia bellavisteña en las listas legislativas fue múltiple y diversa.⁶³ Por su parte,

⁵⁹ *La Gaceta*, 1965. 23 de febrero.

⁶⁰ Por detrás de Acción Provinciana, se ubicaron la Unión Cívica Radical del Pueblo, apunyalada desde el Ejecutivo provincial, la Unión Cívica Radical Intransigente y los peronistas Unión Popular (apoyada por el vandomismo) y Justicia Social.

⁶¹ *La Gaceta*, 1965. 15 de marzo.

⁶² En el balance de los comicios, Gelsi reivindicó a la gente “joven y trabajadora” de la UCRI de Bella Vista, que “demostró que puede ser un ejemplo para otros correligionarios” (*La Gaceta*, 1965. 15 de marzo).

⁶³ Fiel a su trayectoria previa, Francisco Perdiguero se candidateó por una organización peronista disidente a Riera (Justicia Social). Las listas legislativas de los partidos Defensa Provincial Bandera Blanca (Eduardo Yubrin) y Acción Popular Argentina (Francisco Trimarco) también fueron encabezadas por dirigentes oriundos de Bella Vista (*La Gaceta*, 1965. 14 de marzo).

en las elecciones de FOTIA, el cargo de secretario general recayó en Atilio Santillán, que se convirtió en el dirigente más joven en ocupar ese cargo en la historia de la Federación. Su encumbramiento se concretaba tras liderar la filial bellavistaña por un bienio, gestión que culminó con la protesta de la Intersindical. Paralelamente a su acción en el campo gremial, en el terreno político-partidario Santillán mantuvo una sólida adhesión al peronismo “oficial” y fue un activo protagonista de la campaña electoral de Acción Provinciana, a la par de Riera y Romano. En efecto, las transformaciones en la representación política y gremial revelaban la fortaleza de las redes locales y su capacidad para proyectarse al ámbito provincial.

Mientras tanto, hacia finales de 1965, la situación de la fábrica se descalabraba. La incertidumbre respecto al futuro del establecimiento reeditó las tramas de articulación locales y generó nuevos episodios de protesta, cuya virulencia y radicalidad fueron en ascenso. Al anunciarse el cambio de titularidad del establecimiento, en noviembre de 1965 los “comerciantes mayoristas y minoristas” de la localidad convocaron a una asamblea de “vecinos, obreros y empleados del ingenio y dirigentes gremiales” que resolvió constituir una comisión especial para recabar información sobre la situación del ingenio. El control de la comisión por parte de la UCRI, de cuyo seno procedían los tres miembros, le otorgaba un sesgo partidario definido y revelaba una acción en paralelo a las poderosas tramas locales del peronismo, situación refrendada por la ausencia de las autoridades del sindicato obrero (Bravo y Lichtmajer, 2019).⁶⁴ Paralelamente, la Intersindical resolvió tomar de rehén al nuevo administrador, el coronel Eduardo Escudé, hasta que la empresa no solucionase “los problemas de pago”.⁶⁵

⁶⁴ Formaron la comisión un comerciante, un empleado y un trabajador del ingenio. Se trataba, en todos los casos, de dirigentes de extracción radical intransigente. Paralelamente, el diputado Valeros elevó al presidente Illia un pedido de solución a la crisis del establecimiento (Bravo y Lichtmajer, 2019).

⁶⁵ *La Gaceta*, 1965. 17 de diciembre.

En ese marco se produjo el asesinato del dirigente obrero Camilo González, miembro de la Comisión Directiva del sindicato, cuando trataba de calmar a un grupo de zafreros de origen santiagueño que reclamaban sus haberes. La muerte de González exacerbó el clima social a lo largo de la provincia. El féretro fue trasladado a la casa de gobierno de San Miguel de Tucumán, centro del poder político provincial, y exhibido en la explanada como señal de indignación generalizada. Santillán, en nombre de FOTIA, atribuyó el hecho a “la explotación oligárquica de la clase trabajadora” y a “la inutilidad de un gobierno” que no sabía “solucionar los problemas sociales”.⁶⁶ Para mitigar el clima social, la legislatura votó la ley de expropiación, incautación y ocupación de ingenios.⁶⁷ Acto seguido, y con el establecimiento bellavisteño bajo control de la Intersindical, el PE anunció su expropiación. Se trataba de una medida audaz, aunque emanada de un gobierno provincial cuya debilidad constitutiva, visible desde su acceso al poder en 1963, se fue acentuando a medida que transcurrieron los meses. Hacia fines de 1965, cuando se definió la expropiación, el gobierno de Barbieri se encontraba en franco proceso de disgregación, con múltiples frentes de conflicto abiertos y una imposibilidad por enderezar el rumbo político de la provincia (Lichtmajer, 2017).⁶⁸

Se abrió en ese marco una disputa legal por el control del ingenio que involucró a la Comisión, la cual resolvió no entregarlo hasta tanto los nuevos propietarios exhibieran documentación que acreditara la compra. Con este acto los trabajadores tomaban “posesión” de la empresa, desconociendo legitimidad a los nuevos dueños. Las resistencias en

⁶⁶ *La Gaceta*, 1965. 8 de diciembre.

⁶⁷ La misma ley había sido sancionada en 1961, luego de la “Marcha del Hambre”, pero no alcanzó rango legal al no ser reglamentada. En 1962 fue derogada durante la fugaz intervención de Carlos Imbaud (Campi y Bravo, 2010).

⁶⁸ Sobre la política azucarera de Barbieri, remitimos al texto de Ignacio Sánchez incluido en este volumen.

su contra se acentuaron con el transcurso de los meses, al incumplirse las promesas realizadas a los trabajadores y evidenciarse severas irregularidades en el manejo de la empresa.

El cierre del ingenio y las formas del “comisionismo defensivo” (1966-1968)

El forcejeo por el control del ingenio se interrumpió abruptamente en agosto de 1966, cuando la dictadura militar liderada por Juan Carlos Onganía decretó la intervención de 7 ingenios azucareros de Tucumán, entre ellos el Bella Vista, con el objetivo de cerrarlos o desmantelarlos por considerarlos ineficientes.⁶⁹ La intempestiva decisión adoptada por el PEN abrió un nuevo capítulo en la larga sucesión de articulaciones locales fraguadas en torno al devenir del ingenio.

Tras la publicación del decreto se formó una Comisión Pro Ingenio Bella Vista (también llamada Comisión Vecinal Pro Sostentamiento del Ingenio). En consonancia con la efímera entidad formada en noviembre de 1965, la Comisión Pro Ingenio fue impulsada por las “fuerzas vivas” (asociaciones comerciales, deportivas y gremiales) de la localidad, que convocaron a una asamblea de vecinos para “defender el mantenimiento de la única fuente de trabajo del lugar”.⁷⁰ Formaron la Comisión Pro Ingenio el exdiputado provincial Valeros (presidente), el titular del gremio de empleados del ingenio (FEIA, José Vito Mercado), un representante de los productores cañeros (Adib Rasuk), un obrero

⁶⁹ Se designó un interventor militar para administrar el cierre de los ingenios y se militarizó el espacio de la fábrica para debilitar la resistencia obrera. De los ingenios intervenidos, el Bella Vista fue el único que siguió funcionando, en cuanto se lo autorizó a moler la totalidad de su propia materia prima (Bravo, 2017: 221).

⁷⁰ *La Gaceta*, 1966. 29 de agosto.

calificado del establecimiento agroindustrial (Dante Oviedo) y el cura párroco (Albornoz). La participación de estos actores, permeados, a su vez, por múltiples adscripciones locales, amplió las bases de la Comisión, ensanchando los apoyos recibidos a fines de 1965. En particular, la presencia del cura, así como de Mercado, dirigente de Acción Católica, tendió puentes con el asociacionismo católico, representado en la asamblea por la Parroquia San José Obrero y la Juventud Obrera Católica. Aunque ensanchada respecto a su antecesora, la composición de la entidad reeditaba dos rasgos de su antecesora de noviembre de 1965: por un lado, la ausencia de representantes del sindicato obrero, nucleados en la Comisión Intersindical, en paralelo a la Comisión Pro Ingenio; por el otro, el protagonismo de las dirigencias radicales locales encarnadas en Valeros y Oviedo.⁷¹

En la asamblea constitutiva, se buscó destacar la “amplia colaboración de los sectores afectados: cañeros, obreros, comercio, todos dispuestos a sacrificar sus propios intereses a fin de que el problema tenga solución satisfactoria”.⁷² En ese marco, el documento fundacional calificó el cierre del ingenio como “un crimen económico”, en cuanto se trataba de una “fábrica eficiente, ubicada en zona de óptimos rendimientos”. En consecuencia, según la comisión, la clausura se justificaba en ingenios “obsoletos cuyos costos técnicos de fabricación resultan antieconómicos o que por su posición geográfica deban trabajar con materias primas de bajos rendimientos”. La propuesta concreta era mantener el establecimiento como “base para la expansión industrial” mediante la explotación de productos subsidiarios del azúcar (bagazo, alcoholes, ron, cera, plásticos, etc.).⁷³ De modo que la comisión utilizó la argumentación oficial, centrada en la eficiencia, para diferenciar a Bella

⁷¹ En las elecciones de marzo de 1965, Dante Oviedo fue candidato a diputado provincial por la UCRI, en la lista encabezada por Valeros (*La Gaceta*, 1965. 14 de marzo).

⁷² *La Gaceta*, 1966. 29 de agosto.

⁷³ *La Gaceta*, 1966. 5 de septiembre.

Vista de otros establecimientos y lograr la supervivencia de la fábrica, objetivo primordial de la entidad.

En ese marco, la comisión manifestó disposición para intervenir en los debates y las gestiones en torno al destino de la fábrica. Formó parte de la comitiva oficial que, encabezada por el gobernador de facto Fernando Aliaga García, visitó la fábrica en septiembre de 1966. Sin embargo, la voluntad de la comisión de erigirse en interlocutora de las autoridades naufragó y, tras participar de las gestiones para asegurar la continuidad de la fábrica, la entidad se desarticuló. Las causas de este desenlace no son claras, aunque puede inferirse que el logro de su principal objetivo, mantener la fábrica en funcionamiento, sumado a la poca receptividad de las autoridades a hacerla parte de la gestión del ingenio, contribuyeron a él.

Con el transcurso de los meses, la radicalización de la crisis azucarera y la visibilización de las graves consecuencias del cierre de ingenios recrudecieron la situación social en la provincia. En diciembre de 1966, se realizaron comicios de las filiales de FOTIA, ratificándose el liderazgo provincial de Santillán y el de sus aliados en Bella Vista.⁷⁴ En enero de 1967, la Federación anunció un plan de lucha para repudiar la política azucarera y forzar su rectificación, medidas de fuerza que fueron duramente reprimidas por el gobierno de Aliaga García.⁷⁵ En ese contexto conflictivo, se produjo, en las calles de Bella Vista, el asesinato de la dirigente peronista Hilda Guerrero de Molina, esposa de un obrero despedido del ingenio Santa Lucía. A poco más de un año del asesinato de González, la muerte de Molina generó un nuevo proceso de conmoción social en la localidad, que fue escena de enfrentamientos entre los trabajadores y la policía, y tuvo notables repercusiones

⁷⁴ *La Gaceta*, 1966. 1 de diciembre.

⁷⁵ *La Gaceta*, 1967. 3 de enero.

a nivel provincial y nacional (Nassif, 2016; Bravo y Lichtmajer, 2019).

La reacción represiva del gobierno forzó el repliegue de FOTIA, cuya personería gremial fue suspendida en marzo de 1967. La embestida contra la dirigencia sindical de FOTIA se reforzó con la formación, en octubre de ese año, de la Federación de Obreros de Surco de la Industria Azucarera y Agropecuaria de Tucumán (FOSIAAT), entidad que aspiraba a representar a los sindicatos de surco y estaba liderada por Norberto Campos, un opositor a la conducción de Santillán. El cisma de Campos debilitó a FOTIA y tuvo eco entre las dirigencias de numerosas filiales, que adhirieron a la entidad y desafiaron a las autoridades vigentes. Se trataba, por cierto, de un hecho inédito en la trayectoria de la Federación, que conllevaba un desafío frontal a la autoridad del secretario general de la entidad. Debilitado en el frente provincial, Santillán logró mantener la unidad en la filial bellavisteña, desenlace que puede atribuirse a su fuerte predicamento en la localidad y a la capacidad de las dirigencias gremiales del ingenio por neutralizar los atisbos secesionistas entre los obreros de surco.

Sobre ese telón de fondo, los retrocesos en las condiciones laborales y los despidos en los ingenios se profundizaban en la provincia, tornando dramáticos los niveles de desocupación y pauperización a lo largo y ancho del espacio azucarero. En este panorama sombrío, nuevos actores contribuyeron a impulsar la resistencia obrera y amplificaron las articulaciones locales en torno a la defensa del ingenio. En este proceso tuvieron injerencia dos dimensiones centrales de la dinámica político-sindical a nivel nacional: la creación de la Confederación General de Trabajadores de los Argentinos (CGTA) y la del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM). El padre Albornoz, párroco de Bella Vista, fue uno de los adherentes del MSTM en

Tucumán (Santos Lepera y Folquer, 2017: 118).⁷⁶ Por su parte, FOTIA, presidida por Santillán, participó activamente en la creación de la central sindical. Estos vínculos influyeron en los pronunciamientos y las acciones locales contra los nocivos efectos sociales de la política azucarera, que recrudecieron a lo largo de 1968.

En un contexto signado por las incertidumbres respecto al futuro de la fábrica, la patronal buscó avanzar sobre las organizaciones gremiales con el fin de desarticular los focos locales de resistencia. En febrero de 1968, la empresa despidió a 7 dirigentes del sindicato de empleados, incluido su secretario general. En presencia del sacerdote Albornoz, una asamblea de empleados y asesores jurídicos de la entidad llamó a reforzar las acciones conjuntas con el sindicato obrero e invitó “a la Iglesia y las fuerzas vivas a solidarizarse con los trabajadores despedidos”.⁷⁷

Dos meses más tarde, la empresa suspendió a los miembros de la Comisión Directiva del sindicato obrero, acusados de cometer “injurias a los intereses de la empresa, relajar la disciplina en el lugar y hora del trabajo efectuando reuniones por cuestiones ajenas a las gremiales y paralizar las actividades”.⁷⁸ La acusación aludía a la campaña pública de la Comisión Directiva, que difundió sus demandas en los medios de prensa y solicitó una audiencia con las autoridades provinciales para reclamar una solución frente a la situación del establecimiento, enumerando los graves efectos que la crisis provocaba en la comunidad (ausentismo escolar, cierre de comercios, etc.).⁷⁹ Los dirigentes obreros recibieron el apoyo de Víctor Gómez Aragón, máxima

⁷⁶ Sobre el rol del MSTM frente al cierre de los ingenios, remitimos al texto de Lucía Santos Lepera y Florencia Gutiérrez incluido en este volumen.

⁷⁷ *La Gaceta*, 1968. 17 de febrero.

⁷⁸ *La Gaceta*, 1968. 19 de abril.

⁷⁹ *La Gaceta*, 1968. 17 de abril.

autoridad de la Iglesia tucumana, que intercedió ante las autoridades provinciales para hacer oír los reclamos del sindicato local.⁸⁰

El 1 de mayo de 1968, CGTA y FOTIA organizaron una misa en la parroquia de Bella Vista. Durante el oficio, hicieron uso de la palabra el sacerdote Amado Dip, miembro fundador del MSTM, Julio Rodríguez Anido, el asesor legal del sindicato de Bella Vista, y el dirigente Lorenzo Pepe de la CGTA. El oficio debía finalizar con la tradicional procesión de San José Obrero, pero la policía dispersó la columna propinando bastonazos, gases y tiros de revólver. Se registraron numerosos heridos, entre ellos Dip.⁸¹

Al conocerse a finales del año 1968 la abultada deuda de la patronal con los trabajadores, las conjeturas sobre la posibilidad del cierre definitivo del ingenio crecieron en intensidad. El descrédito público de los propietarios y los sombríos pronósticos respecto al futuro de la fábrica precipitaron la formación de la CPD. En trabajos anteriores, detallamos el derrotero de esta singular experiencia de confrontación contra la dictadura de Onganía y los rasgos centrales –tales como la masividad de sus acciones de protesta, su capacidad para aglutinar al colectivo bellavisteño y su prolongado funcionamiento– que la convirtieron en una expresión exitosa del ciclo de “comisionismo defensivo” desarrollado en Tucumán a finales de la década de 1960 (Bravo y Lichtmajer, 2019).

⁸⁰ *La Gaceta*, 1968. 27 de abril.

⁸¹ *La Gaceta*, 1968. 19 de abril.



Marcha de la población de Bella Vista hacia San Miguel de Tucumán en apoyo a las gestiones de la CPD con el gobierno provincial, 26 de marzo de 1969. En lo alto (de espaldas) se observa a Manuel Valeros, secretario de la CPD. Fuente: Archivo del diario *La Gaceta* (Tucumán).

Intervenido el sindicato y clausurada la actividad partidaria, la CPD se propuso representar un sujeto colectivo, el “pueblo de Bella Vista”, a partir de la cooperación de las distintas redes locales en función de un objetivo común. Fue presidida por el cura párroco, acompañado por representantes del sindicato de obreros y empleados, representantes del asociacionismo católico, comerciantes, profesionales, pequeños industriales y cañeros.⁸² Adoptó una

⁸² El vicepresidente fue Marcelino Ledesma (industrial panadero y miembro de la Federación Económica de Tucumán), los secretarios fueron Manuel Valeros (dirigente ucrista y activista comunitario) y Raúl Chabán (miembro de la JOC y docente de la Escuela de Comercio de Bella Vista). El tesoro fue Eduardo Yubrin, comerciante y dirigente del partido Defensa Provincial Bandera Blanca. Los demás integrantes reforzaron la impronta multisectorial, al dar representación a la dirigencia sindical obrera (encarnada en Santillán, Julio Lescano, Luis Zapata y Damián Suárez), a los empleados del establecimiento (Carlos Corbalán y Ramón Vera) y a los productores cañe-

organización eficiente al formar distintas subcomisiones (de organización, prensa y propaganda, de movilización, de finanzas y de productores cañeros). El plantel nucleado en la CPD traía consigo una relevante tradición de activismo comunitario, en cuanto el grueso de sus miembros había participado de las instancias previas. A diferencia de su antecesora de 1966, así como de otras formas de articulación comunitaria, el vector sindical tuvo una activa participación en la CPD. Esta presencia fue relevante al ofrecerle experiencias de lucha y confrontación, facilitar el apoyo de las dirigencias gremiales nacionales, en particular la conducción de la CGTA, y confluir con una dinámica popular que aglutinó a distintos sectores. Esta trayectoria diferenció, por ejemplo, a la CPD bellavistena de la Comisión Pro Defensa del ingenio San Ramón, signada por las disputas entre la dirigencia sindical y los demás actores comunitarios (Santos Lepera y Sánchez, 2019).

La participación de las dirigencias sindicales no debe opacar, sin embargo, la nutrida trayectoria de activismo comunitario del resto de sus miembros, que habían participado –de manera eventual o constante– en las instancias detalladas más arriba. En efecto, la trayectoria de la CPD resultaba inescindible de una gimnasia asociativa que la antecedió y que enmarca su derrotero en un vasto ciclo de articulaciones locales, colectivo amplio del que el sindicalismo era tan solo uno de los engranajes. El liderazgo del sacerdote legitimó la entidad, alentó la participación de las esferas provinciales y nacionales del MSTM y modeló las prácticas sociales adoptadas, que adquirieron un sentido confrontador. En sintonía con esto, el asociacionismo católico tuvo presencia en la CPD y desplegó un rol activo durante las protestas. Paralelamente, la lógica multisectorial de la entidad (comerciantes, cañeros, profesionales e industriales locales) robusteció los canales de intermediación

ros (Ángel Saifán) (*La Fundación. Órgano informativo de la Fundación Bella Vista*, 2018, n.º 5, p. 8).

locales y provinciales. Su capacidad aglutinante no debe hacernos soslayar, por otra parte, la ausencia de representación de colectivos como las mujeres y el estudiantado. Si bien ambos grupos no habían tenido relevancia en las formas de articulación previas, enmarcando su ausencia en la CPD dentro de una tradición más amplia, su activa participación en las acciones de protesta marca una disonancia entre el activismo de sus miembros y la nula representación en la entidad que coordinó la resistencia local.

Por otro lado, un factor minimizado por las interpretaciones previas fue la relevancia del vector partidario en el potencial articulador de la CPD (Valeros y Salazar, 2012; Nassif, 2016).⁸³ Aunque la entidad tenía un carácter apartidario, el anclaje de sus miembros en las organizaciones políticas locales, prohibidas desde septiembre de 1966 por el gobierno de Onganía, constituye una variable de relevancia para explicar su capacidad para articular las acciones colectivas. En sus filas coexistían los líderes de las tres organizaciones más influyentes de la vida política local: peronismo (Santillán, Corbalán y Lescano), UCRI (Valeros) y Defensa Provincial Bandera Blanca (Yubrin). La inédita confluencia de las dirigencias partidarias puede explicarse tanto por la gravedad de la amenaza que se cernía sobre el ingenio, cuyo cierre dejaría a la comunidad sin su principal fuente de sustento, como por la suspensión de la competencia partidaria, en razón de la prohibición definida por el gobierno de facto. El frontal cuestionamiento a la representación partidaria que desplegó el Onganiato, sintetizado en la consigna del “tiempo político” como estadio final de la Revolución argentina, desdibujó *sine die* las esferas de competencia entre las organizaciones (De Riz, 2000). En ese contexto, la necesidad de “despartidizar” a la CPD contribuyó a que las dirigencias políticas confluyeran en

⁸³ Al respecto, Valeros señaló que “no se hacía política partidaria”, ya que “en general todos los partidos apoyaban y no había diferencias” (entrevista a Manuel Valeros realizada por Leandro Lichtmajer, 22 de abril de 2019).

una misma entidad. Al desdibujarse el horizonte de disputa, pudieron aunar esfuerzos en pos de una causa común como la defensa del ingenio.

A contramano de las experiencias previas, la confluencia de las dirigencias partidarias, permeadas, a su vez, por múltiples adscripciones locales, y su estrecha interlocución con los líderes sindicales locales reforzó el potencial articulador de la CPD. Asentada una amplia trama de apoyos, y rehuyendo deliberadamente las distinciones territoriales, sectoriales o políticas, la CPD pudo arrogarse el rol de representante de la comunidad para guiarla en las acciones de resistencia colectiva.

Consideraciones finales

Explorar el asociacionismo, la política y las formas de articulación locales de la comunidad de Bella Vista en el mediano plazo permitió situar la experiencia de la Comisión Pro Defensa del ingenio en una trama mayor. Este ejercicio –por definición parcial y acotado– procuró bosquejar una genealogía de los ciclos de protesta y activismo desplegados en la localidad, ponderando las tradiciones, los liderazgos y las formas de organización en los que abrevó la oposición al cierre del ingenio, en un contexto signado por la debacle de la agroindustria tucumana y la movilización popular en oposición a la dictadura de Juan Carlos Onganía.

El robustecimiento de la capacidad productiva del ingenio, el incremento poblacional y la expansión urbana en el marco del *boom* azucarero desarrollado en Tucumán desde el último tercio del siglo XIX alentaron en Bella Vista una temprana construcción de tramas asociativas. En una etapa signada por una febril expansión –del casco urbano, de los ámbitos de sociabilidad, de los servicios y prestaciones brindados por la patronal–, la dinámica local se robusteció a través de un amplio abanico de actores e

instituciones. Desde el punto de vista territorial y simbólico, el espacio bellavisteño fue pautado sobre la base de una configuración dicotómica, definida por la presencia de dos ejes articuladores situados en la “villa” y el “ingenio”. A tono con otros puntos del cordón agroindustrial azucarero, esta diferenciación se expresó en la fisonomía social y laboral y en las prácticas políticas.

La irrupción del peronismo trastocó las tramas comunitarias al reformular, bajo nuevas coordenadas, las experiencias de las décadas previas. La dinámica de la organización corporativa abarcó a trabajadores, empleados y cañeros, componentes centrales de la estructura productiva, cuyos intentos por formar entidades de representación sectorial se toparon con las históricas resistencias de la patronal. Por su parte, la sociabilidad católica local también encontró en el primer peronismo una etapa propicia para desarrollarse, al calor de la expansión de la institución eclesíástica en la provincia. Los reacomodamientos y el cambio en la correlación de fuerzas alentados por el peronismo también permearon el terreno político. La reformulación de las lealtades partidarias cuestionó la urdimbre tejida por la patronal y dio cauce a formas renovadas de representación colectiva. En ese marco, las dinámicas históricamente diferenciadas entre el ingenio y la villa modelaron el proceso de conformación del peronismo bellavisteño y se proyectaron en la conflictiva construcción de liderazgos locales. La puja entre las dirigencias sindicales y políticas, característica de la etapa formativa de ese movimiento a lo largo del país, tuvo un anclaje territorial y simbólico localmente situado, que se nutrió de las tradiciones encarnadas en los dos polos constitutivos de la comunidad. La huelga azucarera de 1949, verdadero parteaguas en la trayectoria del peronismo tucumano, fue sintomática de estas tensiones, al condensar tanto un episodio inédito de articulación entre trabajadores y empleados, como la dificultad por comprometer en sus demandas a las dirigencias partidarias y los sectores comerciales locales. Hacia la década de 1950, sin

embargo, las asperezas de la etapa formativa se desdibujaron y las redes partidarias y sindicales confluyeron bajo los parámetros de la “sociedad política” que caracterizó a la etapa final del ciclo peronista a lo largo del país. Al influjo del Estado, se generó una activa participación comunitaria a través de entidades políticas, gremiales, culturales, agrarias y juveniles. En la localidad bellavisteña, la “sociedad política” peronista reconoció en las dirigencias sindicales y partidarias dos engranajes clave de una dinámica más amplia, que incorporó a múltiples actores identificados con ese movimiento político.

La reformulación de la vida gremial y política, como consecuencia del golpe de Estado, y los efectos de la crisis de la actividad azucarera permearon la trayectoria comunitaria entre 1955 y 1964. Se trató de una etapa signada por la emergencia de nuevos liderazgos, que vehiculizaron un recambio generacional y la construcción de formas novedosas de articulación. Las renovadas solidaridades se manifestaron tanto en las medidas de fuerza sindicales –tales como la huelga de 1959 contra la política azucarera frondizista–, como en la gestión de demandas comunitarias de largo aliento (creación de un colegio secundario, fundación de un hospital público bajo control estatal, elevación de Bella Vista al rango municipal). Mientras que la alianza entre empleados y trabajadores en 1959 reeditó uno de los rasgos dominantes de la protesta acaecida una década antes, los apoyos de una multiplicidad de actores otorgaron a la trascendental medida de fuerza contra el frondizismo un componente distintivo, al fortalecer su anclaje comunitario. Aunque el grado de cohesión no fue uniforme, lo cual denotaba tanto las diferencias entre los participantes como la fuerza aglutinante de cada demanda, la mirada general del período revela un robustecimiento de las formas de articulación y la delimitación de un conjunto de liderazgos que tuvieron una injerencia notable en el derrotero posterior. Protagonizaron este activismo dirigentes de extracción diversa desde el punto de vista político-partidario,

adscriptos a múltiples ámbitos de la vida comunitaria (asociacionismo católico, sindicatos de trabajadores y empleados, organizaciones de comerciantes y cañeros, etc.).

En 1965, la profundización de la crisis azucarera y la amenaza del cierre de la fábrica, con la consecuente debacle local, impactaron en las formas de articulación y protesta. Si bien algunas modalidades no fueron novedosas, tales como la Comisión Intersindical de trabajadores y empleados formada a comienzos de ese año –la cual reeditaba prácticas de 1949 y 1961–, sí lo fueron sus alcances, implicancias y potencial aglutinante. Mientras que la gimnasia asociativa de los años previos delineó un repertorio de acciones, un elenco dirigente y un entramado de relaciones que se reflataron a mediados de los sesenta, la magnitud de la crisis y sus ritmos específicos fueron pautando la concatenación de experiencias que antecedieron a la CPD de finales de la década. Así, lo que a primera vista se asemeja a un ciclo ascendente, que atravesó un conjunto de estadios intermedios hasta llegar al clímax de fines de 1968 y comienzos de 1969, podría interpretarse desde una lógica pendular. Esto se observó tanto en la trayectoria de la Comisión Intersindical –dominada por los sindicatos de trabajadores y empleados–, como en la de la Comisión Pro Ingenio (1966) –hegemonizada por las dirigencias partidarias, cañeras y comerciales–. En dichas entidades, la amplia construcción de solidaridades no suprimió las tensiones y conflictos, así como la representación dispar de los actores afectados por la crisis.

A la luz de tales experiencias, la CPD se distinguió por su capacidad para aglutinar los distintos actores locales en función de un objetivo común, la defensa del “pueblo de Bella Vista”, amenazado por la crisis de su principal fuente laboral y engranaje económico. El contexto era propicio en el marco del movimiento de “comisionismo defensivo” que floreció a nivel provincial y concitó el apoyo de numerosos actores (tales como la CGTA y el MSTM) involucrados en la resistencia al Onganiato, inserto, a su vez, en un escenario

nacional signado por una creciente conflictividad social. Sin embargo, para comprender la formación y trayectoria de la CPD, es vital tanto reconocer los aires de familia con las experiencias previas y las Comisiones Pro Defensa desplegadas simultáneamente en otros ingenios, como individualizar sus rasgos propios.

En efecto, si la capacidad de reunir bajo una difusa pertenencia comunitaria a sectores y actores diversos no era una práctica ajena a las formas de articulación pretéritas, con presencia del asociacionismo católico, la representación sindical de los empleados del ingenio, comerciantes, cañeros y “fuerzas vivas”, la adhesión de la dirigencia sindical obrera –cercada, hostigada y dividida por la política oficial– fue una marca relevante de la CPD. Otro rasgo distintivo, fruto de un particular contexto institucional, fue la inédita confluencia de las dirigencias políticas locales bajo el paraguas de la CPD. La suspensión de la competencia partidaria y el frontal cuestionamiento que el Onganiato llevó adelante desdibujaron las históricas fronteras entre las organizaciones y permitieron a sus dirigencias aunar esfuerzos en pos de la defensa del ingenio. Aunque la distinguieron respecto a las experiencias previas, la participación de las dirigencias sindicales y partidarias no debe hacernos perder de vista un rasgo clave de la CPD: la consistente tradición de activismo comunitario allí cristalizada, que trascendía ambas esferas para involucrar un colectivo amplio y diverso.

Recapitulando, puede afirmarse que las formas de articulación desplegadas frente a la crisis del ingenio Bella Vista se ubicaron en el cruce entre lo excepcional y lo habitual, entre lo episódico y lo cotidiano. En su puesta en marcha, entraron en juego tradiciones locales de largo aliento, la amenaza cada vez más palpable de una debacle económica y social generalizada en el cordón agroindustrial tucumano y un contexto propicio para la movilización popular.

3

Curas y obreros frente a la patronal¹

La protesta de 1968 en San Pablo

FLORENCIA GUTIÉRREZ Y LUCÍA SANTOS LEPERA²

“Causó destrozos una manifestación obrera. Previamente se ofició una misa a raíz de 97 despidos”. Estos fueron los titulares con los que el diario *La Gaceta* se refirió a la movilización que tuvo lugar en el ingenio San Pablo el domingo 7 de enero de 1968.³ En un clima signado por una generalizada crisis azucarera, la exoneración de casi un centenar de obreros promovió una movilización comunitaria que comenzó con una misa a cargo del vicario parroquial, Raúl Sánchez, en el local del sindicato obrero y culminó con una nutrida manifestación que recorrió las calles del pueblo para arribar a la parroquia. El oficio religioso y el

¹ Agradecemos a Alejandro Alvarado, Germán Azcoaga y Silvia Nassif por facilitarnos fuentes, así como por despejarnos dudas para avanzar en esta investigación.

² Instituto Superior de Estudios Sociales (CONICET/UNT). Facultad de Filosofía y Letras (UNT).

³ El ingenio San Pablo se ubicaba en el departamento de Lules, a escasos 15 kilómetros de la capital tucumana. La primitiva fábrica de azúcar, fundada en 1832 por Juan Nougues, inmigrante de origen francés, fue modernizada en 1882 con la adopción de máquinas a vapor, tecnología de punta que posicionó al ingenio como uno de los más modernos y de mayor capacidad productiva de Tucumán. Esta condición fabril se conjugó con la posesión de una destacada extensión de tierras que, a principios del siglo XX, sumaba alrededor de 3.000 hectáreas destinadas a la plantación de caña.

liderazgo que asumieron los curas en defensa de la comunidad condensaron la articulación entre sindicalismo y catolicismo, convirtiendo a la acción colectiva del San Pablo en una emblemática expresión de los sentidos que adquirió la protesta, al calor de la participación y convergencia de estos actores.

Estos acontecimientos nos sitúan en una de las 16 fábricas tucumanas que no cerraron a mediados de los sesenta. Permite, de ese modo, preguntarnos por las experiencias comunitarias que no estuvieron signadas por el dramatismo de la clausura, pero fueron blanco de las políticas de racionalización diseñadas por el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía con el apoyo de sectores empresariales. Así, analizar la dinámica de uno de los ingenios más importantes del parque industrial tucumano en los complejos años sesenta permite reponer las acciones de protesta del sindicato de base, el rol de los sacerdotes en la crisis y el posicionamiento patronal en el concierto empresarial, dimensiones que contribuyen a complejizar el mapa de la conflictividad azucarera tucumana.

Este análisis situado en el ingenio San Pablo reviste, por diversos motivos, una gran riqueza sociopolítica. Por un lado, invita a preguntarnos por el papel desempeñado por los sacerdotes en el cruce de la magnitud de la crisis y el clima posconciliar de la Iglesia, escenario en el que –no exento de incertidumbres– estos actores rediscutieron su rol comunitario y social. Este conflicto permite indagar, asimismo, cómo el sindicato de base se apropió de la renovada politización del catolicismo para defenderse de los embates de la racionalización asumida por la patronal y, por tanto, contribuye a explorar los particulares sentidos y formas que asumió la protesta. Finalmente, los conflictos de enero de 1968 en el San Pablo brindan indicios para repensar el posicionamiento de los Nougés –familia propietaria del ingenio– frente a los lineamientos de las medidas azucareras nacionales y la definición de su política laboral. El texto se organiza en cuatro apartados. Los

dos primeros analizan, desde una perspectiva relacional, la trayectoria de los Nougués, el sindicato de base y los curas previamente al conflicto de 1968. Esta mirada permite explorar sus experiencias en estrecho diálogo con la construcción del entramado comunitario del que eran protagonistas y en relación con diversos actores provinciales y nacionales, clave para comprender la compleja coyuntura analizada –especialmente, la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA)–, las corporaciones empresarias y la jerarquía eclesiástica. El tercer apartado estudia la conflictividad social desatada en enero de 1968 para poner el foco en la articulación entre sindicalismo y catolicismo desde una escala local. Finalmente, el texto examina las repercusiones del conflicto del 68 en las trayectorias sindicales, sacerdotales y patronales.

El prolegómeno de la crisis de 1968: políticas patronales, conflictividad obrera y respuestas sindicales

Los despidos y la precarización laboral, decisiones asumidas por los propietarios del San Pablo entre fines de 1967 y principios de 1968, se inscribieron en una coyuntura marcada por “el colapso de la actividad azucarera”. Este proceso reconoce en 1965 una fecha clave pero su gestación debe situarse a partir de 1955 (Bravo, 2017: 203).⁴ En el

⁴ Bravo precisa que el golpe de Estado de 1955 avanzó en la desregulación de un complejo sistema regulatorio cuyas disposiciones no devenían exclusivamente de las políticas del peronismo. Asimismo, analiza cómo se operó la transferencia regional de los beneficios azucareros en favor de los ingenios de Salta y Jujuy, lo que condujo a la descapitalización de la agroindustria tucumana. En esta crítica coyuntura, en 1964 se intensificó la crisis de sobreproducción por una maniobra de los propietarios de los ingenios del norte, quienes volcaron su azúcar en el mercado interno, lo que derivó en la consecuente caída de precios y en la aceleración de la crisis de la agroindustria tucumana. Así, entre 1955 y 1966, la producción tucumana experimentó una sensible merma. “De representar el 70 % del mercado interno en 1955,

contexto de esta profunda crisis, es necesario analizar la conflictividad del ingenio San Pablo a partir de una mirada relacional que integre las medidas patronales que, al menos desde 1959, atentaban contra la estabilidad y las condiciones laborales de los trabajadores del ingenio, las respuestas sindicales frente a la crisis, y el posicionamiento de los Nougés a lo largo de los años sesenta, convergencia de dimensiones que otorga mayor capacidad explicativa a las modalidades de protesta y el apoyo que concitaron entre diversos actores sociales.

El esfuerzo de entrelazar estas dimensiones a lo largo de una década nos permitirá comprender la compleja trama sociopolítica en la que se inscribió la conflictividad del San Pablo en 1968. La primera medida antiobrera llegó en noviembre de 1959, ocasión en la que el secretariado de FOTIA denunció que los Nougés habían enviado el telegrama de preaviso a 100 trabajadores, lo que configuraba un “verdadero despido en masa”.⁵ A escasos meses de esa decisión, el sindicato de base se declaró en estado de alerta para enfrentar el cambio de modalidad laboral “impuesto a determinado personal” y la suspensión de las tareas culturales. Finalmente, la dirigencia obrera aceptó “por única vez” el traslado de puestos fabriles y, en razón de la reducción de las labores, aprobó la distribución de trabajo en las colonias del San Pablo.⁶ En octubre de ese mismo año, la comunidad laboral fue nuevamente conmovida con el envío de 122 telegramas de preaviso a trabajadores temporarios, decisión que la patronal justificó por la adopción de tecnología y la modernización del ingenio. Así, la utilización de gas para la combustión de las calderas, la automatización de las centrífugas y la adquisición de maquinarias para el

en 1966 solo participaba con el 56 % del total. Por el contrario, la industria salto-jujeña incrementó su presencia del 17 % en 1955 al 28 % en 1966” (Bravo, 2017: 202-205).

⁵ *La Gaceta*, 1959. 28 de noviembre.

⁶ *La Gaceta*, 1960. 3 y 5 de febrero.

cosido de bolsas y pesajes implicaron una drástica reducción del personal.⁷

Las tensiones entre obreros y patrones se reeditaron en enero de 1964, a raíz de las disímiles interpretaciones vinculadas a la implementación del sábado inglés⁸, y se agudizaron en diciembre de ese año frente a un cambio en la modalidad horaria fabril, que fue rechazado por el sindicato. Ante la falta de acuerdo entre las partes, el secretario general, Miguel Lazarte, dispuso el retiro del personal del ingenio, actitud que la patronal consideró como un agravio que conllevó al despido del dirigente sindical. La conflictividad se profundizó con la toma del ingenio por parte de los trabajadores y concluyó con la intervención del gobierno provincial y la revisión de la exoneración de Lazarte, a quien finalmente se le impuso una sanción disciplinaria.⁹ Un obrero de fábrica recordó años después la toma del ingenio en contra de este despido: “Lo querían echar porque no los dejaba que la manoseen a la gente como ellos quieren y discutía. No quería el jefe que esté, entonces ahí se armó, se hizo un piquete rápido, silenciosamente” (Centurión, 2000: 96).

Lazarte lideraba el sindicato de obreros de fábrica y surco del ingenio San Pablo desde mayo de 1963, cuando ganó las elecciones por un amplio margen de votos.¹⁰ Su figura representaba una renovación en la conducción del

⁷ *La Gaceta*, 1960. 2 de octubre.

⁸ *La Gaceta*, 1964. 6 de enero.

⁹ *La Gaceta*, 1964. 23, 24 y 26 de diciembre. El cambio horario refería al recargo de una hora por jornada (de lunes a viernes) de forma tal que esas cinco horas semanales fueran compensadas con la inactividad en los dos últimos días de la semana.

¹⁰ Hasta ese momento, el principal dirigente sindical de San Pablo era Lindor Altamiranda, un obrero de surco sexagenario, proveniente de finca Lules y con una larga trayectoria en el gremio desde su fundación en 1944 (en 1963 recibió la medalla de oro de FOTIA por su dilatada trayectoria sindical). En 1949 fue desplazado de la Federación por su participación en la huelga de ese año. Retornó a la actividad gremial en 1956 e intervino en la firma del convenio de 1958 favorable para los obreros del surco. En 1963 se desempeñaba como secretario adjunto en San Pablo (*La Gaceta*, 1963. 8 de octubre).

sindicato local, de un perfil más abierto y una “militancia comunitaria”, que revelaba la pertenencia a distintos ámbitos de sociabilidad.¹¹ En efecto, Lazarte había consolidado su trayectoria local en el espacio deportivo y religioso. Fue un reconocido director técnico de básquet y en 1955, bajo su dirección, el seleccionado tucumano masculino de ese deporte se consagró campeón argentino. Asimismo, participó de la sociabilidad parroquial al desempeñarse en distintas oportunidades como vocal de la comisión pro fiestas patronales, en la que se encargaba de la sección “juegos populares y deportivos”.¹² Tras dejar la actividad deportiva, en 1961 inició su militancia gremial y, al cabo de dos años, se convirtió en el principal dirigente sindical de San Pablo. Lazarte lideró la filial local hasta principios de la década de 1970 y ocupó distintos cargos en el consejo directivo de FOTIA desde 1965 en adelante, cuando Atilio Santillán asumió como secretario general de la federación.¹³

Sin desconocer el contexto de crisis azucarera que se vivía en la provincia a principios de los sesenta, es preciso subrayar que los despidos y el endurecimiento de las condiciones laborales fueron tomados por una de las fábricas más modernas y con mayor capacidad de molienda del parque industrial tucumano (después del ingenio Concepción). Y, a pesar de lo fragmentario de la información, no es un dato menor señalar que en 1960-1961 los propietarios del San Pablo anunciaron a sus accionistas una ganancia neta de 50

¹¹ En referencia a Atilio Santillán, en este libro Leandro Lichtmajer señala que se trataba de un dirigente sindical con “militancia comunitaria”, denominación que se puede hacer extensiva a Lazarte. En este sentido, se destacan los vínculos sostenidos con la parroquia y la sociabilidad católica y su perfil de apertura a partir de su inserción en distintos espacios comunitarios. Si bien no pertenecían a una misma generación, ambos encarnaron una renovación de la dirigencia de FOTIA hacia la década de 1960.

¹² Archivo de la Acción Católica Tucumana (AACT), Carpeta Juntas Parroquiales (San Pablo), 1960. Una biografía de Lazarte en *La Gaceta*, 1968. 10 de mayo.

¹³ En la nueva comisión directiva de 1965, Lazarte asumió como tesorero (*La Gaceta*, 1965. 27 de marzo).

millones; entre 1962 y 1963, duplicaron la molienda con la instalación de 11 centrífugas –la que alcanzó las 8.000 toneladas diarias– (Gaignard, 2011: 198) y, en esa misma fecha, la revista *La Industria Azucarera* anunciaba que el ingenio era uno de los que iniciaba la mecanización de la cosecha.¹⁴ El perfil empresarial de los Nougues era diverso: además de controlar el 63 % de las acciones del ingenio tucumano La Providencia, poseían un heterogéneo patrimonio agroindustrial fuera de la provincia; eran propietarios del ingenio Las Palmas (ubicado en Chaco) y de un dominio forestal y azucarero en Abra Grande (Salta); tenían importantes intereses en la Compañía Sudamericana de seguros Aconcagua; participaban en la explotación de la Patagonia con la compañía de navegación Perez Companc y se unieron a los Méndez Behety en sus negocios subsidiarios en la Patagonia (Gaignard, 2011: 199-200; Taire, 2006: 73-74). También poseían explotaciones ganaderas, entre ellas, 40.000 cabezas de ganado en Formosa, y desde 1963 conformaron sociedades con invernadores de Santa Fe para engorde y terminación de novillos (Taire, 2006: 73-74).

A medida que avanzó la década, al compás de la política de racionalización azucarera respaldada y alentada por los industriales de Salta y Jujuy en alianza con algunos empresarios tucumanos, los conflictos laborales fueron *in crescendo*.¹⁵ Así, en marzo de 1966, frente al incumplimiento del pago de haberes y derechos sociales a los trabajadores de

¹⁴ *La Industria Azucarera*, 1962, n.º 823, mayo, p. 131.

¹⁵ Roberto Pucci señala que, a fines de 1965, una comisión especial del CAA (Centro Azucarero Argentino), dominada por el grupo Arrieta-Blaquier, “elevó al PEN un plan azucarero en el que reclamaba el cierre de 12 ingenios tucumanos y la redistribución provincial de los cupos de producción. Esa comisión estuvo integrada por Carlos P. Blaquier (Ledesma) y por Ambrosio Nougues, Fernando Prat Gay (h) y Juan José Sortheix, pertenecientes al grupo tucumano de industriales encabezado por la familia Paz del ingenio Concepción, comprometido con el proyecto de reorganización y monopolización del sector azucarero” (Pucci, 2007: 76). En tal sentido, este autor sostiene el acercamiento de los Nougues con los grupos más concentrados de empresarios azucareros. Sin embargo, frente a la ausencia de documentación sobre esta comisión, señalamos otras dimensiones de análisis que, a

la finca Lules, propiedad de los Nougés, los obreros del ingenio decidieron solidarizarse con los de surco y “retirar toda colaboración a la empresa”. La respuesta de la patronal fue contundente: el cierre del ingenio y el despido del personal de fábrica, actitud que FOTIA tildó como una “represalia” por la solidaridad de los obreros del ingenio con los de surco.¹⁶ Luego del golpe de Estado de junio de 1966, encabezado por Juan Carlos Onganía, el que modificaría sensiblemente la conformación del parque industrial tucumano, 1967 comenzó con una huelga obrera en defensa de las condiciones laborales y la reafirmación del compromiso sindical de “hacer respetar las leyes laborales y las conquistas obreras”, anticipando que no aceptarían “la vulneración de ningún principio legal y de los derechos obreros”. Sin embargo, el año concluiría con el despido de 97 trabajadores.

En este contexto de preocupaciones, centrar la atención en los años 1966 y 1967 resulta un mirador privilegiado para repensar las múltiples implicancias de la política patronal y la conflictividad social en un ingenio que no cerró, pero cuyas tensiones laborales y empresariales ayudan a complejizar el panorama de la crisis azucarera de mediados de los años sesenta. En efecto, la oscilación de los niveles de producción en el período aludido, el balance de los ejercicios del ingenio y las decisiones vinculadas a la administración del personal contribuyen a reponer el mosaico de experiencias que modelaron la crisis azucarera, cuya dinámica entrelazó, de múltiples formas, el destino de las fábricas que cerraron y de las que, si bien no lo hicieron, estuvieron signadas por los despidos y la conflictividad laboral.

El directorio del San Pablo argumentó que la magra cosecha de 1967, que había alcanzado “mínimas fuera de

futuro, esperan ser recuperadas para dar cuenta de la política empresarial de este grupo familiar.

¹⁶ *La Gaceta*, 1966. 16 y 31 de marzo.

lo común” por la limitación legal, las heladas y otras circunstancias, los obligó –en “uso del derecho” de la legislación vigente– a poner en marcha su plan de racionalización “preparado con todo el cuidado que él merece en atención a los ponderables valores en juego”.¹⁷ Sin desconocer esta realidad, el informe económico realizado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales de Tucumán sobre el ingenio San Pablo afirmaba que, desde 1960, solamente en los dos últimos ejercicios, es decir, en los de los años 1966 y 1967, se había producido una apreciable pérdida, pero ello no desequilibraba la “tendencia productiva de la empresa”. El estudio precisaba que el impacto de las pérdidas había “conmocionado a los directivos de la fábrica” y conducido a tomar la drástica medida del despido del personal para reducir los costos de explotación, en clara alusión a los 97 despidos de fines de 1967. Finalmente, señalaba la necesaria inyección de un crédito especial a largo plazo para que el ingenio saliera del ahogo financiero, para lo cual debían contribuir los trabajadores y el gobierno nacional.¹⁸ Por su parte, FOTIA advirtió que los despidos eran “la aplicación del plan secreto del monopolio azucarero nacional” dirigido por varios industriales, referencia que aludía a una supuesta alianza de los Nougés con los empresarios azucareros del norte, indicio que a futuro y con nuevas fuentes sería importante recuperar.¹⁹

Esos años de 1966-1967 fueron clave para la redefinición de la política azucarera a partir de la adopción de “un régimen regulado por el estado nacional en todos sus aspectos (producción, industrialización y comercialización)” que determinaría el colapso del parque industrial tucumano (Bravo, 2017: 204). Inscrita en la crítica mirada

¹⁷ Solicitada del Directorio de la Cía. San Pablo de Fabricación de Azúcar SA (*La Gaceta*, 1968. 17 de enero).

¹⁸ *Noticias*, 1968. 16 de febrero. El Centro de Estudios Económicos y Sociales de Tucumán era presidido por José Félix Toscano, exdiputado radical bajo la gestión de Celestino Gelsi.

¹⁹ *La Gaceta*, 1968. 8 de enero.

de los empresarios azucareros del norte, la primera medida de “racionalización” fue impulsada, en agosto de 1966, por el ministro de Economía Néstor Salimei a través del decreto n.º 16.926, que decidió la intervención de 7 ingenios azucareros de la provincia con el propósito de desmantelarlos y cerrarlos.²⁰ Para 1968 las fábricas cerradas eran 11, lo que implicó el colapso de alrededor de un 40 % del parque industrial tucumano, la pérdida de 50.000 puestos de trabajo y el éxodo de más de 200.000 habitantes. En febrero de 1967, el golpe de gracia sobre la industria tucumana se completó con la sanción del decreto ley n.º 17.163, que fijó cupos de producción a partir de la definición de tres “zonas territoriales” (Tucumán; Salta y Jujuy; Santa Fe, Chaco y Misiones), medida que “restringió la molienda de los cañeros independientes y avanzó en la limitación de la producción azucarera” de Tucumán. Esta normativa alentó la “concentración de la producción cañera en beneficio de los industriales y grandes cañeros a través de la expropiación de cupos (por oferta y por incautación) con el objetivo de orientar a los pequeños cañeros a la diversificación productiva”. Asimismo, la ley fijó la cantidad de toneladas a producir en la zafra de 1967 (750.000 toneladas) y prohibió la instalación de nuevos ingenios en el país y la ampliación de la capacidad industrial de los existentes, aunque permitió la fusión o el traslado de la capacidad industrial de producción entre ingenios de una misma zona productiva siempre que el resultante no fuera superior a la suma

²⁰ En este contexto, el Centro Azucarero Regional del Norte Argentino (CARNA) fue la corporación que lideró los cuestionamientos a la agroindustria tucumana y, por tanto, se convirtió en un actor clave en la redefinición de la política azucarera que concluyó con la mutilación del 40 % de su parque industrial. La interpelación del CARNA enfatizaba los bajos rendimientos productivos de los ingenios tucumanos, cuya responsabilidad recaía en los empresarios –por la escasa inversión y renovación tecnológica en sus fábricas–, pero también obedecía a la fragmentada estructura agraria expresada en los pequeños plantadores propietarios, sindicados como responsables de la caída de los rendimientos culturales por la extensión del cultivo hacia zonas no aptas (Bravo, 2020).

de las que individualmente correspondían a cada ingenio (Bustelo, 2017: 226).²¹

El cruce entre la ley de cupos de 1967 y la molienda del San Pablo de 1968 permite suponer que fue uno de los ingenios beneficiados con “el traslado de la capacidad industrial” entre fábricas de una misma zona productiva: el salto de su capacidad de molienda y de producción de azúcar fue significativo, y la convirtió en la más importante de la década del sesenta.²² Si bien ese pico no se sostuvo en los años posteriores, constituye un indicio que podría recuperarse en futuras investigaciones para repensar el posicionamiento de los Nougués en el mapa azucarero nacional, la incidencia de factores coyunturales, como la asunción de José María Nougués como ministro de Economía y Obras Públicas de la provincia en 1968 y su posterior involucramiento en la conformación de un bloque empresarial –creado en 1969– para defender a los ingenios tucumanos.²³ Al mismo tiempo, la capacidad productiva del San Pablo debe ser presentada en perspectiva, es decir, en relación con otros ingenios tucumanos que “aumentaron su producción en un grado incluso superior al incremento en los propios ingenios del Norte”. En este sentido, entre 1965 y 1973, el Concepción aumentó su producción en un 115,8 %, La Trinidad, en un 101,8 %, y el Santa Rosa, en un 90,3 %, mientras que el San Pablo lo hizo en un 49 % (Nassif, 2016: 113-114 y 625).

21 Ahora bien, la situación fue a contrapelo del panorama general del parque industrial tucumano, en cuanto la zonificación “contrajo bruscamente la participación tucumana, que en 1965 representaba el 62 por ciento del total y se vio reducida por la fuerza al 56 por ciento en 1967 y al 50,5 por ciento en 1971” (Pucci, 2007: 75).

22 El ingenio San Pablo alcanzó su pico productivo en 1968 con un total de 58.768.250 kilos netos de azúcar.

23 José María Nougués fue hijo de Isaías Nougués (dirigente del partido conservador Defensa Provincial Bandera Blanca, fundado en los años veinte, intendente de San Miguel de Tucumán a principios de los años cuarenta y diputado nacional en los sesenta) y nieto de Juan Carlos Nougués, quien fue miembro del directorio del ingenio.

En suma, entre 1959 y 1968 es posible advertir que la familia Nogués asumió una política orientada a disminuir el personal (tanto de fábrica como de surco) y cercenar derechos laborales. Esta avanzada se inscribió en el contexto de una profunda crisis azucarera marcada por las pujas interregionales, los oscilantes niveles de producción del ingenio y los imperativos de una política de “racionalización y eficacia”, pregonada desde el gobierno nacional en sintonía con los intereses de los ingenios salto-jujeños.

Ser cura en una comunidad en crisis: compromiso social en el clima de renovación conciliar

Tras los despidos efectuados a finales de 1967, la población de San Pablo decidió movilizarse con el objetivo de repudiarlos. Para ello, buscaron el apoyo de Raúl Sánchez, sacerdote a cargo de la parroquia por la ausencia del cura titular Pedro Wurschmidt, quien se encontraba en el campamento de verano que organizaba la entidad. Los acontecimientos de San Pablo trascendieron en la prensa provincial y nacional, debido al apoyo que los sacerdotes del pueblo brindaron a los obreros despedidos con un fuerte discurso opositor a las políticas del gobierno y de la patronal. Analizar el liderazgo de los curas en la protesta y a la parroquia como centro de las acciones de resistencia supone preguntarse por el rol de los sacerdotes en la población local, los vínculos que construyeron con el sindicato obrero y los propietarios del ingenio y el impacto de las transformaciones de la Iglesia introducidas bajo el Concilio Vaticano II.

Raúl Sánchez había cursado sus estudios de Teología en el seminario Mayor de Córdoba, donde conoció a profesores como Erio Vaudagna, Nelson Dellaferrera y Enrique Angelelli. Este último se convirtió en rector de esa institución en 1963, decisión que se hizo eco del manifiesto interés de un grupo de seminaristas que seguían las sesiones del Concilio Vaticano II y querían incorporar las novedades a su formación. Las asam-

bles del Concilio se desarrollaron entre 1962 y 1965 y generaron amplias expectativas entre un sector del clero al proponer una actualización de la Iglesia al mundo moderno.²⁴ Entre ese grupo se encontraba Sánchez, quien recordaba haber participado de la experiencia del seminario cordobés de “puertas abiertas”, que les permitía salir y trabajar en los barrios obreros junto a los curas párrocos (Diana, 2013: 203).²⁵ Tras su regreso a Tucumán, en mayo de 1966, fue designado como vicario cooperador en la parroquia de San Pablo, donde se desempeñaba como párroco titular Pedro Wurschmidt. Bajo su gestión, la parroquia había atravesado, desde finales de la década de 1950, un proceso de reformas dirigidas a ubicar a la iglesia en el centro de las actividades sociorreligiosas. Al calor de las lecturas de las experiencias europeas, Wurschmidt impulsó una renovación parroquial y formuló el concepto de “parroquia abierta”, basado en la idea de integrarla a la vida social del pueblo.²⁶

De ese modo, desde la parroquia se impulsó una amplia tarea comunitaria articulada alrededor de los proyectos de educación y vivienda: hacia mediados de los 60, funcionaba un colegio parroquial, un Hogar Emaús de ancianos, un comedor popular, un cine parroquial y clases diarias de catequesis en las colonias agrícolas y en los barrios obreros del ingenio.²⁷ También funcionaba la Escuela de Doctrina,

²⁴ La renovación propuesta comportó importantes cambios en la liturgia; por ejemplo, se puso fin a la misa en latín con el sacerdote de espaldas a la gente. Entre otros aspectos, se promovió “la lectura del evangelio en clave histórica, un nuevo tipo de vínculo entre sacerdotes y laicos y un protagonismo mayor para estos últimos”. Posteriormente, la Conferencia del Episcopado Latinoamericano de Medellín en 1968 profundizó las transformaciones del Concilio en la realidad latinoamericana (Barral y Santos Lepera, 2019).

²⁵ Sánchez estuvo en Córdoba entre 1960 y finales de 1963. Recordaba a Angelelli como “un gran hombre que nos estimulaba el entusiasmo que sentíamos por esa nueva Iglesia que veíamos florecer con el Vaticano II [...]. Había mucha esperanza, mucho fervor entre los jóvenes seminaristas” (Diana, 2013: 203). Sobre la experiencia del seminario cordobés a “puertas abiertas”, ver Barral (2019).

²⁶ Sobre la experiencia de renovación parroquial iniciada por Wurschmidt en San Pablo, ver Santos Lepera (2019).

²⁷ Instituto de Investigaciones Históricas-UNSTA (IIH-UNSTA), Cuadernos personales de Pedro Wurschmidt, Informe sobre los diez años de acción pastoral en San Pablo y la parroquia. Tucumán, 8 febrero de 1964. El movi-

que lo hacía de forma paralela a los grupos de catequesis y consistía en organizar en el centro de los barrios (ya sea en una plaza o en un campo abierto) una proyección con filminas para explicar la doctrina católica, reuniones en las que se juntaba “mucha gente” y que culminaban con algún convite. Desde 1957, la parroquia también organizaba los campamentos de verano destinados a los niños de San Pablo, quienes pasaban los meses de vacaciones en la montaña con actividades recreativas y formación religiosa.²⁸ Junto a esas obras, se fundaron dos cooperativas, una de crédito (1966), cuyo objetivo era colaborar con el “progreso” del pueblo, y una de viviendas (1967). Esta última se propuso construir 300 casas en un terreno propiedad de los Nougés cuya compra había sido gestionada por el párroco.²⁹ Desde esta perspectiva, en la década de 1960 la parroquia se convirtió no solo en un lugar de encuentro, recreación y sociabilidad religiosa, sino que fue también una institución central en la dinámica del pueblo “donde se tramitaban experiencias colectivas de distinto tipo” (Barral, 2019: 156). Como señala María Elena Barral, el modelo

miento Emaús fue fundado por el Abate Pierre en Francia a finales de la década de 1940 como una organización de lucha contra la exclusión y la pobreza. Wurschmidt, en contacto con el movimiento, habilitó su presencia en la parroquia de San Pablo para la fundación de un hogar de ancianos. Por su parte, el programa de Catequesis Diaria llegó a tener centros en 10 colonias agrícolas y en el barrio obrero de Villa Rosario. Sus tareas consistían en la enseñanza del catecismo, en hacer rezar y cantar en la misa y, en los días en que no había oficios religiosos, en organizar actos paralitúrgicos.

- ²⁸ *La Gaceta*, 1966. 27 de marzo. Los campamentos se llevaban a cabo en Las Estancias (Catamarca) y eran organizados por una comisión parroquial asesorados por Wurschmidt, gestor de esa iniciativa. La organización de los campamentos se sostenía con el “aporte de toda la comunidad” y con la colaboración de las familias de los niños; por ejemplo, las madres y abuelas ayudaban como cocineras.
- ²⁹ IIH-UNSTA, Cuadernos personales de Pedro Wurschmidt, Tucumán, 20 mayo de 1966. Sobre el servicio de viviendas de la parroquia (Herrera, 2009: 169). La iniciativa implicaba la creación de una caja de ahorro para devolver en 8 años el dinero por propietario y sería gestionada junto a la comisión de viviendas de Cáritas. La primera casa se entregó en septiembre de 1968 (*La Gaceta*, 1968. “Construirán 291 casas en San Pablo”. 28 de septiembre).

de parroquia y de “comunalización católica”, que integraba desde el punto de vista socioespacial a quienes vivían en ese territorio, formaba parte de una propuesta de larga data de la Iglesia que persistía aún en la década de 1960. Asimismo, el perfil de sacerdocio definido por las “obras” tampoco era nuevo; sin embargo, en ese contexto fue adquiriendo aristas renovadas al calor del compromiso social potenciado por el Concilio Vaticano II.³⁰



Pedro Wurschmidt bendice las tribunas del club San Pablo. Fuente: Archivo *La Gaceta* (Tucumán).

Para llevar adelante la gestión de las obras sociales, Wurschmidt había recurrido a la colaboración de los propietarios del ingenio San Pablo. Apelar a los sectores

³⁰ El “encuadramiento por las obras” se desarrolló particularmente desde finales del siglo XIX, pero sufrió cambios radicales después de las dos Guerras Mundiales que lo pusieron en cuestionamiento. Sobre los cambios que atravesaron los perfiles de sacerdocio, remitimos a Lemaitre (2002).

patronales para conseguir apoyos y recursos de distinto tipo para sus proyectos era una práctica arraigada entre los curas. La decisión de convertir al templo de la villa del pueblo en parroquia a mediados de 1954 y la designación de Pedro Wurschmidt como primer cura párroco comportaron importantes cambios en las iniciativas y las actividades religiosas.³¹ Desde principios de la década de 1960, Wurschmidt expresó en sus cuadernos las críticas a la familia Nougués y dio cuenta de la relación conflictiva que mantenía con Miguel Alfredo Nougués, presidente del directorio de la empresa propietaria. En sus anotaciones sobre las subvenciones que recibía la Iglesia, el ingenio solo aportaba un monto para el sostenimiento de la Banda de Música y para asistencia social. En las oportunidades en que había intentado recurrir a la colaboración de la empresa para impulsar alguna de las obras de la parroquia, Wurschmidt se había encontrado con dilaciones y negativas. En mayo de 1966, después de reunirse con Alfredo Nougués y no conseguir su apoyo para la fundación de una escuela técnica en el pueblo, escribió:

En realidad, haciendo un poco de memoria, toda vez que hemos querido hacer algo confiados en la participación de la Compañía o del directorio no se logró nada. Si fue el campamento, el colegio, el Hogar, la Cooperativa de vivienda, nunca se comprometieron sino que ayudaron cuando les convenía [...] sostener una obra con impuestos deducidos no significa cumplir con el Evangelio.³²

Como alternativa, Wurschmidt se propuso recurrir al sindicato obrero local y conseguir su apoyo para la funda-

³¹ Convertir un templo en parroquia (creando una nueva jurisdicción eclesiástica) implicaba brindar un mayor estatus a la población y que esta contase con un sacerdote permanente para organizar las actividades parroquiales y brindar servicios religiosos. El párroco era designado directamente por el obispo.

³² IHH-UNSTA, Cuadernos personales de Pedro Wurschmidt, Tucumán, 24 de mayo de 1966.

ción de la escuela-fábrica. El cura párroco sabía que podía contar con el aval de Miguel Lazarte para dicha iniciativa y le pidió que “interviniera y presionara” a la patronal.³³ Más allá de las tensiones, Wurschmidt siguió negociando con los Nougés los aportes necesarios para sus proyectos. No obstante, la conflictividad obrera, intensificada a partir de las políticas del gobierno de Onganía, incidió en esa relación de manera definitiva. En el recuerdo del sacerdote tercermundista Amado Dip, el perfil de sacerdocio que forjó Wurschmidt rompió con la asociación de dos mundos, “el del cura social y el católico de las donaciones”: “Peter [en alusión a Wurschmidt] no amainaba porque le dieran plata para sus planes. Llegó un momento en el que esos dos mundos no pudieron seguir juntos” (Martín, 2013: 320). Ese momento al que se refería fue enero de 1968, cuando los sacerdotes de San Pablo apoyaron la protesta obrera tras los despidos del ingenio.

Durante los años previos, Pedro Wurschmidt había apostado a la construcción horizontal de poder entre los curas de las parroquias vecinas, caracterizadas también por la presencia de ingenios azucareros en su jurisdicción. Desde principios de la década del 60, Wurschmidt fue el impulsor de las reuniones de los párrocos del departamento de Famaillá que más tarde formarían el Decanato de Famaillá –integrado por las parroquias de Bella Vista, Lules, San Pablo, Santa Lucía y Famaillá–, en las que se discutieron las reformas conciliares y su adaptación a la realidad tucumana.³⁴ Las iniciativas de los curas concitaron la atención

³³ IIH-UNSTA, Cuadernos personales de Pedro Wurschmidt, Tucumán, 10 de junio de 1966.

³⁴ *Nueva Línea*, 1968, abril, p. 5. Dentro de la estructura de la institución eclesíástica, el Decanato era la organización diocesana que reunía en pequeñas circunscripciones a parroquias cercanas, cuyo objetivo era facilitar el trabajo conjunto de los párrocos. Los vínculos forjados entre los sacerdotes del Decanato de Famaillá, posteriormente conocido como “Decanato de la FOTIA” dadas las estrechas relaciones con el sindicalismo obrero azucarero, permitieron entablar una red de solidaridades frente a las protestas de los pueblos en defensa de las fuentes de trabajo.

del obispo Juan Carlos Aramburu, a quien le cuestionaban la reticencia a incorporar las reformas del Concilio en la Iglesia tucumana, pujas que quedaron suspendidas con el traslado de Aramburu a la Arquidiócesis de Buenos Aires en junio de 1967. De ese modo, la Iglesia tucumana quedó a cargo del vicario capitular Víctor Gómez Aragón, situación que, en adelante, otorgó un margen de acción más amplio a los sacerdotes reformistas.

La desocupación creciente y la conflictividad social agudizada después del golpe de Estado de 1966 interpelaron a los sacerdotes del Decanato de Famaillá. Hacia mediados de 1967, en una de las reuniones que sostenían periódicamente, Raúl Sánchez planteó la necesidad de comprometerse con los “problemas temporales”.³⁵ Por su parte, Pedro Wurschmidt había regresado de un viaje por los principales países de Europa y, tras leer el documento papal *Populorum Progressio* (1967), reflexionó sobre su rol en San Pablo:

No estamos ya para “administrar la iglesia” desde el momento que administrar significa una actitud conservadora y estática... ¿en qué consiste la evangelización? Y a la vez surge otro interrogante, ¿no se ha recomendado en el concilio que debemos apacentar, regir y gobernar? [...]. Por otra parte ciertas inquietudes de orden social inquietan permanentemente mi espíritu al ver la miseria, falta de trabajo, desigualdades e injusticias que pienso si no sería evangelizar ocuparse de estos problemas y buscarles solución.³⁶

En ese contexto, el obispo de Avellaneda, Gerónimo Podestá –con quien Wurschmidt sostenía vínculos estrechos–, visitó Tucumán para dictar una conferencia sobre la mencionada encíclica papal de Paulo VI.³⁷ El evento, al que

³⁵ IIH-UNSTA, Cuadernos personales de Pedro Wurschmidt, Tucumán, 28 de agosto de 1967.

³⁶ IIH-UNSTA, Cuadernos personales de Pedro Wurschmidt, Tucumán, 12 de junio de 1967.

³⁷ Antes de su visita a Tucumán, Podestá le ofreció a Wurschmidt incorporarse a la diócesis de Avellaneda y colaborar con la transformación posconciliar.

asistió “mucho público”, contribuyó a difundir los principales postulados de la encíclica dirigida a los pueblos “en vías de desarrollo”, que planteaba el problema de la pobreza y la desigualdad de las naciones.³⁸ Al término de la conferencia, directivos de FOTIA se entrevistaron con Podestá, le plantearon la situación crítica de los trabajadores y consiguieron el compromiso del obispo de ocuparse del tema.³⁹ Wurschmidt difundió la encíclica en San Pablo y esta se discutió en las reuniones del Decanato. La parroquia se convirtió también en un espacio de debate en el que las nuevas lecturas del Evangelio y las ideas conciliares fueron un marco de interpretación de la realidad socioeconómica, que permitieron concebir un sentido de “injusticia” denunciado con el apoyo de sacerdotes y católicos. En diciembre de 1967, frente a la amenaza de despidos a obreros del ingenio, Wurschmidt escribió cartas al presidente de la empresa y al administrador de la fábrica para advertir sobre los problemas de esa política y publicó un artículo en *El Vocero* –publicación parroquial– en tono crítico contra

Esa posibilidad resultaba atractiva en virtud de la libertad con la que podría desempeñarse y de que tendría perspectivas de crecimiento en su carrera sacerdotal. No obstante, después de muchas vacilaciones, Wurschmidt rechazó la propuesta y reafirmó su pertenencia a San Pablo. IHH-UNSTA, Cuadernos personales de Pedro Wurschmidt, Tucumán, 9 de septiembre de 1967.

³⁸ *Populorum Progressio*, 26 de marzo de 1967, disponible en bit.ly/3vglOfC (consultada el 15 de marzo de 2021). La encíclica de Paulo VI generó amplias controversias. Tal como reconoció Podestá en la conferencia dictada en Tucumán, no fueron pocos los miedos en torno al “peligro de la propiedad privada” o al “levantamiento” de los obreros. Posteriormente, este documento papal fue uno de los más influyentes en el MSTM y se convirtió en fuente de legitimación de la violencia de los pueblos pobres y marginados. En efecto, el texto reconocía que la violencia podía ser legítima “en caso de tiranía evidente y prolongada, que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y damnificase peligrosamente el bien común del país” (p. 30). Este punto fue uno de los más controvertidos y generó interpretaciones muy diferentes en el mundo católico.

³⁹ A principios de enero de 1968, FOTIA apoyó a Mons. Podestá. En su congreso, la Federación resolvió solicitar al papa Paulo VI la designación de Podestá como arzobispo de Tucumán, al tiempo que manifestó su solidaridad con los obreros del ingenio San Pablo.

la patronal.⁴⁰ En la misa dominical, el párroco reforzó sus críticas a la empresa, lo que causó “gran revuelo” entre la familia propietaria y sus colaboradores más estrechos.⁴¹

Ese mismo diciembre de 1967, vía Pedro Wurschmidt, los sacerdotes tucumanos tomaron conocimiento del *Manifiesto de los 18 Obispos del Tercer Mundo*, al que adhirieron con su firma 12 curas de la diócesis.⁴² Tal como recordó Amado Dip, Wurschmidt fue el contacto inicial para organizar posteriormente el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM) en la diócesis: “Cuando recibimos la invitación ya había un grupo muy fuerte con experiencia de apoyar a las comunidades y a los gremios que resistieron al cierre de ingenios” (Martín, 2013: 308). Como lo reconocía Dip, el colectivo sacerdotal nació íntimamente ligado a la situación social derivada de la crisis azucarera y el conflicto de San Pablo fue el acontecimiento que propició su fundación, iniciativa que lideró Wurschmidt. A principios de febrero de 1968, 18 sacerdotes se reunieron en la parroquia de San Pablo junto al vicario general Gómez Aragón con el objetivo de considerar la situación de la provincia y emitir un documento en el que puntualizaron la coyuntura socioeconómica por la que atravesaba la jurisdicción, con críticas al gobierno y a los efectos producidos por el

⁴⁰ IHH-UNSTA, Cuadernos personales de Pedro Wurschmidt, Tucumán, 1 y 2 de diciembre de 1967. Posteriormente, la revista *Nueva Línea* definió la publicación parroquial como un “folletín obrerista y antipatronal” (*Nueva Línea*, 1968. Abril).

⁴¹ IHH-UNSTA, Cuadernos personales de Pedro Wurschmidt, Tucumán, 11 de diciembre de 1967.

⁴² *Carta de adhesión de sacerdotes de Argentina dirigida a Mons. Helder Cámara*, 31 de diciembre de 1967. El *Manifiesto de los Obispos del Tercer Mundo* fue un documento firmado por 18 obispos de América, Asia y África a iniciativa del arzobispo Helder Cámara, con el propósito de aplicar en sus regiones la Encíclica *Populorum Progressio*. Los obispos exhortaban a los cristianos y a sus pastores a saber reconocer “la mano del Todopoderoso en los acontecimientos que, periódicamente, deponen a los poderosos de sus tronos y elevan a los humildes, devuelven a los ricos las manos vacías y sacian a los hambrientos” (Barral, 2019: 167). También remitimos a Bresci (2018: 221-235). Sobre el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, ver Touris (2021).

Operativo Tucumán.⁴³ De ese modo, los acontecimientos de San Pablo tuvieron repercusiones, también, más allá de las fronteras eclesiásticas. El rol de los sacerdotes en la protesta, su defensa de los trabajadores y la justificación de los actos de resistencia generaron un debate público sobre el compromiso sacerdotal y derivaron en un conflicto abierto entre la Iglesia y el gobierno provincial.

El conflicto de 1968: trayectorias y solidaridades entre el sindicato de base y la Iglesia católica

La movilización comunitaria en protesta por el despido masivo de obreros en diciembre de 1967 no tardó en llegar. En ausencia del cura párroco, Raúl Sánchez no olvidaría el clima de efervescencia del día previo a la movilización del 7 de enero, cuando, estando en la parroquia, “y a través de la celosía de la ventana”, observó –con la luz apagada para que no pudieran divisarlo– a los trabajadores enfurecidos, “gritando, exigiendo justicia”. Muchos años después, recordaría el temor que se apoderó de él al pensar que esa gente podía quemar la iglesia y el inmediato alivio que sintió cuando vio que, en lugar de seguir hacia la parroquia, doblaron en dirección al sindicato. Sin embargo, el sosiego concluyó esa misma tarde, cuando un grupo de dirigentes del sindicato llegó al templo y le preguntó: “¿Qué va a hacer usted? ¿Nos va a acompañar?”. Relató Sánchez: “No sé si por convicción, por conveniencia o por miedo les dije que sí, que cuenten conmigo [...]. Y ese fue el comienzo [...] ya nunca me quedaron dudas de cuál era el camino a seguir”.⁴⁴ En el recuerdo de Sánchez, la presión de la población local fue decisiva en su participación en la protesta.

⁴³ *Noticias*, 1968. 6 de febrero. *La Gaceta*, 1968. 6 de febrero.

⁴⁴ Entrevista a Raúl Sánchez realizada por el Grupo de Investigación sobre el Genocidio en Tucumán (GIGET), Montevideo, Uruguay, agosto de 2007. Citado en Nassif (2016: 383).

A las 9:15 horas del domingo 7 de enero de 1968, convocado por el sindicato de obreros de fábrica y surco del ingenio San Pablo, Sánchez dio inicio –en el local gremial– a una misa para impetrar por la solución del conflicto laboral que conmovía a la comunidad: el despido de 97 trabajadores, decisión tomada por la patronal a fines de diciembre del año anterior. La realización de la misa dominical en el local del sindicato fue subrayada por el propio cura como el disparador de los acontecimientos que le siguieron.

No era la primera vez que se celebraba una misa fuera del templo parroquial. De hecho, por motivos banales si se quiere, se celebraban misas de campaña [...] en un estadio, en un club de fútbol, la misa de iniciación de la zafra en el ingenio, el día del 25 de mayo. Pero a diferencia de esos oficios, esta vez “era un día domingo” y en lugar de celebrar la misa en la parroquia la realicé en el sindicato. Pareciera como que ese ha sido el puntapié inicial de esto que después terminó siendo una tragedia, porque esto después no tuvo fin.⁴⁵

Sánchez no se equivocaba al nombrar las aristas desafiantes que comportó el oficio religioso: se trataba de la misa dominical celebrada en la sede sindical sin el permiso necesario de las autoridades eclesiásticas. Sin embargo, como también reconocía el sacerdote, no era la primera vez que el oficio de una misa tenía como objetivo acompañar el reclamo de trabajadores o pedir por la solución de los problemas locales,⁴⁶ y esa vez, frente al pedido de ayuda del sindicato para luchar por las fuentes de trabajo, se vio “prácticamente obligado a acompañarlos” y a replantear su misión como sacerdote (Diana, 2013: 205). En el momento del Evangelio de aquella misa emblemática, el cura se refirió extensamente al “derecho de los trabajadores

⁴⁵ Entrevista a Raúl Sánchez en Nassif (2016: 386).

⁴⁶ Por ejemplo, se registran claros antecedentes en Bella Vista (las misas oficiales por el cura párroco frente a los reclamos cañeros en 1965 y por la muerte de Hilda Guerrero de Molina en 1967).

para defender sus legítimas aspiraciones”. Seguidamente, se explayó sobre “los alcances sociales” de la encíclica papal *Populorum Progressio*, cuyos postulados no eran desconocidos para la población de San Pablo, y finalizó “censurando, a la vez, el sistema económico liberal”.⁴⁷ En ese contexto, la homilía de Sánchez se convirtió en un “instrumento de la lucha política”, en una forma de “exhibición de los consensos y de los conflictos” de la comunidad (Barral, 2019: 157).



Misa oficiada en el sindicato por el P. Raúl Sánchez (San Pablo, 8 de enero de 1968). Fuente: Archivo del diario *La Gaceta* (Tucumán).

Terminada la misa, los asistentes se movilizaron por las calles del pueblo liderados por el secretario general del sindicato, Lazarte, el cura Sánchez y los integrantes de la comisión directiva del gremio. Desde una camioneta, Lazarte convocaba a los vecinos a sumarse a la protesta, cuyo recorrido implicó pasar por la comisaría hasta llegar

⁴⁷ *La Gaceta*, 1968. 8 de enero.

al ingenio. En las inmediaciones de la fábrica tuvieron lugar los primeros hechos de violencia, que comenzaron con la rotura de focos del alumbrado público y siguieron con blancos específicos: las casas de dos empleados jerárquicos, el mayordomo Pastor Brandán y el jefe mecánico Ezzio Tesari, a quien “a viva voz se responsabilizó por las cesantías”.⁴⁸ La vivienda de Brandán fue el epicentro de la violencia; a las pedradas y los disparos al aire de armas de fuego, les siguieron la rotura de la verja de hierro y el ingreso de algunos manifestantes al domicilio, quienes –siguiendo la crónica del diario– arrojaron a la calle unos muebles. “Cometidos estos desmanes, los autores se sumaron nuevamente a la columna, cuya marcha no había sido detenida”.⁴⁹

Los blancos de los ataques que tuvieron lugar ese día se reconocen en repertorios de confrontación previos, especialmente los asociados a las huelgas declaradas por los sindicatos de base durante los años cuarenta y cincuenta.⁵⁰ En 1968, las pedradas contra las viviendas del mayordomo y el jefe mecánico –el particular ensañamiento contra la casa de quien consideraban el responsable de las exoneraciones–

⁴⁸ En un ingenio el mayordomo era el encargado del control y la asistencia del personal y el responsable de la entrada y salida del establecimiento de personas o efectos; para cumplir con esta misión, debía recorrer el establecimiento en vigilancia constante, comunicando las novedades a los respectivos jefes de secciones. Por su parte, el jefe mecánico era el jefe y responsable directo de la fábrica, bajo cuya dependencia se encontraban las demás secciones de ella (sección calderas, usina, taller mecánico, cordería, carpintería, aserraderos, cultivos, etc.). Archivo General de la Nación -Intermedio (AGN-I), Ministerio de Trabajo y Previsión, Homologación de Convenio Colectivo de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera, 1956, caja 124.

⁴⁹ *La Gaceta*, 1968. 8 de enero.

⁵⁰ La crónica de los acontecimientos de enero de 1968 no difieren del telegrama que los empresarios de la CAT enviaron en 1945 al interventor federal en Tucumán para denunciar lo ocurrido en el ingenio La Trinidad, cuando los huelguistas cortaron el “agua y luz, calles y domicilios particulares del ingenio” y “al amparo de la oscuridad se inició la apedreada general de todas las casas del ingenio, efectuándose disparos de armas de fuego, llegando el ataque con más intensidad a la casa del contador” (*La Industria Azucarera*, 1945, n.º 625, noviembre, p. 710).

fueron parte, como en otras ocasiones, de la protesta obrera. Esto se observó especialmente en la forma en que capitalizaron la geografía compartida, signada por la proximidad de las viviendas de los trabajadores con la de los propietarios y el personal administrativo y jerárquico de la fábrica. Entre otras implicancias, esa conectada territorialidad permitía amedrentar a la patronal y sus colaboradores en el seno de sus propios hogares.

La movilización culminó con la impronta religiosa con la que había nacido, en cuanto, en la cercanía de la iglesia parroquial, tuvo lugar un acto público en el que pronunciaron discursos Lazarte, el cura Sánchez y el asesor legal del sindicato, Guillermo Garmendia. El sindicato se declaró en estado de sesión permanente y alrededor de las 12 horas comenzó la desmovilización. Luego de la protesta, las detenciones no se hicieron esperar. La Policía dispuso el arresto por 30 días de Lazarte, Garmendia y el dirigente sindical pentecontés Molina, a diferencia de Sánchez, a quien se decidió tomarle una declaración para aclarar su intervención en los sucesos. A los primeros se los acusó de no haber gestionado la autorización policial para realizar la movilización, “con el agregado de que en su transcurso se proferían gritos hostiles y agresivos alterando el orden y la tranquilidad públicos”.⁵¹ Los detenidos apelaron la decisión policial ante el juez y recuperaron la libertad, pero al unísono se les abrió un sumario penal por los delitos de violación de domicilio y daño intencional, decisión que se completó con la detención de cinco obreros que habían participado de la movilización.

Como sucedió en otros conflictos laborales, las mujeres del San Pablo se sumaron a la protesta obrera. En tal sentido, la movilización por las calles de los pueblos azucareros en defensa de los derechos laborales, la redacción de escritos que comitivas de mujeres llevaban a los periódicos para publicitar las demandas, o la búsqueda de intermediarios

⁵¹ *Noticias*, 1968. 9 de enero.

(interventores y gobernadores) para contribuir a la resolución de los conflictos eran repertorios que históricamente habían contado con la activa participación de las madres, hijas y esposas de los obreros.⁵² El 7 de enero de 1968, luego de la misa, las mujeres enarbolaron banderas argentinas y, junto a sus hermanos, maridos e hijos, muchos de ellos niños, se apropiaron de las calles del pueblo para demandar por los despidos y exigir la resolución del conflicto. Este recorrido se imbricó con otra instancia que también reconocía experiencias previas: la redacción de un manifiesto que un grupo de mujeres, en este caso, acercó al gobernador Aliaga García para obtener su intermediación y lograr la reincorporación de los obreros despedidos. El ejercicio de peticionar, presente en las protestas obreras de los años cuarenta y cincuenta, reconoce en 1968 el uso de un novedoso lenguaje. En el escrito, las mujeres refirieron al “drama” que vivían en sus hogares, consecuencia de la “refinada crueldad” empresarial, diciendo: “No hay mayor infortunio que la pérdida de la fuente de ingreso de los hombres que dependemos”. Y continuaron su presentación afirmando:

La empresa no procedió con justicia, ni con humanidad al despedir a sus obreros. También decimos que la eliminación de los mismos no fue un acto de vital necesidad para la firma. No conocemos con certidumbre la magnitud de sus recursos pero seguras estamos que son cuantiosos y múltiples. Si los patronos hubiesen visto en sus obreros algo más que un elemento económico hubieran reparado en que son hombres que cargan sobre sí la responsabilidad de cuidar la supervivencia de sus familiares, hubieran recurrido a sus sólidas reservas preservando con ello la vida, la moralidad y

52 Estas formas de acción colectiva –que contaron con una marcada presencia femenina– fueron alentadas por el proceso de politización y sindicalización promovido durante el primer peronismo. Por ejemplo, en la huelga de fines de 1949 declarada por FOTIA y FEIA, en la que las mujeres del Bella Vista y el Concepción tuvieron un importante protagonismo. Asimismo, en esa coyuntura, tuvo lugar la redacción de peticorios que acercaron a la prensa para visibilizar las demandas obreras.

la seguridad de nuestros hogares. Era lo menos que podían hacer quienes han recibido por generaciones la contribución de los trabajadores en la forma de una fortuna que les dio holgura, seguridad y poder a los propietarios de la fábrica.

Finalmente, remarcaron que, con el cura Sánchez, “ejemplo de amor y fraternidad cristiana”, participaron de la marcha convertida en un “grito desgarrado de quienes sufren verdaderamente el peligro de la miseria y el hambre” y se mostraban sorprendidas de que el poder público “no haya comprendido el valor de nuestra actitud, tan humana, tan cristiana, que estamos seguras tiene la aprobación de Dios”.⁵³

En la entrevista ofrecida al diario *La Gaceta* el día anterior a la protesta obrera, los curas de San Pablo justificaron del mismo modo la medida de fuerza.⁵⁴ En efecto, reafirmaron su compromiso con los trabajadores del ingenio y explicaron que Sánchez había actuado “como un pastor de la Iglesia que acompaña a sus fieles en defensa de sus derechos que creen violados por una injusticia”. En sus declaraciones, los curas criticaron el trato policial y se quejaron frente al gobierno por el comunicado político que pedía “tranquilidad y sosiego”: “¿Cómo puede haber tranquilidad después de que casi un centenar de obreros fueron privados de su fuente de subsistencia?”. Por su parte, Sánchez explicó: “Como cristiano y como sacerdote no puedo permanecer indiferente ante la situación desgraciada en que se encuentran las familias de los obreros despedidos en el ingenio San Pablo”. Así, en la justificación de la protesta por parte de las mujeres y los curas, subyacía un mismo ideario filiado en las nuevas lecturas del Evangelio y la encíclica *Populorum Progressio*, fuente de legitimación a la que recurrieron los distintos actores involucrados en los disturbios. La idea de

⁵³ *Noticias*, 1968. 12 de enero.

⁵⁴ *La Gaceta*, 1968. 11 de enero. Sánchez y Wurschmidt acudieron al diario junto al sacerdote Ramón Villalobos para apoyar y explicar el accionar de Sánchez el día de la protesta en San Pablo.

“injusticia”, “humanidad” de los obreros o de “actitud cristiana” frente a los atropellos fueron tomando forma al calor de los debates, lecturas comunes y sermones dominicales, instancias en las que la mediación de los curas contribuyó a forjar un clima de preocupaciones, sentidos de la injusticia y compartidos discursos que convirtieron al catolicismo en un “recurso de la política” (Barral, 2019: 158).

Tras las declaraciones de los sacerdotes, que recibieron el apoyo del sindicato de San Pablo y de actores como la juventud de Acción Católica y la Liga de Estudiantes Humanistas, el gobierno de la provincia elevó una protesta a las autoridades de la Iglesia tucumana. En una carta enviada al vicario Gómez Aragón, que fue reproducida en medios de prensa locales y nacionales, Aliaga García criticó duramente la actuación del cura Sánchez. Desde su perspectiva, no solo había sido el “encabezador [*sic*] de una manifestación tumultuosa”, sino que continuaba en una “campana de agitación de la opinión pública y alzamiento contra las autoridades naturales encargadas de la preservación del orden”. Por último, señalaba su desacuerdo con la imprudente declaración pública de los sacerdotes, que estaba “muy lejos de constituir una obligación emergente de su cargo”.⁵⁵ La carta del interventor, por un lado, obligó a que la autoridad eclesiástica se pronunciase sobre el conflicto y, por otro, dividió las aguas en la opinión pública, poniendo en el centro del debate el rol de los sacerdotes en los conflictos sociales.⁵⁶

⁵⁵ *La Gaceta*, 1968. 12 de enero.

⁵⁶ En los días siguientes, el conflicto de San Pablo alcanzó repercusiones nacionales debidas al debate público originado en torno al rol de los sacerdotes en la crisis política y social tucumana. El diario *La Prensa* de Buenos Aires criticó fuertemente la actitud de los curas de San Pablo e impugnó que la “misión sacerdotal” incluyera “vociferar y actuar en manifestaciones tumultuosas”. Citado en Schkolnik (2008: 31). En la misma línea, el periodista Mariano Grondona puso de ejemplo el conflicto en el ingenio San Pablo para criticar la “imprecisión en las fronteras que separan al sacerdote del activista”. El diario *Noticias* se sumó a las críticas y en su editorial señaló que no era la primera vez que en Tucumán se aprovechaba un oficio religioso para reunir a los trabajadores e “incitarlos después a cometer los peores y más inútiles atropellos”. En la misma nota, *Noticias* daba un paso más y aso-

La respuesta del vicario capitular generó amplias expectativas en la prensa y finalmente se hizo pública cinco días después, lo que originó aún más polémicas. Lejos del tono moderado que se esperaba de la autoridad eclesiástica, la respuesta enviada al gobierno estuvo dirigida a defender el accionar de Sánchez y del clero comprometido con la defensa de los obreros azucareros. El extenso escrito, con pasajes sumamente críticos de la situación provincial y de la política económica del gobierno, finalizaba justificando la participación del cura de San Pablo en la protesta: “En este caso, el origen de los desórdenes denunciados no está ni en la intención del sacerdote ni en su presencia en una caravana, sino en las injusticias que sufre el pueblo”.⁵⁷

La carta rápidamente traccionó apoyos en el espectro opositor al gobierno a nivel provincial y nacional. Distintos sectores del ámbito sindical, estudiantil y político expresaron su solidaridad con los sacerdotes tucumanos y reivindicaron la carta del vicario como una forma de legitimar sus críticas a la dictadura de Onganía. Del mismo modo, la Juventud Peronista se manifestó a favor del “reencuentro entre el pueblo y la Iglesia” promovido por el clero tucumano en su decidida defensa de los “humildes, desamparados y oprimidos”⁵⁸. A ellos se sumaron el delegado nacional del peronismo en Tucumán, Miguel Correa, la Federación de Obreros del Surco de la Industria Azucarera, la Juventud Universitaria Católica, la Liga de Estudiantes Humanistas, el Movimiento de Unidad Reformista, la Juventud Obrera Católica y los jóvenes de Acción Católica.

Desde Buenos Aires, la Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su solidaridad con el documento emitido por Gómez Aragón y subrayó la valiente posición de

ciaba lo ocurrido en San Pablo con el apoyo de ciertos “purpurados de la Iglesia” a la subversión y a los alteradores del orden. De ese modo, cristalizaba la campaña de desprestigio y críticas a los sacerdotes involucrados en la defensa de los trabajadores (*Noticias*, 1968. 11 de enero).

⁵⁷ *La Gaceta*, 1968. 17 enero.

⁵⁸ *La Gaceta*, 1968. 18 enero.

los sacerdotes, al tiempo que citó los conceptos de la encíclica papal para protestar por las políticas del gobierno. Así, a partir de los sucesos de San Pablo, “ya nadie en el país puede ignorar lo que está pasando en Tucumán. Millares de trabajadores y sus familias se encuentran inexorablemente condenados al hambre por un gobierno frío e insensible a sus más mínimas demandas”.⁵⁹ La CGT regional también se solidarizó con el cura Sánchez por su valiente y decidida actuación en favor de la clase obrera y subrayó la contestación del vicario capitular al gobierno provincial, al considerar que ambas acciones hablaban “con marcada elocuencia de lo justo y legítimo de la acción obrera que trajo como consecuencia tan lamentables hechos”.

El texto recuperaba expresiones de la nota de Gómez Aragón y de la encíclica *Populorum Progressio* para concluir exigiendo al gobierno un cambio en su política económica destinado a garantizar la plena ocupación y la expansión, al tiempo que a los Nougues les recordaba que el sacrificio de la “vapuleada clase trabajadora” tenía “sus límites de tolerancia: todo sacrificio debe venir acompañado de equidad y equilibrio entre las partes en litigio”.⁶⁰

El respaldo a la nota del vicario Gómez Aragón adquirió su más contundente apropiación en la nota que el sindicato del San Pablo le entregó a este, en la que señalaba que ella representaba una “ajustada y sabia” aplicación de la encíclica a las dramáticas circunstancias de las clases humildes de Tucumán:

Vuestra palabra abrirá nuevas y fecundas posibilidades en el esfuerzo constante de la clase obrera por obtener una vida más digna y más libre. Nada tan justo como la afirmación contenida en el documento capitular: “Un pueblo que no grita su esclavitud es un pueblo sin destino y sin futuro”. Ella

⁵⁹ *La Gaceta*, 1968. 20 de enero. El consejo directivo de FOTIA también expresó su apoyo a los curas de San Pablo, cuya actitud venía a revertir muchos años de “alejamiento entre la Iglesia tucumana y los conflictos sociales”.

⁶⁰ *La Gaceta*, 1968. 20 de enero.

condensa el espíritu que siempre animó a los trabajadores que hicieron de la rebeldía una exigencia permanente de su existencia, en el propósito por desterrar para siempre el hambre, la postergación y la miseria social”.⁶¹

Así, el catolicismo “como lenguaje y contenido de la política” asumió una función contestataria en clave comunitaria que el sindicalismo hizo propia y fue esencial en la definición de la acción colectiva y la lucha política del San Pablo. La experiencia de esta comunidad azucarera ayuda a comprender la forma en que “las instituciones, agentes y creencias provenientes del catolicismo fueron parte de los recursos de la política” y, por ende, permite reponer cómo los curas recuperaron las demandas y los sentidos de lo justo de sus comunidades bajo el clima posconciliar y cómo, en un mismo movimiento, el sindicalismo se valió de esa politización del catolicismo para fortalecer y legitimar sus reclamos (Barral, 2019: 157-158). En tal sentido, ambos actores articularon una sinergia que resulta clave para comprender la conflictividad de fines de los años sesenta en el San Pablo y en muchos otros pueblos jaqueados por la crisis y la desocupación.

El día después: derivaciones del conflicto, tensiones sindicales y estrategia empresarial

A un mes del conflicto, y sin que este se hubiera resuelto, los propietarios del San Pablo profundizaron la crisis laboral al pasar a temporarios a 81 trabajadores de surco que revestían como permanentes. Atilio Santillán, secretario general de FOTIA, calificó la decisión como “una nueva provocación de la empresa” dirigida no solo contra los trabajadores, sino contra el poder público, en cuanto la decisión llegaba mientras las partes realizaban, con la mediación del

⁶¹ *La Gaceta*, 1968. 20 de enero.

gobierno, tratativas para solucionar los despidos. Lazarte precisó que el cambio de modalidad implicaba un despido indirecto, ya que los obreros perdían los derechos asociados a la condición de estables, entre ellos la vivienda.⁶² En medio de la conmoción por los despidos y el endurecimiento de la política laboral asumida por los empresarios, el San Pablo fue el epicentro de la formalización del MSTM en la provincia, apuesta que reconocía el liderazgo de Wurschmidt como un referente del catolicismo posconciliar y como una figura comprometida en la defensa de los obreros.

Según la prensa, “acicateados por el deterioro de las poblaciones aledañas a los ingenios”, los curas de esas parroquias se reunieron en San Pablo el 4 de febrero para fijar posición sobre el problema de la desocupación y la pobreza. Del encuentro trascendió la decisión de elaborar un documento público en el que convocarían a dar una “respuesta más real al problema de Tucumán” y a señalar “adecuadamente y directamente las obligaciones de los empresarios que se pretenden cristianos”.⁶³ De ese modo, concluyeron que, si bien “se buscó solucionar la situación financiera de la industria azucarera, no se tuvo en cuenta la situación de los obreros”. Del encuentro participó también el vicario general, y, entre las resoluciones adoptadas, figuró la adhesión al *Mensaje de los Obispos del Tercer Mundo*. Tal adhesión dio lugar a la conformación del MSTM en Tucumán, colectivo de sacerdotes que, en adelante, mantuvo reuniones periódicas, redactó documentos conjuntos sobre la situación de la provincia y apoyó a los obreros azucareros en distintos conflictos locales. Pedro Wurschmidt fue el coordinador de los curas tercermundistas en el

⁶² *Noticias*, 1968. 30 de enero de 1968. *La Gaceta*, 1968. 31 de enero de 1968. Los afectados pertenecían a los lotes número 1, 2 y 3 de Yerba Buena, Obanta y Obraje.

⁶³ *Noticias*, 1968. 6 de febrero.

NOA –delegado regional del movimiento– y participó de los distintos encuentros nacionales.

La imagen de una Iglesia “en conmoción” impactó en la sociedad debido a la “intensa expectativa” creada por la reunión de los sacerdotes de parroquias obreras que habían “asumido la defensa de los trabajadores desocupados de la provincia”, lo cual influyó en la designación inmediata de un nuevo arzobispo para la Arquidiócesis de Tucumán.⁶⁴ El día 10 de febrero se anunció el nombre de Victorio Blas Conrero, un sacerdote proveniente de la diócesis de Córdoba definido como “progresista pero moderado”. No obstante, su designación tenía como objetivo apaciguar los ánimos del grupo de sacerdotes posconciliares, caracterizados por la prensa como “rebeldes” y “voceros de los problemas de los trabajadores”.⁶⁵ Tras conocer la designación, el grupo liderado por Wurschmidt debió postergar la publicación del documento que estaban preparando y, a pedido del vicario Gómez Aragón, debieron “atemperar su ímpetu aperturista” para no comprometer la tarea inicial del nuevo arzobispo.⁶⁶

El conflicto de San Pablo también tuvo repercusiones inmediatas en el plano gremial. Según la prensa, “sirvió para acortar distancias entre el sindicato de ese ingenio y FOTIA”.⁶⁷ En efecto, Santillán convocó a una conferencia de prensa para tratar el problema obrero en San Pablo y brindar el apoyo de la Federación. Tales gestos no lograron subsanar las críticas extendidas entre un sector de la dirigencia azucarera –entre ellos, el sindicato del San Pablo–

⁶⁴ *La Gaceta*, 1968. 9 de febrero

⁶⁵ *La Gaceta*, 1968. 15 de febrero.

⁶⁶ Para los sectores posconciliares afines a la revista *Cristianismo y Revolución*, “se designó rápidamente a un obispo en Tucumán que retome la complicidad del silencio y la omisión ante los hechos que afectan a los pobres, a los humildes, a los que merecen y exigen la solidaridad combativa y militante” (*Cristianismo y Revolución*, 1968, n.º 6-7, abril).

⁶⁷ *La Gaceta*, 1968. 17 de enero. Si bien no se explicitaban las razones de esa “distancia”, San Pablo pertenecía al grupo de ingenios en actividad cuyos sindicatos criticaban la gestión de Santillán, apoyada principalmente por los gremios de ingenios cerrados. Véase también Nassif (2016: 396).

contra el consejo directivo de FOTIA, al que acusaban de “inacción” frente a las políticas de la dictadura. La gestión de Atilio Santillán enfrentaba, por un lado, las tensiones internas, especialmente visibles en la creación de la Federación de Obreros del Surco de la Industria Azucarera y Agropecuaria de Tucumán (FOSIAAT) a fines de 1967, la que había debilitado a la organización, y las pujas entre ingenios en actividad y fábricas cerradas.⁶⁸ Por otro, la federación no fue ajena al impacto de la división en la Confederación General del Trabajo (CGT) de los sectores liderados por Augusto Vandor y Raimundo Ongaro, a lo que se sumaban los embates del gobierno expresados en la suspensión de la personería gremial y el congelamiento de los fondos de la organización. FOTIA fue clave en el armado de la Confederación General del Trabajo de los Argentinos (CGTA), fundada a fines de marzo de 1968 y caracterizada por su posición combativa frente a la dictadura.

En contraste con la imagen del poderoso sindicato de años precedentes, FOTIA se encontraba bajo una situación crítica en la que acuciaban distintos frentes. La creciente desocupación producto del cierre de ingenios, los despidos masivos en fábricas activas y, por ende, la drástica pérdida de afiliados y el déficit que quebrantaba a la Federación delineaban el escenario complejo en el que se movía la dirigencia sindical.⁶⁹ Surcada por esas dificultades, a las que se sumaban las acusaciones cruzadas por las posturas asumidas frente al gobierno, el CD de FOTIA renunció en abril de

⁶⁸ FOSIAAT se creó en octubre de 1967. Como señala María Celia Bravo en este libro, su fundación fue una dimensión del “hostigamiento gubernamental al sindicalismo azucarero”, una estrategia para potenciar “las diferencias entre la dirigencia con el objetivo de dividir y debilitar” a la federación obrera.

⁶⁹ En junio de 1969, un informe de la nueva CD describía esa compleja situación: de 38.000 afiliados en 1963, FOTIA había pasado a tener apenas 5.000; de 52 sindicatos de fábrica y surco adheridos, habían sobrevivido solo 19; la organización carecía incluso “de teléfono, cortado por falta de pago”, mientras se corría peligro de quedarse “sin luz y sin agua por carecer de medios con los que afrontar su pago puntualmente” (*La Gaceta*, 1969. 11 de junio).

1968 en respuesta al pedido presentado por 11 sindicatos, entre los que se encontraba el San Pablo.⁷⁰ El nuevo consejo provisional, presidido por Miguel Lazarte, asumió a principios de mayo y mostró visos de continuidad con la gestión anterior. Apenas conformado, se alineó con la CGTA de Ongaro, llamó a la “unidad de las bases” y se propuso reintegrar a los sindicatos del surco.⁷¹ Pero, por otro lado, en abierta crítica con el consejo renunciante, llamó a accionar el “plan de lucha” votado en diciembre de 1967.

La visita de Ongaro a Tucumán en el mes de junio de 1968 fue el escenario para reafirmar la alianza de los actores que articularon un frente opositor a la dictadura de Onganía. En San Pablo, fue recibido en el local sindical por dirigentes de FOTIA, encabezados por Lazarte y Benito Romano, delegado de la CGT Regional, acompañados por el sacerdote Raúl Sánchez, cuya actitud comprometida fue destacada por los presentes. Al día siguiente, Ongaro se reunió con un grupo de sacerdotes en la parroquia de San Pablo. Si bien no trascendieron los temas que abordaron ni los nombres de los curas que participaron, en la entrevista que Ongaro brindó a *La Gaceta* exteriorizó su apoyo a los “curas obreros”. Se refirió a ellos como “verdaderos ejemplos de cristianismo” y destacó “la iglesia renovada de los 300 sacerdotes de Córdoba, San Luis, Resistencia, de Monseñor Gómez Aragón y de los curas Dip y Sánchez”.⁷² Wurschmidt dejó constancia en sus cuadernos de la reunión que los curas mantuvieron con Ongaro en San Pablo y se alegró por la similitud entre las “ideas fundamentales y básicas” del MSTM y la confederación obrera. Se refirió al

⁷⁰ El memorial llevaba la firma de los sindicatos Aguilares, La Florida, Concepción, La Providencia, Corona, San Pablo, Marapa, La Fronterita, Santa Rosa, San Juan y Santa Bárbara (*La Gaceta*, 1968. Tucumán. 3 de abril). La prensa los denominaba los “sindicatos rebeldes”. Desde hacía meses expresaban sus críticas a la gestión de Santillán, tensiones que se profundizaron con la división de la CGT a nivel nacional.

⁷¹ *La Gaceta*, 1968. 10 de mayo.

⁷² *La Gaceta*, 1968. 14 de junio.

líder de la CGTA como un “hombre extraordinario, providencial y bien intencionado” que hablaba con “claridad y sinceridad”. Como conclusión de ese encuentro, escribió: “El sistema no camina. Hay que obstaculizar y denunciar las violencias del gobierno y la oligarquía, preparar el ambiente para el cambio”.⁷³

En la conformación de un frente político opositor a lo largo de 1968, el acercamiento entre la CGTA y el MSTM resultó clave, al que se sumaron las organizaciones estudiantiles, actores que participaron activamente de las protestas obreras y modificaron “la forma de confrontación con la dictadura” (Bravo y Lichtmajer, 2019: 79). Tal como había ocurrido en San Pablo a principios de enero, los sacerdotes y, con cada vez mayor compromiso, los estudiantes acompañaron las movilizaciones en las comunidades afectadas por la crisis. En ellas, las comisiones pro defensa –integradas por los actores comunitarios, como dirigentes sindicales, obreros, comerciantes, sacerdotes y productores cañeros, entre otros– adquirieron un lugar central en la organización de las protestas y en la mediación de las demandas frente al gobierno. Entre 1968 y 1969, estas formas de resistencia local ganaron visibilidad como la instancia más directa y enérgica de oposición a la dictadura. El dinamismo de la organización local contrastó con el fracaso de la huelga decretada por FOTIA en el mes de julio, medida que tuvo “escasa adhesión” entre los obreros de fábrica y surco y puso en cuestionamiento la capacidad de la Federación de defender los puestos de trabajo. En efecto, después de esa medida, y ante la imposibilidad de llevar adelante el “plan de lucha”, Lazarte perdió protagonismo en el Consejo Directivo de FOTIA, pero continuó liderando el sindicato de San Pablo hasta el golpe de Estado de 1976.⁷⁴

⁷³ IHH-UNSTA, Cuadernos personales de Pedro Wurschmidt, Tucumán, 16 de junio de 1968.

⁷⁴ Nassif señala que, después de la huelga, Lazarte fue sometido a una cirugía, frente a lo cual cobró protagonismo Cesar Cabrera del ingenio San Juan (Nassif, 2016: 467).

La opción de la resistencia local fue refrendada por Ongaro en su segunda visita a San Pablo, en febrero de 1969. En esa oportunidad, “exhortó a los trabajadores a constituir comisiones de defensa, con el fin de defender las fuentes de trabajo y los derechos sociales y formar un frente opositor”.⁷⁵ Su visita a Tucumán tenía ese propósito: la “formación de comisiones de defensa” que realizasen “actos de protesta, manifestaciones y reclamos populares”, organización destacada como la “única fórmula” frente al “fracaso de las acciones individuales”. La presencia del vicario parroquial junto a Ongaro, al que los dirigentes se refirieron como “el compañero-cura Sánchez”, confirmó el apoyo del grupo de sacerdotes tercermundistas a la CGTA.

Ese mismo año, el posicionamiento de los Nougés en el mapa azucarero nacional asumiría una franca y pública oposición frente a los empresarios del norte. Así lo expresó su participación en la creación, en agosto de 1969, de la Asociación de Industriales Azucareros de Tucumán (AIAT), entidad que también conformaron los ingenios La Florida, La Trinidad, Santa Rosa, Cruz Alta, Leales, San Juan, Aguilares, Marapa, Providencia y Ñuñorco. Esta “fracción industrial empresaria opositora”, la que representaba el 70 % de la capacidad productiva tucumana, era conducida por el exministro de Economía José María Nougés y por Emilie Nadra, presidente de la CAT (Pucci, 2007: 208).⁷⁶ En abierta confrontación con los ingenios del norte

⁷⁵ *La Gaceta*, 1969. 5 de febrero. A los pocos meses, en mayo de 1969, asumió Ángel Basualdo (ingenio San Juan) como secretario general de FOTIA, y Benito Romano fue desplazado como delegado de FOTIA ante la CGT.

⁷⁶ Pucci señala que “la asociación de los industriales en rebeldía llegó a trazar acciones en común con FOTIA y FET para la defensa de los intereses de la provincia, una actitud que resultó ya intolerable para los funcionarios de Buenos Aires [...] no solo acabaron con la AIAT sino también con la Compañía Azucarera Tucumana (CAT), el grupo industrial que había alentado aquel frente de resistencia” (Pucci, 2007: 209). En ese sentido, en enero de 1970, FOTIA y AIAT conformaron un “frente común” para la concreción de soluciones definitivas y solicitaron al gobernador de la provincia, Jorge Nanclares, su intervención para impedir la sanción de una ley atentatoria de

y sus socios tucumanos, la AIAT publicó una solicitud en la que reclamaba el aumento del cupo de producción para Tucumán, medida que debía complementarse con “otras de orden económico y financiero”. Asimismo, enfatizaba el desacuerdo frente a la agresiva campaña liderada, especialmente, por los ingenios del norte en detrimento de la industria tucumana y concluía afirmando su “irrenunciable decisión de luchar” y defender a todas las fábricas azucareras en funcionamiento. Para la AIAT, la defensa del derecho y la necesidad de subsistencia de los ingenios tucumanos dependía “no solo de la convivencia armónica y la paz social” de la provincia, “sino del verdadero y legítimo interés económico de todo el país”.⁷⁷

Este posicionamiento corporativo y defensivo de la agroindustria tucumana en el que participaron los Nougés coincidió con una nueva amenaza laboral en el ingenio San Pablo. Así, en octubre de 1969, el sindicato denunció que los directivos habían “empezado a hacer circular versiones sobre supuestos deterioros financieros a fin de preparar el camino de despido masivo del personal”. Al igual que en enero de 1968, el sindicato interpretó la posición patronal como “un plan frío y calculadoramente planeado desde años atrás, de desprenderse de obreros para reducir los costos de producción agravando ilegítimamente las tareas del personal” que subsistiría, lo que suponía “preparar a la empresa para la competencia monopolista entre los grandes grupos azucareros del país”.⁷⁸ De esta forma, la

los intereses económico-sociales de la provincia y alentando la creciente anarquía del mercado (*La Gaceta*, 1970. 20 de enero).

⁷⁷ *La Gaceta*, 1969. 27 de septiembre. Ese mismo día, el diario publicó declaraciones de Emile Nadra en donde señalaba que era imposible que Tucumán, con una capacidad de molienda que duplicaba la de los ingenios del norte, tuviera casi el mismo cupo. A su entender, eso provocaba “serias distorsiones” (*La Gaceta*, 1969. 27 de septiembre).

⁷⁸ *La Gaceta*, 1969. 15 de octubre. A la reedición de las amenazas de despidos, se sumó el retraso en el pago de los salarios obreros, hasta que la Dirección Nacional de Azúcar decidió liberar 8.000 toneladas de azúcar del San Pablo para que, con una parte de ellas, que sería prendada a la Caja Popular y al

amenaza de continuar con el plan de racionalización en la fábrica fue interpretada por el sindicato en el marco de las pujas con los grupos más concentrados del parque industrial argentino y, en ese contexto, los obreros se declararon en estado de alerta.

Lejos de disiparse, la conflictividad laboral arreció nuevamente un año después, cuando, en octubre de 1970, la fábrica fue tomada por 500 trabajadores, quienes solicitaron la intervención del gobernador de la provincia para concretar una audiencia con la patronal y el sindicato. La causa de la toma no solo era el reclamo por el pago de una quincena adeudada y el inminente vencimiento de otra, sino el sombrío panorama del ingenio. En este sentido, a la demanda por la estabilidad de los obreros, se le sumaba el pedido de informe sobre la causa del déficit que produciría la zafra, “cuánta azúcar había almacenada, cómo fue financiada la zafra, qué problemas hubo en julio por los cuales la cosecha se inició tardíamente, la causa de la pérdida de cupos y la falta de medicamentos en el hospital”, tanto como los problemas de los cañeros con la patronal.⁷⁹ Los peligros inmediatos que encerraba la mala cosecha fueron sintetizados por el trabajador Francisco Herrera, quien señaló:

Los que hemos tomado la fábrica nos hacemos responsables de toda la situación, ya que consideramos que el déficit que ha producido la zafra nos causará muchos problemas, a pesar de que el ingenio San Pablo es uno de los más modernos del mundo.⁸⁰

La merma en las zafras de 1969-1970, en contraste con los excepcionales rendimientos de 1968 (véase cuadro

Banco Provincia, la empresa solucionase el problema de los pagos (*La Gaceta*, 1969. 29 de noviembre).

⁷⁹ *La Gaceta*, 1970. 30 de octubre. A principios de 1970, la UCIT reclamó al ingenio San Pablo por moras en sus obligaciones y lo denunció por el incumplimiento del pago correspondiente a las zafras de 1966 y 1969 (*La Gaceta*, 1970. 21 de enero. *La Gaceta*, 1970. 17 de mayo).

⁸⁰ *La Gaceta*, 1970. 30 de octubre.

n.º 1), despertó la alarma obrera al convertirse en una amenaza para la estabilidad y la preservación de los niveles de empleo. Las exigencias del sindicato para conocer la deficitaria molienda –entre las que señalaron la pérdida de cupos– brindan indicios para interpretar la postura defensiva de los Nougés y su incorporación a la AIAT. En esta coyuntura tuvo lugar la conformación de la Comisión Pro Defensa de la fuente de trabajo del ingenio San Pablo, en la que participaron los delegados obreros del sindicato, representantes de la filial local de la FEIA, de la parroquia, de la escuela, del centro vecinal, de la Junta de Agua Potable, así como de los clubes deportivos y profesionales y de “otros sectores del quehacer comunitario”. La “necesidad de defender la fuente de trabajo y el futuro de la comunidad” fue el factor aglutinante, que permitía “adelantar la posibilidad cierta de una movilización popular efectiva, vigorosa y responsable para la defensa de la hoy amenazada localidad de San Pablo”.⁸¹

De ese modo, inspirada en la experiencia de las comisiones que ya funcionaban en otras localidades, la Comisión Pro Defensa fue motorizada por el sindicato, reunió a los actores de la comunidad, y en adelante representó las demandas locales. Sin embargo, cabe precisar que las denominaciones que asumió el comisionismo sintetizaron las experiencias que formaron parte de la aguda crisis azucarera de los años sesenta. Así, mientras que la Comisión Pro Defensa de la fuente de trabajo del ingenio San Pablo cifró su preocupación en los despidos, en otros pueblos se crearon la Comisión Pro Defensa del ingenio Bella Vista o la Comisión Pro Defensa de Villa Quinteros, cuyas denominaciones remitían a la salvaguarda de la fábrica y de la supervivencia del pueblo. La forma de nombrarlas nos advierte de la complejidad de la crisis y de la diversidad de escenarios derivados de ella.

⁸¹ *La Gaceta*, 1970. 3 de noviembre.

Consideraciones finales

A modo de síntesis, situarnos en un ingenio que no cerró –uno de los más modernos y de mayor capacidad productiva de la provincia– permite complejizar el escenario del colapso azucarero tucumano de los años sesenta, en cuanto posibilita recuperar la conflictividad laboral y la política empresarial frente a la prolongada crisis agroindustrial. Es decir, ayuda a ponderar la diversidad de experiencias, las que sobrepasaron la clausura de las fábricas azucareras, a partir del golpe de Estado de 1966, y convocaron a distintos actores de esas comunidades, que conformaron un arco de resistencia que rebasó a los obreros nucleados en los sindicatos de FOTIA.

Uno de los actores protagónicos de esta experiencia fueron los sacerdotes, quienes asumieron la defensa de los puestos de trabajo en el ingenio San Pablo de una forma activa y ocuparon un lugar clave en la protesta obrera. Este protagonismo abrevó en el tradicional rol de los curas como mediadores comunitarios y en las transformaciones posconciliares de la Iglesia católica, las que profundizaron sus vínculos con la clase obrera. En ese contexto, el compromiso social de los curas se volvió inescindible de la acción política. De ese modo, la experiencia de San Pablo sentó un precedente en las modalidades que, en adelante, adquiriría la defensa de los pueblos azucareros entre 1968 y 1969. Los párrocos de los pueblos con ingenios cerrados ganaron protagonismo al presidir las comisiones de defensa de las fuentes de trabajo, mediar en las negociaciones con el gobierno y las empresas, participar de movilizaciones y encabezar las protestas. Sus figuras convocaron a distintos sectores y con su presencia legitimaron movilizaciones y reclamos. Su pertenencia al colectivo nucleado en el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo les dio un marco de contención, así como visibilidad y apoyo de sus pares de otras diócesis. La demanda de sus comunidades los interpeló a liderar la protesta, definiendo una alianza

entre curas, obreros y diversos actores comunitarios que contribuyó a la cohesión y legitimidad de la resistencia local y la convirtió en una alternativa opositora a la dictadura y viable para enfrentar la crisis.

Tal como ha sido señalado en balances historiográficos recientes, el rol de la Iglesia y el catolicismo forma parte de una agenda pendiente en los estudios sobre las movilizaciones de finales de la década de 1960 (Gordillo, 2019; Barral, 2019). De esta forma, la experiencia de San Pablo contribuye a repensar los vínculos entre la Iglesia y los sindicatos obreros y la necesidad de ponderar su gravitación en el ciclo de protestas y acciones colectivas.

Finalmente, en este escenario, incorporar las políticas empresariales de los Nougés implica sumar un actor clave en el desencadenamiento y desarrollo de la crisis azucarera. Poco estudiado, el posicionamiento empresarial resulta central para conocer las implicancias de las políticas laborales de los ingenios que cerraron y de los que no lo hicieron, las posibles alianzas con sus pares de las provincias del norte (donde se ubicaban los ingenios más concentrados y beneficiados por la dictadura de Onganía) y su incidencia en las políticas públicas provinciales.

En suma, la apuesta por un estudio localmente situado de la crisis azucarera tucumana posibilita no solo adentrarnos en la diversidad de experiencias desplegadas, sino que contribuye a desarmar sentidos historiográficos instalados. Entre ellos, discutir el papel desempeñado por los sindicatos de FOTIA –desdibujado en algunos estudios precedentes– para enfatizar, como en el caso de San Pablo, que el sindicato de base conservó su rol como representante de los obreros y mediador con el gobierno provincial y la patronal. Por tanto, si bien en el contexto de crisis despuntó el papel de los curas en la resistencia, este protagonismo tuvo lugar de forma articulada con la dirigencia sindical. Asimismo, esta perspectiva de análisis muestra el escenario de conflictividad social en un ingenio que no cerró, pero que adoptó políticas de despido masivo, cuyo impacto en

las poblaciones amerita ser analizado en diálogo con otras fábricas que siguieron en actividad. Finalmente, esta investigación situada posibilitó reconstruir las trayectorias de los distintos actores desde una perspectiva relacional, horizonte propuesto en este libro para complejizar las miradas de la crisis.

La perspectiva local

La Comisión Pro Defensa de Bella Vista y su lucha comunitaria en tiempos de dictadura (1968-1970)

MARÍA CELIA BRAVO¹

La política azucarera de la denominada “Revolución argentina” (1966-1973) desató la mayor crisis azucarera experimentada por la provincia de Tucumán en el siglo XX.² La decisión estatal de intervenir y dismantelar ingenios afectó a los pueblos desarrollados en su territorio. En ese contexto, se formaron las Comisiones Pro Defensa (CPD), que adquirieron protagonismo al postular la defensa de las fuentes

¹ Instituto Superior de Estudios Sociales (CONICET/UNT). Facultad de Filosofía y Letras (UNT).

² El cierre de once ingenios azucareros no fue el mero resultado de un estado de sobreproducción como se afirma ligeramente. La excedencia del producto elaborado constituyó el escenario de la crisis, pero las causas fueron más complejas, la más importante refiere a la áspera lucha de la región productiva del Norte (Salta y Jujuy) para apoderarse de cuotas del mercado interno protegido a costa de la principal área productiva (Tucumán), que dada su mayor complejidad (mayores unidades fabriles y la existencia de productores de caña de azúcar) requería de la regulación estatal. Las políticas desreguladoras comenzaron a aplicarse desde 1955, sus efectos, combinados con la reducción del cupo productivo provincial, generaron la desorganización productiva y el desfinanciamiento de los ingenios. Finalmente, la dictadura de 1966 utilizando un acto de intervencionismo estatal inédito resolvió por decreto el cierre de unidades fabriles con problemas de financiamiento (Bravo, 2017: 166-211).

de trabajo –en especial la CPD de Bella Vista–, en cuanto actuaron como representantes de las poblaciones afectadas. En ese carácter exigieron la apertura de las fábricas cerradas y la continuidad de aquellas amenazadas con la clausura, el cobro de salarios y de indemnizaciones adeudadas por las empresas, la radicación de nuevas plantas industriales para paliar la desocupación, la construcción y el cuidado de caminos rurales, entre otros reclamos.³ La variedad de demandas expresaba las aspiraciones de los distintos actores locales, y la resolución de estas exigía la interlocución con funcionarios nacionales y provinciales y con empresarios para resolver o reparar los daños sociales consumados.

La Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia de la Comunidad (SEPA) dependiente del Ministerio de Bienestar Social, creada durante la dictadura de Onganía, pretendía sustituir la política por un diálogo gubernamental circunscripto a agrupaciones locales (comisiones vecinales, cooperativas, ligas de padres de familia, expresiones del municipio, barrio o departamentos). El objetivo era reorganizar la vinculación del Estado con asociaciones que agrupaban a distintos sectores, especialmente de bajos recursos, que se consideraban expresiones genuinas de la comunidad.⁴ De esta forma, el gobierno de facto aspiraba a reemplazar a los suprimidos partidos políticos –responsables del desorden social y de las conductas facciosas– por la participación comunitaria a nivel vecinal con el objetivo de despolitizar las demandas y desmovilizar a la población. Esta línea de acción fue defendida por el sector nacionalista, una de las dos almas de la Revolución argentina –siguiendo la expresión de Carlos Altamirano–, que convivía con un sector liberal

³ La mayoría fueron presididas por curas párrocos, aunque su integración dependió de las características socio-territoriales de cada pueblo, cada una de estas organizaciones recorrió un derrotero específico que dependía de las condiciones locales (Bravo y Lichtmajer, 2019: 63-90).

⁴ La ley 16.956 de 1966 redujo los ministerios de 8 a 5 y creó el Ministerio de Bienestar Social, con sus respectivas secretarías, entre ellas la SEPA, organizada sobre la base de dos direcciones: Promoción Comunitaria y Asistencia Comunitaria (Gomes, 2015: 2)

cuyo vocero era Julio Alsogaray (respaldado por la banca, las grandes corporaciones industriales, la Sociedad Rural), sector que sostenía la racionalización y modernización del aparato productivo, la atomización de los sindicatos, el congelamiento de salarios, la supresión de la indisciplina obrera (Gomes, 2011).

El discurso comunitario de las CPD reveló capacidad para articular a los distintos actores de la localidad y su zona de influencia. El núcleo de las peticiones se fundó en la defensa de la unidad fabril, entendido como la defensa del *lugar* común resultado de una construcción social centenaria, expresión de un legado histórico, colectivo y emotivo que otorgaba fundamento a la vida de los pueblos, compelidos a la decadencia o a la desaparición por el cierre de los ingenios debido a las decisiones adoptadas por la dictadura. Estos significados politizaron el conflicto social y desafiaron las políticas azucareras consideradas injustas y antisociales, sentido popular compartido que constituyó el núcleo de la acción colectiva.

El proyecto comunitarista del Onganiato se diferenciaba sustancialmente de las representaciones comunitarias de las CPD, que expresaban organizaciones sociales de carácter local, promotoras de demandas y movilizaciones para interpelar al Estado nacional y provincial ante políticas consideradas injustas. El hecho de que se adjudicaran distintos significados al concepto de “comunidad” no constituyó un obstáculo para que se entablara una interlocución entre las CPD y la SEPAC, en cuanto las primeras fueron identificadas como organizaciones locales no partidarias. En la línea de interpeleación al Estado y sus funcionarios, se destacó la CPD de Bella Vista, que en 1969 alcanzó reconocimiento público cuando el nuevo titular de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), Ángel Gallardo, declaró que en cada fábrica amenazada se adoptaría el método de lucha de la CPD de Bella Vista.⁵

¿Por qué esta entidad fue destacada como un modelo exitoso de resistencia popular? El trabajo procura respon-

⁵ *La Gaceta*, 1969. 11 de junio.

der este interrogante al analizar las prácticas y los valores esgrimidos por la CPD de Bella Vista, identificados con la defensa del lugar y asociados con la continuidad de la fábrica. Este propósito desafiaba el curso de la política azucarera e interpelaba las prácticas autoritarias y violentas de la dictadura. La resistencia popular local se sustentó en la fortaleza de relaciones construidas entre los distintos actores del pueblo. La trama relacional se expandió territorialmente al articular sus actividades con asociaciones provinciales y nacionales. A su vez, esta lógica de trabajo requería la interlocución sistemática con funcionarios de diferentes niveles.

El principal resultado de la CPD de Bella Vista fue la formación de la Cooperativa de Producción (en adelante CP), que realizó las zafas de 1969 y 1970 mediante un contrato de locación y servicios celebrado con la Caja Popular de Ahorros de Tucumán. La cooperativa de trabajo reformuló las relaciones sociales en el ámbito local, en cuanto su acción se circunscribió a la gestión del funcionamiento fabril, motor económico del pueblo. Su administración se caracterizó por el estricto cumplimiento de las normativas laborales, por la construcción de un fondo para la compra de acciones de los trabajadores enmarcado en un proyecto cooperativo destinado a adquirir el ingenio. Esta perspectiva se abandonó con la creación de la Compañía Nacional Azucarera (CONASA) en 1970 y con la solicitud de la CPD Bella Vista de incorporar el ingenio homónimo a la novel empresa. Tales objetivos facilitaron la cohesión comunitaria.

El enfoque utilizado postula la elaboración de un análisis situado que nos permite emplear el concepto de “lugar”, entendido como una territorialidad historizada, sustentada en una trama de relaciones modeladas por una prolongada experiencia social, que contribuyó a la configuración de identidades locales, forjadas por el sentido de apego y pertenencia (Tuan, 1979: 387-427). Bajo esta óptica, las identificaciones locales desarrolladas en torno al territorio no

son irrelevantes, sino que, por el contrario, constituyeron el escenario –trastocado por la crisis azucarera– que enmarcó la acción colectiva al implementar nuevos repertorios de protesta a nivel comunitario. En ese sentido, se postula que la CPD impulsó la politización popular y local y que sus protestas confluyeron en un movimiento antidictatorial más amplio, expresado en la rebelión provincial conocida como el Tucumanazo (1970).

Cierre de ingenios, repliegue sindical y descrédito de la patronal del ingenio Bella Vista

Entre 1967 y 1968, las localidades azucareras padecieron el cierre violento de once ingenios. Algunos establecimientos se clausuraron en el marco de la ley 16.926 de 1966.⁶ No obstante, durante 1967, el grupo Gettas-Fiad logró la restitución de la empresa Bella Vista bajo la condición de anular su cupo de producción de 7.000 toneladas de azúcar para cancelar su deuda con el Banco Provincia. Por su parte, el presidente de la Compañía Azucarera Tucumana (CAT), Emile Nadra, consiguió la reapertura de los ingenios La Florida y La Trinidad; a cambio de este beneficio, se comprometía a dismantelar las fábricas Lastenia y Nueva Baviera.⁷

En rigor de verdad, la mayoría de los ingenios fueron clausurados a través de convenios suscritos entre la Secretaría de Industria y Comercio de la nación, el gobierno de la Provincia y las empresas propietarias. De esta forma se cerraron los ingenios San José, Los Ralos, Amalia, Santa Lucía, Mercedes, San Ramón, Lastenia, Nueva Baviera,

⁶ Los ingenios aludidos en el decreto fueron Bella Vista, Esperanza, La Florida, Lastenia, Santa Ana, La Trinidad y Nueva Baviera.

⁷ Se trató de un acuerdo de la Compañía Azucarera Tucumana (CAT) con la Secretaría de Industria y Comercio de la nación de mayo de 1967 (Gallego, 2019: 50).

Santa Ana y Esperanza.⁸ Los convenios firmados no resolvían las deudas de la empresa con los trabajadores ni con los cañeros, solo apuntaba a regularizar la situación morosa de los industriales con el Estado nacional y provincial. En paralelo, se puso en marcha el plan de racionalización industrial previsto para Tucumán, centrado en el recorte del cupo de producción provincial que implicaba el funcionamiento de las fábricas por debajo de su capacidad, la consecuente debacle económica de los establecimientos y sus cierres por falta de ayuda bancaria. Tal política tenía como objetivo la concentración del parque industrial tucumano y se fundaba en la premisa de incapacidad del empresariado tucumano que se evidenciaba en fábricas obsoletas y en su impericia para gestionar la crisis de sobreproducción azucarera.⁹

El cierre de 11 ingenios dislocó la estructura productiva de la agroindustria, dejó como saldo 8.126 desocupados entre obreros y empleados de fábrica, cifra que debe ampliarse por la reducción del personal de surco, estimada en 32.077 trabajadores (Canitrot y Sommer, 1972: 21-26). También deben computarse los 9.123 productores de caña (conocidos como cañeros chicos) cuyo cupo fue confiscado compulsivamente por la ley 17.163 de 1967. Se los expulsó de la actividad y se les otorgó una compensación menor a las acordadas para los industriales y los productores que voluntariamente cedieron sus cupos.¹⁰ El colapso de la agroindustria afectó a la Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT) y a la Federación Tucumana de la

⁸ El ingenio San Antonio cerró en agosto de 1966 por orden judicial. Se trataba de una fábrica que había renovado su maquinaria, pero que desde 1965, debido a la política azucarera nacional, tenía problemas de financiamiento.

⁹ El fracaso de los industriales tucumanos había sido señalado por Salimei cuando justificó la ley 16.926 debido al alto índice de endeudamiento de los ingenios (*Primera Plana*, 1966, del 21 al 26 de junio, n.º 182).

¹⁰ Se denominaba “cupo” al derecho de molienda que se fijaba en toneladas de producción de azúcar. Se establecía un cupo por región productiva (Tucumán), que se prorrateaban en cupos por ingenio y por productores cañeros. Sobre los cupos azucareros, ver Bravo (2019).

Industria Azucarera (FOTIA) –organizaciones que nucleaban a los principales sectores subalternos de la actividad– por la reducción abrupta de sus afiliados.¹¹

Durante 1967 y 1968, las huelgas y protestas obreras fueron reprimidas de manera violenta, lo que provocó muertes, heridos y detenciones. El ejemplo emblemático del uso de la fuerza aconteció en enero de 1967 en el pueblo de Bella Vista. La policía cargó con armas de fuego contra los trabajadores reunidos en el lugar para participar de la huelga y movilización convocada por FOTIA. Durante los tumultos, murió Hilda Guerrero de Molina, alcanzada por una bala de la policía. Se trataba de la esposa de un trabajador despedido del ingenio de Santa Lucía, madre de cuatro hijos y participante de las protestas obreras. Su nombre se convirtió en un símbolo de las luchas azucareras y en un testimonio de la violencia desplegada por la dictadura para sofocar el conflicto social.¹²

El hostigamiento gubernamental al sindicalismo azucarero se reflejó en la anulación de la personería sindical de FOTIA durante varios años, situación que impidió a su dirigencia el acceso a los fondos gremiales. Las dificultades para revertir el cierre de las fábricas, la desocupación y el hostigamiento del gobierno profundizaron las diferencias entre la dirigencia fotiana y debilitaron a la organización obrera. En octubre de 1967, la creación de la Federación del Surco de la Industria Azucarera y Agropecuaria de Tucumán (FOSIAAT) supuso un duro golpe para FOTIA,

¹¹ UCIT perdió 10.000 asociados, mientras que el número de afiliados de FOTIA descendió de 38.000 en 1963 a 5.000 en 1969 (*La Gaceta*, 1969. 11 de junio). La Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) también redujo su número de asociados, pero desconocemos la cifra.

¹² La muerte de Hilda Guerrero generó una profunda conmoción en la provincia y recibió la atención de la prensa nacional (Nassif, 2016: 331-339). La represión violenta de las protestas en los pueblos azucareros afectados por el cierre de las fuentes de trabajo constituyó un recurso común de la dictadura. La violencia policial fue particularmente intensa en Villa Quinteros cuando se trató de evitar el desmantelamiento del ingenio San Ramón (Santos Lepera y Sánchez, 2019).

al institucionalizar las tensiones entre obreros de fábrica y de surco existentes desde la fundación de la organización.

Ante el fracaso de las medidas de protesta y la pérdida de derechos laborales, la dirección de FOTIA recomendaba actuar con cautela, adoptar medidas en función de los problemas de cada establecimiento, sin descuidar la difícil situación social de los ingenios cerrados y teniendo en cuenta las sombrías perspectivas de la zafra de 1968 (se temía la paralización de 10 unidades fabriles y nuevos cierres). Asimismo, proponía alinear las protestas azucareras con la de los restantes sectores populares afectados.¹³ Un sector discordante reclamaba la renuncia del consejo directivo de la federación y proponía declarar el estado de alerta para enfrentar de manera frontal la política azucarera.¹⁴

En abril de 1968, tomó consistencia un sector disidente que exigió la renuncia de la dirección de FOTIA, responsable de inmovilizar al gremio, del retroceso de las condiciones laborales y de la pérdida del poder adquisitivo del salario.¹⁵ Los impulsores pertenecían a sindicatos de ingenios en actividad que cerraron filas con los directivos de las empresas.¹⁶ Las divergencias se resolvieron en abril de 1968 con la renuncia indeclinable del consejo directivo liderado por Atilio Santillán, referente sindical de Bella Vista.¹⁷ Detrás de la “falta de acción” imputada a la dirección azucarera, gravitaron las diferencias entre los sindicatos de

¹³ *La Gaceta*, 1967. 26 de diciembre.

¹⁴ Informe al Congreso Extraordinario de FOTIA elaborado por Leandro Fote, José Cabrera y Manuel Brandán, 26/12/1967 (Nassif, 2016: 377). Fote integraba el Partido Revolucionario de Los Trabajadores (PRT) dirigido por Mario Santucho, quien bregaba por medidas confrontadoras en los ingenios y la adopción de la vía guerrillera para enfrentar a la dictadura (Carnovale, 2011: 63).

¹⁵ Esta moción fue impulsada por los ingenios Aguilares, La Florida, Concepción, La Providencia, La Corona, San Pablo, Marapa, La Fronterita, Santa Rosa, San Juan y Santa Bárbara (*La Gaceta*, 1968. 3 de abril).

¹⁶ El secretario adjunto de FOTIA, Ángel Costilla, denunciaba que los sindicatos de base opuestos a la dirección tenían una posición colaboracionista con las empresas (*La Gaceta*, 1969. 22 de abril).

¹⁷ *La Gaceta*, 1968. 11 de abril.

ingenios cerrados y los de fábricas en funcionamiento, y a esto se le agregó la división del sindicalismo provincial entre vandonistas y ongaristas, en cuanto el secretariado renunciante asumió la representación de la CGTA.¹⁸

La renuncia del consejo directivo debilitó la capacidad operativa de FOTIA para enfrentar de manera orgánica la defensa de las fuentes de trabajo, reclamo obrero que recayó en las organizaciones de base.¹⁹ En lo sucesivo, la posibilidad de revertir la difícil situación de los pueblos (por la clausura o posibilidad de cierre de los ingenios) dependió de la consistencia de las relaciones sociales construidas a nivel local, de la convicción de su dirigencia, de la confianza social depositada en las CPD, y de las identificaciones sociales y locales generadas en la protesta.

Como ya se adelantó, los ingenios fueron cerrados a través de convenios negociados por un sector del empresariado con la Secretaría de Industria y Comercio de la nación y el gobierno de la provincia. El resto de los industriales observó imperturbable la clausura de un porcentaje considerable del parque fabril azucarero (estimado en 40 % de su capacidad productiva) con el inconfesable propósito de apropiarse de los cupos de producción sustraídos a los ingenios cerrados.²⁰ Tal comportamiento desató el repudio obrero, que se expresó a veces de manera anónima, y en

18 En marzo de 1968, se formó la CGT de los Argentinos (CGTA), que adoptó una política intransigente frente a la dictadura. La organización liderada por Ongaro contó con el apoyo decidido del sector liderado por Benito Romano y Atilio Santillán.

19 El decreto 16.926 de agosto de 1966 decretó la intervención y el cierre de las fábricas, pero, al mismo tiempo, autorizó la normal percepción de los sueldos del personal hasta el 31 de julio de 1967, con el objetivo de mitigar la protesta obrera. Cuando el pago se suspendió, cundieron el hambre, las ollas populares, las demandas de los sindicatos de base y la emigración en los pueblos azucareros.

20 Los volúmenes de producción zonal y por unidad fabril eran definidos por la Dirección Nacional de Azúcar.

otras ocasiones como reacciones violentas de la población desesperada.²¹

El efecto social más destacado de esta política nacional –que incluyó a los industriales como partícipes necesarios– fue el torrente de desempleados que convulsionó la sociedad tucumana. Para paliar el desastre social, el gobierno publicó un precipitado plan de colonización destinado a propiciar la diversificación productiva, propuesta presentada como la solución a la crisis tucumana. La negociación de la deuda de los industriales se saldó en parte con la transferencia al Estado de alrededor de 10.500 ha, que serían utilizadas para venderlas con facilidades entre los extrabajadores de la industria azucarera.²²

El descrédito social de la sociedad José Gettas y Elías Fiad afloró desde el momento en que la familia fundadora García Fernández, agobiada por problemas financieros, sueldos impagos y deuda con cañeros y proveedores, vendió el 75 % de su paquete accionario a ese grupo.²³ La nueva patronal no tenía trayectoria industrial, su fortuna provenía del comercio mayorista, del cultivo de caña, y como comercializadores de azúcar y alcohol (Saleh de Canuto y Budeguer, 1979: 66-67). Se distinguió por la cercanía con el gobernador de facto, Fernando Aliaga García, quien le

21 En enero de 1967, un grupo de manifestantes atacó la casa de José Frías Silva, propietario del ingenio San José en Cebil Redondo, cuyo establecimiento fue cerrado en el marco del convenio. En ese episodio fue saqueado el almacén de la planta. Posteriormente, bombas molotov estallaron en el escritorio de la firma Gettas Fiad, práctica que evocaba las utilizadas por la resistencia peronista y no formaban parte de los repertorios de protesta del sindicalismo azucarero. Las explosiones de furia de los trabajadores revelaban la escasa contención de la estructura gremial y se condensaba en el repudio a los industriales azucareros en general. Sobre estos incidentes, ver revista *Primera Plana* (1967. Del 10 al 16 de enero).

22 Los resultados del apresurado plan de colonización no han sido investigados. Solo se conoce la experiencia exitosa de Campo Herrera dirigida por el INTA (Gargano, 2017; Vessuri, 1974).

23 Las protestas sindicales en el ingenio arreciaron en 1965, cuando se acumularon las deudas con el personal debido a los problemas financieros del ingenio en el contexto de la crisis de sobreproducción. Sobre este tema, ver Bravo y Lichtmajer (2019).

otorgó fondos de la coparticipación federal para el financiamiento de la zafra, primer ingenio que consiguió ese privilegio.²⁴ La nueva firma desarrolló una política antiobrera centrada en el despido de personal, el refuerzo de la vigilancia en el espacio de trabajo, la suspensión de la provisión de leche a los menores y el desconocimiento de los fueros gremiales a la dirigencia de base, además de mantener impagas las deudas con los obreros.²⁵

Asimismo, el desempeño de la sociedad Gettas-Fiad estuvo marcado por el escándalo y las sospechas de corrupción. La denuncia más resonante la realizó el segundo jefe de la delegación de la Dirección General Impositiva (DGI), Humberto Medina²⁶, quien acusó a la firma de actuar como testaferro del grupo Salimei. El exministro de Economía habría urdido una trama ilegal para apoderarse de las fábricas intervenidas. La ramificación de las complicidades implicó a Aliaga García, quien habría recibido 70 millones de dólares por la restitución del ingenio a la sociedad Gettas y Fiad, cuya misión era el vaciamiento de la empresa para depreciar el precio de sus acciones.²⁷ El grupo Salimei estaba implicado por la compra del 51 % de las acciones del ingenio San Antonio, operación realizada después de declarada la quiebra. La denuncia sobre la relación de este grupo con la firma Gettas y Fiad no llegó a demostrarse en la Justicia. No obstante, la investigación de la DGI constató otro delito, la fabricación de azúcar negro,

24 Parte de los fondos de coparticipación depositados en el Banco Provincia se transformaron en un crédito preferencial otorgado a la empresa (*La Gaceta*, 1967. 15 de septiembre).

25 *La Gaceta*, 1967. 17 y 27 de abril.

26 Medina era un contador público nacional de 29 años que se desempeñaba como profesor de Administración de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino.

27 La historiografía azucarera no ha investigado aún la corrupción económica perpetrada por los funcionarios de la dictadura (ministro de Economía, gobernador de la provincia, director de la Dirección Nacional de Azúcar) en complicidad con un sector del empresariado. El caso más explorado es el de la Compañía Azucarera Tucumana (CAT). Sobre este tema, ver Pucci (2003) y Gallego (2019).

al encontrar en el ingenio 170.000 bolsas sin numeración y recibos millonarios sin firmas.²⁸ Por tal motivo, se prohibió el movimiento comercial del ingenio, y el titular de la DNA, Juan Virgilio Pinali, renunció al resultar implicado en esta operación delictiva.²⁹

La investigación iluminó las maniobras de evasión impositiva de la patronal, conducta que alimentó sospechas del vaciamiento de la empresa y fue denostada por los bellavisteños como conducta inmoral y antisocial, en cuanto se mantenían deudas millonarias con trabajadores y cañeros. En ese contexto, el despido de 15 delegados de sección del ingenio provocó la protesta obrera a la que se sumaron los comerciantes locales, afectados por los atrasos de los pagos de los trabajadores, su principal clientela.³⁰ Al clamor local, se unieron los curas de las parroquias del área azucarera, de los cuales 18 de ellos integraron el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM), formado en diciembre de 1967, que acompañó las demandas de los trabajadores.³¹ En consecuencia, la represión del gobierno se descargó sobre las prácticas religiosas, al reprimir la procesión de San José Obrero (patrono de Bella Vista) que se realizaba el 1 de mayo en el pueblo. Los gases lacrimógenos y bastonazos propinados por la policía impidieron el tradicional acto religioso y dejaron como saldo numerosos heridos (entre ellos, el sacerdote Amado Dip) y varios

²⁸ *La Gaceta*, 1967. 28 de octubre.

²⁹ Se comprobó que durante su gestión se evadieron 5.500 t de azúcar, que representaban la carga de 250 camiones con acoplados (*La Gaceta*, 1967. 24 de diciembre).

³⁰ Entre los despedidos, estaba Julio Lescano, que integró posteriormente la CPD.

³¹ Los curas tuvieron un papel destacado en las protestas de los trabajadores de los ingenios San Pablo, San Ramón, Santa Lucía, Bella Vista y el área azucarera de Simoca, entre otras localidades. En un documento manifestaron su oposición a la política azucarera del gobierno y se declararon solidarios con los trabajadores que sufrían el despojo de sus derechos laborales (Santos Lepera y Folquer, 2017: 116-117).

detenidos, además de dañar la imagen del santo que encabezaba la procesión.

La violenta represión desatada durante una expresión religiosa tradicional conmocionó a los bellavisteños y a la población tucumana en general. El episodio fortaleció un sentimiento generalizado de indignación e injusticia canalizado por los curas del MSTM, que exigieron al vicario la excomunión del gobernador, del ministro de gobierno y el jefe de policía. Para atenuar el descontento clerical y popular, el nuevo mandatario, Roberto Avellaneda, ordenó una suerte de reparación al autorizar la procesión suprimida, que se realizó el 6 de mayo presidida por Víctor Gómez Aragón, vicario capitular.³²

En junio de 1968, Raimundo Ongaro viajó a Tucumán con el objetivo de fortalecer la CGTA representada en la provincia por Benito Romano.³³ En consonancia con el nuevo repertorio de protesta implementado por la confederación, dirigentes fotianos participaron en un acto organizado por los estudiantes en el patio del rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán en protesta por la intervención de las universidades.³⁴ El descontento a las políticas de la dictadura articulaba nuevos actores (sacerdotes, estudiantes y la dirigencia cegetista opositora), cuyas presencias

32 El 11 de marzo de 1968, se aceptó la renuncia de Fernando Aliaga García, cuya reputación se erosionó por las denuncias de corrupción en el ingenio Bella Vista. Fue reemplazado por Roberto Avellaneda, quien se desempeñaba como intendente de San Miguel de Tucumán. Era integrante del cursillismo, movimiento de la derecha católica al que pertenecía el general Onganía, con especial desarrollo en Tucumán (*Primera Plana*, 1969. Del 4 al 10 de febrero, n.º 319).

33 Exilado en Bolivia durante la Revolución Libertadora, había participado en la resistencia peronista. Se trataba de un dirigente azucarero de gran relevancia en el mundo sindical. Comenzó su militancia gremial en el ingenio Esperanza, accedió a la secretaria general de FOTIA en 1959 y condujo la gran huelga azucarera de ese año. Se desempeñó como diputado nacional en 1962 y 1965, delegado de la OIT y director de la Compañía Nacional Azucarera (CONASA) en 1973. Fue detenido y desaparecido durante la última dictadura militar en 1976.

34 *La Gaceta*, 1968. 13 y 28 de junio.

prácticas amplificaron el impacto público de los actos de protesta realizados en los pueblos azucareros.

En noviembre de ese año, la situación económica del ingenio Bella Vista se tornó insostenible. A pesar de las ayudas económicas del gobierno de la provincia, la empresa debía a su personal 93 millones de pesos, correspondientes a los salarios de agosto, septiembre y octubre, además del aguinaldo y las vacaciones de 1967.³⁵ La magnitud del pasivo parecía confirmar el rumor de vaciamiento de la fábrica. Ante la quiebra inminente, la sociedad Gettas-Fiad abandonó subrepticamente las instalaciones del ingenio sin hacer ninguna declaración. El vacío dejado por la deserción empresarial fue llenado por los trabajadores que ocuparon la fábrica para custodiar sus bienes e instalaciones. En esa situación extrema, se formó la CPD de Bella Vista.

La CPD de Bella Vista y su discurso: la defensa del lugar como sustento de la acción colectiva

Por iniciativa de la dirigencia sindical, el 22 de noviembre, en el Colegio San José se reunió una asamblea (integrada por obreros, empleados, cañeros, comerciantes, profesionales y representantes de las asociaciones locales) de la que surgió formalmente la CPD. Fue presidida por el párroco Francisco Hilario Albornoz, y su composición no solo era policlasista, sino que expresaba además diferentes trayectorias políticas y asociativas. La adscripción del sindicato obrero al peronismo era manifiesta, aunque un lugar prominente lo ocupaba Manuel Valeros, exdiputado de la UCRI. La nómina de integrantes incluía a referentes locales de la Acción Católica como Raúl Oscar Chabán, en tanto la

³⁵ *La Gaceta*, 1968. 23 de noviembre.

presidencia la desempeñaba el párroco, figura respetada en el pueblo por su capacidad de mediador social.³⁶

La inquietud desatada por el potencial cierre del ingenio, la conducta delictiva de la patronal agravada por la deserción de sus funciones empresarias, y la política destructiva del gobierno nacional que proponía la transformación del complejo agroindustrial en una simple destilería con la consiguiente reducción de la mano de obra, promovieron la articulación de los grupos locales en torno a la defensa de la fuente de trabajo, asociada con la vida del pueblo. Este propósito implicaba proteger un espacio situado, generador de valores y prácticas sociales con las que se identificaba a los pobladores.³⁷

El manifiesto de la CPD fundamentaba su reclamo en la historia del pueblo y de su progreso asociada al funcionamiento del ingenio, presentado como su principal fuente de riqueza. Tal historial precedía el memorial de reclamos de la CPD, primer documento que distribuyó a las autoridades provinciales. Su título, *¿Por qué debe mantenerse el ingenio de Bella Vista?*, se iniciaba con tres sugestivos epígrafes: “No defendemos una empresa en particular”, “Exigimos mantenimiento de la fuente de trabajo”, “Ocupación, seguridad social, estabilidad de la población, educación para todos, explotación integral de la caña de azúcar, son los objetivos de la CPD” (Salazar y Valeros, 2012: 161). Estos definían el campo de actuación de la comisión al defender la utilización integral del complejo agroindustrial, proyecto que implicaba el uso articulado de las distintas secciones fabriles y productivas, camino inverso al marcado por la política

³⁶ Sobre la composición de la CPD y las redes de relaciones asociativas tejidas en Bella Vista, ver el trabajo de Leandro Lichtmajer en este volumen.

³⁷ La noticia del gobierno de desmembrar el complejo agroindustrial y dejar en funcionamiento la destilería se conoció a fines de noviembre de 1968 (*La Gaceta*, 1968. 28 de noviembre).

del gobierno.³⁸ Tal visión expresaba el carácter popular del proyecto de la CPD, incluso en términos sociales y productivos, esquema defendido por la dirigencia sindical de base, cuya principal premisa era la defensa irrestricta del ingenio, entendido como el lugar que daba vida al pueblo de Bella Vista.

El ingenio homónimo era presentado como uno de los complejos agroindustriales más importantes de la provincia, con 8.000 ha de cañaverales servidos por riego, explotados bajo la modalidad de colonias.³⁹ Entre los medios de producción, destacaba el ferrocarril Decauville, que circulaba a través de 60 km para acarrear materia prima y el equipamiento alcanzado en la sección agrícola, con capacidad para implementar la mecanización de la cosecha. Esta nueva forma de realizar la zafra era presentada por técnicos y empresarios de la década de 1960 y 1970 como ejemplo de innovación tecnológica y racionalización productiva. La fábrica estaba equipada con maquinaria moderna, dotada de una destilería y una fábrica de papel accionada con bagazo. Tales características revelaban la presencia de un complejo agroindustrial articulado, en tránsito a la diversificación fabril sobre la base de la explotación azucarera, que no podía ser reemplazado por los pequeños emprendimientos publicitados por el gobierno de facto. Al respecto, el memorial mencionaba la instalación de una fábrica de pilas en el pueblo vecino de Lules, cuya presencia no podía compensar en materia de contratación de mano de obra el cierre del ingenio Mercedes. Su paralización había destruido el tejido social de las localidades de Mercedes, Ceibal y Monte Grande, además de dislocar la economía de Lules, su

³⁸ El desmembramiento del ingenio Santa Ana que se analiza en este volumen revelaba el objetivo de la dictadura de dismantelar las unidades fabriles endeudadas.

³⁹ Las colonias eran una forma descentralizada de producción agrícola que estaba en manos de colonos que se hacían cargo de la explotación de extensas parcelas de tierras mediante su propio personal. Hacia 1940 los colonos eran denominados también como "contratistas".

pueblo de cabecera, por los estragos de la desocupación y la emigración (Salazar y Valeros, 2012: 163). Tales ejemplos de poblaciones de ingenios cerrados constituían una enseñanza para los bellavisteños y marcaban el sentido de las demandas de la CPD.

En 1968 el ingenio tenía un plantel de 550 obreros y empleados estables y de 14.000 trabajadores temporarios, además de recibir la cosecha de 9.000 productores de caña de azúcar que contrataban alrededor de 2.000 obreros de surco.⁴⁰ En lo relativo a sus servicios sociales, el complejo agroindustrial sostenía un hospital equipado con consultorios, un club de empleados y obreros, escuelas en el pueblo y en las colonias, un estadio de fútbol con tribunas para 2.000 espectadores y 300 casas para empleados y trabajadores que recibían agua y luz de la empresa (Schleh, 1944: 86). La defensa del lugar asociado al ingenio, custodiado por los trabajadores y los vecinos de Bella Vista, se extendía también hacia otras actividades productivas subsidiarias: 21 talleres, 180 comercios, 10 pequeñas fábricas de pan y soda, que expresaban las especificidades sociales y económicas del pueblo.

En esa línea, Bella Vista se presentaba a sí misma como una sociedad progresista, orgullosa de su desarrollo. El documento vanagloriaba sus asociaciones culturales, educativas y el servicio bancario que condensaban el esfuerzo colectivo local alcanzado por la colaboración de la anterior patronal, la familia García Fernández, que mantuvo esa práctica como política de la empresa. Los 7.827 ciudadanos del pueblo de Bella Vista (sumados a los 12.426 del área rural) habitaban un lugar modelado por edificaciones y urbanizaciones, resultado de la interacción de las relaciones sociales locales en clave fomentista (Schleh, 1944: 329).

⁴⁰ Se calcula que 25.000 personas dependían en forma directa del complejo agroindustrial, magnitud que excedía a los habitantes del pueblo de Bella Vista, en cuanto numerosos plantadores del departamento Leales derivaban su cosecha hacia el ingenio.

El edificio más importante era la iglesia San José Obrero, comenzada en 1895 por iniciativa de la familia García Fernández, cuya construcción fue continuada por el esfuerzo de los cañeros que participaron en el financiamiento de la obra con la donación de una carrada de caña. En 1947 la jurisdicción se transformó en parroquia, y en 1961 su radio de influencia social se amplió, a instancias de las gestiones del cura Francisco Hilario Albornoz, quien fundó el colegio San José, único instituto de enseñanza secundario de la zona. Otro punto culminante de la urbanización del pueblo fue la construcción de la plaza San Martín en 1932, emplazada en terrenos donados por García Fernández. El paseo fue remodelado en 1961 por la Comuna Rural y ornamentado por iniciativa de los vecinos, que contribuyeron con el busto del prócer.⁴¹

La radicación de instituciones estatales, sumada a la apertura de casas comerciales, reformuló el funcionamiento del pueblo y modeló las prácticas sociales y los vínculos cotidianos de los vecinos.⁴² Las marcas estatales y las obras de urbanización transformaron el espacio en lugares concretos dotados de identidad, que expresaban las relaciones sociales construidas⁴³ y obraban como campos de cuidado, generadores de sentidos de apego y pertenencia.⁴⁴ La vida asociativa formal de Bella Vista se nutrió con estas edifi-

⁴¹ En 1929 el periódico semanal *Polifemo* editado en Bella Vista reclamaba: “Acá hace falta una plaza, un mercado y aguas corrientes” (Salazar y Valeros, 2012: 438).

⁴² A lo largo del siglo XX, se instalaron el Registro Civil, la empresa de Agua y Energía, el juzgado de paz, la oficina de correos, la comisaría de distrito, las escuelas provinciales del ciclo primario, la Gota de Leche, el mercado, la banda de música, las sucursales del Banco Provincia y de la Dirección de Rentas, y la central telefónica.

⁴³ Seguimos a Lilian Diodati, quien postula que “el lugar no precede a las relaciones sociales, sino más bien las expresa, acompaña y las asienta al mismo tiempo” (Diodati, 2008: 113).

⁴⁴ El concepto de “campos de cuidado” pertenece a Tuan, y refiere a los vínculos que se establecen entre los pobladores y el lugar, no fáciles de detectar para los extraños, pero que evocan relaciones afectivas con el territorio vivido (Tuan, 1979: 412).

caciones sencillas que alojaron la creación de la biblioteca popular Marco Avellaneda en 1915, el ateneo estudiantil Sarmiento, el Círculo de Salesianos San José, el Club Social, que contaba con un elenco teatral, el Centro Juvenil Cultural, además de otras entidades (Salazar y Valeros, 2012).

La CPD solicitó audiencia con las autoridades provinciales y nacionales, a las que ratificó su voluntad de gestionar pacíficamente soluciones en nombre del pueblo. Al mismo tiempo, realizó movilizaciones locales y peregrinaciones religiosas destinadas a incorporar a su causa al conjunto de la población. El primer triunfo consistió en la aceptación de su representatividad comunitaria por parte de los funcionarios de la dictadura. El carácter apartidario de la comisión (dirigida por el párroco y un pequeño fabricante local, secundados por profesionales como secretarios, acompañados discretamente por el sindicalismo en las distintas vocalías) permitió el reconocimiento de la organización. El gobierno provincial subrogó a la empresa para abonar los salarios adeudados al personal del ingenio, obligación que cumplió a fines de diciembre. La CPD agradeció públicamente la decisión oficial y levantó la orden (que circulaba entre la población bellavisteña) de negarse a censarse hasta tanto se solucionara el problema del ingenio.⁴⁵

La Dirección Nacional de Azúcar (DNA), institución que entendía en materia azucarera, mantuvo la política de Salimei fundada en la reducción de unidades fabriles en Tucumán, criterio que auguraba un futuro sombrío para el ingenio. Incluso interrogó a los industriales tucumanos sobre su contribución ante un eventual cierre de la fábrica. La respuesta no se hizo esperar. El sector animado por un “espíritu de colaboración” se comprometió a contratar 200 trabajadores de la fábrica para paliar la desocupación.⁴⁶ La CPD de Bella Vista se opuso enérgicamente a ese tipo de asistencia empresarial, calificándola de “fraude”, y

⁴⁵ *La Gaceta*, 1968. 14 de diciembre.

⁴⁶ *La Gaceta*, 1968. 20 de diciembre.

denunció que el verdadero propósito consistía en el vaciamiento laboral del establecimiento, en cuanto contrataba a los operarios más eficientes y formados, con capacidad para hacerla funcionar. Afirmaba que este tipo de ofrecimiento contribuía a la despoblación y obedecía a conductas empresariales desleales y regresivas (captación de los mejores recursos humanos) que atentaban contra la existencia del pueblo.⁴⁷ Por su parte, los restantes sindicatos azucareros de base consideraron contradictoria la conducta patronal que suspendía y despedía arbitrariamente a su propio personal, mientras que se comprometían públicamente a absorber 200 trabajadores del ingenio Bella Vista.⁴⁸

En esa coyuntura la CPD organizó un acto público de carácter provincial y pacífico por realizarse el 15 de enero de 1969 para reclamar por la actividad de la fábrica. Mientras el gobernador Avellaneda transmitía a la CPD que el gobierno nacional no modificaría la política azucarera, el párroco replicó que el problema no se circunscribía a los 500 trabajadores de la fábrica, por el contrario, afectaba a una ciudad de 20.000 habitantes.⁴⁹ En ese marco, reiteró la necesidad de que el gobierno nacional saldara la deuda de la empresa con los cañeros. Las autoridades provinciales estaban asediadas por distintas demandas: pago de aguinaldo a los trabajadores de Esperanza, marcha en Aguilares (donde se había formado una CPD) a la que asistió el propietario, Simón Padrós, para reclamar por la continuidad de la empresa. El diario matutino más importante de la provincia, *La*

⁴⁷ *La Gaceta*, 1969. 5 de enero.

⁴⁸ Archivo de la CPD de Bella Vista (ACPD de Bella Vista). Agradezco a Atilio Santillán (h) y a Manuel Valeros por facilitarme la documentación.

⁴⁹ La respuesta del párroco elevaba a Bella Vista al estatus de ciudad, aunque institucionalmente tenía rango de comuna rural administrada por un comisionado designado por el gobernador, sin participación de los vecinos. Este régimen derivado de la ley de comunas rurales de 1950 era considerado por los pobladores un “muestuario de carencias”, sin edificio propio, organización administrativa y contable, ni personal técnico (Salazar y Valeros, 2012: 318).

Gaceta, consideraba en su columna de opinión que la posible clausura del ingenio Bella Vista sería el “golpe más cruento” infligido a las rentas provinciales (si se comparaba con el impacto económico de los ingenios ya cerrados) estimado en \$ 450.000.000 al año.⁵⁰ Tales argumentos conmovieron a la población de la provincia y contribuyeron a que el gobierno autorizara la realización del acto.

La concentración del 15 de enero en Bella Vista se organizó cuidadosamente. La CPD repartió volantes destinados a concientizar a la población.⁵¹ El texto interpelaba al comerciante, al cañero, al profesional, al trabajador, al vecino a movilizarse en la defensa del pueblo, territorio entendido como espacio de pertenencia e identidad comunitaria. Explicaba la difícil disyuntiva de los pobladores: se luchaba por el funcionamiento del ingenio (concebido como la totalidad del complejo agroindustrial) o de lo contrario el pueblo de Bella Vista moriría como comunidad. El discurso adoptaba una veta emotiva en clave local que otorgaba fundamento a la acción colectiva del pueblo, centrado en el resguardo de las realizaciones construidas. En consecuencia, el éxito de la concentración dependía de la activación de la trama de relaciones locales, reflejada en la adhesión de

⁵⁰ La columna de opinión del diario se denominaba Panorama Tucumano (*La Gaceta*, 1969. 15 de enero).

⁵¹ El texto decía lo siguiente: “Comprobada la imposibilidad de proseguir sus actividades la Cía. Azucarera Bella Vista, nos toca defender el único bien de producción y de riqueza que es la fábrica azucarera con todas sus tierras. La población no tiene alternativa, o lucha con todas sus fuerzas, o muere definitivamente. Este es el lugar donde nacimos, donde hemos vivido, donde nacieron y se formarán nuestros hijos. Es la razón que nos invita y nos obliga a vivir. Y la vida es una lucha permanente y tenemos que hacer honor a todos los sacrificios que se hicieron, a todos los sudores y la sangre derramada. ¡Adelante entonces pueblo soberano de Bella Vista! ¡A defender nuestra vida y la de quienes nos rodean! ¡Sin temor, sin flaquezas! ¡La razón está de nuestra parte! ¡La victoria será nuestra! ¡Viva el pueblo de Bella Vista!” (Archivo de la CPD de Bella Vista [ACPD BV]).

los comerciantes del pueblo, que cerraron sus negocios para asistir a la concentración.

La intensa actividad de la CPD trascendió los vínculos locales al conseguir el respaldo de numerosas asociaciones de carácter empresario, sindical, católico, educativo, cultural, profesional, de base cañera y vecinal.⁵² La órbita de actuación de las redes asociativas adheridas era variada, incluía diferentes manifestaciones del universo gremial azucarero de distintas localidades de la provincia y de otras regiones productivas, asociaciones sindicales, empresarias y profesionales de actuación provincial y organizaciones de proyección nacional que

⁵² Las delegaciones presentes fueron: Sindicato de Obreros del ingenio Marapa; Sindicato Obrero de la finca Manuel García Fernández; Sindicato de Obreros del ingenio Arno (Santa Fe); Sindicato Obrero del ingenio San Antonio; Sindicato Obrero del ingenio Esperanza; Sindicato Obrero del ingenio Amalia; Sindicato de Trabajadores de Simoca; Sindicato de Obreros del ingenio San José; Sindicato Obrero del ingenio Mercedes; Sindicato Obrero del ingenio La Providencia; Sindicato Obrero del ingenio Leales; Sindicato Obrero del ingenio Concepción; Sindicato Obrero del ingenio Santa Lucía; Secretariado de FOTIA; Confederación de Trabajadores Azucareros; Comisión Pre-rehabilitación del ingenio San Antonio; Federación de Cooperativas Cañeras; Cooperativas Cañeras de Bella Vista, del Ceibal, de las Talas, de Entre Ríos, de Leales, de Santa Rosa, de Campo Herrera, de Simoca; Asamblea de Delegados de UCIT; UCIT; Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (CACTU); Equipo ALFA (estudiantes vinculados a los STM); Juventud Obrera Católica; Juventud Universitaria Católica de Tucumán; Liga de Estudiantes Humanistas (agrupación universitaria vinculada a la DC); ex-Juventud de la Democracia Cristiana de la Capital y de la Banda del Río Salí; Asociación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP); Asociación Gremial de Educadores de Tucumán (AGET); Juventud Arquidiocesana de la Acción Católica; Acción Sindical Argentina (ASA); Centro de Comerciantes de Famaillá; Federación de Obreros y Empleados Municipales de San Miguel de Tucumán; Asociación del Personal Universitario; Agrupación Ferroviaria Unidad y Recuperación; Asociación de Viajantes de Tucumán; Sindicato del Vidrio; Agrupación Metalúrgica Felipe Vallese; Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera; Asociación Cultural de Fútbol; CGT Regional; CGTA; Federación Económica de Tucumán; Federación de Centros Vecinales; Federación de Bibliotecas Populares; Colegio Médico de Tucumán; Colegio de Abogados y Procuradores; Colegio de Martilleros (*La Gaceta*, 1969. 15 de enero).

comprometieron el envío de sus delegaciones. Algunos comunicados como el de la CGTA politizaron el significado del acto de Bella Vista: “Salvar la fábrica no es solo ganar una batalla contra el monopolio azucarero, sino también señala un camino de lucha que deben tomar los trabajadores de todos los ingenios amenazados por el cierre”.⁵³ La adhesión de la central obrera reivindicaba la lucha colectiva como metodología, propósito que requería de la articulación con nuevos sectores sociales para enfrentar la política dictatorial. Entre los apoyos, se filtró la invitación de la ex-Junta Justicialista de Famaillá a los peronistas instándolos a participar en el acto.⁵⁴ Este aval revelaba la participación furtiva de actores políticos, cuyas redes contribuyeron a la masividad de la protesta.

El acto resultó un éxito de asistencia, estimada por la Policía en más de 10.000 personas. Hicieron uso de la palabra 11 oradores: por la CPD, Manuel Valeros y Atilio Santillán; dos delegados por las cooperativas cañeras y UCIT; un representante de FOTIA y otro por los sindicatos azucareros de base; Benito Romano como delegado regional de la CGTA; un representante de FEIA; un delegado por el Centro de Comerciantes Minoristas de Famaillá; un representante de ATEP; un delegado por la Juventud Obrera Católica; el sacerdote René Nieva en representación del decanato arquidiocesano de Famaillá y los STM.⁵⁵ La CPD había anunciado la presencia de Raimundo Ongaro, que no participó del acto; posteriormente, se supo que al secretario general de la CGTA se le impidió el acceso a la provincia.

⁵³ ACPD BV, comunicado de la CGTA.

⁵⁴ Bella Vista dependía en ese momento del departamento de Famaillá (ACPD BV).

⁵⁵ *La Gaceta*, 1969. 16 de enero.



Acto de la Comisión Pro-Defensa del Ingenio Bella Vista, 15 de enero de 1969. Los carteles aluden a las articulaciones provinciales y nacionales forjadas por la CPD, así como al carácter popular de la protesta y su desafío a las prácticas autoritarias del gobierno. Fuente: Archivo del diario *La Gaceta* (Tucumán).

Manuel Valeros de la CPD insistió en la inminente destrucción social del pueblo debido al cierre del ingenio Bella Vista y destacó el carácter local de la protesta. Por su parte, Santillán se refirió a la agresiva propuesta del gobierno de cerrar la fábrica y abandonar los cañaverales, para dejar en funcionamiento solo la destilería. Benito Romano dedicó su discurso al carácter depredador del aventurerismo empresarial que tomaba créditos bancarios mientras lanzaba la fábrica a la destrucción, y como respuesta proponía la formación de un amplio frente social contra el gobierno. A su turno, los representantes cañeros, sindicales y católicos se explayaron sobre el carácter antisocial e injusto de la política azucarera del gobierno.⁵⁶ Las palabras de los oradores

⁵⁶ El núcleo del discurso de Valeros se centraba en la defensa de una población de 20.000 habitantes, con sus escuelas, hospitales, edificios y comercio,

asociaban la defensa del ingenio con la salvación del pueblo, y estos elevaron sus críticas al empresariado tucumano y a las políticas desarrolladas por el gobierno provincial y nacional. La magnitud de la concurrencia y el carácter pacífico de la protesta reflejaban el éxito de la propuesta, en cuanto exhibía una sólida unidad local y respaldo provincial y nacional. Se trató del primer acto opositor realizado en la provincia. Paradójicamente había sido autorizado por el gobierno y tuvo una masiva participación. En consecuencia, la reacción local, proyectada al ámbito provincial y nacional, emitió un fuerte mensaje crítico a las políticas antisociales de la dictadura. El conflicto no se circunscribía solo a la causa obrera, sino comunitaria, de carácter local.⁵⁷

El gobierno provincial anunció que el problema de Bella Vista sería considerado personalmente por Onganía el 29 de enero. Durante ese lapso de tiempo, advertía que sería reprimida cualquier actividad organizada por la CPD. En un clima de tensa expectativa, la comisión hizo público un comunicado firmado por el cura Albornoz titulado “Bella Vista no está dispuesta a morir como comunidad, ni ha de seguir la suerte lamentable de los pueblos tucumanos que han sucumbido por el cierre de los ingenios que constituían su única fuente de vida y de trabajo”. Anunciaba que los actos de la CPD se realizarían pacíficamente y aclaraba el significado de la conflictividad imperante: “la violencia resultante derivaría de aquellos dispuestos a impedir las legítimas exteriorizaciones de un pueblo que tiene un solo reclamo: paz y trabajo”.⁵⁸

La capacidad confrontadora de la CPD fue recibida con atención por la población tucumana. La prensa informaba que el gobierno provincial utilizaba la situación de Bella Vista para sensibilizar a las autoridades nacionales

resultado del sacrificio de muchas generaciones a través de 90 años (Salazar y Valeros, 2012: 126-129).

⁵⁷ Las formas de lucha de la CPD fueron novedosas: huelgas de hambre, procesiones, etc. Sobre este tema, ver Bravo y Lichtmajer (2019).

⁵⁸ *La Gaceta*, 1969. 26 de enero.

sobre la crisis social. La CPD había elevado al presidente de facto su proyecto de transformar el ingenio en una cooperativa gestionada por los trabajadores y cañeros, además de retomar el cultivo de caña de azúcar en las tierras de la fábrica. Recordaba que la compañía azucarera Gettas-Fiad debía a las instituciones estatales alrededor de 2.800 millones de pesos, de los cuales debían deducirse 220 millones por los salarios adeudados. Estimaba que el precio de venta del complejo agroindustrial no superaría los 1.500 millones de pesos y, por lo tanto, proponía al gobierno que se podía documentar la deuda en 15 años, con el objetivo de mantener en funcionamiento la fuente de trabajo y beneficiar a una población de 25.000 personas. Se trataba de una propuesta enmarcada en el ideal comunitarista del gobierno nacional, fundada en un discurso a las entidades cooperativas, que debían estar apoyadas técnica y económicamente por organismos nacionales, como fue el caso de Campo Herrera.⁵⁹

La CPD alcanzó su primera victoria de envergadura cuando se anunció un convenio entre la compañía azucarera y el DINIE, entidad que pasaba a administrar los bienes de la empresa.⁶⁰ En esa línea, la DNA se comprometió a enviar un técnico a inspeccionar la planta fabril y determinar los costos de las reparaciones necesarias para la realización de la cosecha. La CPD propuso al gobierno nacional asumir la dirección de la zafra y que los organismos competentes le aseguraran un cupo de molienda obtenido del prorrateo de las restantes empresas de Tucumán.⁶¹

El salvataje del ingenio era un tema complejo que precisaba de la intervención del gobierno nacional. Ante la dilación, la CPD anunció una marcha de los bellavisteños

⁵⁹ Se trataba de una cooperativa de trabajo (trabajadores de las colonias) formada en una de las colonias de Bella Vista en 1967 en la localidad de Campo Herrera y que estaba gestionada por el INTA.

⁶⁰ El DINIE era un organismo público creado por el peronismo en 1947 que administraba empresas estatales.

⁶¹ ACPD, nota de la CPD, 2 de marzo de 1969.

a San Miguel de Tucumán, sin distinciones de sexo y edad. En consecuencia, convocaba a hombres, mujeres y niños a acompañar a las autoridades de la comisión en la entrega de una propuesta de funcionamiento de la fábrica al gobernador y para solicitar la pronta solución al problema del ingenio. La marcha sería encabezada por integrantes de la CPD, representantes de las fuerzas vivas, de instituciones sociales, culturales, gremiales, educativas y religiosas, que portarían una gran bandera argentina, símbolo del patriotismo del pueblo de Bella Vista y de sus derechos como parte de la comunidad argentina.⁶²

El documento que convocaba la marcha puntualizaba los esfuerzos de la CPD por advertir a las autoridades nacionales y provinciales respecto de la gravedad del problema que se cernía sobre el pueblo por el posible cierre del ingenio. Reseñaba las acciones realizadas, ponderaba el acto multitudinario del 15 de enero y enfatizaba la voluntad de la comunidad bellavistaña de proseguir con los reclamos, vinculados con su supervivencia como comunidad. Reconocía los pasos positivos iniciados por el gobierno nacional: el pago de sueldos a los trabajadores subrogando los derechos de la empresa, el compromiso del gobierno de asumir la administración a través del DINIE y la caución de las acciones de la empresa propietaria al CIFEN. Sin embargo, esas medidas no significaban acciones definitivas y de fondo generaba un estado de incertidumbre en la población.⁶³

En marzo, integrantes de la CPD viajaron a Buenos Aires para discutir con el director de la DNA, Guillermo Arrenechea, el problema de la contratación de caña con cupo. Las operaciones de compraventa de materia prima ya habían sido concertadas por las fábricas tucumanas y se contaba con un estrecho margen de tiempo para realizar las reparaciones en el ingenio ante la inminencia de la zafra. El director de la DNA aclaró que se había decidido

⁶² ACPD BV, Organización de la marcha, 2 de marzo de 1969.

⁶³ ACPD BV, 2 de marzo de 1969.

la continuidad del ingenio solo por un año; el gobierno facilitaría los medios necesarios, pero la CPD debía asumir la responsabilidad de gestionar la fábrica a través de una sociedad constituida a tal efecto.⁶⁴ Una segunda reunión en la Secretaría de Industria y Comercio abrió margen para resolver el problema. Se anunció sobre la posibilidad de arrendar el ingenio a una organización jurídica motorizada por la CPD.⁶⁵ Ante esta posible solución, la CPD suspendió la marcha hasta el arribo de los integrantes que realizaban las negociaciones en la Ciudad de Buenos Aires.

El 24 de marzo, la CPD envió una carta al secretario de Industria y Comercio, Jorge Raúl Peyceré, a fin de informarle que la entidad estaba abocada a la organización jurídica de una cooperativa de trabajo que tomaría a su cargo el arriendo del ingenio para la realización de la zafra. Daba detalles de la inspección de los técnicos enviados por la DNA y del informe de las reparaciones necesarias, que debían gestionarse con celeridad para afrontar la molienda. Al efecto, solicitaba al organismo la oficialización del convenio celebrado el 28 de enero por la compañía azucarera Gettas-Fiad, que entregaba en caución sus acciones al CIFEN y la administración del complejo agroindustrial, al DINIE. Consideraba que otorgar un carácter legal a lo actuado constituía una condición necesaria para la formación de la sociedad cooperativa, y además reclamaba el cumplimiento de los recursos financieros necesarios para la realización de la zafra.⁶⁶

A medida que transcurría el tiempo, la situación del pueblo de Bella Vista se agravaba por la acumulación de los salarios adeudados a los trabajadores y la falta de respuestas concretas. En ese contexto, Lisandro Caballero denunció el incumplimiento del gobierno; según su criterio, las

⁶⁴ ACPD BV, memorándum de la audiencia con el director de la DNA, contador Guillermo Arrenechea, 7 de marzo de 1969. Asistentes: Manuel Valeros, Atilio Santillán y Lisandro Caballero en su carácter de asesor de la CPD.

⁶⁵ *La Gaceta*, 1969. 8 de marzo.

⁶⁶ ACPD BV, nota del 24 de marzo de 69.

autoridades solo simulaban una solución, pero no adoptaban medidas concretas. Se retrasaba la reunión de la asamblea de accionistas que debía ratificar el convenio suscripto por la empresa, no habían comenzado los trabajos de reparación, no se adelantaron fondos para la contratación de materia prima, ni se habilitaron cupos especiales de caña para la molienda.⁶⁷

La declaración constituyó el detonante que activó la movilización del pueblo de Bella Vista a la ciudad capital y el traslado de la CPD a la Casa de Gobierno provincial para requerir una solución definitiva. Fueron recibidos por el ministro de Economía, José María Nougués, quien se comunicó con Peyceré. El funcionario anunció el depósito de fondos para cubrir el atraso de los salarios de los trabajadores del ingenio, a condición de que la población depusiera toda actitud de presión contra el gobierno. El comunicado del gobierno provincial indicaba que el Banco de la Provincia había anticipado 145 millones de pesos para saldar parte de la deuda con los trabajadores y anunciaba un pedido de fondos al CIFEN de 200 millones destinados a resolver el problema del ingenio.⁶⁸ Urgidos por una solución, trabajadores y vecinos emprendieron la marcha hacia San Miguel de Tucumán, que recorrió más de 5 km por la ruta. La columna interceptó un tren carguero para continuar el trayecto, pero la marcha fue detenida por una gran cantidad de efectivos policiales, que apuntaron a los bellavisteños con armas de fuego para impedirles el paso. En esa coyuntura, la CPD anunció el pago de los salarios atrasados y solicitó a la población que regresara al pueblo.⁶⁹

La forma que asumió el salvamento del ingenio comenzó a definirse en abril, cuando la Caja Popular de Ahorros anunció que sería la administradora del ingenio. Sin embargo, la renuencia de los directivos de la institución

⁶⁷ *La Gaceta*, 1969. 26 de marzo.

⁶⁸ ACPD BV, 27 de marzo de 1969.

⁶⁹ *La Gaceta*, 1969. 27 de marzo.

de absorber el personal bajo su dependencia y la directiva del gobierno nacional respecto de la gestión de la fábrica por parte de una entidad cooperativa modificaron el diseño de explotación del complejo agroindustrial. En abril, en un contexto de indefiniciones, la asamblea del pueblo de Bella Vista, convocada por la CPD, votó por unanimidad la creación de una cooperativa de producción denominada Bella Vista para garantizar el funcionamiento del ingenio.

De la gestión local a la administración nacional: la cooperativa de producción Bella Vista y la formación de CONASA

La cooperativa de producción (CP) fue presentada como el resultado exitoso de la “titánica lucha” del pueblo de Bella Vista, que había conseguido hacer realidad la zafra de 1969.⁷⁰ En esa línea, para la CPD la formación de una sociedad cooperativa constituía un “acto de fe y de coraje” de la comunidad bellavisteña, en cuanto abría un camino para la recuperación del ingenio, el lugar en disputa, que expresaba el nexo de las relaciones sociales y económicas locales. La CP incorporó como socios a los obreros de fábrica, los empleados y los miembros de la CPD. El Consejo de Administración de la sociedad estaba integrado por miembros de la CPD, se incorporó a Vito Mercado, representante de FEIA, y se mantuvo la participación del sindicato obrero (referenciados en las figuras de Julio César Lescano, Atilio Santillán y Víctor Ocaranza), de los comerciantes, profesionales, cañeros y vecinos.⁷¹

⁷⁰ Balance de la Cooperativa de Producción de Bella Vista, ejercicio terminado en el 31 de marzo de 1970.

⁷¹ La formación del Consejo de Administración fue la siguiente: presidente, párroco Francisco Hilario Albornoz; vicepresidente Marcelino Ledesma; secretario Raúl Oscar Chabán; prosecretario Elacio Humberto Bravo; tesorero Eduardo Yubrin; protesoroero Carlos Alberto Corbalán; vocales Manuel Valeros, Atilio Santillán, Carlos Medina, Venancio Córdoba; vocales suplen-

La CPD solicitó al gobierno nacional que la cooperativa asumiera de manera directa el arriendo del ingenio y se anulara el rol de la Caja Popular como institución locataria ante el DINIE, por tratarse de un organismo que se había desprendido de los ingenios bajo su órbita. Esta decisión la invalidaba para cumplir ese rol.⁷² Sin embargo, la DNA firmó el contrato de locación con la Caja Popular de Ahorros, que a su vez suscribió un contrato de sublocación con la flamante cooperativa de producción Bella Vista, con el objetivo de realizar las reparaciones de la fábrica. En consecuencia, la CP asumió un papel activo en el alistamiento del ingenio, mientras que la CPD mantuvo su rol de interlocutora con las autoridades nacionales y provinciales para lograr una solución definitiva a la situación del ingenio. En el ámbito fabril, los directivos de la cooperativa se reunían dos veces en la semana con los jefes de sección para evaluar la marcha de los trabajos y definir los insumos y repuestos necesarios que se gestionaban ante el administrador del ingenio designado por la Caja Popular de Ahorros (Salazar y Valeros, 2012: 151).

Hacia abril de 1969, la desolación social era notoria en el área de los ingenios cerrados donde crecía la emigración; incluso algunas industrias creadas por el Operativo Tucumán habían fracasado económicamente, como fue el caso de Textil Escalada.⁷³ El sector cañero estaba extenuado por la morosidad de los ingenios, la expropiación del cupo y la caída del precio de la materia prima, factores que alentaron la concentración de la tierra, con la consiguiente expulsión de la actividad de los pequeños productores (Bravo, 2020).

tes José Damián Suárez, Julio César Lescano, José Vito Mercado y Víctor Manuel Ocaranza; síndico titular Julio César Flores; síndico suplente Matías Inocencio Romano. Posteriormente, el Consejo de Administración designó gerente a Hugo Jiménez, auditor, al CPN Segundo Pérez, asesor letrado, a Manuel Valeros, y asesor económico, a Lisandro Caballero (*La Gaceta*, 1969. 4 de abril).

⁷² *La Gaceta*, 1969. 10 de abril.

⁷³ El censo provincial de 1968 revelaba un éxodo de 150.000 habitantes. Sobre la fábrica Textil Escalada, ver Nassif (2016).

La tensión social no menguaba en Bella Vista, donde volvían a acumularse los sueldos atrasados del personal (se debía cuatro meses de salarios) que continuaba presentándose al trabajo para preparar el establecimiento en vista de la inminente zafra. La CPD solicitó a DNA la regularización de los pagos y advirtió a su titular Raúl Peyceré: “La demora en la ejecución de las medidas no ha permitido que en Bella Vista imperara el clima de tranquilidad, indispensable para la superación del problema social”.⁷⁴ Finalmente, el 2 de mayo, la Caja Popular de Ahorros tomó posesión del ingenio Bella Vista.⁷⁵

El 1 de mayo, FOTIA reclamó la restitución de su personería mientras anunciaba formalmente la adhesión a la CGTA. En ese contexto, 24 sacerdotes adheridos al MSTM se sumaron al festejo del 1 de mayo emitiendo un mensaje de solidaridad con los trabajadores. El 2 de mayo, la federación azucarera eligió una nueva conducción, presidida por Ángel Basualdo como secretario general, quien se desempeñaba como dirigente del ingenio San Juan, cercano a la Democracia Cristiana. En su primera declaración, definió que el accionar de FOTIA estaba centrado en impedir el cierre de nuevos ingenios y en la gestión de los reclamos de los exobreros por las deudas pendientes en los establecimientos cerrados.

No obstante, fueron los reclamos a nivel local generados por las distintas CPD los que jaquearon al gobierno provincial, que no estaba en condiciones de reprimir los actos organizados por estas entidades en las distintas localidades azucareras.⁷⁶ Estas protestas confluyeron con la

⁷⁴ *La Gaceta*, 1969. 16 de abril.

⁷⁵ *La Gaceta*, 1969. 2 de mayo.

⁷⁶ Las concentraciones zonales organizadas por las CPD se verificaron en Lules, Villa Quinteros, Santa Lucía, Nueva Baviera, Los Ralos, San Antonio, La Esperanza. Se debía en Santa Lucía 70 millones de pesos y 27 millones en Villa Quinteros, las indemnizaciones del ingenio San Ramón. En todos los casos, se reclamaba el pago de los salarios o indemnizaciones (*La Gaceta*, 1969. 5 y 15 de mayo).

agitación agraria impulsada por UCIT para conseguir la restitución de los cupos expropiados y con los actos callejeros de los estudiantes por la privatización de los comedores universitarios, cuya protesta se registró de manera contundente en Corrientes y Rosario. La concatenación de estos conflictos estalló con fuerza en Córdoba, donde la rebelión popular conocida como Cordobazo, protagonizada fundamentalmente por el movimiento obrero y el estudiantil, controló una parte considerable de la ciudad, atestando un golpe definitivo a la dictadura de Onganía (Gordillo y Brennan, 1994; Brennan, 1996).

En Tucumán, la protesta popular adquirió menor envergadura, pero se registraron numerosos actos callejeros. La policía reprimió con palos y gases una marcha del silencio organizada por los estudiantes universitarios que posteriormente participaron de un acto en FOTIA. Al día siguiente, se apedreó la Casa de Gobierno y se registraron choques violentos de estudiantes con la policía, mientras los jóvenes eran auxiliados por los vecinos. Durante la huelga del 30 de mayo convocada por las centrales obreras, se produjeron incidentes en Tafi Viejo, Banda del Río Salí, mientras que en Bella Vista se organizó una marcha de 2.000 personas, que manifestaron su descontento en las calles del pueblo.⁷⁷

Los conflictos locales y provinciales se articulaban y desafiaban a la dictadura militar. Los ecos de esas protestas determinaron la renuncia de los gobernadores. En Tucumán, Avellaneda fue reemplazado en julio por el coronel Jorge Nanclares, quien fue considerado persona no grata por la CGT debido a su participación en el cierre de los ingenios como funcionario de la DNA.⁷⁸ En ese contexto, la CPD de Bella Vista insistió ante el flamante mandatario de facto que el Estado, en su condición de principal acreedor,

⁷⁷ *La Gaceta*, 1969. 25 y 31 de mayo.

⁷⁸ El recambio de los gobernadores obedeció a la destitución de Onganía por los comandantes jefes de las tres fuerzas en junio de 1970.

ordenara la liquidación de los bienes de la antigua patronal Gettas-Fiad (ingenio, cañaverales, destilería, fábrica de papel) para venderlos a largo plazo, con bajo interés, a la sociedad cooperativa. Asimismo, solicitaba la asignación de un cupo de caña para el funcionamiento del ingenio, la creación de una escuela agroindustrial y la realización de obras de vialidad.⁷⁹

Las gestiones de la comisión consiguieron la firma de un nuevo contrato de la CP con la Caja Popular para la realización de la zafra y el otorgamiento de un cupo especial de caña. El acto de comienzo de la cosecha constituyó una ceremonia emotiva; la fábrica estaba engalanada con un gran cartel que decía “Este ingenio es nuestro, no lo dejaremos morir”.⁸⁰ La leyenda resumía el sentimiento comunitario local, cuya pertenencia se cifraba en el funcionamiento del ingenio, motor de vínculos sociales y emocionales, que se planteaba en términos de pertenencia colectiva. En esa línea, la CPD fundamentó su programa para salvar el ingenio en estos términos: “Estamos dispuestos a evitar la caída de una de las mejores y más eficientes fábricas de Tucumán. Esto se logrará mediante soluciones definitivas y de fondo”. Reiteraba como solución la venta del ingenio a la cooperativa y concluía el documento de la siguiente forma: “Bella Vista, entera, unida y decidida está dispuesta a reactualizar su lucha de 1968 y 1969, en ese momento para evitar el cierre (del ingenio), hoy queremos una solución definitiva”.⁸¹ El discurso subrayaba la centralidad de la acción colectiva local, requisito indispensable para que la CP asumiera la propiedad del complejo azucarero.

⁷⁹ ACPD BV, carta al coronel Jorge Nanclares, julio de 1969.

⁸⁰ El inicio de la zafra comenzó con una misa de campaña celebrada en el Club Sportivo de Bella Vista. Asistió Nanclares, gobernador de facto y el arzobispo de Tucumán, acompañados por una multitud congregada frente al canchón del ingenio (Salazar y Valeros, 2012: 152).

⁸¹ ACPD BV, Programa de desarrollo de Bella Vista elevado al gobierno de la provincia.

En octubre la CPD insistió en la liquidación del pasivo de la Compañía Azucarera Bella Vista SA (de Gettas-Fiad) previa verificación de los créditos tomados y en la transferencia del paquete accionario al CIFEN en calidad de principal acreedor. Cumplido ese paso, la comisión demandaba la sanción de un decreto nacional que unificara las deudas de la empresa con los organismos estatales y autorizara la venta a largo plazo (con bajo interés) a una nueva sociedad anónima a formarse. Se pensaba que debía estar integrada por el Estado provincial, las entidades autárquicas acreedoras de la firma Gettas-Fiad, con participación de todos los trabajadores y cañeros, sobre la base de un porcentaje igualitario por sector. A medida que se pagaran las deudas con el Estado, este organismo podía reducir su participación hasta desvincularse de la sociedad.⁸² La búsqueda de una solución de fondo que permitiera a la cooperativa acceder a la propiedad del ingenio apremió a la CPD, que solo había logrado una salida precaria, el funcionamiento del ingenio por un año. La compra del complejo agroindustrial Bella Vista estaba fuera de las posibilidades económicas de la cooperativa, solo podía lograrse con la intervención del gobierno nacional según el programa trazado por la comisión.

Como locataria, la CP adoptó como premisas de acción la custodia del patrimonio económico-social simbolizado por la fábrica y su personal. En esa dirección, privilegió el pago puntual de los haberes y habilitó las licencias por enfermedad, cuyos plazos se ampliaron a los fijados por la ley. Asimismo, se aprobaron anticipos de sueldos y préstamos por fallecimiento de familiares y, ante el estado de necesidad social, se autorizó el pago de salarios atrasados a los trabajadores de campo (deudas de la anterior patronal), con el argumento de que tales erogaciones serían restituidas cuando la empresa saldara las sumas adeudadas.⁸³ También

⁸² ACPD BV, nota de la comisión, 18 de octubre de 1969.

⁸³ ACPD BV, Memoria de la CT BV, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de marzo de 1970.

se dispuso la donación de 20.000 pesos a la parroquia, suma destinada a la formación de un comedor para niños y ancianos desamparados. Se concedió un préstamo de 1.100.000 pesos al sindicato de fábrica y surco para la compra de un inmueble destinado a oficiar de sede gremial y para la reparación de la camioneta del sindicato. Este importe se devolvería mediante el descuento de un porcentaje de los haberes de los trabajadores.⁸⁴ Otra preocupación de la entidad fue asegurar el servicio de asistencia médica a sus asociados y la provisión de medicamentos.

Durante su primer año, el balance de la CT alcanzó la utilidad de 35.737.245 pesos, monto al que debía agregar-se el valor de las acciones en curso de integración, ambos rubros representaban un activo social de 43.817.245 pesos. Se trataba de un resultado económico inédito que nunca habían alcanzado las organizaciones cooperativas de la provincia. Los beneficios derivaban de los buenos términos del contrato de locación suscripto con la Caja Popular de Ahorros, de las donaciones de sueldos de los socios y de las horas extras que se abonaron como simples con el consentimiento de los trabajadores. El beneficio social revelaba la magnitud del esfuerzo colectivo de los trabajadores para salvar la fábrica que se sentía propia y la conducción acertada del consejo de administración que privilegió las demandas sociales de los asociados.

La CP recomendaba a la asamblea de socios mantener intacto el activo social (una vez cubierto el fondo de reserva legal) para destinarlo a la integración de los trabajadores en una nueva sociedad que sería la encargada de administrar el ingenio.⁸⁵ Por otra parte, la locación a la CP representó para la Caja Popular de Ahorros una utilidad de más de 150.000.000

⁸⁴ ACPD BV, Memoria de la CT BV, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de marzo de 1970.

⁸⁵ Esta recomendación generó diferencias: algunos socios no estaban de acuerdo con reservar el capital y solicitaron la distribución del excedente entre los que hubieran suscripto 30 acciones, pero la moción no prosperó, y se aprobó la sugerencia del consejo de administración (ACPD BV, asamblea ordinaria).

de pesos que contrastaba con los contratos a pérdida suscriptos por la institución.⁸⁶

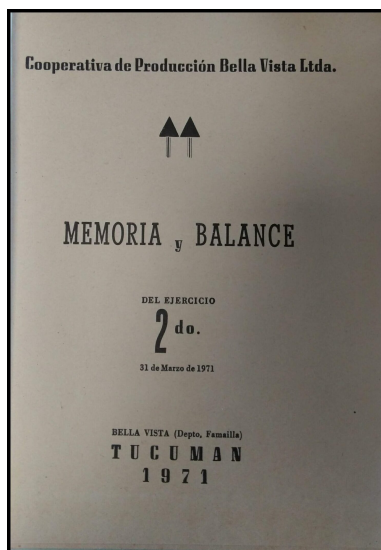
A comienzos de 1970, FOTIA y un sector de los industriales organizados en una nueva sociedad, Asociación de la Industria Azucarera Tucumana (AIAT), solicitaron al gobierno que, en la zafra de ese año, rigiera la cupificación por ingenio, propuesta rechazada por Onganía.⁸⁷ Se implementó un régimen azucarero que establecía un sistema rápido para el pago de la materia prima. Asimismo, se determinó que los ingenios deudores serían traspasados al Estado para ser explotados directamente por el gobierno.⁸⁸ Asimismo, se declaró al DINIE en estado de liquidación, noticia que generó inquietud entre el sector industrial y aceleró cambios en la estructura empresarial azucarera, debido al apremio por saldar sus deudas con el organismo.⁸⁹

⁸⁶ Memoria y Balance general correspondiente al ejercicio terminado el 31 de marzo de 1970. La prensa informaba la pérdida de 1000 millones de pesos de la Caja Popular de Ahorros por los convenios firmados por Aliaga García, que había determinado el cierre de los ingenios oficiales Santa Ana y Esperanza (*La Gaceta*, 1970. 11 de enero).

⁸⁷ Desde 1965 la provincia sufrió una reducción sistemática del cupo de producción provincial, medida que generó el funcionamiento de las unidades fabriles por debajo de su capacidad instalada y menores días de trabajo en la zafra. Los industriales reunidos en la AIAT junto con FOTIA, que había recuperado su personería en octubre de 1969, reclamaron la ampliación del cupo provincial y la cupificación por ingenio (*La Gaceta*, 1969. 27 de septiembre). La AIAT estaba integrada por los grupos propietarios de los ingenios San Pablo, San Juan, Leales, Cruz Alta, Aguilares, La Providencia, Ñuñorco, Marapa y los ingenios de la CAT Santa Rosa, La Florida y La Trinidad. Se separaron del tradicional Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART), conformado por las empresas que controlaban el ingenio Concepción, Fronterita, Santa Bárbara y La Corona, asociadas al Centro Azucarero Argentino dirigido por el ingenio Ledesma (Jujuy). La CP del ingenio Bella Vista no participó en ninguna de estas asociaciones. La demanda conjunta de AIAT y FOTIA apuntaba a intervenir el mercado de materia prima para contener el precio de la caña, y por este motivo fue rechazada por UCIT y CACTU (*La Gaceta*, 1969. 30 de septiembre).

⁸⁸ *La Gaceta*, 1970. 26 de enero.

⁸⁹ La Sociedad Anónima Azucarera Justiniano Frías propuso pagar sus deudas con la provincia y el CIFEN, cediendo 80 ha en la zona de Horco Molle y otras tantas parcelas de tierras en Cebil Redondo (*La Gaceta*, 1970. 29 de enero). El ingenio San Juan de los señores Paz Posse programó un cambio de su razón social con el objetivo de integrar a obreros y cañeros en una nueva sociedad (*La Gaceta*, 1970. 3 de febrero).



Portada de la Memoria y Balance del segundo ejercicio de la Cooperativa de Producción Bella Vista Ltda, 1971. Fuente: Archivo de la Comisión Pro-Defensa de Bella Vista.

En mayo de ese año, se definió el verdadero alcance de esta política con la creación de la Compañía Nacional Azucarera SA (CONASA), empresa estatal destinada a explotar la industria, el comercio y los subproductos derivados de la caña de azúcar (ley 18.685). Una segunda ley expropiaba los ingenios La Trinidad, La Florida y Santa Rosa (ley 18.686), mientras que otra decretaba la intervención de las plantas fabriles para entregarlas en locación a CONASA (ley 18.687).⁹⁰

La noticia cambió drásticamente el panorama azucarero porque introducía al Estado nacional como un jugador

Los ingenios San Pablo y La Providencia crearon nuevas sociedades para preservar sus tierras con el objetivo de realizar un loteo para el fomento del turismo en la zona (*La Gaceta*, 1970. 5 de febrero).

⁹⁰ *La Industria Azucarera*, n.º 913, pp. 73-75.

de peso. Para la provincia, la presencia de una empresa estatal administradora de tres ingenios podía constituir el punto de partida para la regularización de la agroindustria tucumana. En efecto, la demanda de volúmenes significativos de materia prima podía contribuir a normalizar el mercado cañero y al elevar el precio de la materia prima. Asimismo, el régimen laboral azucarero podría estabilizarse con el pago de salarios en tiempo y forma. La figura de CONASA, cuyos estatutos contemplaban la asociación con sectores de la producción y el trabajo, se acercaba de manera imperfecta a la demanda de FOTIA de 1967 que defendía la nacionalización de las empresas, con participación obrera en el directorio. No obstante, ninguno de los actores azucareros ignoraba que esta creación clausuraba la política azucarera de Salimei centrada en el cierre de ingenios; por el contrario, proponía valorizar y poner en valor un grupo de ingenios tucumanos en bancarrota.

Sin embargo, la primera reacción de los actores estuvo signada por la desconfianza hacia esta nueva sociedad estatal. Peyceré, quien dejó su cargo de titular de la DNA para dirigir CONASA, anunció (para conseguir el respaldo del sector cañero) que la flamante empresa sería una garantía de pago a término para los productores. Por su parte, FOTIA y FEIA recibieron con recelo los anuncios de la empresa, en cuanto se informó que la incorporación de los trabajadores de la CAT se efectuaría sin el reconocimiento de la antigüedad laboral, y además se notificó sobre el desconocimiento de las deudas de la anterior administración.⁹¹ A su vez, el Centro Azucarero Argentino, influenciado por los directivos del ingenio Ledesma, deploró la creación de la empresa estatal dado que se “restaban posibilidades económicas a las fuentes de trabajo más capacitadas y mejor administradas”.⁹² El resquemor obrero con CONASA se mitigó en julio de 1970, cuando se reconoció

⁹¹ *La Gaceta*, 1970. 3 de junio.

⁹² *La Industria Azucarera*, 1070. Buenos Aires, n.º 915, p. 145.

la antigüedad de los trabajadores al aprobarse un pedido conjunto de FOTIA y FEIA.⁹³

Un efecto del Cordobazo y de las rebeliones populares en las distintas provincias se expresó en la radicalización del conflicto social y en la aparición de un nuevo actor, referenciado en las acciones guerrilleras, inspiradas en el horizonte abierto por la Revolución cubana.⁹⁴ En ese contexto, el gobierno relajó su política antiobrera al anunciar el pago de los salarios adeudados por la CAT y por la firma Gettas-Fiad, que se efectuó a través del CIFEN. Asimismo, se amplió en 37.000 toneladas el cupo provincial azucarero y se reforzó el cupo específico para CONASA.⁹⁵

El nuevo gobernador Carlos Imbaud (4/09/1970-18/02/1971) recibió a la CPD de Bella Vista, que había logrado iniciar tardíamente la zafra en julio de ese año, bajo la gestión de la CP. Sin embargo, la solución de fondo del ingenio seguía sin resolverse, y su funcionamiento alentó la presentación realizada por ocho cooperativas cañeras que proponían hacerse cargo de la fábrica. La CPD denunció a esos productores que no habían aportado su materia prima durante la zafra de 1969, cuando se precisaba de manera imperiosa el aporte cañero de la zona. En consecuencia, declaraba que el pueblo “defendería cuantas veces fuera necesario un patrimonio que les pertenecía” y agregaba que “CONASA era una garantía para el futuro de Bella Vista, dado que podía integrar fábrica y campo para la explotación integral de sus riquezas y asegurar la participación

⁹³ *La Gaceta*, 1970. 2 de julio.

⁹⁴ En junio de 1970, fue descubierto un grupo guerrillero en el ingenio Santa Lucía integrado por el exobrero Arturo González, la estudiante universitaria Ana María Rivadeo, Mario Alberto Santucho y otros miembros, que revelaban la inserción del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en el área azucarera (*La Gaceta*, 1970. 9 de abril). En junio de ese año, el panorama nacional se conmocionó con el asesinato de Aramburu, que expresaba la presentación de la organización Montoneros en el panorama político nacional.

⁹⁵ *La Gaceta*, 1970. 22 de agosto.

cañera y del trabajo en paridad, sin ventajas y privilegios para nadie”.⁹⁶

La integración de la fábrica a CONASA fue considerada por la CPD y el sindicato obrero, que resolvieron aprobar su incorporación. Juzgaban que solo se había logrado el funcionamiento del ingenio en condiciones precarias, continuaban improductivas 7.000 ha de cañaverales, con la consiguiente desocupación de los trabajadores de surco. En un volante explicativo sobre el problema del ingenio, la CPD sostenía: “O Bella Vista se mantiene estática o Bella Vista lucha por soluciones de fondo que levanten el complejo azucarero y aseguren las condiciones de progreso del pueblo”.⁹⁷ La solución que representaba CONASA fue cuestionada por un comunicado anónimo que denunciaba a los “dirigentes conservadores dialoguistas Santillán y Caballero”, al tiempo que proponía la vía “combativa seguida por los compañeros en lucha en Córdoba, los maestros, el ingenio Providencia, los ingenios cerrados, los ferroviarios de Tañí Viejo, etc.”.⁹⁸ En respuesta a tales imputaciones, la CPD sostenía la unión férrea de la comunidad de Bella Vista y desechara toda posibilidad de división y luchas intestinas, que podían conspirar con el objetivo de salvar al ingenio.⁹⁹

El dilema se definió en octubre, cuando la CPD solicitó formalmente la incorporación del ingenio Bella Vista a

⁹⁶ *La Gaceta*, 1970. 8 de septiembre.

⁹⁷ ACPD BV, volante sin fecha.

⁹⁸ ACPD BV, volante anónimo, sin fecha.

⁹⁹ ACPD BV, comunicado sin fecha: “Lo que ha logrado Bella Vista no lo ha logrado nadie. ¿Cómo se ha logrado eso que nadie podía conseguir? Mediante la unidad y la acción conjunta y solidaria. Han surgido voces anónimas que pretenden sembrar la desunión [...]. Esto no es nuevo, está el ejemplo de los ingenios Santa Ana y Santa Lucía y otros donde la lucha intestina los ha conducido a la inoperancia, al cierre, a la pérdida de trabajo, al éxodo, a la miseria. [...]. Para asegurar el futuro de la fábrica, requerimos de un frente interno sólido, con objetivos claros, con una UNIDAD MONOLITICA. La CPD, voz auténtica del pueblo de Bella Vista previene contra las voces de la desunión, anónimas y negativas y afirma la necesidad de continuar la lucha contra el enemigo común, el monopolio azucarero”.

CONASA. En esa línea rechazó la propuesta de Imbaud, quien proponía la administración provincial del ingenio:

... la tucumanización de soluciones a las que alude el gobernador no importa otra cosa que la transferencia a la provincia de todas las dificultades acumuladas por funcionarios irresponsables. Ni Tucumán está en condiciones de soportar tan tremenda carga, ni los trabajadores asociarse a las tremendas pérdidas, cuando no a las trampas acumuladas. El gobierno de la nación, con la creación de CONASA, ha puesto en marcha el único instrumento apto para dar solución radical al problema y no se comprende ahora cómo se puede retroceder frente a las tensiones de quienes son los únicos responsables de la crisis.¹⁰⁰

La CPD defendía la solución nacional para resolver los problemas del ingenio y rechazaba las propuestas de carácter local o provincial porque carecían de la capacidad económica suficiente para poner en valor de manera integral el complejo agroindustrial. Esta posición tomó consistencia cuando FOTIA y FEIA, demandaron la incorporación de los ingenios San Juan y Bella Vista a CONASA.¹⁰¹ La decisión fue respaldada por la CPD Bella Vista, que organizó un acto para impulsar la incorporación de ambas fábricas a la empresa estatal.

En noviembre de 1970, estalló la rebelión popular conocida como Tucumanazo, donde el descontento social afloró de manera masiva en el marco de la convocatoria de un paro lanzado por las dos CGT. Adhirieron sindicatos que organizaron diversos actos de protesta en Tafí Viejo y en las áreas azucareras. En esa oportunidad, la ciudad de San Miguel de Tucumán fue conmovida por las luchas

¹⁰⁰ *La Gaceta*, 1970. 24 de septiembre.

¹⁰¹ Se entregó un memorial al presidente Levingston donde se solicitaba la expropiación del activo físico de ambas empresas para incorporar San Juan y Bella Vista a CONASA y la inmediata incorporación del sector laboral a la gestión, la propiedad y los beneficios de la empresa (*La Gaceta*, 1970. 14 de octubre).

callejeras protagonizadas por los estudiantes universitarios y secundarios.¹⁰² Una de las consecuencias del Tucumanazo se reflejó en los cambios en la política azucarera expresados en la aprobación de las demandas de FOTIA, FEIA y la CPD de Bella Vista. Al mes siguiente, en diciembre de 1970, el gobierno nacional concretó el arrendamiento de los ingenios Bella Vista y San Juan por parte de CONASA, con el propósito explícito de preservar ambas fuentes de trabajo.¹⁰³ El traspaso a la empresa estatal cerraba el ciclo funesto de la política azucarera centrado en el cierre de ingenios, y, de la mano de la empresa estatal, comenzaba otro tendiente a la recuperación de la actividad azucarera provincial.

Con la integración del ingenio Bella Vista a CONASA, llegaba a su término la función de la CPD. La entidad que representó y condujo a la comunidad local culminaba un complejo itinerario de lucha, sustentado en redes provinciales y nacionales, en un contexto nacional signado por la realización de acciones colectivas de diferentes niveles de intensidad. La lógica del accionar de la CPD se asentó en la unidad del pueblo, movilizado a nivel local, y en la interlocución o confrontación con las autoridades con el objetivo de resolver la difícil situación del ingenio. Este derrotero local confluyó con el ascendente movimiento popular de carácter antidictatorial que cambió el curso de la historia de la provincia y la nación al habilitar como horizonte el juego político electoral.

¹⁰² El ingenio de Bella Vista adhirió al paro, pero sus trabajadores no participaron de la movilización porque estaban abocados al funcionamiento de la fábrica. El testimonio de Julio Lescano, dirigente del sindicato de Bella Vista, es elocuente: “Cuando fue el Tucumanazo [un grupo de estudiantes] vinieron y me pidieron ayuda aquí y yo les dije que a la gente no la iba a llevar pero que los dirigentes sí íbamos a ir. En dos camionetas hemos ido y nos encontramos al frente de los tribunales con los changos y ahí les peleamos. Y andaba un grupito de aquí de Bella Vista” (Nassif, 2016: 521).

¹⁰³ El 31 de diciembre, el Estado nacional ordenó la suspensión de los juicios de esos dos ingenios (*La Gaceta*, 1970. 31 de diciembre).

Conclusiones

La complejidad de la crisis azucarera de Tucumán generada por el cierre de los ingenios admite varias lecturas. La historiografía provincial explicó esta etapa desde la óptica del movimiento obrero y estudió la secuencia recorrida por el sindicalismo azucarero tucumano. Este abordaje se justifica no solo porque la clase obrera recibió los efectos sociales más perniciosos generados por la clausura de las fuentes de trabajo, sino también porque resistió a través de huelgas y movilizaciones las políticas azucareras de la dictadura.

En este trabajo se postula que las políticas azucareras de la dictadura aspiraron a destruir un modo de producción azucarera específicamente tucumano, al determinar el cierre de unidades fabriles consideradas ineficientes, con la consiguiente expulsión de miles de pequeños productores cañeros para reformular el monocultivo y la estructura agraria de la provincia fundada en la pequeña y mediana propiedad. En esa dirección, se destruyó la fisonomía económica y social azucarera que sustentaba el movimiento de los pueblos conformados en torno a los ingenios con sus pequeñas industrias y actividades conexas. En consecuencia, los efectos nocivos de esta política alcanzaron a una multiplicidad de actores sociales: trabajadores, cañeros, comerciantes, vecinos, pequeños fabricantes, profesionales, párrocos de las localidades azucareras situadas a la vera de los ingenios.

Los significados de la resistencia multclasista de las diferentes localidades del interior de la provincia se revelan en su especificidad si se contempla el problema azucarero desde una perspectiva local. Ese enfoque permite reconstruir las identificaciones y los sentidos que modelaron el discurso y las formas de interpelación de la CPD de Bella Vista para convocar la movilización de la población local en la defensa de la fuente de trabajo. El ajuste espacial del foco de observación no implica desconocer el contexto provincial y nacional; por el contrario, lo condensa, en cuanto

el espacio local es tributario de las marcas dejadas por los efectos de dichas políticas. La resistencia a ellas generó una dinámica de articulación con diversos grupos de carácter provincial y nacional y con mediadores sociales, que ampliaron la acción colectiva local.

La noción del lugar como territorio específico de observación permitió diluir el criterio jerárquico que por lo general prioriza la perspectiva nacional y provincial, sin contemplar la conflictividad particular de los espacios locales. El trabajo propone entablar diálogos simultáneos para establecer los sentidos de las nuevas prácticas de confrontación y las formas de interrelación a las autoridades que revelaban los significados de la creciente politización local generada por la acción colectiva.

En esa línea de análisis, el trayecto de la CPD de Bella Vista ilumina las acciones de resistencia local que se identificaron con la defensa de la fuente de trabajo y de los paisajes sociales configurados por las transformaciones económicas y sociales preteritas. Las instituciones construidas revelaban los lazos de los bellavisteños con la empresa de la tradicional familia propietaria del ingenio (García Fernández), que colaboró con las fuerzas vivas del pueblo en la construcción de espacios sociales como la plaza, el cementerio, el mercado, la iglesia, las escuelas y las instituciones culturales, sociales y deportivas. El desembarco de una nueva patronal cuyas prácticas ilegales fueron motivo de escándalos económicos de alto impacto, combinada con el despliegue de una política antiobrera, constituyeron el detonante para la organización comunitaria, referenciada en la CPD, que adoptó como objetivo la salvación de la totalidad del complejo agroindustrial. La solución, presentada como el único horizonte de futuro posible, estaba asociada a la lucha como comunidad para evitar el camino de la migración y la disolución de los pueblos, cuyos ingenios habían sido cerrados.

A diferencia de entidades similares, la CPD de Bella Vista contó con el respeto y la confianza del conjunto de los vecinos. Su composición incluía al sindicato obrero, los comerciantes, cañeros, profesionales y vecinos, presididos por el cura párroco, mediador de importante ascendencia en el pueblo. Su perfil

discursivo centrado en la defensa de la comunidad guardaba ciertas reminiscencias con el imaginario comunitarista propiciado por la dictadura de Onganía, pero se diferenciaba por el carácter popular y aglutinante de las medidas defendidas por la CPD centradas en el funcionamiento del ingenio y en el cumplimiento de las normativas laborales.

La Cooperativa de Trabajo expresó la preeminencia de las necesidades locales al priorizar las demandas de sus cooperados. En efecto, el buen resultado económico se fundó en el compromiso de los socios obreros que donaron parte de su salario para la formación de una nueva empresa que los incluyera como parte propietaria. También gravitó el buen desempeño administrativo y el prestigio del consejo de administración, cuyo balance y propuestas de inversión fueron aprobados por la asamblea de socios. Esta práctica de transparencia y honestidad contribuyó cohesionar los lazos de pertenencia de los trabajadores (socios de la cooperativa) con la CPD, que ejerció su función mediadora con las autoridades nacionales y provinciales.

Las rebeliones populares acaecidas entre 1969 y 1970 contribuyeron al cambio de la política azucarera, que se expresó en la ampliación del cupo provincial y en la formación de CONASA. En ese contexto, la CPD de Bella Vista asumió (junto con FOTIA y FEIA) que la clave de la estabilidad del pueblo dependía del Estado nacional, con fortaleza económica suficiente para la puesta en funcionamiento de la integridad del complejo agroindustrial. La incorporación del ingenio Bella Vista a CONASA cerró el ciclo de actuación de la CPD, cuya gestión había trazado una trayectoria enraizada en el espacio local que interpelaba al Estado nacional para asegurar soluciones de fondo que garantizaran el funcionamiento del ingenio y los cañaverales circundantes. La empresa estatal, creada originariamente para salvar los ingenios de la CAT, posteriormente incluyó a otras unidades fabriles con problemas económicos, como Bella Vista, San Juan y Arno de Santa Fe, por lo que se transformó en la principal productora de azúcar del país.

Bibliografía

- Acha, Omar, 2004. "Sociedad civil y sociedad política durante el primer peronismo", *Desarrollo Económico*, Buenos Aires, vol. 44, n.º 174, pp. 199-230.
- Andújar, Andrea y Lichtmajer, Leandro (comp.), 2019. *Lo local en debate. Abordajes desde la historia social, política y los estudios de género (Argentina 1900-1960)*. Buenos Aires: Teseo.
- Andújar, Andrea y Lichtmajer, Leandro, 2021. "Oportunidades y desafíos de la historia local: algunas reflexiones desde un campo en expansión", *Anuario del Instituto de Historia Argentina*, vol. 21, n.º 1.
- Bandieri, Susana y Fernández, Sandra (ed.), 2017. *La historia argentina en perspectiva local y regional. Nuevas miradas para viejos problemas*. Buenos Aires: Teseo.
- Barral, María Elena, 2019. "Conflictividad política y clero en perspectiva histórica. Apuntes para una reflexión sobre el Cordobazo", en Gordillo, Mónica (comp.), *1969. A cincuenta años. Repensando el ciclo de protestas*. Buenos Aires: CLACSO; Córdoba: UNC.
- Barral, María Elena y Santos Lepera, Lucía, 2019. "Compromiso cristiano ante la realidad. Los sacerdotes católicos y el peronismo sin Perón", en *El Atlas del peronismo. Historia de una pasión argentina*. Buenos Aires: Le Monde Diplomatique.
- Barriera, Darío, 2005. "Escalas de observación y prácticas historiográficas. La construcción de horizontes alternativos de investigación", en Dalla Corte, Gabriela *et al.*, *Homogeneidad, diferencia y exclusión en América Latina. X Encuentro-Debate América Latina ayer y hoy*. Barcelona: Universitat de Barcelona.

- Bohoslavsky, Ernesto (coord.), 2018. “Dossier: Debates y conflictos de la historia regional en la Argentina actual”, *Quinto Sol*, vol. 22, n.º 3, pp. 1-51.
- Bravo, María Celia, 2008. *Campesinos, azúcar y política: cañeros, acción corporativa y vida política en Tucumán (1895-1930)*. Rosario: Prohistoria.
- Bravo, María Celia, 2015. “Sindicalismo azucarero y convenciones colectivas de trabajo durante el primer peronismo. Discusiones salariales bajo el prisma del populismo”, en Barral, María Elena y Silveira, Marco Antonio (coord.), *Historia, poder e instituciones. Diálogos entre Brasil y Argentina*. Rosario: Prohistoria Ediciones.
- Bravo, María Celia (coord.), 2017. *La agricultura: actores, expresiones corporativas y políticas*. Colección Historias Temáticas de Tucumán. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Bravo, María Celia, 2020. “Los cañeros ante el colapso de la industria azucarera tucumana en la década de 1960. Protestas, cupos de producción y diversificación de cultivos”, en Cerda, Juan Manuel y Mateo, Graciela (coords.), *La ruralidad en tensión*. Buenos Aires: Teseo.
- Bravo, María Celia y Bustelo, Julieta, 2018. “Conflictos interregionales y política azucarera argentina. Los sectores productivos entre el peronismo y la revolución libertadora (1950-1957)”, *Anuario IHES*, vol. 33, n.º 1.
- Bravo, María Celia y Gutiérrez, Florencia, 2015. “La política azucarera argentina: de la concertación regional al tutelaje estatal (1928-1949)”, *H-Industri@*, año VIII, n.º 14 y 15.
- Bravo, María Celia y Lichtmajer, Leandro, 2019. “Las formas locales de confrontación y articulación social frente a la crisis azucarera. La Comisión Pro-Defensa del ingenio Bella Vista (Tucumán, 1965-1970)”, en *Cuadernos de Historia, Serie Economía y Sociedad*, Córdoba, n.º 23, pp. 63-90.
- Brenan, James, 1996. *El Cordobazo*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

- Bresci, Domingo, 2018. *Historia de un compromiso. A cincuenta años del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo*. Buenos Aires: GES.
- Bustelo, Julieta, 2017. “La destrucción del aparato productivo: cierre de los ingenios y recorte de los cupos de producción (1966-1976)”, en Bravo, María Celia (coord.), *La agricultura: actores, expresiones corporativas y políticas*, Colección Historias Temáticas de Tucumán, siglos XIX y XX. Buenos Aires: Imago Mundi-CFI.
- Campi, Daniel, 1999. “Los ingenios del Norte: un mundo de contrastes” en Devoto, Fernando y Madero, Marta (comps.), *Historia de la vida privada*, tomo 2 (Buenos Aires: Taurus).
- Campi, Daniel y Bravo, María Celia, 2010. “Aproximación a la historia de Tucumán en el siglo XX. Una propuesta de interpretación”, en Orquera, Fabiola (comp.), *Ese ardiente Jardín de la República: formación y desarticulación de un campo cultural (Tucumán 1880-1975)*. Córdoba: Alción, pp. 15-49.
- Canitrot, Adolfo y Sommer, Juan, 1972. *Diagnóstico de la situación económica de la provincia de Tucumán. Documentos de Trabajo*. Buenos Aires: Instituto Torcuato di Tella.
- Carbonari, María Rosa y Carini, Gabriel (comp.), 2020. *Historia local y regional. Balances y agenda de una perspectiva historiográfica*. Río Cuarto: UniRío Editora.
- Carnovale, Vera, 2011. *Los combatientes*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Centurión, Ana Josefina, 2000. *Cultura y sociabilidad en el San Pablo*. Tesina de licenciatura. Tucumán: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán.
- Centurión, Ana Josefina, 2003. “El sindicalismo tucumano ante la caída de Perón. Respuestas y perspectivas políticas. Tucumán, 1955-1959”. *Actas de las IX Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia*. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.
- Cerutti Simona, 1995. “La construcción de las categorías sociales”, en Boutier Jean, Juliá Dominique (dirs.), *Passés*

- recomposés. Champs et chantiers de l'histoire*. París: Autrement, pp. 224-234.
- Cerutti, Simona, 2020. Conferencia “Micro-história e história comparada”. Universidad de Vale do Rio dos Sinos. Disponible en <https://bit.ly/3M1kHHX>. Consultado el 25 de febrero de 2022.
- Consejo Federal de Inversiones, 1973. *Análisis y evaluación del plan de transformación agroindustrial de la provincia de Tucumán*.
- Crenzel, Emilio, 2014. *El Tucumanazo*. Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán.
- De Riz, Liliana, 2000. *La política en suspenso. 1966/1976*. Buenos Aires: Paidós.
- Cuarto Censo General de la Nación Argentina*, 1947. Buenos Aires: Dirección Nacional del Servicio Estadístico, tomo 1.
- Diana, Marta, 2013. *Buscando el Reino. La opción por los pobres de los argentinos que siguieron al Concilio Vaticano II*. Buenos Aires: Planeta.
- Díaz Cisneros, Nicolás, 2018. “Primeras impresiones. El impacto del golpe de 1955 en la dirigencia peronista tucumana”. Ponencia presentada en las XVII Jornadas Regionales de Estudiantes de Historia (Universidad Nacional de Tucumán).
- Dicósimo, Daniel, 2020. “Origen, auge y crisis de una villa obrera. Loma Negra Villa Cacique (1956-2001)”, en Lobato, Mirta (ed.), *Comunidades, historia local e historia de los pueblos*. Buenos Aires: Prometeo.
- Diodati, Lilian, 2008. “Imágenes de una ciudad: espacios privados, costumbres cotidianas”, en Fernández, Sandra y Videla, Oscar (comp), *Ciudad Oblicua. Aproximaciones a temas e intérpretes de la entreguerra rosarina*. Rosario: La Quinta Pata & Camino Ediciones.
- Doyon, Louise, 2006. *Perón y los trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-1955*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

- Fernández, Sandra (comp.), 2007. *Más allá del territorio. La historia regional y local como problema. Discusiones, balances y proyecciones*. Rosario: Prohistoria.
- Fernández, Sandra y Dalla Corte, Gabriela (comp.), 2001. *Lugares para la historia. Espacio, historia regional e historia local en los estudios contemporáneos*. Rosario: Universidad Nacional de Rosario.
- Gaignard, Roman, 2011. “Una especulación tropical en crisis: las plantaciones de caña de azúcar”, en *Travesía*, Tucumán, n.º 13.
- Gallego, Marisa, 2019. *Azúcar y Política. Los Nadra: el cierre de los ingenios en Tucumán*. Provincia de Buenos Aires: Editorial Maipue.
- Garbano, Cecilia, 2017. “Campo Herrera: historia en el surco del cañaveral. Investigación, extensión y auto-organización rural”, *Trabajo y Sociedad*, n.º 29.
- Gomes, Gabriela, 2011. “Onganiato y los sectores populares: funcionarios, ideas y políticas de la Secretaría de Estado y Asistencia a la Comunidad”, *Anuario del Centro de Estudios Históricos, Prof. Carlos A. Segretti*, Córdoba.
- Gomes, Gabriela, 2015. “Cuestión social y regímenes militares Argentina y Chile durante los años setenta”, *Quinto Sol*, La Pampa, vol. 19, n.º 1.
- Gordillo, Mónica (comp.), 2019. *A cincuenta años. Repensando el ciclo de protestas*. Buenos Aires: CLACSO/Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba.
- Gordillo, Mónica y Brennan, James (1994). “Working class protest, popular revolt, and urban insurrection in Argentina: the 1969 Cordobazo”, *Journal of Social History*, vol. 27, n.º 3.
- Gutiérrez, Florencia, 2013. “La configuración del campo sindical azucarero. Procesos de integración y diferenciación gremial. Tucumán, 1944-1949”, en *Estudios del Trabajo*, Buenos Aires, n.º 45, pp. 93-115.
- Gutiérrez, Florencia, 2014. “La irrupción del poder obrero en los ingenios azucareros: avances, límites y cuestio-

- namientos. Tucumán, 1944-1955”, en *Quinto Sol*, vol. 18, n.º 2.
- Gutiérrez, Florencia, 2020. “Judicializar el conflicto y construir derechos: la experiencia de los trabajadores azucareros en la justicia laboral. Tucumán durante el primer peronismo”, *Revista Anos 90*, n.º 27.
- Gutiérrez, Florencia, Lichtmajer, Leandro y Santos Lepera, Lucía, 2016. “La comunidad laboral del ingenio Bella Vista. La resignificación de la experiencia obrera en los inicios del peronismo”, en *Anuario de Historia Regional y de las Fronteras*, Bucaramanga, vol. XXI, n.º 1, pp. 213-236.
- Gutiérrez, Florencia y Parolo, María Paula (coord.), 2017. *El trabajo: actores, protesta y derechos*. Colección Historias Temáticas de Tucumán. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Gutiérrez, Florencia y Santos Lepera, Lucía, 2019. “Revisitando un pueblo azucarero desde lo local: desafíos metodológicos y problemas historiográficos”, en Andújar, Andrea y Lichtmajer, Leandro (comps.), *Lo local en debate. Abordajes desde la historia social, política y los estudios de género (Argentina, 1900-1960)*. Buenos Aires: Teseo, pp. 213-236.
- Harvey, David, 2007. *Espacios del capital, Hacia una geografía crítica*. Madrid: Akal.
- Herrera, Federico, 2009. *San Pablo de Tucumán*. Buenos Aires: edición del autor.
- Hobsbawm, Eric y Terence Ranger, 2002 (1983). *La invención de la tradición*. Barcelona: Crítica.
- Horowitz, Joel, 2015. *El radicalismo y el movimiento popular 1916-1930*. Buenos Aires: Edhasa.
- James, Daniel, 2005. *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores [primera edición en inglés en 1988].
- Jemio, Ana Sofía, 2012. “FOTIA, sus sindicatos y afiliados. Una aproximación a los marcos discursivos y propuestas programáticas de la clase obrera azucarera tucumana en 1963”, en *Jornadas Internacionales*

de Problemas Latinoamericanos “Movimientos Sociales, Estados y Partidos Políticos en América Latina: (re)configuraciones institucionales, experiencias de organización y resistencia”. Mendoza: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo.

- Kotler, Rubén, 2007. “El Tucumanazo, los Tucumanazos 1969-1972. Memorias enfrentadas: entre lo colectivo y lo individual”. Ponencia presentada en las XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia (Universidad Nacional de Tucumán).
- Leite Lopes, José Sérgio, 1976. *O vapor do Diabo: O trabalho dos operários do açúcar*. Río de Janeiro: Paz e Terra [edición en español: *El vapor del diablo. El trabajo de los obreros del azúcar*. Buenos Aires: Antropofagia, 2011].
- Lemaitre, Nicole (ed.), 2002. *Histoire des curés*. París: Fayard.
- Lichtmajer, Leandro, 2014. “Asociacionismo y política en la escala local. El Centro de la Unión Cívica Radical de Bella Vista durante el post peronismo (Tucumán, 1955-1958)”, *Boletín Americanista*, Barcelona, n.º 68, pp. 165-185.
- Lichtmajer, Leandro (coord.), 2017. *La política: de las facciones a los partidos*. Colección de Historias Temáticas de Tucumán. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Lichtmajer, Leandro, 2020a. “Integración, reorganización y proscripción. El peronismo frente a la encrucijada frondizista (Tucumán, 1958-1960)”, *Estudios del ISHiR*, Rosario, vol. 10, n.º 27, pp. 1-27.
- Lichtmajer, Leandro, 2020b. “Repensando el proceso de ampliación democrática en el noroeste argentino. Redes partidarias y campañas electorales en el espacio azucarero de Tucumán (1917-1943)”, *Ayer. Revista de Historia Contemporánea*, Madrid, Vol. 2, n.º 118, pp. 105-133.
- Lichtmajer, Leandro, 2021. “Riera, Fernando Pedro”, en Cattaruzza, Alejandro *et al.* (coord.), *Diccionario del pero-*

- nismo 1955-1969. Buenos Aires: CEDINPE-UNSAM, pp. 102-104. Disponible en bit.ly/35qCs2S.
- Lichtmajer, Leandro y Gutiérrez, Florencia, 2017. "Hacer política en un pueblo azucarero: prácticas a ras del suelo en la transición del radicalismo al peronismo. Bella Vista (Argentina)", *Anuario de Estudios Americanos*, Sevilla, vol. 74, n.º 1, pp. 295-321.
- Lobato, Mirta Zaida, 2007. "Niveles y dimensiones de análisis en el mundo del trabajo: notas a partir de una experiencia de investigación", *Anuario IEHS*, vol. 22.
- Mackinnon, Moira, 2002. *Los años formativos del Partido Peronista (1946-1950)*. Buenos Aires: Instituto di Tella/Siglo XXI Editores.
- Martín, José Pablo, 2013. *Ruptura ideológica del catolicismo argentino. 36 entrevistas entre 1988 y 1992*. Buenos Aires: Prometeo y Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Massey, Doreen, 1995. "Places and Their Pasts", *History Workshop Journal*, Oxford, n.º 39, pp. 182-192.
- Mora y Araujo, Manuel y Orlansky, Dora, 1976. *Cambio tecnológico y empleo en la producción agroindustrial de azúcar en Tucumán*. Bariloche: ILO.
- Moreno Friginals, Manuel, 1978. *El Ingenio. Complejo económico-social cubano del azúcar*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- Nassif, Silvia, 2016. *Tucumán en llamas. El cierre de ingenios y la lucha obrera contra la dictadura (1966-1973)*. Colección Tesis. Tucumán: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán.
- Nieto, Agustín, 2016. "Negociación colectiva y lucha de clases: Convenio laboral para fileterxs (1969-1970)", *Anuario del Instituto de Historia Argentina*, vol. 16, n.º 1.
- Parra, María Graciana, 2005. "El 'Reformismo Social' conservador tucumano: Los gobiernos de Juan Luis Nougués y la 'Bandera Blanca' (1927- 1934)". *Actas de las X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia*. Universidad Nacional de Rosario.

- Paterlini de Koch, Olga, 1989. *Pueblos azucareros de Tucumán*. Tucumán: Editorial del Instituto Argentino de Arquitectura y Urbanismo.
- Pucci, Roberto, 2003. “El ‘affaire’ de la Compañía Azucarera Tucumana (CAT), o la piratería militar del régimen de Onganía”, en III Jornadas de Historia Económica Montevideo, 9-11 de julio de 2003.
- Pucci, Roberto, 2007. *Historia de la destrucción de una provincia, Tucumán, 1966*. Buenos Aires: Ediciones del Pago Chico.
- Ramírez, Ana Julia, 2008. “Tucumán 1965-1969: movimiento azucarero y radicalización política”, en *Nuevo Mundo, Mundos Nuevos*. París. Disponible en bit.ly/3t6tbVB. Consultado el 10 de julio de 2017.
- Revel, Jacques, 2015. *Juego de Escalas: experiencias de microanálisis*. San Martín: UNSAM Edita.
- Rock, David, 1972. “Machine Politics in Buenos Aires and the Argentine Radical Party, 1912-1930”, *Journal of Latin American Studies*, vol. 4, n.º 2.
- Romano, Graciela, 2009. *Benito, Azúcar y Sangre. FOTIA y la Huelga Azucarera de 1959*. Buenos Aires: edición de la autora.
- Rubinstein, Gustavo, 2006. *Los sindicatos azucareros en los orígenes del peronismo tucumano*. Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán.
- Salazar, Antonio y Valeros Manuel Roberto, 2012. *Notas sobre la Historia de Bella Vista*. Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán.
- Saleh de Canuto, Marta y Budeguer, Susana, 1979. *El aporte de los sirios y libaneses a Tucumán*. Tucumán: Editorial América.
- Sánchez, Ignacio, 2019. “Entre la villa y la fábrica. El pueblo de Santa Ana en la especialización azucarera tucumana de fines de siglo XIX”, *Travesía. Revista de Historia Económica y Social*, Tucumán, vol. 21, n.º 1, pp. 117-150.
- Sánchez, Ignacio, 2020. “Gestión vecinal contra la pretensión industrial. Comisiones de Higiene y Fomento en

una localidad azucarera de Tucumán, Santa Ana durante las primeras décadas del siglo XX”, *Historia Regional*, 42.

- Sánchez, Ignacio, 2021. “Reformadores del Agro. Instituciones científico-técnicas frente a la crisis azucarera tucumana (1960-1966)”, en Carini, Gabriel *et al.* (comps.), *Estado, políticas públicas y asociaciones. Claves para la comprensión de la argentina rural*. Córdoba, libro digital.
- Santos Lepera, Lucía, 2015. “Entre la autoridad eclesiástica y el liderazgo local: los curas párrocos de la diócesis de Tucumán durante el primer peronismo”, en *Quinto Sol*, vol. 19, n.º 3.
- Santos Lepera, Lucía, 2019. “De la misa a la protesta. Pedro Pablo Wurschmidt: un cura tercermundista frente a la crisis azucarera (Tucumán, Argentina 1954-1968)”. Ponencia presentada en el Tercer Congreso Internacional de Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Santos Lepera, Lucía, 2021. “Curas y política a ras del suelo. La trayectoria del párroco de Monteros (Tucumán) durante el primer peronismo”, *Avances del Cesor*, Rosario, vol. 18, n.º 24.
- Santos Lepera, Lucía y Folquer, Cynthia (coords.), 2017. *Las comunidades religiosas: entre la política y la sociedad*. Colección de Historias temáticas de Tucumán. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Santos Lepera, Lucía y Sánchez, Ignacio, 2019. “La clave local de la protesta: resistencia y represión frente al cierre de ingenios azucareros, Villa Quinteros (Tucumán)”, *Cuadernos de Historia. Serie Economía y Sociedad*, Córdoba, n.º 23, pp. 91-119.
- Schiavi, Marcos, 2013. *El poder sindical en la Argentina peronista (1946-1955)*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Schkolnik, Iris, 2008. *El Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo en Tucumán, 1968-1973*. Tesina de licen-

- ciatura. Tucumán: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán.
- Schleh, Emilio, 1939. *Compilación legal sobre el azúcar*, tomo IV. Buenos Aires: Imprenta Ferrari.
- Schleh, Emilio, 1944. *Cincuentenario del Centro Azucarero Argentino*, CAA, Buenos Aires.
- Sigal, Silvia, 1973. *Acción obrera en una situación de crisis: Tucumán 1966-1968*. Buenos Aires: Instituto Torcuato di Tella.
- Siviero, Fernando, 1989. “Yo soy Atilio Santillán: un hombre y su época”, *Norte Andino*, Jujuy, n.º 4.
- Taire, Juan Octaviano, 2006. *Azúcar para el monopolio*. Buenos Aires: Ediciones del Pago Chico.
- Taylor, William B., 2003. *Entre el proceso global y el conocimiento local. Ensayos sobre el Estado, la sociedad y la cultura de México del siglo XVIII*. México: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.
- Tercer Censo Nacional de la República Argentina*, 1916. Buenos Aires: Talleres Gráficos Rosso. Tomo 4.
- Torre, Angelo, 2008. “A ‘Spatial Turn’ in History? Landscapes, Visions, Resources”, *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, vol. 63, n.º 5.
- Torre, Angelo, 2018. “Micro/macro: ¿local/global? El problema de la localidad en una historia espacializada”, *Historia Crítica*, 69.
- Touris, Claudia, 2021. *La constelación tercermundista. Catolicismo y cultura política en la Argentina, 1955-1976*. Buenos Aires: Biblos.
- Tuan, Yi Fu, 1979. “Space and place: Humanistic perspective”, en Gale, S. y Olsson, G. (eds.), *Philosophy in Geography*. Dordrecht, PB: Springer Netherlands Science Business Media.
- Van Young, Eric, 1987. “Haciendo Historia Regional: Consideraciones metodológicas y teóricas”, *Anuario IEHS*, n.º 2.

- Vessuri, Hebe, 1974. *El obrero en el surco tucumano. Ocupación, y estratificación social*. Departamento Socioeconómico, FFyL, UNT.
- Vidal, Gardenia, 1995. *Radicalismo de Córdoba 1912-1930. Los grupos internos: alianzas, conflictos, ideas, actores*. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.
- Vidal Sanz, Lucía (comp.), 2017. *Historia del Municipio de Bella Vista*. Colección Historia de los Municipios de Tucumán. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Withers, Charles, 2009. "Place and the spatial turn in geography and in history", *Journal of the History of Ideas*, vol. 70, n.º 4.

